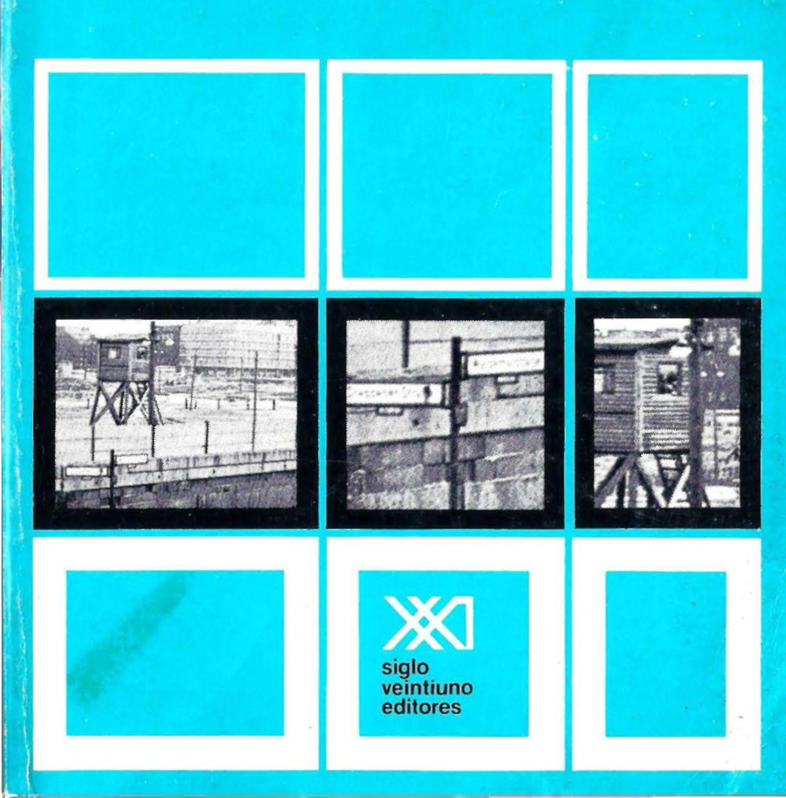
HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI

el siglo XX

II. Europa después de la segunda guerra mundial 1945-1982. Tomo 1

WOLFGANG BENZ
HERMANN GRAML



HISTORIA UNIVERSAL

SIGLO XXI

Volumen 35

El siglo XX.

II. Europa después de la segunda guerra mundial, 1945-1982

Tomo 1

VOLUMEN COMPILADO POR

Wolfgang Benz

Nació en 1941 en Ellwangen/Jagst. Doctor en filosofía e historiador, es colaborador científico del Instituto de Historia Contemporánea y redactor-jefe de la Serie de Documentos de los Cuadernos Trimestrales de Historia Contemporánea *(Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte).*

Es autor de numerosos libros, entre ellos: *Süddeutschland in der Weimarer Republik* (1970); *Politik in Bayern. 1919-1933* (1971); *Quellenkunde zur Zeitgeschichte* (1973); *Einheit der Nation. Diskussion und Konzeptionen zur Deutschlandpolitik der grossen Partein seit 1945* (publicado en 1978 en colaboración con Günter Plus y Werner Röder); *Bewegt von der Hoffnung aller. Deutschen. Zur Geschichte des Grundgesetzes* (1979); *Rechtsradikalismus. Randerscheinung oder Renaissance?* (1980); *Die Bundesrepublik Deutschland. Politik, Gesellschaft, Kultur,* 3 vols. (1983).

Hermann Graml

Nació en 1928 en Miltenberg/Meno. Historiador y colaborador científico del Instituto de Historia Contemporánea en Munich. Es redactor-jefe de los *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte.*

Autor de numerosas publicaciones sobre temas de política exterior en el período de entreguerras, sobre la resistencia en el III Reich, las persecuciones nazis de los judíos, entre otros *Der 9. November 1938. «Reichskristallnacht»* (1953; 8.ª ed., 1962); *Europa zwischen den Kriegen* (1969; 5.ª ed., 1982); *Europa* (1972); como compilador, en colaboración con Wolfgang Benz, *Die revolutionäre Illussion, Zur Geschichte des linken Flügels der USPD. Erinnerungen von Curt Geyer* (1976); *Aspekte deutscher Aussenpolitik im 20. Jahrhundert* (1976); *Sommer 1939. Die Grossmächte und der europäische Krieg* (1979).

Ambos son compiladores del volumen 36 de la *Historia Universal Siglo XXI. El siglo XX, III. Problemas mundiales entre los dos bloques de poder.*

TRADUCTORA

Marisa Delgado

DISEÑO DE LA CUBIERTA

Julio Silva

Historia Universal

Siglo veintiuno

Volumen 35

EL SIGLO XX.

II. EUROPA DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 1945-1982. 1

compilado por

Wolfgang Benz y Hermann Graml





siglo veintiuno editores, sa de cv
CERRO DEL AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACAN, 04310 MÉXICO, D F

siglo veintiuno de españa editores, sa
C/PLAZA 5, MADRID 33, ESPAÑA

siglo veintiuno argentina editores, sa

siglo veintiuno de colombia, ltda
AV. 3a. 17-73 PRIMER PISO, BOGOTÁ, D.E COLOMBIA

primera edición en español, junio de 1986

segunda edición en español, 1986

ISBN 968-23-0009-6 (obra completa)
ISBN 968-23-0944-1 (volumen 35-tomo 1)

primera edición en alemán, 1983

título original: das zwanzigste jahrhundert
11. europa nach dem zweiten weltkrieg





impreso en editorial andrómeda, s. a.
av. año de juárez 226-local c/col. granjas san antonio
del. iztapalapa-09070 méxico, d. f.
cinco mil ejemplares y sobrantes
29 de agosto de 1986

Indice

Wolfgang Benz/Hermann Graml (véase p. IV).

Klaus-Dietmar Henke, nacido en 1947, cerca de Dresde, estudió historia con Karl Bosl y Helmut Krausnick en Munich; en 1974 obtuvo la licenciatura y en 1977 el doctorado en filosofía. Posteriormente fue profesor y ayudante científico de la Escuela Superior del Ejército Federal en Munich. Desde 1979 es colaborador científico del Instituto de Historia Contemporánea en Munich, habiendo publicado, junto a trabajos relativos a la política del gobierno militar francés en Alemania después de la segunda guerra mundial, el estudio *Politische Säuberung unter französischer Besatzung* (Stuttgart, 1981).

Wilfried Loth, nacido en 1948, realizó estudios de filosofía alemana, historia, filosofía y ciencias de la Educación en Sarrebruck y París. Es doctor en filosofía. Entre 1974 y 1980 fue colaborador científico en la Facultad de Historia de la Universidad de Sarrebruck. En 1978-1979 fue profesor invitado del Instituto Friedrich Meinecke de la Universidad Libre de Berlín. Profesor auxiliar de Historia Contemporánea. Ha publicado *Sozialismus und Internationalismus. Die französischen Sozialisten und die Nachkriegsordnung Europas 1940-1950* (Stuttgart, 1977); *Die Teilung der Welt. Geschichte des Kalten Krieges 1941-1955* (Munich, 1980; 3.ª ed. 1982); *Katholiken im Kaiserreich. Der politische Katholizismus in der Krise des wilhelminischen Deutschland* (Düsseldorf, 1983); numerosos trabajos acerca de la historia francesa contemporánea y de los problemas de la política internacional del siglo XX.

Heiner Raulff, nacido en 1946, estudió filología románica e historia en Hamburgo, Friburgo/Brisgovia y París. Doctor en filosofía en 1976. Profesor de bachillerato desde 1972. Autor de *Zwischen Machtpolitik und Imperialismus. Die deutsche Frankreichpolitik 1904/06* (Düsseldorf, 1976). Ha realizado trabajos sobre historia de Baden y traducciones de obras históricas del francés.

Gert Robel, nacido en 1927 en Kötzschenbroda, es doctor en filosofía, historiador, colaborador científico y redactor de

publicaciones del Instituto de Europa oriental en Munich, sección de Historia. Desde 1981 es catedrático en la Universidad de Innsbruck. Ha realizado trabajos sobre historia contemporánea de Europa oriental y meridional, especialmente de Rusia y de la Unión Soviética, entre ellos *Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion-Antifa* (Munich, 1974).

Hans Woller, nacido en 1952 en Aldersbach/Niederbayern, es doctor en filosofía, historiador y colaborador científico del Instituto de Historia Contemporánea. Ha publicado, entre otras cosas, *Die Loritz-Partei. Geschichte, Struktur und Politik der Wirtschaftlichen Aufbau-Vereinigung (WAV) 1945-1955* (Stuttgart, 1982) y *Wörtliche Berichte und Drucksachen des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1947-1949,* volúmenes 1-6, Munich/Viena, 1977 (en colaboración con Christoph Weisz).

NOTA EDITORIAL

Este volumen 35 de la Historia Universal Siglo XXI se ha dividido en dos tomos.

Al final del tomo 2 se incluyen la Bibliografía y los índices analítico y de ilustraciones, correspondientes a toda la obra.

Prólogo

Cuatro años largos ha requerido la realización del planteamiento del volumen 35 de esta *Historia Universal* que por fin presentamos. El proyecto peligró varias veces: las citas con los colaboradores tuvieron que ser anuladas por diversos motivos —en parte de los presuntos autores y en parte de los compiladores— con la consecuencia constante de nuevas demoras. Damos las gracias a los colegas que se han visto obligados a soportar largas esperas (que han utilizado para actualizar sus manuscritos), así como, de todo corazón, a los que se han ido incorporando al proyecto en las diversas fases de esta empresa.

No obstante, la concepción ha permanecido invariable, si bien, a consecuencia de la necesaria división del trabajo, el segundo capítulo tiene una amplitud mayor que la originalmente prevista. Ello, sin duda, no exige ninguna justificación, sino a lo sumo la indicación de que en la fase de reconstrucción de Europa occidental se tomaron también las decisiones constitutivas de la integración europea; por otra parte, los autores de este captíulo se han visto también obligados a describir y explicar los procesos de actuación y las líneas de desarrollo de la situación inicial de cada país en la segunda guerra mundial.

Desde finales de la década de 1940 no existe ninguna congruencia entre «Europa occidental» como concepto político y Europa occidental como término geográfico. De acuerdo con la adscripción política, media Alemania pasó a formar parte de Europa oriental y Grecia se convirtió, en una doble relación, en vecina del Estado europeo occidental de Portugal: ironías de la nomenclatura, pero categoría de ordenamiento difícilmente evitable a la hora de estructurar el material «Europa después de la segunda guerra mundial» dentro del capítulo.

Por deseo de los compiladores y de la editorial, a la hora de escribir los nombres propios de Europa oriental y sudoriental, en vez de hacer una transcripción científica del alfabeto cirílico, se han empleado las grafías más usuales de la prensa diaria por ser de comprensión general. El autor de los capítulos tercero y quinto ha hecho esta concesión muy a su pesar, por lo que se le ha de agradecer sinceramente.

El índice ha sido elaborado (como ya sucediera en el volumen 36 de esta *Historia Universal)* por Margit Ketterle.

Damos asimismo las gracias al Dr. Walter H. Pehle, lector incansable y versado asesor, principalmente por la considerable fatiga a la que se ha visto sometida su paciencia.

W. B - H. G.

Introducción: Adiós a la vieja Europa

«Este noble continente, que, al fin y a la postre, abarca las regiones más bellas y cultas de la Tierra y goza de un clima moderado y equilibrado, es la cuna de todos los grandes pueblos primitivos del mundo. Es la fuente de la fe y de la ética cristianas. Y ha sido, en tiempos antiguos y modernos, el origen de casi todas las formas de cultura, arte, filosofía y ciencia. Si Europa diese en administrar alguna vez en buena armonía su herencia común, sus trescientos o cuatrocientos millones de habitantes disfrutarían de una suerte, un bienestar y una fama sin límites.»

Estas palabras no fueron expresadas, en modo alguno, por ningún visionario idealista del siglo pasado, tiempo en el que tan arraigada se hallaba la fe en el progreso. Son las frases iniciales de un discurso pronunciado por Winston Churchill, en septiembre de 1946, en la Universidad de Zurich. Ante la tragedia de dos guerras mundiales surgidas en el mismo corazón de Europa y desencadenadas por Alemania, el que fuera primer ministro británico durante la guerra pronunció un alegato en pro de la creación de unos Estados Unidos de Europa basados en la hermandad de Francia y Alemania. «Gran Bretaña, la Comunidad Británica de Naciones, la poderosa América y, tengo la firme esperanza de que también, la Unión Soviética —pues entonces, realmente, todo sería perfecto— han de ser los amigos y promotores de la nueva Europa, luchando por su derecho a la vida y al bienestar.»

El llamamiento de Churchill —año y medio después de la victoria aliada sobre la «Gran Alemania», que había aspirado a formar Europa y a imponerle su hegemonía bajo el signo de la ideología nacionalsocialista— parecía más una vuelta a la historia de las ideas políticas que un programa realizable. La idea de la unidad europea existía ya desde siglos atrás como abstracción, enfrentada en lo concreto a los intereses hegemónicos y a la alternativa supremacía de los diferentes Estados europeos, que, en definitiva, quedaban neutralizados, o incluso compensados, dentro de un sistema de «equilibrio europeo». En su lugar aparecería en el siglo XIX, el siglo de los Estados nacionales,

el «concierto europeo», la hegemonía compartida de las grandes potencias sobre los Estados pequeños. Europa no era un tema de la política exterior, sino, a lo sumo, una fórmula que expresaba la superioridad cultural y pretendidamente moral frente al resto del mundo.

Los instrumentos más importantes de la política exterior eran los pactos y las alianzas, y, en caso de necesidad, las guerras de coalición para el mantenimiento de un cierto equilibrio. Ahora bien, este orden sufriría un quebranto antes ya de la primera guerra mundial: la expansión colonial, así como los intereses contrapuestos dentro de la propia Europa, destruirían este equilibrio en el espacio de unos pocos decenios. Las crisis europeas surgidas con el cambio de siglo —patentes en el conflicto entre San Petersburgo y Viena por la herencia turca, en las ambiciones hegemónicas de Alemania o en el desarrollo contrapuesto de los sistemas sociales y políticos de las «potencias occidentales» frente a las «potencias centrales»— provocaron el desmoronamiento del sistema estatal europeo, la primera guerra hegemónica alemana, que se extendería hasta convertirse en una guerra mundial y, como consecuencia de todo ello, la pérdida de la hegemonía europea en el mundo.

El fin de la primera guerra mundial no supuso para Europa la consecución de la paz ni de un orden estable. Los Estados Unidos de América habían renunciado a desempeñar un papel rector y pronto habían vuelto a dar la espalda a Europa, manteniéndose alejados de la Sociedad de Naciones y ratificando el tratado de Versalles en la misma escasa medida que el tratado de alianza con Francia y Gran Bretaña, pensado como garantía del orden político europeo después de la guerra. La Rusia soviética, por su parte, no se mostraba menos hostil a la Sociedad de Naciones que a las potencias occidentales, y el Reich alemán permanecería, en todo caso, excluido (hasta el otoño de 1926). Los intentos de estabilización de las relaciones políticas en Europa y en el mundo mediante los tratados de paz de París y la fundación de la Sociedad de Naciones oscilaban entre el experimento de un orden pacífico colectivo y la política hegemónica tradicional. Se trataba de intentos que, al contraponerse, provocaban situaciones funestas como el aislamiento de la Rusia soviética (elegido, sin duda, en buena medida por ella misma), la total insatisfacción e incomprensión mostradas hacia el nuevo orden por el Reich alemán y una necesidad igualmente importante de revisión del mismo por parte de Polonia, Hungría, Italia, e incluso Moscú, en donde la aspiración a una revolución

mundial corría paralela con el deseo de recuperar el Báltico y los territorios perdidos en favor de Polonia.

Francia, que confiaba menos que Gran Bretaña en el factor de orden que representaba la Sociedad de Naciones, debido a sus necesidades de seguridad, contrapuso desde un principio al sistema de organización parlamentaria del seguro colectivo de paz el viejo mecanismo de alianzas que le permitiría restaurar la hegemonía francesa. El resultado de esta política sería la Pequeña entente de 1920 (Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumania), complementada en 1921 con una alianza rumano-polaca y, poco después, con un tratado de neutralidad polaco-checoslovaco. Los tratados con Polonia (1921) y Checoslovaquia (1924) cerraron el círculo del sistema francés de seguridad y aislaron —junto con las exigencias de reparación por parte de Francia— al Reich alemán. Con la Entente Báltica, tratados de amistad de Polonia con Letonia, Estonia y Finlandia, los Estados marginales rusos del Báltico trataron de crear una seguridad frente al poder soviético, así como frente al Reich alemán. Desde la óptica polaca, esta alianza servía al mismo tiempo para impedir una posible «pequeña federación» de los tres Estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y para aislar a Lituania (a causa del conflicto por la región de Vilna), que mantenía muy buenas relaciones tanto con la Rusia soviética como con Alemania (a pesar del problema irredentista del territorio de Memel). La confederación báltica era, dentro de la concepción de la política exterior francesa, una parte integrante del cordón sanitario entre Alemania y la Rusia soviética.

Frente a su aislamiento en política exterior, Berlín reaccionó con el entendimiento por separado con la Rusia soviética mediante el tratado de Rapallo. La política exterior europea se hallaba así polarizada entre la política reaccionaria de revisión de Berlín y el afán restaurador de la seguridad de París. La conferencia de Locarno se consideraría, de forma transitoria, un punto de inflexión, un hito en la consolidación de Europa y en el acercamiento entre Francia y sus vecinos del este. El reconocimiento por parte de Alemania de su frontera occidental —esto es, la renuncia alemana a Alsacia y Lorena— no sólo fue premiado por Francia con el abandono de su política de garantías y presiones en Renania, sino también con la aceptación tácita por parte de las potencias occidentales de la negativa alemana a considerar definitivas las fronteras de Europa oriental. De esta manera, los resultados de Locarno no serían, pues, otra cosa que un pequeño respiro en el camino hacia una nueva gue-

rra europea, que, por segunda vez, acabaría convirtiéndose en una guerra mundial.

Veinte años después de la conferencia de paz de París desaparecían, una vez más, del mapa político seis Estados europeos, destruidos, anexionados, agregados al Reich alemán como «países secundarios» o degradados, como tristes restos, a la condición de satélites de la nueva potencia hegemónica de Alemania. En marzo de 1938, Austria fue anexionada al Reich; en octubre del mismo año lo serían los Sudetes; en marzo de 1939 quedaría deshecho el resto de Checoslovaquia: el «protectorado de Bohemia y Moravia» y Eslovaquia quedarían bajo el dominio de Berlín, de forma directa el primero como formación cuasi colonial e indirectamente la segunda como Estado en apariencia independiente. Con el pacto germano-soviético de no agresión de agosto de 1939, los dos grandes perdedores de la primera guerra mundial revisaron a su manera, con sus cláusulas secretas adicionales, el orden de paz europeo, repartiéndose la Europa central y oriental según sus esferas de intereses. A la «guerra relámpago» alemana le sucedió la cuarta partición de Polonia y, poco después, la transformación de Estonia, Letonia y Lituania en repúblicas soviéticas, nuevo orden de cosas que, una vez más, no se habría de mantener sino hasta el momento en que se produjera la agresión alemana a la Unión Soviética, en el verano de 1941.

Ahora bien, en la época de entreguerras, también se habían alzado algunas voces en favor de la unificación de Europa. El conde Coudenhove-Kalergi fundó en 1923, en Viena, la Unión Paneuropea, que pronto habría de tener secciones nacionales en numerosos países, organizando congresos paneuropeos en Viena (1926), Berlín (1930) y Basilea (1932). El movimiento paneuropeo atrajo a un gran número de adeptos; en el caso de Alemania, principalmente dentro de los partidos centristas burgueses y del ala derecha de la socialdemocracia; pero su programa era más una declamación apasionada que un proyecto político en consonancia con la realidad. En el *Manifiesto paneuropeo* de Coudenhove-Kalergi, documento escrito por un espíritu entusiasta, se mezclaban los viejos y nuevos miedos, el temor al imperialismo ruso y al potencial económico americano, y el trauma de una guerra europea de exterminio. El remedio para ello habría de ser la asociación de los Estados del continente europeo en una mancomunidad, con un tribunal de arbitraje y una unión aduanera propios, cimentada por una alianza defensiva frente a Rusia: «Paneuropa comprende la península situada entre Rusia, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, así como Islan-

dia y las colonias de los Estados europeos. La gran colonia europea que, entre Trípoli y el Congo, Marruecos y Angola, abarca la mitad de Africa podría abastecer a Europa de materias primas mediante una explotación racional. Rusia e Inglaterra son países vecinos de Paneuropa. Ambos imperios son también capaces de vivir sin Europa, en tanto que los restantes Estados de esta parte de la Tierra se hallan ligados en una comunidad de destinos debido a su situación geográfica y condenados a perecer o a resurgir juntos.»

Junto a la propaganda privada de Europa, fomentada también por la Unión para la Cooperación Europea (bajo la presidencia del francés Emile Borel), la Unión Cultural Europea del príncipe Rohan en Viena, o la Unión Douanière Européenne (cuya fuerza motriz era el republicado de izquierdas francés Yves Le Trocquer), hubo también, sobre todo en Francia, alguna iniciativa para llevar a cabo una política europea oficial. El primer ministro Herriot había abogado en 1925 ante el Parlamento francés por una Europa unida. Cuando en 1929 Aristide Briand propuso en la X Asamblea de la Sociedad de Naciones «una especie de unión federal» de las naciones europeas, al menos 27 representantes de gobiernos europeos le encargaron la elaboración de un programa. La lectura del memorándum del gobierno francés sobre la organización de un orden federal europeo, presentado por Briand el 1 de mayo de 1930, pone de manifiesto, sin embargo, las escasas posibilidades existentes a la hora de traducirlo a la praxis política.

El respeto a la Sociedad de Naciones hacía impensable cualquier idea de organización políticamente operativa, y estructurada de acuerdo con ello, que excediese el ámbito de una declaración potestativa de solidaridad. «La federación europea estaría muy lejos de ser una nueva instancia para la regulación de contenciosos», escribía Briand, «pudiendo, como mucho, ser requerida para prestar sus buenos servicios en tales asuntos de una forma puramente consultiva, pero sin atribuciones para actuar efectivamente en cuestiones concretas para cuya regulación hubieran previsto el estatuto de la Sociedad de Naciones o los tratados un procedimiento especial de la Sociedad de Naciones u otro procedimiento expresamente determinado». Briand consideraba igualmente impensable la creación de uniones aduaneras, por «incompatibles con los principios de la Sociedad de Naciones, al hallarse ésta estrechamente ligada a la idea de universalidad, su objetivo y su finalidad, aun cuando promueva y fomente cuestiones parciales». La tentativa del político francés de hallar vías para la integración europea sin atentar contra el

statu quo significaba, de todos modos, un llamamiento moral que destacaba y declaraba insuperables, al mismo tiempo, todas las dudas y obstáculos existentes. El camino hacia la unidad de Europa debería hacerse con pasos políticos, pues los problemas económicos habrían de subordinarse estrictamente, en opinión de Briand, a los de índole política: «Dado que toda posibilidad de progreso en el camino de la unión económica se halla absolutamente determinada por las cuestiones relativas a la seguridad y que estas cuestiones están, a su vez, estrechamente relacionadas con la del progreso alcanzable por el camino de la unión política, el esfuerzo constructivo que ha de otorgar a Europa su estructura orgánica debería aplicarse primeramente al ámbito político.» Pero de una forma igualmente concluyente había expresado Briand la inexpugnabilidad de los obstáculos políticos existentes en el camino hacia Europa: «Finalmente, la cuestión que nos ocupa debe subordinarse claramente a la idea rectora de que el establecimiento de la relación federal entre los gobiernos europeos a que aspiramos de ningún modo y en ninguna medida puede menoscabar ninguno de los derechos soberanos de los Estados miembros de tal federación... El entendimiento entre los Estados europeos debe darse sobre la base de la soberanía absoluta y de una completa independencia política.» En esencia, del plan Briand pervivió, pues, solamente el deseo de un «tratado general, aunque fuese muy elemental, para el establecimiento del principio de la unión moral de Europa y para la ratificación solemne de la solidaridad creada entre los Estados europeos».

En aquel año de 1930 existió, a pesar de todo, una euforia, aunque moderada, en lo relativo a la idea de Europa. La revista francesa *Revue des Vivants* organizó un concurso al que fueron presentados más de 500 proyectos de Europa (los cinco más hermosos fueron enviados a la Sociedad de Naciones). La Unión Internacional de Juristas presentó un *Proyecto para la Unión Internacional Europea.* A raíz de la XI Asamblea de la Sociedad de Naciones, en septiembre de 1930, surgió una Comisión de Estudio para la Unión Europea, en vez del Consejo Europeo propugnado por Briand, que había fracasado por las objeciones británicas. Con mayor o menor independencia de los gobiernos, que se mostraban indecisos, se produjeron intentos de unificación que, exponiendo claramente los intereses económicos, presentaban los principios pragmáticos para una política europea. Durante las negociaciones de la Sociedad Internacional del Acero, fundada en 1926, el industrial luxemburgués Mayrisch apadrinó un comité de estudio franco-alemán (Comité Franco-Allemand d'Information et de Documentation) en el que los dirigentes

económicos, los políticos y los científicos competentes, trataron de llegar a un entendimiento. En el marco de la Cámara de Comercio Internacional, y bajo la dirección del industrial francés Henri de Peyerimhoff, existió un Comité Europeo empeñado en la mejora de los términos de intercambio internacionales. Los congresos centroeuropeos de economía, que se celebraron anualmente entre 1926 y 1931 con la asistencia de políticos librecambistas y de expertos en economía de casi todos los Estados europeos, se ocuparon de problemas relativos al comercio, las comunicaciones y la agricultura. Estas actividades, que por parte alemana fueron fomentadas por la industria pesada y por el ministerio de Asuntos Exteriores, estaban dedicadas en primer lugar a hacer prevalecer los intereses económicos, pero en definitiva tenían lugar dentro del marco europeo. La crisis económica mundial puso, sin embargo, prácticamente fin a todos los intentos de aproximación en el ámbito económico al vago objetivo final de una Europa más unida.

En el análisis más importante desde la perspectiva de la filosofía de la cultura del tiempo de entreguerras, el ensayo, cuya primera edición en forma de libro apareció en 1930, *La rebelión de las masas,* José Ortega y Gasset retrataba a una familia de pueblos europeos indisciplinada y moralmente desorientada, comparable a un tropel de colegiales desquiciados: «Es lamentable el espectáculo que, hoy en día, nos ofrecen las naciones europeas menores de edad. Ante la denominada decadencia de Europa y su retirada de la economía mundial, las naciones y nacioncitas tienen que andar dando saltos, gastar bromas, encapricharse o estirarse y pavonearse y presumir de personas adultas que tienen en sus manos las rienda de su propio destino. De ahí los 'nacionalismos', que surgen por todas partes como hongos.»

Pero, a diferencia de Oswald Spengler en su sombrío retrato histórico de título monstruoso y efectista, el español no creía en el ocaso de Occidente, sino en el futuro de Europa, en la superación de los nacionalismos hasta lograr un Estado nacional europeo. Entre la visión orteguiana de una Europa integrada y los primeros pasos para su realización se interpuso, sin embargo, la mayor catástrofe de la historia del mundo hasta aquel momento: el choque de los Estados y las ideologías nacionales en la segunda guerra mundial, cuya consecuencia —que Ortega no hubiese creído posible— habría de ser la división del mundo a lo largo de una línea de demarcación que atravesaría Centroeuropa.

La amenaza de la Alemania nacionalsocialista fomentó, una vez más, el surgimiento de planes e ideas federativas como la

de los Estados balcánicos bajo la protección francesa (Confederación del Danubio). La idea del ministro de Asuntos Exteriores del gobierno polaco en el exilio, August Zaleski, de unir una Polonia ampliada con el territorio de Prusia Oriental a Eslovaquia, Hungría y Austria halló también adeptos en París, y en Londres, a finales de 1939, se discutirían igualmente estos proyectos federativos bajo la impresión de la emigración política de Europa central y oriental. En tanto que la *Wehrmacht* alemana destruía en su camino hacia una *pax germanica* —la deseada hegemonía sobre todo el continente— los restos del sistema de ordenación europeo, Gran Bretaña y Francia aproximaban sus posiciones durante un breve período de tiempo, el invierno de 1939-40, más que nunca en su historia moderna. La necesidad de coordinar los esfuerzos bélicos se había plasmado en la idea de una unión política anglofrancesa, objeto de intensos debates a ambos lados del canal en la primavera de 1940, hasta la caída de Francia en junio.

Al adquirir la guerra europea de 1939 el carácter de guerra mundial a partir de 1941, los últimos restos del orden europeo negociado en Versalles, St. Germain, Trianon, Neuilly y Sèvres se convirtieron también en papel mojado. Dentro de los objetivos bélicos de la coalición anti-Hitler, el problema de las fronteras y de la relación de fuerzas en Europa era un punto programático más y, cuanto más se prolongaban los combates en los campos de batalla, tanto más evidente se hacía que, después de la guerra, los europeos ya no serían los únicos dueños de sus destinos. La falta de una influencia digna de mención por parte de la Resistencia en los países ocupados por Alemania, de los gobiernos en el exilio o de algún movimiento de masas permitió a las tres grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, decidir de mutuo acuerdo cómo habría de ser Europa al acabar la guerra.

La Carta del Atlántico, documento elaborado por Roosevelt y Churchill en agosto de 1941 a bordo de un buque de guerra americano, ante las costas de Terranova, resumía las intenciones y los objetivos de un orden global de paz que, posteriormente, en la primavera de 1945, habría de ponerse en práctica en San Francisco con la fundación de las Naciones Unidas, nueva organización de Estados que, aun siendo formalmente la sucesora de la Sociedad de Naciones de Ginebra, desde su creación habría de aparecer ya claramente desligada de las tradiciones europeas y cuyo centro de actividad, a diferencia de la Sociedad de Naciones, dejaría de ser Europa. Con independencia del dudoso éxito con que la ONU haya podido cumplir la misión enco-

mendada, o de sus errores de construcción, en modo alguno puede considerarse representante de los intereses europeos, cosa que fue esencialmente la Sociedad de Naciones de entreguerras.

A pesar de la desconfianza existente entre Moscú, por una parte, y Washington y Londres, por otra, en lo que se refiere a la división de Europa en esferas de intereses, el acuerdo fue básicamente la nota dominante en las conferencias de los «tres grandes», de Teherán a Potsdam. En noviembre de 1943, en Teherán, Roosevelt y Churchill concedieron a Stalin la «línea Curzon» como futura frontera polaco-soviética, es decir, llegaron en principio al acuerdo de ceder a la Unión Soviética Polonia oriental, con la correspondiente compensación a Polonia de territorios alemanes en el oeste. A comienzos de 1944, la línea de demarcación este-oeste en Europa central quedaría fijada en el curso de las conversaciones acerca de la división de Alemania en zonas de ocupación. En el otoño de 1944, Gran Bretaña y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo sobre su «influencia» futura en la Europa sudoriental, cuya traducción concreta fue la inclusión de toda esta zona dentro del ámbito de dominio soviético —con independencia de lo que ello pudiese significar posteriormente—, a excepción de Yugoslavia (en donde Londres y Moscú querían tener la misma influencia) y de Grecia, que sería declarada zona de interés británico.

Estas directrices fueron tenidas en cuenta ya en la Conferencia de Yalta en febrero de 1945; de modo análogo, las dos grandes potencias occidentales dieron también los primeros pasos para derrocar al gobierno (burgués) polaco exiliado en Londres en favor del «Comité de Lublin», de influencia soviética, como gobierno provisional de Polonia. Así pues, mucho antes de que acabase la guerra, ambas potencias occidentales habían aceptado la división de Europa en dos esferas de intereses por mor de un mínimo consenso dentro de la coalición bélica, aunque no por ello totalmente libre de «peros». La conferencia de Potsdam, en julio y agosto de 1945, no supuso nada nuevo frente a los acuerdos de los últimos años de la guerra. Las concesiones hechas a Stalin, independientemente de los reparos, la conformidad o el disgusto manifestados por las potencias occidentales, fueron un índice de que todo posible ordenamiento de posguerra en Europa se vería determinado, de forma decisiva, por factores externos a Europa. Las conferencias de guerra de los aliados, incluido el encuentro de Potsdam, se celebraron sin la participación de la antigua gran potencia europea que había sido Francia; hasta última hora no se acogería a De Gaulle en el círculo de los vencedores, y ello con la oposición de Stalin.

La debilidad de la gran potencia británica también se pondría, sin embargo, muy pronto de manifiesto en los primeros años de posguerra. El nuevo concepto de «superpotencia», que a partir de la segunda guerra mundial ha servido para definir el aplastante potencial hegemónico de los Estados Unidos y la Unión Soviética, no sólo ilustra la impotencia relativa de las que, hasta ese momento, habían sido grandes potencias, sino también la pérdida de importancia que Europa ha sufrido en el mundo. El devastado continente se convirtió en la segunda época de la posguerra del siglo XX, en objeto de los intereses políticos, económicos e ideológicos de las dos superpotencias, quedando repartido —casi forzosamente—, a medias entre un bloque «occidental» y otro «oriental». Ciertamente, ello no se produjo de la noche a la mañana, y, en Europa occidental, tampoco por la fuerza. La conciencia de su debilidad política, económica y militar, y el temor a la agresión comunista (la existencia o no de motivos reales para ello sería otra cuestión) la llevaron a buscar voluntariamente el apoyo y la protección de América. El atractivo del Plan Marshall se superponía, al menos con igual intensidad, al deseo y la necesidad de los Estados de Europa occidental de que América asumiese un papel rector. Ello era aplicable también al caso de Gran Bretaña y Francia, que trataban de mantener (indudablemente con el apoyo americano) sus aspiraciones hegemónicas tradicionales, aun cuando la supremacía americana tardase algún tiempo en manifestarse. En los años de posguerra, Gran Bretaña no fue, en modo alguno, un simple aliado menor de Washington, por lo menos en todo lo relativo a los asuntos europeos. Al contrario, algunas decisiones en cuanto a la política alemana, provenientes en apariencia de Washington, en realidad habían sido preparadas y formuladas en Londres. Francia, por su parte, había celebrado la ayuda de Estados Unidos en su intento de salvar sus posesiones coloniales en el Sudeste asiático, pero tanto Londres como París no tardarían en reconocer y admitir la superioridad hegemónica americana, lo cual sucedería, como muy tarde, en 1956, cuando América puso fin a la anacrónica aventura de Suez iniciada por Gran Bretaña y Francia.

La división del mundo estimuló la integración de Europa, aunque sin duda de una manera muy distinta a la soñada y deseada por los propagandistas de la idea de Europa en la época de entreguerras, o incluso por Churchill en el año 1946. La integración se produce dentro de dos sistemas claramente delimitados entre sí, a los que se ha dado en definir —de una forma más que superficial y acertando sólo a medias— como capitalista por

un lado y socialista por otro, occidental u oriental, libre o no libre, democrático o democrático popular, y cuyos centros gravitatorios se hallan más o menos alejados del centro geográfico de Europa. Los procesos de integración prosiguen, con aceleraciones y estancamientos, tanto en el Este como en el Oeste; a la guerra fría le sucedió un período de distensión. Sea como fuere, la coexistencia pacífica y permanente de ambas partes de Europa sigue siendo la meta ambicionada.

1. Europa después de 1945: la formación de los bloques

I. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

¿Se puede seguir hablando de la historia de Europa una vez acabada la segunda guerra mundial? Los observadores contemporáneos del período de posguerra se creyeron obligados a dar a esta pregunta una múltiple respuesta negativa. Los países del viejo continente no habían sido capaces de enfrentarse a la expansión del Reich alemán de 1939-40, ni habían podido tampoco liberarse por sus propios medios del imperio nacionalsocialista; Gran Bretaña había tenido que luchar desesperadamente y en solitario durante más de un año para no convertirse en satélite de la potencia alemana. Sólo después de que Hitler hubiese atacado a la Unión Soviética en 1941, y de que los Estados Unidos entraran en guerra contra las potencias del Eje tras el ataque japonés a Pearl Harbor, habría de tambalearse el imperio alemán sobre Europa. La Unión Soviética había tenido que soportar el peso mayor de la guerra en el continente (pagado con 20 millones de muertos) y los Estados Unidos habían financiado con créditos y suministros de material la mayor parte de los esfuerzos bélicos aliados; ello hacía absolutamente inevitable que las dos «potencias aledañas» del viejo contiente tuviesen, tras la victoria sobre las potencias del Eje, un peso considerablemente mayor en el concierto de la política internacional que los países europeos —y los Estados Unidos, sin duda, aún más que la Unión Soviética—, así como una capacidad de intervención decisiva, sobre todo en cuestiones relativas al futuro desarrollo de Europa.

Las pérdidas de la guerra habían alcanzado unas proporciones hasta entonces desconocidas [1]. Después de la Unión Soviética, la región oriental y sudoriental de Europa fue la que mayor número de víctimas tuvo que lamentar: 7,5 millones de muertos, de ellos 4 millones de judíos exterminados, lo que suponía en total casi el 9% de la población. Alemania (calculando según las fronteras de 1937) perdió 5,5 millones de personas, aproximadamente el 8% de su población. Los restantes países europeos, menos afectados por las acciones bélicas, sumaron otros 4 millones de muertos; las pérdidas de vidas humanas se elevaron, en total, a una cifra entre

tres y cuatro veces superior a la de las víctimas de la primera guerra mundial. Cerca de 50 millones de personas habían perdido en la Europa continental, de forma transitoria o para siempre, su tierra: soldados, prisioneros de guerra, víctimas de la «política de depuración» nacionalsocialista en Europa oriental, Lorena y Tirol meridional (2,8 millones), evacuados (sólo en Alemania, 6,2 millones), fugitivos y desplazados al final de la guerra de los asentamientos alemanes situados al este de la línea Oder-Neisse y en Checoslovaquia (12 millones de los cuales llegarían a las cuatro zonas alemanas de ocupación), fugitivos y deportados de los países bálticos, y polacos emigrados a los territorios que hasta ese momento habían pertenecido al Reich (2 millones). Ninguna estadística contabilizó, sin embargo, las pérdidas relativas a las relaciones humanas y a las formas sociales de comunidad.

Exceptuando a los países neutrales y a Gran Bretaña, prácticamente todas las grandes ciudades europeas quedaron destruidas. Especialmente importantes fueron los daños producidos en el ámbito de Europa oriental, en donde tanto las tropas rusas como las alemanas, en sus retiradas, habían actuado conforme al principio de la «tierra quemada»: en Italia, Yugoslavia y Grecia; en los Países Bajos, en donde se habían volado diques y malecones; en el norte de Francia, en donde tras la invasión aliada de junio de 1944 se habían sostenido duros combates; y por último en la propia Alemania, cuyas ciudades y plantas industriales se habían convertido en el blanco de intensos bombardeos. Desde el punto de vista de la economía política, aún serían mayores los daños ocasionados por la destrucción de las vías de comunicación. En Francia sólo el 35% de la línea férrea y de la flota mercante se encontraba en condiciones de funcionar; en Alemania, el tráfico ferroviario había quedado prácticamente paralizado; en Bélgica y Holanda, el sistema de canalización había sido destruido. La falta de hombres, máquinas y medios de comunicación provocó un retroceso en la producción agrícola. En toda Europa (exceptuando, de nuevo, a la Unión Soviética), sólo se produciría en 1946-47 un 66% del volumen de carne y grasas animales producido antes de la guerra, un 70% de cereal y un 75% de productos agrícolas en general, cifras que, por otra parte, sólo se conseguirían gracias al incremento de la producción británica; en Francia y Alemania, la producción de cereales había descendido al 59 y 64% respectivamente de la de 1938. Se estima que 100 millones de personas tuvieron que vivir con 1 500 calorías, y a veces menos, por día. El hambre, el frío y la escasez de los artículos más elementales determinaron la vida cotidiana de la población europea.

En cuanto a la producción industrial total de Europa al final de la guerra, no existen cifras seguras. En Francia, la producción alcanzó en 1945 aproximadamente el 35% de la de 1938 (que, a su vez, se hallaba un 20% por debajo de la de 1929, antes de la irrupción de la crisis económica mundial); los países neutrales y menos afectados alcanzaron porcentajes algo mayores; Alemania, Austria y Grecia, mucho más bajos. La producción industrial de Francia y los países del Benelux, todavía en 1946, representaba sólo el 89% de la de antes de la guerra; en la Europa oriental, sudoriental y meridional, cerca del 60%; en Alemania, el 40%. La producción industrial de los Estados Unidos en el mismo período, 1938-46, se había triplicado con creces, cubriendo más de la mitad del volumen de la producción mundial. La renta *per capita* entre 1938 y 1946 había descendido de 120 a 90$ anuales en la Europa oriental y meridional; de 290 a 260$ en Francia y en los países del Benelux; en Gran Bretaña, Suiza y Escandinavia había aumentado moderadamente, de 420 a 580$, en tanto que en los Estados Unidos se había más que duplicado, pasando de 550 a 1 260$. De forma análoga, habían empeorado los términos de intercambio de la economía europea, y, dado que las inversiones europeas en ultramar habían sido entre tanto destinadas en su mayor parte a la financiación de la guerra, interrumpiéndose los servicios europeos (principalmente la navegación), en la balanza de pagos del conjunto de Europa se produjo un déficit que en 1947 alcanzaría la imponente suma de 7 500 millones $; en aquel mismo año, en los Estados Unidos obtuvieron un superávit de 10 000 millones. Los costes de la guerra y de sus secuelas habían hundido la Hacienda pública, provocando procesos inflacionarios. En Alemania circulaba siete veces más dinero que antes de la guerra; en Francia, los precios se habían cuadruplicado; en Grecia y en Hungría, el sistema monetario se derrumbó; y Bélgica y Noruega sólo conseguirían evitar el hundimiento mediante una devaluación de su moneda. No sólo los vencidos, también los vencedores tuvieron que pagar sensiblemente las consecuencias de la guerra.

La pérdida de potencial económico y político de las naciones europeas aceleró, por otra parte, el proceso de emancipación de los territorios coloniales dependientes hasta entonces de Europa[2]. En 1941, Gran Bretaña había tenido que prometer la independencia a la India para el período de posguerra a fin de impedir el paso del subcontiente al campo de las potencias del Eje; en 1947 esto se hizo realidad, así como la independencia de Birmania y (ya en 1946) de Ceilán; países de la Commonwealth como Canadá, Suráfrica, Australia y Nueva Zelanda, que ya durante la primera guerra mundial habían aflojado los lazos con la «madre

patria», ahora seguirían totalmente su propio camino. El comité de la «Francia libre» del general De Gaulle había prometido en 1941, en competencia con el régimen de Vichy, la independencia a los territorios de Siria y Líbano bajo mandato francés, viéndose obligado a anunciar «reformas» en favor de los restantes territorios coloniales; en Marruecos y en Túnez, los movimientos autóctonos exigieron en 1944 un estatuto independiente; en Argelia se produjeron en 1945 sangrientos disturbios; en Indochina, el movimiento Vietminh, tras la derrota de la potencia japonesa de ocupación, declaró la independencia del país con respecto al dominio francés. De igual manera, el movimiento nacional indonesio aprovecharía la capitulación japonesa para proclamar la independencia del imperio insular con respecto a sus antiguos dominadores holandeses. Cierto es que Francia y Holanda trataron de restaurar sus posiciones coloniales reproduciendo el modelo británico de la Commonwealth y que tampoco en Gran Bretaña dejó de existir una resistencia, al menos, frente a los movimientos independentistas radicales, pero el resultado de tales intentos de mantener el poderío imperial no sería sino una serie de penosos enfrentamientos armados en los territorios coloniales, tanto más difíciles de ganar cuanto que las dos nuevas potencias mundiales —los Estados Unidos aún más que la Unión Soviética— habían abanderado, por su parte, la liberación con respecto al dominio europeo de las colonias de Africa y Asia. En vez de lograrse un nuevo reforzamiento de los países europeos mediante el potencial ultramarino —tal como se había esperado en Europa—, el empeño en mantener tales aspiraciones de dominio colonial no hizo sino debilitar aún más a Europa en el aspecto económico, militar y moral.

Ahora bien, la debilidad de Europa sólo era relativa y, en muchos campos, de índole transitoria, pues si bien la economía se hallaba al borde de la ruina, los centros de producción no estaban ni con mucho tan destruidos como pudiera hacer creer en un primer momento la visión de las ruinas y las montañas de escombros. En la región del Ruhr, de cuyas minas de carbón se extraían diariamente 25 000 toneladas después del fin de la guerra, en vez de las 400 000 de antes de la guerra, sólo se encontraba en estado irreparable entre el 15 y el 20% de la maquinaria; el valor de las instalaciones industriales alemanas era, en su conjunto, más elevado en 1946 que un decenio atrás. La destrucción de las instalaciones resultó incluso ser un frecuente factor de fomento de la producción, permitiendo por otra parte una implantación más rápida de las innovaciones tecnológicas de lo que hubiese sido posible en circunstancias normales. Las masas de refugiados y desplazados crearon sin duda problemas de abastecimiento y de inte-

gración, pero también posibilitaron elevadas tasas de inversión, por cuanto representaba un ejército de reserva de mano de obra, con frecuencia altamente cualificada, así como el mantenimiento de un nivel salarial bajo. Las dos nuevas potencias mundiales, que ahora podían intervenir en los asuntos europeos, estaban interesadas en una rápida estabilización del viejo continente: los Estados Unidos, porque temían caer en una crisis masiva de superproducción al acabar la guerra, sin los potentes socios y mercados europeos; la Unión Soviética, porque no deseaba que los Estados europeos, debilitados, cayeran bajo la dependencia de la potencia rectora que eran los Estados Unidos en el campo económico. Los Estados Unidos trataron por ello de ayudar a los europeos a superar sus dificultades económicas nada más finalizar la guerra mediante créditos y suministros de socorro (si bien calculando, en un primer momento, demasiado por lo bajo las necesidades europeas); los dirigentes soviéticos —contrariamente a lo que esperaban los observadores occidentales y a lo que con frecuencia se asegura en la actualidad—, en la medida en que pudieron ejercer una influencia a través de los partidos comunistas, se esforzaron por movilizar a la población europea en favor de una renuncia al consumo y una rápida reconstrucción [3]. Una vez restablecidas las comunicaciones y subsanados parcialmente los problemas políticos de organización, la producción debía ponerse nuevamente en marcha con relativa rapidez. Las economías nacionales europeas experimentarían de hecho, un resurgimiento general bastante uniforme en la segunda mitad de la década de 1940, casi con independencia de cuál fuese la concepción de ordenamiento político de cada país

La segunda guerra mundial no supondría, realmente, el fin de la historia europea, sino el de la historia del sistema de equilibrio entre las potencias europeas surgido en el Renacimiento y que, pese a todas sus modificaciones, básicamente se había vuelto a imponer, una y otra vez, en cada caso particular. Este sistema se había resquebrajado a partir del momento en que la creciente interdependencia económica y el desarrollo de la técnica armamentística cuestionaron la autonomía de las hasta entonces grandes potencias, quedando destruido tras el intento alemán de resolver el dilema cada vez mayor de una posición semihegemónica mediante el logro de una posición de poder en el mundo a costa de las restantes potencias europeas; las tentativas de revitalizarlo después de la guerra —la más espectacular de las cuales sería la política exterior de De Gaulle, iniciada con el pacto franco-soviético de diciembre de 1944 [4] —estaban condenadas al fracaso debido a la relativa debilidad de las naciones europeas. En su lugar debía aparecer un nuevo sistema internacional del que, en un principio, lo único que

estaba claro era que los Estados Unidos, debido a su tremendo progreso económico y su monopolio en el ámbito de las armas nucleares, habría de tener un papel rector; la Unión Soviética, por el poderío militar adquirido en la guerra, se afirmaría en una posición autónoma, y los Estados europeos, gracias a su importancia estratégica para las dos nuevas potencias mundiales, conservarían el derecho de voto. El futuro de Europa dependía así del desarrollo de las relaciones soviético-americanas, si bien los europeos tenían, al mismo tiempo, la posibilidad de influir en este desarrollo.

Siempre que entre los europeos se discutían alternativas al sistema de equilibrio desmoronado, éstas se situaban dentro del marco de la idea de una unión europea. Mediante la asociación, la integración o la federación, los Estados europeos —en lo que se refiere al «cómo» de tal asociación, las ideas eran con frecuencia divergentes— eliminarían en el futuro los conflictos suicidas sufridos ahora por dos veces en el espacio de una generación; Alemania, en particular, debería someterse mediante la integración a una forma de control duradero que impidiese el resurgimiento del revanchismo. Por otra parte, esta unión habría de preservar a los europeos de una dependencia de la Unión Soviética y/o de los Estados Unidos, ofreciéndoles la posibilidad de desempeñar un papel mediador entre las nuevas potencias mundiales, manifiestamente rivales. Winston Churchill, primer ministro británico, abogó públicamente, en marzo de 1943, por la creación de un Consejo de Europa de los Estados continentales, que, junto a las grandes potencias, Estados Unidos, Unión Soviética y Gran Bretaña, constituyera en el futuro el cuarto factor estabilizador de la política internacional. Los grupos de resistencia de todos los países ocupados por las tropas alemanas, desde Francia hasta Polonia, expresaron, cada uno por su parte, ideas similares acerca de unos Estados Unidos de Europa. El ministro belga de Asuntos Exteriores, Paul-Henri Spaak, propuso a los gobiernos británico y francés en el otoño de 1944 la integración de Europa occidental bajo el liderazgo británico, y su colega italiano, Alcide de Gasperi, se presentó ante la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de las potencias vencedoras en septiembre de 1945 como el paladín de una Europa federada [5].

El papel mediador de Europa como «tercera fuerza» parecía abrirse camino, tanto más cuanto que en los países europeos se podía observar un desplazamiento general del peso hacia la «izquierda», alejado del modelo de capitalismo liberal de los Estados Unidos y de la vieja Europa. Las élites políticas conservadoras se habían desacreditado por su colaboración con los fascistas, los co-

munistas habían aumentado su prestigio por su participación en la Resistencia y por la elevada contribución a la victoria aliada del ejército soviético, y cuyo derecho a la participación se había visto acrecentado por las víctimas sufridas a consecuencia de la guerra. En las primeras elecciones de la posguerra, los comunistas obtuvieron en Francia el 26% de los votos; en Italia, el 19% y en Checoslovaquia incluso el 38%. En Grecia, un movimiento revolucionario dirigido principalmente por comunistas se enfrentaría al régimen autoritario de Atenas; en Yugoslavia, el movimiento comunista de partisanos, dirigido por Tito, logró una victoria completa. En Gran Bretaña, el primer ministro de la guerra, Winston Churchill, fue enviado a la oposición inmediatamente después de su triunfo sobre la Alemania hitleriana por una amplia mayoría de electores laboristas. En Italia, Francia y Alemania, los partidos democratacristianos obtuvieron un éxito extraordinario con programas acentuadamente progresistas y, en parte, claramente anticapitalistas. Las coaliciones «antifascistas» de comunistas, socialistas, democratacristianos y otras agrupaciones burguesas determinarían la imagen de los primeros gobiernos de posguerra.

El desarrollo hacia una Europa susceptible de constituir una «tercera fuerza» tropezó también, entretanto, con importantes obstáculos: aunque las posiciones hegemónicas tradicionales se habían visto quebrantadas, las relaciones socioeconómicas se mantuvieron en gran medida invariables a despecho del cambio de dirección que había supuesto la liberación o el hundimiento de 1945, y la escasez de recursos del momento favoreció —en interés de una «pronta» reconstrucción— la vuelta a las burocracias tradicionales en la Administración y la economía. La experiencia de la derrota y de la ocupación había puesto sin duda en entredicho el pensamiento basado en categorías estrictamente nacionales, pero al mismo tiempo había reforzado la necesidad de asegurarse la propia identidad nacional. Gran Bretaña, considerada con frecuencia por la izquierda europea como la potencia rectora de una Europa unida, no había compartido con el continente la experiencia del hundimiento y se mostraba en consecuencia insensible a los requerimientos de integración del propio país en la Europa continental. Ante la modificación de las fuerzas en la política internacional, los esfuerzos en favor de la unificación —si no se quería que condujesen a una simple repetición de las luchas por el poder de los Estados nacionales en el plano continental— habrían de seguir dependiendo del entendimiento simultáneo con las potencias mundiales, y, dado que los dirigentes soviéticos consideraban como una empresa contraria a sus intereses no sólo los planes de fede-

ración de la Europa central y oriental sino también de toda forma de asociación estatal en el continente europeo, en principio sólo fue posible dar algunos pasos muy cautelosos, tendentes a modificar la actitud soviética, en tanto que una alianza fáctica de las fuerzas nacionalistas y soviéticas trabajaba por la restauración del sistema de ordenamiento en Estados nacionales.

El futuro de Europa quedaba, pues, abierto desde un triple punto de vista: en el aspecto del ordenamiento político había que decidir si las relaciones capitalistas liberales podían reforzarse nuevamente, y en qué medida, o bien hasta qué punto debían ceder el puesto a los modelos socialistas de sociedad; en cuanto a la relación entre las naciones europeas, el esfuerzo de afirmar la soberanía nacional absoluta se enfrentaba al intento de relativizar los intereses nacionales particulares mediante la integración; desde el punto de vista de la política internacional, Europa podía convertirse en factor estabilizador entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, o en objeto y víctima de su enfrentamiento. Los procesos dentro de estos tres ámbitos se hallaban interrelacionados, recayendo el peso mayor —en consonancia con el relativo debilitamiento de los Estados europeos frente a las nuevas potencias mudiales— sobre las decisiones en el campo de la política internacional y determinando también, por ello, la cronología de la historia europea de posguerra.

II. LOS COMIENZOS DE LA GUERRA FRIA

La primera fase del desarrollo de la Europa de posguerra, iniciada ya durante la guerra y que se prolongaría hasta 1947-48, estuvo caracterizada por la circunstancia de que la región europea se había ido convirtiendo progresivamente en el centro de los temores y planes contrapuestos de las potencias mundiales cuando la división de Europa en una zona oriental y otra occidental no era todavía una realidad inalterable. A partir de 1943-44 fue creciendo entre los dirigentes soviéticos el temor a la expansión del capitalismo americano en la debilitada Europa, al que, junto con las fuerzas antisoviéticas del viejo continente —principalmente, las de los países vecinos de Europa oriental—, consideraban una nueva amenaza a largo plazo para su propio imperio; entre los dirigentes americanos se impuso entre 1945 y 1946 la idea de que el comunismo soviético —al igual que el fascismo— era de índole expansiva y —como aquél lo hiciera con la crisis económica mundial— trataría de aprovechar la precaria situación económica de Europa para extender su área de influencia al conjunto de la región

europea, amenazando con ello no sólo el bienestar sino también la seguridad de los Estados Unidos. Las tensiones entre las dos potencias resultantes de estos temores alcanzaron tales proporciones nada más finalizar la guerra que hicieron imposible el entendimiento en cuanto a los problemas del ordenamiento europeo de posguerra siempre y cuando no se tratase de cuestiones marginales. Los dirigentes soviéticos concentraron por ello sus esfuerzos en asegurar de forma duradera su influencia sobre los territorios de Europa oriental y central ocupados por el Ejército Rojo; el gobierno americano, desde comienzos de 1946, dio absoluta prioridad a la inmunización frente a la intervención soviética de las zonas de Europa que no habían sido ocupadas por el Ejército Rojo; ambas partes asumían con ello la división de Europa, trabajando *de facto* en tal sentido [6].

La política soviética con respecto a los países de Europa oriental iba dirigida a anular las cesiones territoriales impuestas por el Reich alemán en 1918 y por Polonia en 1921 que no hubieran sido ya invalidadas en 1939-40, a subsanar los numerosos problemas de las minorías mediante importantes desplazamientos demográficos y, principalmente, a impedir mediante la destrucción de la base social y política de las fuerzas potencialmente antisoviéticas la posibilidad de una organización de los países de Europa oriental peligrosa para la seguridad de la Unión Soviética. Lo que no estaba claramente determinado en un principio (contrariamente a lo afirmado por una interpretación *a posteriori)* era cómo habría de lograrse la orientación prosoviética de Europa oriental; lo único seguro era que, ante la gran difusión de las posturas antirrusas y anticomunistas en los países de Europa oriental, no iba a ser posible armonizar en general dicha orientación con el desarrollo del pensamiento democrático liberal de cuño occidental [7] que el gobierno americano había tenido precisamente que proclamar como objetivo prioritario de la guerra para posibilitar, siquiera desde el punto de vista de la política interior, la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Por temor a una vuelta del pueblo americano al aislacionismo y por la presión creciente de los electores originarios de Europa oriental, el gobierno americano no podía reconocer abiertamente las exigencias soviéticas en materia de seguridad a pesar de que los intereses reales de los Estados Unidos en Europa oriental eran escasos y, sobre todo, de que el presidente Roosevelt había visto la necesidad de conceder a la Unión Soviética una posición hegemónica en estos territorios. La exigencia oficial americana de una implantación de los principios democráticos reforzó a las fuerzas antisoviéticas de Europa oriental en su oposición a la influencia soviética, provocando en consecuencia una mayor

represión por parte de los dirigentes soviéticos; dado que las palabras americanas no se vieron secundadas por un apoyo sustancial a las fuerzas no comunistas, ello condujo a la orientación progresiva de los países de Europa oriental hacia el modelo soviético de dictadura comunista unipartidista [8].

De esta manera fue como Polonia oriental, hasta la línea de los ríos Narev, Vístula y San, fue incorporada al Estado soviético en otoño de 1939 por las tropas soviéticas, siendo asesinados en la primavera de 1940 casi 15 000 oficiales polacos, prisioneros de guerra, por los dirigentes soviéticos; la toma del poder por los comunistas polacos no sería considerada, sin embargo, durante mucho tiempo por Stalin el medio adecuado para impedir una nueva orientación antisoviética de Polonia, buscando más bien fuerzas dispuestas a transigir y a cooperar dentro de los círculos del gobieno polaco en el exilio londinense hasta el verano de 1944. Sólo cuando se hubo comprobado finalmente la imposibilidad de encontrarlas, cedió abiertamente a los requerimientos de los comunistas polacos para preparar un régimen bajo el dominio comunista, negando su posible ayuda al levantamiento en Varsovia de la Resistencia no comunista en agosto de 1944 y haciendo encarcelar a sus dirigentes cuando, tras la entrada de las tropas soviéticas en el invierno de 1944-45, pretendían negociar su parte de poder. Bajo la presión americana, a finales de junio de 1945 se hubieron de conceder cuatro carteras en el gabinete del Gogierno establecido por fuerzas comunistas al partido agrario como fuerza potencialmente dominante del país, así como otra cartera a los socialistas. Pero cuando la mayoría del partido agrario se negó a ingresar en el Frente Democrático, dominado por comunistas y socialistas, y fracciones no comunistas del ejército nacional prosiguieron su guerra de guerrillas, los comunistas, apoyados ahora por un grupo cada vez mayor de fuerzas reformistas no comunistas, postergaron las elecciones para la Asamblea Constituyente hasta enero de 1947, manipulándolas entonces (sin que ello fuera necesario) para que el Frente Democrático obtuviese 394 de los 444 escaños del Parlamento. Los comunistas pudieron así imponer sin obstáculos su liderazgo, impulsando ciertamente un rumbo a su «propia vía al socialismo» independiente en un principio del modelo soviético y empeñado en lograr el apoyo de las masas campesinas y del clero de la Iglesia católica para la colaboración en la construcción del Estado socialista.

En el gobierno checoslovaco en el exilio, Stalin encontró aquella disposición a cooperar que había buscado en vano en el polaco. El presidente Benes y una mayoría de las fuerzas democráticas del país, tras la experiencia de los acuerdos de Munich y el desplaza-

miento del poder hegemónico en el continente, tomaron la resolución de someter a Checoslovaquia al poder protector de la Unión Soviética, a fin de asegurar su independencia. Renunciaron de buen grado al proyecto de una confederación checoslovaca-polaca al que se oponían los soviéticos, aceptaron el deseo soviético de anexión de la Ucrania carpática —que hasta 1939 había formado parte de la confederación estatal checoslovaca— a la Unión Soviética, y en política internacional asumieron las posiciones soviéticas. Consecuentemente, el poder político, tras la liberación por tropas soviéticas y (en escasa proporción) americanas, pasó a un Frente Nacional formado por comunistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, Partido Popular Católico y Partido Democrático Eslovaco, dentro del cual los comunistas, debido a un descuido de Benes, desempeñaron un papel clave, desproporcionadamente importante, si bien su programa de transformación social (incluyendo la expulsión de los alemanes de los Sudetes) fue apoyado mediante amplio consenso por los diferentes componentes de la coalición. Las tensiones entre los partidos del gobierno, que serían una amenaza para la supervivencia del régimen parlamentario, no aparecerían hasta 1947, una vez que la reconstrucción y el programa de socialización entraran en crisis a consecuencia, no en último término, del cese de la ayuda económica americana.

En Hungría, Stalin promovió a finales de 1944, bajo la protección de las tropas soviéticas, un gobierno de coalición formado por comunistas, socialistas y el Partido de Pequeños Propietarios, introduciendo con pasos cautelosos reformas sociales en un país gobernado hasta entonces de una forma constitucional-autoritaria por una reducida clase alta y aliado de Alemania. No existía, sin embargo, una base popular, necesaria para una política prosoviética; los comunistas habrían de sufrir, por el contrario, en las elecciones de octubre de 1945, con el 17% de los votos (frente al 57% del Partido de Pequeños Propietarios y el 17,4% de los socialistas), una clara derrota. El dirigente de los primeros, Ferenc Nagy, fue aceptado por los soviéticos como presidente de gobierno, pero quedó sometido a la presión creciente de sus compañeros comunistas de gabinete. En enero de 1947, algunos miembros dirigentes del Partido de Pequeños Propietarios fueron acusados de participar en un intento de golpe y encarcelados; a finales de mayo de 1947, los ministros más importantes de este partido fueron excluidos del gabinete, dejando así libre el camino hacia el monopolio del poder por los comunistas.

En Rumanía, los dirigentes soviéticos trataron, en un principio, de entenderse con el grupo conspirador de generales y políticos en la oposición que en agosto de 1944 derrocó al régimen del mariscal

Antonescu, aliado de Hitler; Stalin rechazó las pretensiones de los dirigentes comunistas rumanos de una mayor participación en el poder. Pero, bajo la presión de la agitación general entre la población campesina de tendencia antibolchevique, los ocupantes soviéticos acabarían por imponer a finales de febrero de 1945 al rey Miguel la formación de un gabinete controlado por los comunistas. La oposición al nuevo régimen siguió siendo considerable, e incluso aumentó, pero ya no podría imponerse: en agosto de 1945, el rey Miguel trató de derrocar en vano al nuevo gobierno; en enero de 1946, por presión americana, ingresaron en el gabinete dos representantes de los partidos de la oposición que, sin embargo, no pudieron ejercer una influencia real; en noviembre de 1946, los electores infligieron al Partido Comunista una tremenda derrota que, no obstante, sería falseada por éste, convirtiéndola en una victoria del Bloque de Partidos Democráticos, controlado por él. A lo largo de 1947, los dirigentes de la oposición fueron encarcelados; sus seguidores, despojados de su base material mediante una reforma de la moneda; los elementos autónomos dentro del Bloque Democrático, excluidos, y, finalmente, el rey se vio obligado a abdicar.

En Bulgaria, el Frente Patriótico, formado por un grupo de militares del Partido Zveno, el Partido Campesino, comunistas y socialistas, organizó en septiembre de 1944, al acercarse las tropas soviéticas, un golpe contra el régimen autoritario y aliado de Hitler existente; durante el invierno de 1944-45, fueron condenados a muerte más de 2 500 representantes del antiguo orden, y otros 2 000 fueron condenados a trabajos forzados a perpetuidad. Dentro de la coalición gubernamental, el Partido Comunista logró muy pronto —en esta ocasión con un respaldo popular creciente y apoyado por la presencia de los ocupantes soviéticos— una posición rectora. Animado por la actuación de las tropas británicas contra el movimiento partisano procomunista en la vecina Grecia, el presidente de gobierno en funciones Nikola Petkov afrontó una prueba de fuerza con los comunistas en julio de 1945, abandonando con una fracción de su Partido Campesino el Frente Patriótico. Ahora bien, para las elecciones de noviembre de 1945 sólo se admitió una lista unitaria del Frente, y ésta fue ratificada por el 88% de los votantes, con una participación electoral del 80%; las negociaciones para la readmisión de dos políticos de la oposición dentro del gobierno (concedida por el gobierno soviético finalmente a los Estados Unidos) fracasaron por la negativa de los comunistas a permitir a la oposición el ejercicio de una influencia real. Tras la firma del tratado de paz de abril de 1947 y la disolución de la Comisión de Control de los Aliados, cuya presencia había garan-

tizado hasta entonces una cierta protección a la oposición, Petkov fue encarcelado y condenado a muerte, y su Partido Campesino, bastante quebrantado ya, definitivamente destruido.

En Yugoslavia, el movimiento comunista de partisanos, dirigido por Josip Broz-Tito, en lucha contra las potencias del Eje, se impuso por sus propias fuerzas a los grupos rivales de la Resistencia; Stalin, que no había podido apoyar a este movimiento durante la guerra, obligó a Tito, incluso tras la victoria militar sobre los ocupantes en otoño de 1944, a colaborar con las fuerzas burguesas y con el rey en el exilio. Pero Tito sólo concedió a las fuerzas no comunistas un papel subordinado dentro del Frente Popular, refrendado en noviembre de 1945 por el 90% de la población, impulsando enérgicamente la expropiación de los latifundios y la industria según el modelo soviético y haciendo perseguir por la justicia a los militantes de las formaciones anteriormente rivales (sobre todo al movimiento servio Cetnik y al movimiento separatista croata Ustasa). Su régimen era, pues, el más próximo a la idea de orden comunista, pero pronto se habrían de producir tensiones con Stalin, quien consideraba que el impulso revolucionario de los camaradas yugoslavos era, por múltiples razones —por su intento de integración del territorio de Trieste y por su apoyo al movimiento revolucionario griego, entre otras cosas—, demasiado irreflexivo. La influencia soviética también continuaría siendo limitada, bajo signo contrario, en Finlandia: el ejército finlandés detuvo en dos ocasiones el avance soviético, en la guerra del invierno de 1939-40 y en la ofensiva soviética de Carelia en el verano de 1944; los Estados Unidos manifestaron durante toda la guerra un fuerte interés por el mantenimiento del orden democrático en el país, y el gobierno Paasikivi, formado después de la guerra, con su acentuada política exterior prosoviética privó a los dirigentes soviéticos de cualquier ocasión para intentar una nueva intervención.

En los países situados fuera del ámbito de influencia del Ejército Rojo, principalmente en Francia e Italia, los comunistas movilizaron entre tanto, por indicación de Stalin, todas las reservas disponibles para la reconstrucción en colaboración con las élites tradicionales. Los órganos autogestionarios surgidos de la Resistencia, que hubieran podido servir de germen para una fuerza antagónica revolucionaria, fueron despojados de poder con ayuda de los ministros comunistas; los movimientos de reforma social fueron impulsados en la medida en que suponían una contribución a la puesta en marcha del proceso de producción, pero frenados siempre que amenazasen, aunque sólo fuera a corto plazo, la productividad; las luchas por el reparto económico fueron poster-

gadas en favor de una política claramente proempresarial de incremento riguroso de la producción y las tasas de ganancia. En Francia, los comunistas boicotearon las reivindicaciones de los socialistas, compañeros suyos de coalición, de nacionalización de la gran industria, planificación de la economía y participación; en Italia se opusieron a los planes de reorganización radical de los socialistas y del Partido de Acción surgido de la Resistencia en favor de la colaboración con los liberales y, sobre todo, con el Partido Democratacristiano de masas [9].

Los dirigentes americanos, ciertamente, no tomaron nota de esta política de estabilización comunista, rayana en la autorrenuncia, en Europa occidental, empleando antes bien su ayuda económica resueltamente en contra de la influencia comunista e instando a los socialistas y democratacristianos europeos a excluir a los comunistas de la responsabilidad del gobierno. Los compañeros de gabinete de los comunistas no se mostraron inclinados, en un primer momento, a ceder a las exigencias americanas, dado que para llevar a cabo sus propios planes de reforma dependían del apoyo comunista, pero pronto sufrieron también en su propio país la presión de las fuerzas anticomunistas, cuya influencia se había acrecentado con el incipiente enfrentamiento Este-Oeste. En Francia, el movimiento gaullista de concentración se convirtió en una competencia «derechista» frente a los democratacristianos, obligándoles cada vez más a alejarse de sus compañeros «izquierdistas» de coalición; en Italia, los notables tradicionales y el Vaticano trabajaron por la ruptura de los democratacristianos con los comunistas, cuya posición dentro de los gobiernos se fue debilitando en consecuencia de forma progresiva, provocando un descontento cada vez mayor entre sus seguidores hacia la política de sacrificio impuesta por Moscú. En la primavera de 1947, el malestar de las bases comunistas, por un lado, y la presión de los adversarios del comunismo, por otro, habían crecido hasta el punto de deshacer las coaliciones con los comunistas, tanto en Bélgica (11 de marzo) como en Francia (4 de mayo) y en Italia (13 de mayo). Indudablemente, apenas nadie se imaginaba aún en Europa que la ruptura de las alianzas «antifascistas» sería duradera y los dirigentes de los partidos comunistas trataron también de seguir colaborando desde la oposición en la reconstrucción nacional.

El incipiente enfrentamiento Este-Oeste tuvo efectos aún mayores que en Europa oriental y occidental en Alemania, que sólo había podido ser vencida por las potencias mundiales aliadas y de cuyo futuro eran también, por lo mismo, corresponsables [10]. Los aliados tenían, sin duda, un gran interés porque Alemania, a diferencia de lo que había sucedido después de la primera

guerra mundial, se viese privada de toda posibilidad de iniciar una nueva agresión, pero al mismo tiempo temían que, si se despojaba a Alemania de poder, ello tuviese también consecuencias negativas para la propia seguridad: en los Estados Unidos existía manifiestamente un interés por mantener el mercado alemán como potente asociado de la economía americana; entre los dirigentes soviéticos crecía el temor, según se prolongaba la guerra, de que una Alemania destruida pudiese convertirse fácilmente en presa del imperialismo americano; en Gran Bretaña crecía paralelamente el temor de que un vacío de poder en Alemania favoreciese la expansión soviética. Por otra parte, entre las potencias occidentales aumentaba la convicción de que la seguridad frente a Alemania no podía alcanzarse mediante la represión, sino sólo mediante la integración de los alemanes dentro de un sistema de seguridad colectivo. A ello se debió que todos los gobiernos aliados en sus encuentros durante la guerra formulasen claramente, en mayor o menor medida, planes para la división de Alemania en Estados fraccionarios autónomos —el más radical fue Roosevelt, mostrándose comparativamente retraído Stalin, interesado en definitiva solamente en el desplazamiento hacia el oeste de las fronteras polacas —pero sin precisarlo con exactitud, de manera que al finalizar la guerra los franceses serían los únicos en mantener tales planes después de haber ingresado en el último momento, por iniciativa de Churchill, en el círculo de las fuerzas ocupantes de Alemania.

En la European Advisory Commission (con sede en Londres desde enero de 1944), así como en las conferencias de los «tres grandes» de Yalta (febrero de 1945) y Potsdam (julio-agosto de 1945), los aliados prácticamente sólo pudieron entenderse, en consecuencia, en lo referente a algunas regulaciones consideradas provisionales: de los planes de división sólo se concretó la separación de los territorios germano-orientales en favor de Polonia y de la Unión Soviética; a consecuencia de la objeción británica a la separación de toda Silesia (hasta la línea Oder-Neisse), impuesta por el gobierno polaco a Stalin, el traspaso del poder gubernamental a Polonia y a la Unión Soviética se produjo, sin embargo, sin perjuicio de una regulación definitiva mediante un tratado de paz. Los restantes territorios del Reich (lógicamente sin los anexionados a partir de 1938) se dividieron en cuatro zonas de ocupación; la capital, Berlín, quedó sometida a la responsabilidad por separado de las cuatro potencias, si bien las cuatro potencias de ocupación estaban obligadas a responsabilizarse de forma compartida de la administración de Alemania a través de un Consejo de Control Aliado y a considerar al país, bajo el ré-

gimen de ocupación, como una unidad económica. La exigencia soviética de que se establecieran las reparaciones a satisfacer por Alemania como unidad en 20 000 millones de dólares (de ellos, la mitad para la Unión Soviética) halló una actitud complaciente en Roosevelt, pero con el endurecimiento de la postura americana frente a la Unión Soviética luego se impondría el principio del «autoservicio» de las potencias ocupantes en sus respectivas zonas; sólo el 10% de los productos industriales «innecesarios» de las zonas occidentales se pondrían, sin contrapartidas, a disposición de polacos y rusos. En el aspecto de la desnazificación y la democratización de Alemania se tomaron una serie de acuerdos fundamentales, si bien los puntos de vista pronto empezarían a diverger a la hora de ponerlos en práctica [11].

Para resolver la «cuestión alemana» sólo quedarían, con ello, dos posibilidades: mantener el Reich alemán en una forma que ofreciese suficientes garantías a las dos potencias mundiales de que Alemania no pasaría a formar parte por entero del potencial de la otra parte o, de no poder lograr tales garantías, integrar las zonas de ocupación en el respectivo hemisferio. Los «tres grandes» buscaron la solución al acabar la guerra, en un principio, en la primera alternativa, pero a partir del otoño de 1945 el proceso se desarrolló de hecho conforme a la segunda, debido a que el Gobierno francés bloqueó la realización del proyecto acordado en Potsdam de una unidad económica y administrativa con unos planes de división que se habían vuelto obsoletos. Por falta de una reglamentación colectiva, la desnazificación de la sociedad alemana en el Este y el Oeste iniciada por las potencias ocupantes tomó un rumbo diferente, de acuerdo con las distintas formas de entender la democracia, creciendo en Alemania la desconfianza respecto a intenciones tan cambiantes. Los planes para una reglamentación del conjunto de Alemania, como la oferta americana de un pacto de garantía de las cuatro potencias para la desmilitarización de Alemania o la propuesta británica de construir paulatinamente un gobierno provisional, fueron sin duda discutidos seriamente hasta la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de Moscú de marzo-abril de 1947, pero fracasaron una y otra vez a causa del enfrentamiento soviético-americano, concretado en el problema de la reparación. Desde mediados de 1946, el gobierno americano se mostró contrario a hacer las concesiones que hubieran sido necesarias para responder a las fuertes exigencias soviéticas, trabajando en su lugar por la reconstrucción económica y la organización estatal de las tres zonas occidentales de ocupación sin participación soviética, cada vez más convencido de que su interés a largo plazo por un mercado alemán potente

sólo sería realizable de esta manera y de que, de no ser así, toda Alemania estaría amenazada por la sovietización. El gobierno soviético persistió, por el contrario, en la alternativa global alemana que habría de impedir la «americanización» de Alemania occidental, pero al mismo tiempo prosiguió con el proceso de transformación de su zona de ocupación de tal manera que intimidó a sus aliados potenciales de las zonas occidentales [12].

En tales circunstancias, los planes de una «tercera fuerza» europea apenas avanzaron. La reconstrucción de una Internacional de los partidos socialistas de Europa oriental y occidental, potencial receptáculo de fuerzas dispuestas a la unificación, fracasó por el temor de los europeos orientales y del Partido Laborista británico a una limitación de su libertad de movimiento. Los intentos de fortalecer las relaciones entre los Estados de Europa occidental y oriental, como el proyecto de alianza franco-checoslovaca, no siguieron adelante. Las iniciativas para una asociación europea occidental bajo dirección franco-británica, debido a las dudas británicas y a la inmersión francesa en una política alemana no realista, sólo desembocaron en el tratado franco-británico de Dunkerque (4 de marzo de 1947), que no contenía ninguna cláusula sustancial de cooperación más allá del apoyo mutuo frente a una nueva agresión alemana. Por otra parte, tampoco tuvieron mucho éxito los esfuerzos por fundir a Europa occidental con los Estados Unidos en un bloque contra la expansión soviética. En marzo de 1946, Churchill habló públicamente de la existencia de un «telón de acero» entre el Este y el Oeste y de la necesidad de una solidaridad atlántica, invitando en septiembre del mismo año a franceses y alemanes a hacer esfuerzos de entendimiento para crear en Occidente «una especie de Estados Unidos de Europa» y chocando en ambas ocasiones con más rechazo que adhesión. Pero la configuración en bloques todavía no se había producido en Europa [13].

III. LA DIVISION DE EUROPA

El cambio de rumbo hacia una bipartición duradera del continente europeo se inició con el intento del gobierno americano, en la primavera de 1947, de intensificar su política de estabilización de Europa occidental incluyendo a Alemania occidental. Este intento era necesario desde la perspectiva americana, debido en primer lugar a que las ayudas concedidas en un principio a los países situados fuera del ámbito de influencia soviética, que ya en 1946 ascendían a 5 700 millones de dólares, se habían revelado

insuficientes, en segundo lugar al agravamiento de la crisis económica europea a consecuencia del duro invierno y de las dificultades en las comunicaciones, y en tercer lugar a la amenaza de una vuelta al proteccionismo de los países europeos; por otra parte, era también muy difícil debido a que, desde principios de año, el Congreso americano, con mayoría republicana, se había mostrado poco proclive a conceder nuevos créditos a Europa, y el gobierno francés se negaba, por su parte, a aprobar la rápida reconstrucción de la industria germano-occidental, indispensable para una recuperación duradera de la economía europea. La Administración Truman superó la oposición del Congreso exagerando premeditadamente la amenaza soviética (de cuya realidad estaba, por otra parte, plenamente convencida): en la «Doctrina Truman», presentada al Congreso el 12 de marzo de 1947 con motivo de la petición de ayuda financiera para Grecia y Turquía, el conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos aparecía por fin como una lucha global entre un régimen de «terror y represión» y la «libertad», que los Estados Unidos estaban llamados a defender en el mundo. George F. Kennan, responsable de la Dirección General de Planificación Política del Departamento de Estado, y el secretario de Estado americano George C. Marshall trataron de superar la oposición francesa sintetizando las ayudas proyectadas a los países europeos en un programa multilateral de reconstrucción que abriera al mismo tiempo el camino a la integración de los países implicados y, con ello, ofreciese a Francia una nueva forma de control del resurgimiento alemán. Para poder llevar a cabo este programa —conocido desde el momento de su presentación por el secretario de Estado el 5 de junio de 1947 por el nombre de Plan Marshall— en los países de Europa occidental, en donde las fuerzas comunistas y socialistas eran muy importantes, también lo ofrecieron (sin grandes esperanzas de hallar una respuesta positiva) a los países de Europa oriental, incluida la Unión Soviética; con ello, pese a no haber sido éste el interés principal de los iniciadores del plan, surgió una nueva oportunidad de dar marcha atrás en la incipiente división de Europa [14].

El anuncio del Plan Marshall hizo concebir además grandes esperanzas en Europa oriental y occidental en cuanto a la posibilidad de que la «tercera fuerza» se convirtiese en realidad, y los dirigentes soviéticos oscilaron durante un tiempo entre el temor a la formación de un bloque occidental en caso de una negativa al plan y el debilitamiento, o incluso la desaparición, de su hegemonía en el ámbito de Europa oriental en caso de participar. Pero la escasa comprensión mostrada por los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y Francia, Bevin y Bidault —temero-

sos, a su vez, de un torpedeo del plan por parte de la Unión Soviética—, hacia las ideas soviéticas acerca de la realización del programa de reconstrucción hizo que, el 30 de junio de 1947, Stalin optara por considerar que los inconvenientes de una renuncia eran menores que los peligros en caso de participación. Los gobiernos de Europa oriental, que habían manifestado, sin excepción, su interés en participar en el Plan Marshall y seguían decididos a hacerlo, exceptuando a Yugoslavia, incluso después de la negativa soviética, fueron obligados por los dirigentes soviéticos a retirar su adhesión; Finlandia decidió *motu proprio* la no participación para prevenir una posible intervención soviética. A lo largo del verano de 1947, entre los dirigentes soviéticos se fue imponiendo la convicción de que su estrategia de estabilización en Europa occidental había fracasado y de que el dinamismo del capitalismo americano amenazaba incluso con extenderse a la zona de seguridad soviética en Europa oriental. La única posibilidad —si todavía existía alguna— de limitar la hegemonía americana en Europa occidental era exhortar a los partidos comunistas occidentales a la ruptura con la política frentepopulista y al sabotaje del Plan Marshall, mientras que la pervivencia de la zona de seguridad de Europa oriental sólo se podía asegurar mediante una aproximación mayor de los regímenes de estos países al modelo soviético y el aumento del control por parte de Moscú. A finales de septiembre, en una conferencia celebrada en la ciudad silesia de Schreiberhau (Sklarska Poręba), los dirigentes de los partidos comunistas más importantes fueron puestos al corriente del cambio de rumbo de la política soviética, comprometiéndose a colaborar con una Oficina Comunista de Información (Kominform); el jefe de la delegación soviética Zdánov definió el conflicto Este-Oeste, de forma análoga a la Doctrina Truman, como un enfrentamiento global conducente a la victoria o a la derrota entre el «bando imperialista y antidemocrático» bajo la dirección de los Estados Unidos, por un lado, y las «fuerzas antiimperialistas y antifascistas» dirigidas por la Unión Soviética, por otro [15].

En los países de Europa oriental, la presión de Moscú y la crisis general de la reconstrucción, unidas a la supresión de la ayuda americana, hicieron desaparecer los espacios que aún quedaban libres hasta ese momento en las filas políticas autónomas. En Checoslovaquia, la dramática prueba de fuerza entre el Partido Comunista y sus compañeros demócratas de coalición desembocó en el establecimiento de un gobierno absolutamente fiel a Moscú (29 de febrero de 1948) y en la privación total de poder a los no comunistas [16]. De igual manera, en los restantes países de Europa oriental, los grupos organizados de oposición aún existentes fueron

suprimidos, los partidos socialdemócratas fundidos con los comunistas tras intensas purgas, todas las organizaciones obreras sometidas al control comunista, y los cuadros del Partido Comunista purgados paulatinamente de aquellas fuerzas consideradas sospechosas de no haber seguido en todo momento una conducta absolutamente leal a Stalin, es decir de dirigentes «revolucionarios» más atentos al dogma leninista que a los intereses de la Unión Soviética, así como de «desviacionistas» que defendían el derecho de sus respectivos países a seguir una «vía propia al socialismo». La transformación social siguió estrictamente el modelo soviético y, en vez de alianzas pragmáticas con grupos parcialmente dispuestos a la reforma, surgió el terror del Estado policial de una minoría. Conforme al ejemplo soviético, en todos los países se dio prioridad a la construcción de la industria pesada, se introdujeron métodos de planificación centralista y se impulsó, pese a una fuerte resistencia, la colectivización de la tierra; la producción económica pasó a depender cada vez más de las necesidades particulares de la reconstrucción soviética y los vínculos con los mercados occidentales fueron violentamente reducidos. El «imperio informal» de la Unión Soviética en Europa oriental se convirtió en un *bloque* soviético cerrado [17].

Sólo los comunistas yugoslavos fueron capaces de oponerse a este desarrollo, pues a pesar de considerarse fieles aliados del PCUS no estaban dispuestos en modo alguno a sacrificar los intereses vitales de su país a los imperativos soviéticos y, al no depender del apoyo del ejército soviético, debido a su amplia base popular, pudieron reafirmarse frente a las injerencias de Moscú. Al negarse Tito a subordinar unilateralmente la economía yugoslava a las necesidades soviéticas y a renunciar a sus propias iniciativas respecto a la creación de una feedración de países europeos sudorientales, Stalin trató de derrocarlo en la primavera de 1948. Pero ni la retirada de asesores soviéticos (18 de marzo), la exclusión del Kominform (28 de junio), la imposición de un bloqueo económico o el llamamiento para derrocar a la «banda fascista de Tito», se vieron coronados por el éxito. El pequeño grupo de agentes potenciales de Moscú dentro de la dirección del partido yugoslavo fue despojado rápidamente de poder y, por otra parte, los créditos occidentales y la ayuda militar americana sirvieron para resistir la presión soviética, que habría de prolongarse hasta la muerte de Stalin en marzo de 1953. De esta manera se mantuvo fuera del bloque oriental dominado por la Unión Soviética justamente el país de Europa oriental cuyo desarrollo político se hallaba más alejado de la concepción revolucionaria del comunismo tradicional [18].

En Europa occidental, las direcciones de los partidos comunistas, tras la crítica realizada a la política de estabilización seguida hasta entonces por la conferencia fundacional del Kominform, dieron rienda suelta al descontento social de sus seguidores, acumulado desde el fin de la guerra, y así en Francia y en Italia se produjeron en el invierno de 1947-48 movimientos huelguísticos masivos que, en ocasiones, habrían de revestir el carácter de sublevación general. Desde el punto de vista de la lucha obrera —y como tal la consideraba la gran masa de trabajadores participantes—, la ola de huelgas fue un completo fracaso; ahora bien, como intento de los dirigentes comunistas de hacerse de nuevo con sus bases, sería en cambio un completo éxito. La imposición de los objetivos americanos en Europa occidental no se vio obstaculizada por ello, sino antes bien propiciada: la gran mayoría de los europeos occidentales, que hasta entonces siempre habían rechazado el temor de los americanos a la expansión de la influencia soviética en Europa occidental por considerarlo injustificado, ante el espectáculo de las huelgas y la ofensiva ideológica comunista paralela a ellas llegaron a persuadirse de que los partidos comunistas occidentales ponían todo su empeño en destruir el orden establecido y de que los dirigentes soviéticos trataban de extender su control a todo el continente. Ahora ya no parecía posible la vuelta de los comunistas a las tareas de gobierno, tal como había sido el deseo, hasta ese momento, de socialistas y democratacristianos progresistas en interés de una «tercera fuerza» en política exterior y de una mayoría reformista en política interior; los comunistas se vieron desterrados al gueto de su «contracultura», el peso político se desplazó claramente hacia la derecha y la reconstrucción bajo el signo del Plan Marshall se llevó a cabo sobre la base de un amplio consenso anticomunista [19].

Entre 1947 y 1948, la guerra fría se convirtió, pues, en una realidad de la política interior de los Estados de Europa occidental. En Francia, los socialistas se vieron obligados a asumir el papel de ala izquierda de una coalición con democratacristianos y conservadores cada vez más alejada de los principios reformistas de los primeros gobiernos de posguerra surgidos de la Resistencia. En Italia, los democratacristianos vencieron claramente en abril de 1948 (con apoyo masivo americano) a la coalición de comunistas y socialistas de izquierda; el aislamiento de los comunistas posibilitó el predominio prolongado e indiscutible de los democratacristianos. En Alemania occidental, los socialdemócratas se vieron privados del respaldo del gran número de seguidores del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) y los socialistas cristianos perdieron su posición clave dentro de la Unión Cristianodemó-

crata (CDU). El nuevo consenso anticomunista y el temor creciente a la amenaza soviética ayudaron en general a las élites tradicionales burguesas, desacreditadas por la colaboración con los nacionalsocialistas o por su derrota ante la expansión nacionalsocialista, a rehabilitarse y asumir de nuevo posiciones decisorias en el poder. En Gran Bretaña, el Partido Laborista en el gobierno cayó bajo la presión creciente de los conservadores; al no estar, por otra parte, interesado en una unión demasiado estrecha con el continente, se vería confirmado en su aislacionismo por el creciente desarrollo conservador de los países continentales; sin el apoyo de los socialistas británicos, el movimiento de unificación europea, determinado originariamente por la esperanza en una «tercera fuerza» socialista, se colocaría ahora bajo el signo de una mayoría conservadora.

Esta tendencia a la «restauración» del orden tradicional se afianzó decisivamente con el llamamiento americano a una rápida reconstrucción e integración de las economías europeas. Aun no siendo, en principio, en modo alguno hostil a las ideas de reforma socialdemocráticas, la Administración Truman, ante la situación de emergencia económica y, en su opinión, también política existente en Europa occidental, no creía poder permitirse ya ninguna clase de experimentos, organizando en consecuencia la reconstrucción preconizada por el Plan Marshall conforme al eficaz modelo liberal propio. La reconstrucción de la industria pesada de Alemania occidental no sería ya frenada por más tiempo por razones de seguridad, de modo que la economía alemana pronto pudo recuperar su papel rector tradicional en el continente. La socialización de la industria del Ruhr, objeto de las reivindicaciones reformistas desde los democratacristianos alemanes hasta los socialistas franceses, bajo la fuerte presión americana (en este caso, frente a la potencia de ocupación británica) se pospuso en el otoño de 1947 hasta el momento en que se estableciera en Alemania occidental un gobierno resultante de unas elecciones generales, con lo que de hecho se hizo imposible. Las autoridades americanas de ocupación colaboraron estrechamente con las fuerzas liberales tradicionales en la preparación de la reforma monetaria en Alemania occidental; con un trato de favor para los propietarios de valores y sin una nivelación de cargas simultánea, quedó abierto el camino hacia un orden económico determinado por la economía de mercado que, en el fondo, dejaba inalteradas las relaciones de propiedad existentes. Las ayudas financieras americanas del Plan Marshall debían ser renovadas cada año por el Congreso y su empleo se hallaba sometido al control final de la Economic Cooperation Administration (ECA) americana; con ello se excluía prácticamente la posi-

bilidad de una planificación económica a largo plazo por parte de los países integrados en el plan, en tanto que los americanos disponían de ciertas posibilidades de influir en la política de inversiones de cada país, cosa que era utilizada de acuerdo con sus ideas de un orden liberal[20].

El hecho de que los europeos occidentales no lograsen reafirmar su autonomía en mayor medida a la hora de llevar a la práctica el Plan Marshall fue sin duda imputable en buena parte a ellos mismos: el gobierno Truman, menos interesado en una dependencia estructural duradera de los países europeos con respecto a los Estados Unidos que en la recuperación de unos socios comerciales potentes y autónomos, había dejado expresamente la iniciativa en cuanto a la formulación del programa de ayuda en manos de los países participantes en el verano de 1947; sólo cuando los europeos no consiguieron ponerse de acuerdo sobre un programa integrado de reconstrucción y hubo fracasado incluso el proyecto de una unión aduanera europea como primer paso hacia la integración de los países participantes, comenzó a imponer sus puntos de vista en cuanto a la forma óptima de un programa de reconstrucción. Cierto es que el gobierno francés, tras una corrección de su rumbo en política exterior por los socialistas en 1947-48, intentó de nuevo lograr el acuerdo de los países del Plan Marshall en interés de la autodeterminación europea y, en la medida de lo posible, impulsar una función mediadora en el conflicto Este-Oeste, pero el gobierno laborista británico vaciló ante una posible vinculación definitiva con el continente. La mayoría de los europeos continentales, sobre todo la izquierda europea y los países del Benelux, no querían iniciar la unificación de Europa sin la participación británica; en consecuencia, la política de unificación quedó estancada en sus comienzos pese al considerable auge del movimiento unificador europeo entre 1947 y 1949. La fundación del Consejo de Europa en mayo de 1949 —desde el punto de vista de los europeos continentales, un primer paso, tras difíciles negociaciones, hacia la creación de una Europa federada— significó en realidad un retraso más con respecto a una política concreta de unificación: los británicos se opusieron a todos los esfuerzos por atribuir al Consejo tareas comunitarias, condenándolo así a la inoperancia. En mayo de 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, se decidió por fin a iniciar el mancomunamiento sin participación británica, proponiendo la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) con competencias supranacionales. La Europa de los Seis (Francia, Italia, Benelux y la República Federal Alemana), nacida de la CECA sin Gran Bretaña, ofrecía final e indudablemente un marco para

la reafirmación de la autonomía europea, pero no sería eficaz sino tiempo después de que se hubieran tomado las decisiones fundamentales de orden político en materia de reconstrucción, por lo que, a consecuencia de los desplazamientos de fuerzas políticas que se habían producido entre tanto, ella misma entraría en el camino del capitalismo liberal trazado por los Estados Unidos [21].

En tanto que la unificación europea quedaba estancada y la idea de una «tercera fuerza» fracasaba de hecho, la formación de un bloque occidental progresó rápidamente. Bevin, sumamente inquietado por la perspectiva de un posible avance de la Unión Soviética hacia Europa occidental, instó a su colega americano Marshall, ya en diciembre de 1947, a la creación de un «sistema democrático occidental que comprenda a los americanos, a nosotros mismos, a Francia, Italia, etc., y naturalmente a los dominios» y que garantizase la protección militar americana sobre todo a los europeos [22]; como anticipo ofrecía a los Estados Unidos un pacto colectivo de defensa entre Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (Tratado de Bruselas del 17 de marzo de 1948). Tras el violento final de la democracia checoslovaca en febrero de 1948, que convirtió en algo obsesivo para muchos europeos occidentales el temor a una posible agresión militar, esta política tuvo un gran eco en Europa occidental, y también en los Estados Unidos, cuyo gobierno se había mostrado en un principio reservado ante la idea de un pacto militar, ya que no consideraba que Europa se hallase amenazada militarmente, pero que ahora se comprometería a apoyar el Tratado de Bruselas. Los puntos de vista acerca de la forma y la amplitud de las garantías de seguridad americanas para Europa occidental eran, sin embargo, muy diferentes [23].

El proceso de formación del bloque occidental se vio acelerado por los intentos casi desesperados de los dirigentes soviéticos por impedir la constitución del Estado de Alemania occidental —consecuencia lógica de la inclusión de las tres zonas occidentales en el programa de reconstrucción de Europa occidental— en el último momento. Después de que los representantes de los Estados Unidos y de los países del Tratado de Bruselas se pusieron de acuerdo en Londres, a principios de junio de 1948, sobre la forma de la nueva organización estatal de Alemania occidental, Stalin tomó como pretexto la reforma monetaria realizada en los sectores occidentales de Berlín para bloquear las comunicaciones terrestres entre Berlín y las zonas occidentales (a partir del 24 de junio): sólo así le pareció posible detener la puesta en práctica de los acuerdos de Londres y poner de nuevo en marcha las conversaciones sobre una solución global para Alemania. El Departamento

de Estado americano estudiaría de hecho seriamente ahora, por un momento, el plan de una retirada total de las tropas de las cuatro zonas de ocupación con la esperanza de escapar de esta manera a la catástrofe que amenazaba a la política americana en Alemania. Pero cuando a finales de agosto se puso de manifiesto que el abastecimiento de la población de Berín Oeste se podía asegurar a través de un puente aéreo y que el gobierno francés se sentía

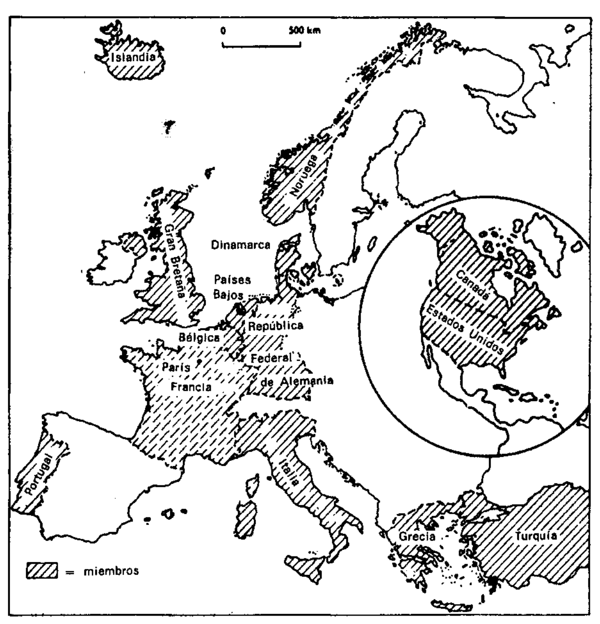


FIG. 1.—*Miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte/OTAN.*
El 12 de febrero de 1952 ingresaron Grecia y Turquía; el 5 de mayo de 1955, la RFA; Francia retiró el 1 de julio de 1966 a sus representantes de los mandos de la OTAN y el 7 de septiembre de 1966 interrumpió sus pagos a la OTAN.

más atemorizado ante una solución global para Alemania que ante la fundación del Estado de Alemania occidental, aun cuando se siguiera considerando no deseable, Marshall y Truman no sólo resolvieron proseguir, sino que incluso retardaron la interrupción del bolqueo mediante una falta de atención premeditada a las

ofertas soviéticas de negociación, dado que la crisis, que ahora ya no resultaba peligrosa para la seguridad de los berlineses occidentales pero que ponía sin embargo diariamente de manifiesto la agresividad soviética, reveló ser un medio estupendo para superar las resistencias que aún existían contra la formación del bloque occidental: vacilaciones de los alemanes occidentales a la hora de aceptar la fundación de un Estado que profundizaba claramente el foso que les separaba de los alemanes de la zona soviética, dudas de los franceses ante el restablecimiento de un vecino alemán poderoso y oposición del Congreso americano a un compromiso militar costoso y a la larga obligatorio de los Estados Unidos en Europa. El 4 de abril de 1949, representantes de los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Benelux, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Portugal firmaron en Washington el Tratado de defensa del Atlántico Norte; el 8 de mayo, el Consejo Parlamentario de los territorios de Alemania occidental promulgó las Leyes Fundamentales de la República Federal Alemana.

Después de que el bloqueo de Berlín provocara el efecto contrario y de que las vagas esperanzas de movilizar el sentimiento nacional alemán contra la fundación del Estado de Alemania occidental quedaran frustradas, a los dirigentes soviéticos no les quedó otro remedio que aceptar la fundación de la República Federal, teniendo que permitir ahora también la fundación definitiva de otro Estado en la zona de ocupación soviética que, aunque ya preparado por el desarrollo especial del sistema social en la zona soviética, se había ido postergando hasta entonces en favor de una solución global para Alemania. En mayo de 1949 se levantó tácitamente el bloqueo; en los territorios de la zona de ocupación soviética se eligió un Congreso del Pueblo Alemán en base a una lista unitaria controlada por el Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) y éste aceptó la constitución —concebida ya en 1948 bajo un signo propagandístico referido al conjunto de Alemania— de una República Democrática Alemana, haciéndola entrar en vigor el 7 de octubre de 1949, después de haber esperado la formación del primer gobierno federal en Alemania occidental [24].

Con ello, a mediados de 1949 se formarían, en lugar del sistema de equilibrio europeo destruido, dos bloques de poder contrapuestos, dominados por las dos nuevas potencias mundiales, que dividían a Europa en un hemisferio oriental y otro occidental. Así se llenaba el vacío de poder en Europa provocado por la caída del Tercer Reich, las esferas de influencia de las potencias

mundiales quedaban claramente delimitadas y se aseguraba la realización de sus intereses fundamentales. La única cuestión pendiente era la de si el enfrentamiento que había dado lugar a esta división persistiría y, de ser así, por cuánto tiempo, qué proporciones adquirirían los compromisos americano y soviético en Europa y, en consecuencia, hasta qué punto sería duradera esta división.

IV. LA RATIFICACION DE LA FORMACION DE LOS BLOQUES

Entre el otoño de 1949 y la primavera de 1952 se tuvo en principio la impresión de que la «potencia occidental» habría de alcanzar un grado elevadísimo de unidad y militancia. La visión global de un movimiento comunista soviético monolítico y expansivo, evocada inicialmente por la administración Truman con la sola intención de imponer su programa de contención, en adelante habría de determinar de manera creciente la praxis política occidental: en parte porque los gobiernos occidentales se vieron sometidos a la presión de un movimiento anticomunista cada vez más fuerte y en parte porque las diferencias de un principio dentro de estos gobiernos quedaron neutralizadas por el pensamiento militar. Bajo la impresión de la primera explosión atómica soviética en agosto de 1949, el gobierno americano se esforzó por hacer de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que hasta entonces había sido considerado más bien como una garantía de protección psicológica, un ejército sustancial de defensa, logrando primeramente sólo un éxito moderado, pero más efectivo desde el momento en que el ataque norcoreano a Corea del Sur el 25 de junio de 1950 volvió a acrecentar de forma decisiva el temor de todos los países occidentales a una posible expansión soviética. Los gastos americanos para la defensa se incrementaron considerablemente (sólo de 1950 a 1951, de 13 000 a 22 300 millones de dólares), se formó una organización defensiva del Tratado del Atlántico Norte en Europa (ejército europeo de la OTAN) y se acordó el establecimiento de un ejército en Alemania occidental, al menos como principio, en el marco de la alianza occidental.

Ahora bien, hasta que este último acuerdo pudiese llevarse realmente a efecto habría de superarse aún una resistencia muy fuerte, tanto entre los propios alemanes occidentales como entre los aliados europeos, sobre todo en Francia, pues a los cinco años de finalizar la guerra el temor a un resurgimiento del militarismo alemán todavía era en general demasiado grande, al igual que la preocupación ante la idea de cimentar con tal medida la

división de Europa y de Alemania a perpetuidad. Para aplacar al gran número de adversarios del «rearme» alemán, existente incluso dentro de las filas de la coalición gubernamental, y retrasar de momento el inicio concreto del establecimiento de tropas alemanas, el gobierno francés lanzó en otoño de 1950 el proyecto de una Comunidad Europea de Defensa (CED) supranacional dentro de la cual se vetase, por supuesto, a los alemanes occidentales todo tipo de acceso a las fuerzas de mando (Plan Pleven del 24 de octubre de 1950). Lógicamente, los alemanes rechazaron este plan de forma casi unánime pues, en la medida en que estaban dispuestos a contribuir siquiera a la defensa (actitud que en un primer momento no pareció ser, en modo alguno, mayoritaria), deseaban que esta contribución fuese ligada a una recuperación de la igualdad de derechos de Alemania dentro de la comunidad de Estados internacional, para lo cual tratarían de aprovechar la circunstancia de que los aliados occidentales dependían de las tropas alemanas en mayor medida que la propia República Federal, protegida en principio por la presencia de los ejércitos aliados. Para lograr un acuerdo fue necesario casi año y medio de duras negociaciones; con el «acuerdo general» para la disolución del Estatuto de Ocupación de la República Federal y el tratado para la fundación de una Comunidad Europea de Defensa de Francia, la República Federal, los Estados del Benelux e Italia (firmado el 26 y 27 de mayo de 1952) se concedió a los franceses la solución supranacional y a los alemanes, con escasas limitaciones, la igualdad de derechos; con ello se consideró superado el conflicto franco-alemán que había obstaculizado hasta ese momento el afianzamiento de la alianza occidental[25].

Entre tanto, los dirigentes soviéticos trataron de impedir el desarrollo de un bloque militar en la frontera occidental de su imperio que exportaba todo el potencial de Alemania occidental, presentando a este país la perspectiva de su reunificación en unas condiciones mucho más favorables que hasta entonces y haciendo hincapié, por lo demás, en su actitud cooperadora y su predisposición a la distensión. El 10 de marzo de 1952, en una nota a las tres potencias occidentales de ocupación, proponían la elaboración de un tratado de paz con Alemania con la participación de un «gobierno del conjunto de Alemania que exprese la voluntad del pueblo alemán», estipulando al mismo tiempo, como disposiciones básicas de tal acuerdo, la retirada de todas las tropas de ocupación, el compromiso duradero de Alemania a permanecer neutral, la renuncia a los territorios situados al otro lado del Oder y el Neisse y, respecto al orden

interno, la observación de los acuerdos de democratización de Potsdam; en una segunda nota del 9 de abril manifestaban además su buena disposición a admitir la celebración de elecciones libres en toda Alemania en el plazo más breve de tiempo, aunque, por supuesto, no bajo el control de las Naciones Unidas, como habían exigido las potencias occidentales, sino bajo la responsabilidad de las cuatro potencias vencedoras. Era evidente la disposición que ahora existía en Moscú a renunciar al monopolio político del SED en la RDA, siempre y cuando quedase garantizado que una Alemania neutral no podría pasarse tampoco completamente al lado occidental; pero al menos se había decidido averiguar cuál era la postura occidental de cara a una negociación en esta cuestión[26]. Tras la muerte de Stalin, el 5 de marzo de 1953, que todavía aumentó más las dificultades del Estado soviético, y en consecuencia la necesidad de lograr un equilibrio con las potencias occidentales, la nueva *troika* rectora de Malenkov-Beria-Jruschov comenzó incluso a plantearse la evolución de la RDA hacia una posible reunificación; los intentos por parte de la dirección del SED, encabezada por Walter Ulbricht, de prevenir un posible recorte de poder mediante la aceleración del proceso de transformación «socialista» se vieron obstaculizados. La política antioccidental fue reemplazada por la proclamación de la «coexistencia pacífica» entre el Este y el Oeste.

El cambio de rumbo de la política soviética no dio los frutos apetecidos en cuanto a sus objetivos de desligar a la República Federal de la alianza occidental. La oferta soviética de neutralización hizo nacer, sin duda, vagas esperanzas en Francia y Gran Bretaña respecto a la eliminación del enfrentamiento Este-Oeste en Europa central y, con ello, respecto a la obstaculización del problemático rearme de Alemania occidental en el último momento, hasta el punto de que ambos gobiernos, sometidos a una fuerte presión política interior, en el verano de 1952 llegarían a considerar temporalmente la posibilidad de un examen serio de las notas. Ahora bien, a sus iniciativas les faltó el estímulo necesario en la medida en que la gran mayoría de los franceses veía, por otra parte, en una Alemania unida y provista de un ejército nacional un riesgo mayor para su seguridad que el existente con las tensiones Este-Oeste en Europa y con las fuerzas armadas de Alemania occidental integradas en la CED, en la que los británicos, por su parte, no querían comprometerse de nuevo (como en la época de entreguerras) para proteger a Francia de una Alemania potencialmente fuerte, y en la que ambos estaban básicamente convencidos de la necesidad de un

fortalecimiento militar de Occidente frente a la Unión Soviética. El gobierno americano no pudo extraer nada positivo de la oferta soviética, después de haberse decidido ya en 1948, en una situación incomparablemente más desfavorable, en contra de la solución de la cuestión alemana en la forma propuesta por los soviéticos y de haber disminuido entre tanto considerablemente su capacidad de análisis racional de los motivos soviéticos. Por último, y principalmente, entre los dirigentes políticos de la República Federal, no había prácticamente ninguno dispuesto a arriesgar las prioridades de orden económico, social y constitucional de Alemania occidental, establecidas a lo largo de los años desde el fin de la guerra, en favor de unos nuevos principios para el conjunto de Alemania, de resultado incierto: ni el canciller federal Konrad Adenauer, para quien la neutralización aparecía como una imposibilidad desde el punto de vista de la política exterior y una catástrofe desde el de la política interior (por el resurgimiento de las fuerzas nacionalistas), ni la oposición «nacional» que, con su insistencia en el mantenimiento de las fronteras del Reich de 1937 y en la eliminación de toda posibilidad de control por parte soviética, establecía unas exigencias máximas imposibles de conceder por parte de los dirigentes soviéticos. La respuesta oficial occidental se limitó, pues, a contraponer a la iniciativa soviética la exigencia de la autodeterminación incondicional de todos los alemanes, lo que, dado el estado de cosas existente, había de conducir a la integración del conjunto de Alemania en el bando occidental; las negociaciones en torno a la CED siguieron su curso sin interrupciones. Con ello, la disposición soviética a frenar el poder del SED tuvo incluso consecuencias negativas para el Estado soviético: las esperanzas concebidas con el anuncio del nuevo rumbo y el descontento acumulado entre la población de la RDA se desataron en un amplio movimiento insurreccional contra el poder de Ulbricht, alcanzándose así, desde la perspectiva soviética, el punto a partir del cual los claros inconvenientes de la política de neutralización con respecto al conjunto de Alemania pesaron más que las ventajas inicialmente esperadas, las cuales, debido a la inflexibilidad occidental, habían resultado ilusorias. La dirección soviética no sólo tomó la decisión de sofocar la insurrección con sus tanques, sino también (tras algunas vacilaciones) la de restablecer con firmeza el poder de Ulbricht; Beria, principal representante de la tendencia a la distensión, fue destituido y ejecutado en diciembre de 1953. La política de reunificación quedaría supeditada en adelante a la estabilización del régimen del SED, pues, aun cuando se mantuviese la invitación a elaborar unas

normas para el conjunto de Alemania, su realización pasó a depender del reconocimiento previo del régimen del SED por las potencias occidentales, a lo cual se mostraban naturalmente todavía menos dispuestas que al procedimiento rechazado ya anteriormente. Cierto es que no se abandonaron por completo las esperanzas de un arreglo para el conjunto de Alemania (aún no se había tomado una decisión definitiva entre los que abogaban por la consolidación de la RDA y los defensores de una política alemana más flexible dentro de la dirección soviética), pero la política soviética de reunificación se fue limitando cada vez más a funciones meramente propagandísticas.

Por otra parte, la ofensiva soviética de distensión logró sin embargo impedir una mayor concentración de las fuerzas occidentales, e incluso relajar un tanto el bloque occidental. En tanto que el nuevo secretario de Estado americano (desde enero de 1953) John Foster Dulles y, en íntimo acuerdo con él, Konrad Adenauer, rechazaban las iniciativas soviéticas de distensión por considerarlas una simple maniobra táctica para la preparación del próximo paso expansionista, Winston Churchill, que desde noviembre de 1951 era de nuevo primer ministro británico, y con él una gran parte de la opinión pública británica, las interpretaron como una señal por parte de la dirección soviética de su disposición efectiva a negociar. De ahí que el *premier* se aplicase a comprobar las ofertas soviéticas, claramente interesado en recuperar autonomía frente a los Estados Unidos a través de un papel de mediador. En Francia, la disminución del temor a la expansión soviética dio lugar a que de nuevo se percibiera con mayor intensidad el peligro del dominio alemán dentro de la comunidad europea y a que las viejas esperanzas en una «tercera fuerza» cobraran un nuevo impulso. Dentro incluso de la propia República Federal, cuya población había ratificado por sorprendente mayoría el proyecto de integración occidental de Adenauer en las elecciones legislativas de septiembre de 1953, los detractores de la CED concibieron con las iniciativas soviéticas vagas esperanzas en cuanto a un orden de seguridad colectiva para toda Europa; la argumentación de la oposición se radicalizó de día en día. El gobierno americano trató ciertamente de imponer a los europeos una línea común mediante intensas presiones diplomáticas y de responder al peligro soviético —supuestamente acrecentado— con un lenguaje agresivo (recurso al *roll back* occidental en lugar de la simple «limitación» de la expansión soviética) y con la amenaza de una «represalia (atómica) masiva», pero con ello no hizo sino agrandar aún más las distancias entre los Estados Unidos y Europa occidental[27].

El creciente descontento de los europeos occidentales por las pretensiones hegemónicas americanas se vio reforzado aún más por el hecho de que, de forma simultánea a la ofensiva soviética de distensión, también empezaron a hacerse visibles los éxitos de la reconstrucción económica de los Estados europeos. Las condiciones iniciales para una rápida reconstrucción, en modo alguno desfavorables, y el apoyo adicional de las ayudas logradas a través del Plan Marshall (entre 1948 y 1952, un total de 13.000 millones de dólares, menos de la mitad de la suma considerada en principio necesaria por los gobiernos europeos), no sólo situaron muy pronto a las economías europeas en el nivel de preguerra, sino que incluso hicieron que lo superasen de una forma desproporcionada. En 1951, la producción industrial en Gran Bretaña se situaba en un 31% por encima de la de 1947; en Noruega y Bélgica, en un 33%; en Dinamarca, en un 35%; en Francia, en un 39%; en Italia, en un 54%; en los Países Bajos, en un 56%; y en Alemania occidental, en donde el descenso de la producción había sido especialmente fuerte a consecuencia de la destrucción provocada por la guerra, incluso en un 312%. El déficit de reservas en dólares, que todavía en 1949 constituía un serio obstáculo para el éxito de la reconstrucción, se redujo rápidamente; a partir de 1950, la balanza de producción y servicios de algunos países empezó ya incluso a arrojar de nuevo excedentes y, en los demás, a partir de 1951-52, a estar al menos equilibrada. Favorecida por la mayor demanda de productos de la industria pesada, como consecuencia de la guerra de Corea, y por la estabilización del comercio exterior bajo la dirección americana, Europa experimentó una coyuntura favorable, desconocida desde el *boom* de la superindustrialización de los años anteriores a la primera guerra mundial: entre 1949 y 1954, el producto social bruto real anual creció en Gran Bretaña un promedio del 2,7% (frente al 1,6% de media de los años 1913-1956); en Bélgica y Dinamarca, un 3,7% (frente al 1,6 y 2,2 respectivamente); en Noruega, un 4,2% (frente al 3,0%); en Francia, un 4,8% (frente al 1,3%); en los Países Bajos, un 4,9% (frente al 2,6); en Italia, un 6,4% (frente al 1,9) y en la República Federal un 8,4% (frente al 2,1)[28].

Tal florecimiento económico sin precedentes reafirmó a un número creciente de europeos en la creencia de que sus naciones podrían volver a recuperar un papel tan autónomo dentro de la política mundial como el que habían tenido en la época anterior a la guerra; ello, unido al hecho de que la integración europea con la CED se había producido de una forma que favorecía clara y casi exclusivamente a la consolidación del bloque

occidental bajo dirección americana, hizo que el renacido afán de independencia no se manifestase como una voluntad de autoafirmación europea, sino de índole nacional y contraria al establecimiento de vínculos europeos, destruyendo incluso con ello las condiciones necesarias para su realización. El país en donde este proceso se dio con más intensidad fue Francia, que era el que a mayor número de objetivos iniciales había tenido que renunciar con la construcción del bloque occidental, el que a consecuencia de su implicación en las luchas coloniales por la independencia de Indochina y del Magreb se encontraba más sometido a la presión americana que los restantes países europeos y el que más desventajas había de temer de un «milagro económico» en Alemania occidental claramente desproporcionado para su propia posición dentro de una comunidad europea integrada. Por ello, a lo largo de los años 1953 y 1954 aquí se iría formando un movimiento amplio y apasionado contra la supuesta «americanización» o «germanización» de Francia con la ayuda de la CED. En un principio, los gobiernos Mayer y Mendès-France trataron en vano de salvar el tratado mediante una serie de modificaciones tendentes a una nueva discriminación de la República Federal y, por lo mismo, inaceptables para los otros firmantes; posteriormente, Mendès-France abandonó el tratado a su destino parlamentario: el 30 de agosto de 1954 los diputados de la Asamblea Nacional francesa, por 319 votos frente a 264, se negaron a entrar siquiera en el debate sobre el tratado de la CED, fracasando así la comunidad de defensa y, con ella, todas las esperanzas respecto a una comunidad política europea de carácter supranacional, como ya se había discutido oficialmente en el contexto del proyecto de la CED [29].

El fracaso de la CED no significó en modo alguno, como muchos de sus partidarios habían temido hasta el último momento, el comienzo de la disolución de la alianza occidental. Antes bien, fue precisamente la grave crisis de las relaciones interoccidentales provocada por la decisión de la Asamblea Nacional francesa la que hizo ver a todos los interesados que existía un cierto número de intereses «occidentales» comunes contra los que nadie podía atentar, por lo que muy pronto llegaron a un acuerdo para reemplazar la solución propuesta por la CED para el rearme alemán: mediante los Acuerdos de París del 23 de octubre de 1954 se convino la ampliación del Tratado de Bruselas a la República Federal y a Italia; la Unión Europea Occidental (UEO) así constituida debería en adelante garantizar en la medida de lo posible, al no existir competencias supranacionales, la imposibilidad de un resurgimiento del militarismo alemán. La Repú-

blica Federal se convirtió en miembro directo y —salvo algunas limitaciones voluntarias en cuestiones de armamento— de pleno derecho de la OTAN, obteniendo también por otra parte, con la supresión del marco supranacional, un grado mayor de soberanía que el previsto en los tratados de 1952. Las disposiciones acordadas en París entraron en vigor, tras su ratificación por todos los países signatarios, el 5 de mayo de 1955; tan sólo la europeización del Sarre, concedida por Adenauer para asegurar al acuerdo una mayoría parlamentaria en Francia, fracasó por el voto negativo de la población de la región; a consecuencia de ello, Francia aceptó la integración del Sarre en la República Federal a cambio de compensaciones económicas.

Dentro de la dirección soviética, que hasta entonces había dejado abierta, al menos de cara al exterior, la alternativa de una solución alemana global, acabarían ahora por imponerse definitivamente los que abogaban por la estabilización del poder político del SED. En enero de 1955 se dio por finalizado el estado de guerra entre la Unión Soviética y Alemania, la propaganda relativa a la solución alemana global cesó y, a partir de ese momento se fomentó la integración de la RDA en el bloque oriental. Al mismo tiempo se reorganizaron las relaciones políticas de los países del bloque oriental con Moscú; se volvió a conceder a la dirección comunista de cada país un mayor grado de autonomía en lo relativo a los métodos para asegurar el poder y a la «vía hacia el socialismo», pero por otra parte se institucionalizó la formación del bloque mediante la creación del Pacto de Varsovia (14 de mayo de 1955) como respuesta al Pacto Atlántico. Una función esencial de la nueva organización era asegurar también en adelante el rearme de la RDA de forma institucional, convirtiendo a este país en miembro fundador de pleno derecho; cuatro meses después firmaría un acuerdo con la Unión Soviética por el que era declarado Estado soberano, a menos únicamente que las cuatro potencias dieran su acuerdo a «Alemania como totalidad». La distensión en la cuestión alemana sólo sería posible en el futuro sobre la base del reconocimiento internacional de la autoridad del SED [30].

Con ello se podía dar por concluida la formación de los bloques en Europa. Ambas partes habían ratificado por fin de forma plenamente consciente, y convirtiéndola por tanto en una realidad duradera, la decisión de dividir el continente, que en un principio no había sido sino el resultado de falsas estimaciones recíprocas y de una escalada involuntaria del conflicto. Ambas partes se habían asegurado su ámbito de influencia, aunque dejando claro al mismo tiempo su deseo (o imposibilidad)

de no interferir en el ámbito de seguridad de la otra parte. Con ello se lograba un equilibrio relativo, a partir del cual se podían neutralizar paulatina y paralelamente los potenciales contrarios que, a la vez, suponían también la constante amenaza de una escalada. Ambas partes habían perdido con ello militancia y unidad y, no obstante (o mejor, justamente por ello) habían consolidado su estructura interna: en el bloque oriental había surgido un equilibrio precario entre el control soviético y la autonomía, y ambas cosas, cuando iban demasiado lejos, cuestionaban las aspiraciones hegemónicas de la Unión Soviética, por lo que debían corregirse de forma mutua y constante; en Europa occidental había surgido una situación de tensión entre la autonomía europea, los intereses nacionales y la solidaridad atlántica, que nunca se armonizaban por completo, aunque por otra parte se condicionaban constantemente. La política europea de los años posteriores a 1955 se movería dentro de las coordenadas así marcadas, llena de tensiones en lo particular, pero siguiendo en definitiva el modelo fundamental, que en adelante resultaría cada vez más familiar.

2. Europa occidental hasta el Tratado de Roma. Reconstrucción e integración

I. COMIENZOS DE LA UNION EUROPEA

Después de la primera guerra mundial, el reordenamiento que se había intentado dar a Europa había seguido estando claramente marcado —a despecho de la Sociedad de Naciones— por el principio del Estado nacional y de su soberanía. Cierto es que ya antes habían existido movimientos paneuropeos defensores de la superación del nacionalismo, de una reducción de los derechos de soberanía de cada Estado en particular y de asociaciones de carácter europeo general. Ahora bien, tal como lo prueban el fracaso de la organización del conde Coudenhove-Kalergi y de los proyectos europeos de Briand, y también, finalmente, la impotencia de la Sociedad de Naciones, aun dejando a un lado los imperialismos fascistas y nacionalsocialistas, el nacionalismo aún era demasiado fuerte, la soberanía de los diferentes Estados europeos todavía no se había visto demasiado perturbada y la tensión intereuropea aún era demasiado fuerte. Por otra parte, para muchos europeos Europa seguía siendo el centro económico y político del mundo y el continente mismo, en consecuencia, un campo amplio, el campo por antonomasia de los conflictos político-militares importantes y globalmente decisivos; apenas nadie era realmente consciente de la pérdida de importancia de Europa, que ya se estaba produciendo. Sólo en los grupos liberales de izquierda y en los socialistas, que prácticamente carecían de influencia, se hallaba difundida la idea del internacionalismo y, con ello, también la del europeísmo; ahora bien, tampoco el internacionalismo de orientación exclusivamente clasista propugnado por los socialdemócratas europeos hasta la primera guerra mundial había superado la prueba de 1914 ni había sabido prever la fascinación de las emociones nacionalistas experimentada al estallar la guerra.

Al final de la segunda guerra mundial, sobre la base de un desgaste notable del nacionalismo, pareció abrirse paso, por el contrario, un fuerte movimiento de superación de las soberanías nacionales y de creación de una comunidad europea supranacional como la de los Estados Unidos de Europa [1]. La experiencia

del fascismo y del nacionalsocialismo, unida a la de la guerra y sus elementos determinantes, proporcionó algunas impresiones y lecciones tan fuertes que muchos europeos ya no creyeron posible la vuelta al ingenuo egoísmo nacional de entreguerras. La ocasional facilidad con que la potencia más fuerte del continente, Alemania, había liquidado la soberanía de Estados más débiles y la incapacidad total de esta potencia más fuerte para hacer de su hegemonía algo más que una simple tiranía pusieron claramente de manifiesto lo absurdo de las disputas relativas a la seguridad y a la hegemonía en una Europa que, entretanto, era demasiado pequeña para ello: la seguridad de cada Estado particular ya no se podía proteger con las recetas tradicionales de política de alianzas y militares, ni tampoco podía ya dar fruto el afán hegemónico de una sola potencia basado únicamente en la fuerza. El carácter global de la guerra y la evolución soviética y americana hacia la categoría de potencias mundiales que con ello se puso de manifiesto y que pronto sería también claramente decisivo para el conflicto europeo revelarían, por otra parte, con una evidencia no menos clara, que la época de la política mundial de las diferentes grandes potencias europeas había pasado y que, incluso, todo el continente perdería por completo su competitividad económica y política si no lograba que los Estados nacionales, que se habían debilitado demasiado, se uniesen para crear formas institucionalizadas de acción común. Pero, aunque justamente ahora que se ponía de manifiesto la imposibilidad de lograr un orden europeo a través de una potencia hegemónica europea era cuando las asociaciones europeas aparecían como una auténtica necesidad, la única salida siguió siendo una forma cualquiera de fusión voluntaria.

Probablemente, este sentimiento racional, si se me permite la expresión, de reducción de los diferentes nacionalismos y de fundamentación de la disposición a sacrificar los derechos de soberanía no hubiese bastado, pese a su gran difusión y a su evolución hasta convertirse en raíz de los planes relativos al conjunto de Europa. La intervención obligada de la potencia oriental marginal que era la URSS y de la potencia mundial ultramarina, Estados Unidos, provocó sin embargo el nacimiento de un sentimiento europeo de solidaridad que, unido a la toma de conciencia de la necesidad de una organización económica y política más amplia, produjo una corriente más fuerte.

Durante la guerra, el sentimiento de solidaridad europea se nutrió de otra fuente aún más rica. Los grupos de oposición de los países ocupados representaron sin duda rebeliones nacionales frente al dominio extranjero, alemán o italiano, pero, al

mismo tiempo, se consideraron parte de un movimiento de liberación general europea contra el fascismo: la misión nacional se fundió con otra de carácter supranacional. El hecho de que la mayoría de los grupos derivasen su antifascismo de proyectos de futuro sociales y constitucionales, o bien lo vinculasen con tales proyectos, y de que la apertura de la vía hacia un orden futuro no exigiese únicamente la lucha contra el enemigo del país, sino al mismo tiempo contra el conflicto, con frecuencia semejante a una guerra civil, con las capas conservadoras, a menudo sostenidas por las potencias ocupantes de la propia nación, hizo completamente imposible una comprensión puramente nacional de la resistencia, así como inevitable un cambio de orientación del pensamiento hacia categorías referidas al conjunto de Europa. La conciencia de que cada movimiento nacional de resistencia en particular sólo podría sobrevivir y luchar con alguna perspectiva de éxito si las potencias ocupantes se veían obligadas a dispersar sus fuerzas en la lucha con muchos movimientos de resistencia que operasen paralelamente y si la resistencia podía contar además con la ayuda de los Estados todavía no sometidos, esto es, si se producía algo similar a una reacción del conjunto de Europa frente al fascismo y al nacionalsocialismo, tuvo igualmente un efecto propiciador de la solidaridad.

La población alemana e italiana tampoco se libró de tales procesos, viéndose en algunos aspectos incluso aún más afectada. Primero desde la perspectiva del dominio sobre el continente y luego desde la de los derrotados en el campo de batalla por la superioridad de medios de dos potencias mundiales y de los bombardeados dentro de sus propios países, los ciudadanos de las naciones expansionistas desarrollaron incluso una capacidad de comprensión especial de aquellos factores económicos, políticos y militares que hablaban en favor de la creación de asociaciones europeas para el mantenimiento de la competitividad europea. Tan pronto como renunciaron a la idea de que la organización de Europa debía ser llevada a cabo violentamente por su país, para la construcción de un imperio propio, el resultado de ello sería un principio muy útil para la idea de Europa. Y esta renuncia se haría inevitable, como muy tarde, con la derrota, que por otra parte fue total. En ese momento, la unión europea, que necesariamente habría de contar en un tiempo previsible con la participación de Italia y de Alemania, pudo aparecer además como una atractiva salida del inevitable aislamiento inicial y como vehículo del resurgimiento. El conde Sforza, ministro italiano de Asuntos Exteriores en aquel momento, escribía en 1948 lo siguiente respecto a una posible integración europea:

«Para nosotros, los italianos, se trata de un momento histórico. Hambrientos, empobrecidos y habiéndonos salvado por muy poco de caer en el abismo de dolor y de vergüenza al que nos ha arrojado el fascismo, podemos recobrar el honor, la independencia y el bienestar si nos convertimos en heraldos del nuevo orden...» [2]. De forma muy semejante, Konrad Adenauer, persona de convicciones realmente internacionalistas y que más tarde habría de ser el primer canciller de la República Federal de Alemania, ya en 1945 veía en el «nuevo orden» evocado por el conde Sforza una posibilidad para el restablecimiento de Alemania y su vuelta a la comunidad de los Estados europeos [3].

Ya durante la guerra se había empezado a notar cómo en Alemania se preparaba la renuncia a la política imperialista. Un fuerte y permanente desgaste erosionó al nacionalismo hasta tal punto que, en un primer momento, el afán hegemónico alemán fue percibido como arrogancia para acabar siendo cuestionada por muchos cualquier clase de emoción nacionalista. Si bien es verdad que, al inicio de la dominación nacionalsocialista, ninguna nación europea había sido más nacionalista que la alemana, en 1945, tal vez no hubiese tampoco ninguna menos nacionalista que aquélla. La desaparición del nacionalismo se pone claramente de manifiesto en el desarrollo de la resistencia alemana, que sería la primera en defender una tendencia general de una forma más consciente y precisa. Los grupos de izquierda y el Círculo de Kreisau, en torno al conde Moltke, por ejemplo, siempre se habían caracterizado por sus convicciones internacionalistas y europeístas. E incluso los representantes de los círculos nacional-conservadores, que habían defendido durante algún tiempo la aspiración hegemónica alemana, acabarían también por abandonarla de una forma expresa y sincera bajo la impresión del terror nacionalsocialista. Apelando a valores supranacionales y en interés de un orden europeo supranacional, finalmente expresarían en sus escritos y conversaciones su disposición a integrar el Estado alemán en la unidad superior de la sociedad de Estados europeos organizada. El hecho de que la experiencia del nacionalsocialismo hubiese nutrido también sus ideas sobre política constitucional y social del mundo de las concepciones extraalemanas supuso también una indispensable contribución a este cambio [4].

De esta manera, en los primeros años de posguerra, en todos los países europeos se formarían innumerables agrupaciones y organizaciones locales, regionales y nacionales que consideraban los esfuerzos para lograr una asociación supranacional europea como su única meta, no siendo por tanto casual tampoco que

en este movimiento, que crecía poderosamente de mes en mes, fuesen los antiguos militantes de la Resistencia y de la oposición quienes desempeñasen un papel cuantitativamente importante y preeminente. Expresión de un espíritu decidido ahora a transformar la realidad fue el hecho de que el 1 de enero de 1946 volviese a publicarse la revista *Europe*, fundada en 1923 por Romain Rolland, tras siete años de interrupción, y de que, del 25 de agosto al 8 de septiembre de 1946, en Alpbach (Tirol) se celebrasen por vez primera semanas universitarias internacionales, siendo los principales temas en ellas debatidos «La imagen del joven europeo» y «La idea europea». Ya anteriormente, el 16 de mayo, el político belga Paul van Zeeland, que en 1935-36 había sido ministro de Asuntos Exteriores de su país, volviendo a desempeñar el cargo entre 1949-1954, había indicado el camino hacia objetivos concretos al fundar en Bruselas la Ligue Indépendante de Coopération Economique Européenne (que en 1948 cambió su denominación por la de Ligue Européenne de Coopération Economique, LECE), que propugnaba la unión aduanera y económica de Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Posteriormente, del 14 al 29 de septiembre de 1946, en la localidad suiza de Hertenstein se celebró un encuentro de representantes de grupos europeístas de Bélgica, Francia, Grecia, Polonia, España, Hungría y también Alemania, que bajo la presidencia del socialista holandés Henri Brugmans, aprobaron el llamado Programa de Hertenstein, propulsor de una comunidad europea como miembro de las Nacionas Unidas, la renuncia a las soberanías nacionales en Europa y el derecho de ciudadanía europea; el 17 de diciembre, los hertensteinianos —que comprendían ya a representantes de 17 países— elaboraron una estructura organizativa más sólida con la fundación en París de la Unión de Federalistas Europeos, apadrinada por el profesor Brugmans. Dos eran las características de la UFE, así como de la mayor parte de los grupos europeístas de entonces: su concepto de Europa abarcaba, como algo completamente lógico, tanto al conjunto del continente como a Gran Bretaña, y el futuro político de Europa sólo era pensable, desde su punto de vista, bajo formas federales. El hecho de que la UFE interpretaba en principio con toda exactitud el sentimiento general queda ilustrado, no en último término, por manifestaciones tales como el encuentro de escritores y pensadores europeos propiciado por la ciudad de Ginebra, del 2 al 14 de octubre de 1946, en el marco de las «Recontres Internationales» y en el que espíritus tan heterogéneos como Denis de Rougemont, Georg Lukács, Stephen Spen-

der y Karl Jaspers trataron de contribuir al fomento de una conciencia europea.

Todas estas actividades se vieron impulsadas de una forma inestimable por la circunstancia de que uno de los grandes héroes de la coalición antihitleriana, el primer ministro británico durante la guerra Winston Churchill, se convertiría en uno de sus apasionados paladines. En un discurso pronunciado en Fulton (Estados Unidos) el 4 de marzo de 1946, Churchill había mencionado la necesidad de una unión europea; el 19 de septiembre, en un importante discurso pronunciado en Zurich, declaraba que la pronta creación de los Estados Unidos de Europa era una meta tan urgente como alcanzable, y el 15 de mayo de 1947, en el Albert Hall londinense, repetiría, aún con mayor entusiasmo, su llamamiento a la población y a los políticos europeos. Churchill confirió al movimiento europeo su gran prestigio y una retórica incomparable, con los cuales sacó también la idea europeísta del mundo de los sueños de los idealistas poco pragmáticos para llevarla al plano de las posibilidades y, con ello, al de la política realista. Pese a que desde la derrota electoral de los conservadores en el verano de 1945 había dejado de ser primer ministro para convertirse en jefe de la oposición británica en la Cámara de los Comunes, su actividad dio la impresión de que para la construcción de una comunidad europea se había de contar con la participación e incluso el protagonismo de Gran Bretaña. Después de haber fundado el 17 de enero de 1947 el United Europe Committee británico, rebautizado en mayo con el nombre de United Europe Movement, Churchill pudo reunir de hecho, para colaborar en su empresa, a un círculo ilustre de personalidades políticas británicas, conservadores y liberales. Finalmente, numerosos diputados del Partido Laborista, que habían constatado con disgusto, desde el punto de vista de las próximas elecciones en Gran Bretaña, la reputación europea del jefe de la oposición, se declararon también a favor de una Europa unida. La esperanza en la función dirigente británica parecía sin embargo provenir, no en último término, de las manifestaciones de los políticos notables de los dominios. Así, el mariscal de campo Jan Smuts, primer ministro de la Unión Sudafricana, aprobaba con entusiasmo el 11 de octubre de 1946 el discurso pronunciado por Churchill en Zurich, diciendo expresamente en un discurso pronunciado por él en La Haya que la iniciativa para la creación de los Estados Unidos de Europa no sólo podía, sino que incluso debía partir de Gran Bretaña [5]. La participación de Londres en el proceso de unificación europea contaba pues, claramente, con la bendición de la Commonwealth.

No menos confianza habrían de adquirir los protagonistas del movimiento europeo gracias al aliento benévolo e incluso insistente recibido desde muy pronto de Estados Unidos; la unión europea sería la mejor y más rápida para conseguir la recuperación económica y la estabilidad política de una Europa independiente de Moscú, elementos sin duda fundamentales de los intereses americanos.

Bajo tales auspicios, el avance de Europa hacia la construcción de un sistema supranacional adquiriría prácticamente una apariencia imparable. En 1947 ya se empezó a perfilar —aunque, por supuesto, aún de forma imprecisa— el nacimiento de un Parlamento europeo. El conde Coudenhove-Kalergi, veterano del movimiento paneuropeo de entreguerras, había pedido ya el 20 de noviembre de 1946 a no menos de 4 000 parlamentarios de países europeos una respuesta respecto a su posición frente a la idea de Europa y frente a la unión europea. En posesión de un número aplastante de respuestas positivas, invitó a los representantes parlamentarios de siete Estados europeos a Gstaad (Suiza), en donde el 4-5 de julio de 1947 se crearía el comité preparatorio de una Unión Parlamentaria Europea, siendo su presidente provisional el antiguo ministro griego Leon Maccas. Del 8 al 12 de septiembre pudo celebrarse, de nuevo en Gstaad, el primer congreso de la Unión Parlamentaria, en el cual participaron 114 deelgados de diez países, y en diciembre de aquel mismo año el comité ejecutivo de la Unión preparó para septiembre de 1948 una asamblea plenaria en Interlaken que habría de recibir el significativo nombre de Congreso Parlamentario para la Constitución de los Estados Unidos de Europa.

Ahora bien, cuanto más se adentraba el movimiento europeo con sus éxitos en el terreno de la política propiamente dicha, tanto más patentes se hacían los factores perturbadores, e incluso las tendencias centrífugas, y cada paso adelante acercaba también más el peligro de desgarramiento, e incluso de un verdadero corte. Y así, tan pronto como los gobiernos descubrieron el atractivo y la aparente fuerza irresistible de la idea europeísta, surgió también la rivalidad de algunas potencias europeas por el liderazgo —a la pretendida aspiración británica presentada por Churchill y formulada por Smuts se opuso manifiesta y públicamente la francesa expresada ya por el general De Gaulle el 7 de septiembre de 1947, al tratar en Bayona la cuestión europea [6]—, rivalidad que en modo alguno sirvió para fomentarla sino, por el contrario, para bloquearla. Al ímpetu entusiástico de los federalistas, representados por la UFE, los gobiernos responderían por su parte —pese a existir entre sus propios miem-

bros algunos defensores convencidos de la idea de Europa—, con la comprensible circunspección de los políticos, responsables y por lo mismo guardianes de los intereses de sus naciones y Estados. De esta manera, en vez de poner estos intereses —y las propias competencias— lo más rápidamente posible en manos de un gobierno federal y un Parlamento federal europeo, lo que para los federalistas era casi una meta mínima a alcanzar de forma inmediata, los gobiernos —al igual que los «europeos» realistas en general— se pronunciaron por una estrategia funcionalista, esto es, por un proceso de unificación lento y progresivo a través de la cooperación de los Estados europeos en determinadas cuestiones parciales. Pero en tanto que la cautela de los funcionalistas y sus constantes apelaciones al respeto de las realidades, tales como la soberanía de cada Estado en particular, tuvieron sobre los federalistas un efecto irritante y paralizador, a los funcionalistas, a su vez, temerosos de que la exaltación de éstos, que con frecuencia se mostraban de hecho ciegos ante la realidad, les llevase demasiado lejos y de una forma demasiado precipitada, les arredró también, en principio, la asunción de unas obligaciones que en el fondo estaban dispuestos a aceptar. De ahí que en los años 1945, 1946 y 1947 se diese la curiosa situación de que, en tanto que en los discursos y en los escritos de los federalistas se celebraba la creación de los Estados Unidos de Europa, tenidos ya prácticamente por una realidad inminente, los gobiernos no diesen el menor paso adelante, no existiendo tampoco el menor asomo de un proceso real de integración.

Ello se debió también, sin duda, al hecho de que la misma difusión del movimiento europeísta hizo surgir irremisiblemente el problema de los principios del orden interno de una futura comunidad europea, provocando fuertes conflictos. La organización económica de Europa ¿habría de ser capitalista o socialista? El sistema político ¿se constituiría en forma de democracia liberal y parlamentaria o bajo la dictadura de una clase social? ¿O acaso sería posible la coexistencia bajo el techo común de la casa europea de varias viviendas decoradas de forma completamente distintas? En tanto no se perfilase con mayor claridad la respuesta a tales preguntas, los progresos institucionales hacia la integración europea, como es obvio, serían difícilmente posibles. El gobierno laborista británico, por ejemplo, que llevaba a cabo en aquel momento un programa amplio de socialización, pero sin pretender revolucionar la constitución política del país, se mostró firmemente decidido a evitar el menor avance hacia una comunidad europea más amplia en tanto no fuese seguro que

su «socialismo democrático» se hallaría protegido por igual del peligro del liberalismo o del totalitarismo. El hecho de que, con la polémica acerca de la estructura de la Europa del futuro, se europeizasen, por así decirlo, los frentes políticos internos de cada país —dado que todavía no existía un Parlamento europeo capaz de integrar de nuevo a los grupos supranacionales dentro de un marco más amplio— se convirtió por otra parte en una amenaza inmediata para la estructura organizativa del movimiento europeo. Síntoma grave de ello fue que los representantes de los partidos democristianos europeos creasen el 1 de junio de 1947 en Lieja una asociación propia para el mantenimiento de la idea europea, las Nouvelles Equipes Internationales (NEI) y que pocos días después, el 3 de junio, los representantes de los partidos socialistas europeos constituyesen en Montrouge, cerca de París, el Comité Internacional para los Estados Unidos Socialistas de Europa (desde noviembre de 1948, Movimiento Socialista para los Estados Unidos de Europa).

De no ser por Winston Churchill, probablemente hubiese sido inevitable la desmembración del movimiento europeo, que frente al torpe egoísmo de los diferentes Estados y a la desconfiada circunspección de sus gobiernos, le habría conducido finalmente a la impotencia más completa. A la energía y a la tenacidad de Churchill —apoyadas eficazmente por su enorme prestigio— se debería sobre todo el que los grupos del movimiento, tan diferentes y divergentes y que ya empezaban a distanciarse entre fuertes polémicas, no sólo encontrasen una nueva cohesión, sino que, reconciliados por fin, lograsen incluso dar a la idea el necesario impulso. En diciembre de 1947, Churchill lograba ya reunir en un congreso en París para la fundación de un comité que sirviese para coordinar en el futuro el trabajo de las organizaciones participantes a su Movimiento Británico para la Unidad de Europa, al Consejo Francés para una Europa Unida, a la Liga Belga para la Cooperación Europea y a la Unión de Federalistas Europeos, de Brugmans. A su prestigio y a su tenaz esfuerzo se debería de nuevo primordialmente el que, a la invitación a un gran congreso, a celebrar del 7 al 10 de mayo de 1948 en la Haya, hecha posteriormente por el Comité Internacional para la Coordinación de los Movimientos por la Unidad de Europa a instancias de Churchill, no respondiesen solamente sus organizadores, sino precisamente también aquellas organizaciones que ponían en duda la unidad del movimiento europeo debido a sus vinculaciones ideológicas y partidistas: las Nouvelles Equipes Internationales y el Movimiento Socialista para los Estados Unidos de Europa. En el congreso participó también la LECE de

Paul van Zeeland. El resultado inmediato sería la creación en Bruselas, el 24-25 de octubre de 1948, de una organización central de todas las asociaciones europeas, denominada ahora formalmente Movimiento Europeo (Mouvement Européen-United Europe Movement), que en los meses sucesivos transferiría a todos los países representados su principio organizativo unificador bajo la forma de Consejos Nacionales, eligiendo como líderes a Winston Churchill, al francés Léon Blum, al italiano Alcide de Gasperi y al belga Paul-Henri Spaak. El propio congreso fue convertido por unos 750 delegados de 30 países en una manifestación tan representativa como poderosa de los esfuerzos por la unificación europea. En sus discursos y en las resoluciones de los comités y comisiones de estudio reclamaron la pronta convocatoria de una Asamblea Europea, la elaboración de una Carta de los Derechos Humanos y la creación de un Tribunal Europeo. Los llamamientos de La Haya provocaron tal entusiasmo que finalmente incluso los gobiernos parecieron dispuestos y obligados a actuar. En julio de 1948, el ministro francés de Asuntos Exteriores Georges Bidault se declaró a favor de una asamblea formada por parlamentarios de los países europeos; a él se unieron también políticos belgas, holandeses y británicos, y el sucesor de Bidault, Robert Schuman, en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de 1948, declaró que la idea de una federación europea debería ser llevada a cabo por los gobiernos de los países europeos.

Cierto es que en mayo de 1948, cuando los delegados del Congreso de La Haya establecieron las bases organizativas del Movimiento Europeo y concibieron los primeros elementos de la Constitución de un Estado federal europeo, ya estaba claro desde hacía tiempo que la antorcha de La Haya sería recogida al menos por los gobiernos de los países europeos que en 1945 habían quedado fuera del ámbito de influencia soviética y que, incluso en Europa occidental, las reacciones gubernamentales positivas ante los llamamientos europeístas ya no tenían únicamente su origen en convicciones como las que habían tomado cuerpo en el Movimiento Europeo, sino antes bien en otros motivos mucho más poderosos. Poco antes del Congreso de La Haya, los gobiernos de Europa occidental habían desarrollado formas de cooperación interestatal que —justamente por contener elementos integradores y poder ser consideradas, en consecuencia, progresos revolucionarios dentro del espíritu de la idea de Europa, aunque permaneciesen estrictamente limitadas a la Europa no soviética— ponían suficientemente de manifiesto que la «guerra fría» entre la Unión Soviética y una parte considerable

del resto del mundo condenaba al movimiento supranacional europeo a la escisión, y a los fragmentos de movimiento resultantes, a una modificación esencial de sus objetivos y de su naturaleza.

Esto no afectó a la unión aduanera y económica aprobada por Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo en 1944 y fundada en una convención el 14 de marzo de 1947, que se desarrolló paulatinamente mediante otros acuerdos en los años sucesivos. La integración económica de estos tres países avanzó hasta el punto de que, bajo la denominación de Benelux, estos Estados pronto se convertirían en una unidad económica y casi política. Pero este proceso que en definitiva sólo tuvo lugar en el rincón noroccidental del continente, no aparecía en modo alguno como marginador de los demás países, sino antes bien como un ejemplo a seguir. La buena acogida del Plan Marshall en Europa fue sin embargo un elemento esclarecedor. No se trataba de que el Plan Marshall hubiese provocado la división de Europa y, con ello, del movimiento europeo. El hecho de que la Unión Soviética prohibiese a los Estados de Europa oriental y meridional bajo su dominio, entre ellos la zona alemana de ocupación soviética, la aceptación de la ayuda económica americana y la participación en las instituciones necesarias para el encauzamiento del plan de apoyo simplemente hizo tomar conciencia general de un estado de cosas que, en el fondo, existía ya desde el momento de la conquista soviética de Europa oriental y meridional —y de Alemania hasta el Elba—, pero que hasta entonces no había sido reconocido, o bien había sido ignorado o, al menos, no había sido explicitado: la incapacidad, puesta de manifiesto con el fin de la guerra, de la Rusia de Stalin y en consecuencia del imperio soviético que acababa de entrar en la historia, de establecer una relación de cooperación digna de crédito y en igualdad de derechos con los Estados no soviéticos y con las agrupaciones de Estados, y, menos aún, una actuación conjunta dentro de un proceso de integración que no estuviera exclusivamente auspiciado por Moscú. Cuando el 12 de julio de 1947 el Comité Europeo de Cooperación Económica (CECE) celebró en París su primera sesión para encauzar la organización de los receptores europeos del Plan Marshall y cuando el 16 de abril de 1948 se firmó, de nuevo en París, el acuerdo para la creación de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que posteriormente funcionaría como asociada europea de la Economic Cooperation Administration (ECA), órgano rector americano del Plan Marshall, sólo estaban representados 16 Estados europeos: la República Federal de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,

Francia, Grecia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía, a los que luego se unieron Islandia y España. Las tres zonas de ocupación de Alemania occidental, que serían incluidas de inmediato en el European Recovery Program (ERP) de Marshall, estaban en manos de gobernadores militares en París. La OECE fomentó la cooperación económica hasta al punto que ya casi se podía hablar de una integración económica parcial. Un efecto similar tuvieron los acuerdos financieros que los países de la OECE se vieron obliga-

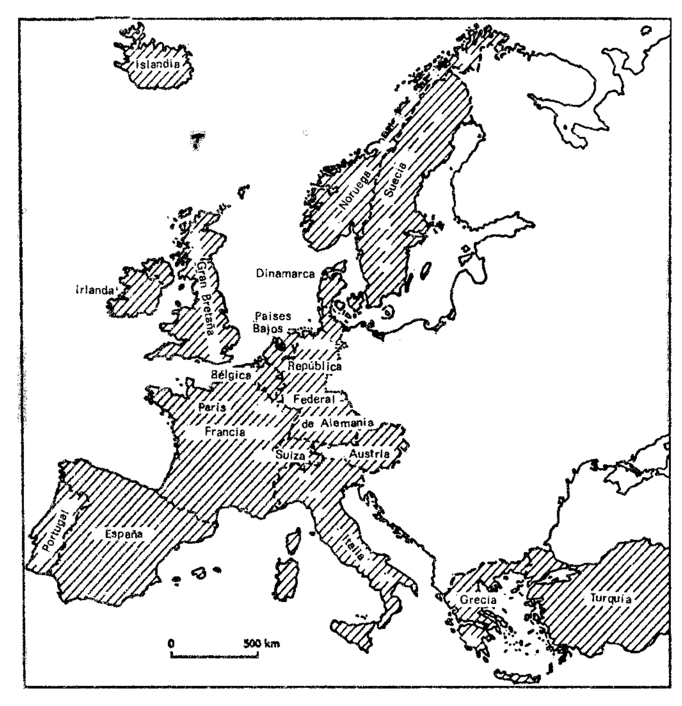


FIG. 2.—*Miembros de la OECE.*

Eran miembros de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) los países receptores de la ayuda del Plan Marshall. Estados Unidos y Canadá se unieron en calidad de miembros asociados. Yugoslavia y España fueron miembros condicionados con estatus especial. Finlandia colaboró de forma limitada. El 31 de octubre de 1949, la República Federal se convirtió en miembro de pleno derecho; España lo hizo en 1959.

dos a hacer, sobre todo la Unión Europea de Pagos (UEP), creada el 19 de septiembre de 1950 para el establecimiento, por vez primera, de un sistema de pagos multilaterales entre los Estados de la OECE. Por otra parte, quienes, fuera del ámbito soviético, desde el Plan Marshall y la OECE, hablaban de «Europa», se referían a la integración europea o desarrollaban planes para la constitución de los Estados Unidos de Europa, sólo tenían presente, al hacerlo, a la Europa no soviética. Cualquier otra interpretación política más amplia del término no era posible sino como una esperanza muy vaga. La Unión Soviética demostraría hasta qué punto era vaga cuando el 25 de enero de 1949, creó, en oposición a la OECE, una organización económica propia de los países de Europa oriental y meridional bajo su dominio: el Consejo de Asistencia Económica Mutua (Comecon).

Pero, paralelamente a la OECE y al Comecon, surgieron también sistemas de alianzas políticas y militares que, por su propia naturaleza, acentuaron el proceso de división de Europa y las circunstancias de la guerra fría aún más de lo que lo había hecho la separación económica entre el Este y el Oeste. La alianza occidental fue incluso una creación neta de la guerra fría. El hecho de que en 1947 y 1948 los partidos comunistas de los países orientales y sudorientales de Europa coparan ellos solos el poder con el apoyo soviético —siendo el más dramático y perturbador para los ojos occidentales el caso de Checoslovaquia (25 de febrero de 1948)—, de que Moscú impulsara de la forma más brutal la sovietización de los países definitivamente sometidos, de que la sublevación comunista en Grecia obtuviese claramente la ayuda de los Estados del bloque soviético y, evidentemente, también de la Unión Soviética y de que los dirigentes de la URSS obtaculizasen al parecer con su política la solución de algunos problemas de vital interés para el conjunto de Europa, como la cuestión alemana y austriaca, despertó en Europa occidental el temor a un posible avance del imperialismo soviético si no se lograba agrupar también las fuerzas políticas y militares —más allá de la recuperación económica— de los países de Europa occidental. Este temor, por poco fundamento que tuviese, fomentó la disposición a la cooperación en mayor medida que el credo del movimiento europeo. Cuando el ministro británico de Asuntos Exteriores Ernest Bevin propugnó el 22 de enero de 1948 en la Cámara de los Comunes la creación de una unión occidental, indudablemente lo hizo también movido por una convicción europeísta —limitada, *nolens volens,* a Europa occidental—; ahora bien, su mayor motivación fue la amenaza de la Unión Soviética. Un día antes, Gran Bretaña y Francia, aliadas desde

el 4 de marzo de 1947 por el Tratado de Dunkerque, cuyo principal objetivo seguía siendo impedir la reaparición del expansionismo alemán, habían propuesto a los países del Benelux el establecimiento de una alianza política y militar de acuerdo con el modelo de Dunkerque. La propuesta fue aceptada de inmediato, pudiéndose firmar ya el 17 de marzo de 1948 entre los representantes de los cinco Estados el Tratado de Bruselas, pacto de ayuda militar que, aunque afirmaba ser igualmente un acuerdo de seguridad regional frente al peligro alemán y adaptado como tal a la Carta de la ONU, en realidad no estaba concebido sino como una protección frente a las ambiciones soviéticas. El hecho de que las potencias de Bruselas diesen a sus ministros de Asuntos Exteriores un órgano político permanente con el Consejo y de que, el 16 de abril de 1948, creasen un mando común de Europa occidental puso de manifiesto hasta qué punto percibían la presión del Este.

La guerra fría había producido pues una alianza de los Estados de Europa occidental nueva dentro del concierto europeo por cuanto que con ella Estados como Bélgica y Holanda renunciaban, por vez primera en época de paz, a su tradicional neutralidad. Por otra parte, aparecía como síntoma de una transformación casi revolucionaria de las relaciones internacionales, al hacer realidad formas de cooperación política y militar por las que la cooperación se acercaba de hecho al límite de la integración. El Tratado de Bruselas no sólo acentuó aún más la división entre el Este y el Oeste europeos, sino que además transformó el Movimiento Europeo occidental e incluso lo perjudicó gravemente. Y así, la primera alianza militar multilateral surgida en Europa después de la guerra destruía la ilusión alimentada por los europeos durante algunos años de que Europa —y no sólo Europa occidental— pudiese reafirmarse con un nuevo papel autónomo como «tercera fuerza» entre las nuevas potencias mundiales, la URSS y los EEUU. Apenas fundada la unión occidental de Bruselas, se puso claramente de manifiesto que los miembros de la alianza —aun cuando todavía hubiesen de atraerse al resto de Europa occidental— tampoco podían cumplir juntos los objetivos antisoviéticos de la alianza y que, por lo mismo, dependerían también en mayor medida, si cabía, y de forma permanente del apoyo político y militar de los Estados Unidos. Pero la conciencia de que la comunidad económica atlántica; hecha realidad por el concierto de la ECA y la OECE, debería tener una correspondencia política y militar, conciencia que pronto conduciría a la preparación y fundación, el 4 de abril de 1949, de la

Organización del Tratado del Atlántico Norte, pagó con la ilusión frustrada uno de los mayores impulsos de la idea europeísta.

La deseuropeización parcial de la unión occidental de Bruselas, que prácticamente desapareció dentro de la organización de la OTAN, proporcionó no obstante una irrenunciable ganancia de seguridad, y la ampliación de la alianza a Estados Unidos y Canadá supuso además el ingreso —de otra manera, difícil de alcanzar— de Dinamarca, Noruega, Portugal e Islandia, seguidos en 1952 por Grecia y Turquía, lo que por otra parte se podía interpretar como un avance político del movimiento de unificación de Europa occidental. Otras tres consecuencias del Tratado de Bruselas, y tanto más de la OTAN, serían sin embargo fatales desde el punto de vista de la integración de Europa occidental. Por una parte, aunque la amenaza del Este pudo forzar a una cooperación de la que los Estados participantes difícilmente hubiesen sido capaces sin tal impulso, la orientación antisoviética de la alianza hizo que algunos Estados quedasen definitivamente distanciados al no querer o no poder renunciar a su neutralidad en la guerra fría, bien por consideraciones de principios (como Suiza), bien por su especial situación (como Finlandia, Suecia y luego también Austria); con ello se convertía en algo imposible una asociación más amplia dentro incluso de la Europa no soviética. Por otra parte, el papel dirigente de Estados Unidos, que en definitiva constituía la esencia de la OTAN y era su única garantía de efectividad, puso unos límites relativamente estrechos a la integración interna del sistema, ya que esta superpotencia sólo podía someterse hasta cierto grado a la voluntad general de la alianza. Pero, lo más importante fue que la OTAN liberó a Gran Bretaña de la necesidad de vincularse con la Europa occidental continental en un sentido integrador. La OTAN suponía una satisfacción suficiente para los intereses británicos en materia de seguridad. Posteriormente acabaría por perder toda su fuerza la conciencia antes siempre viva de que Gran Bretaña —como escribía el político laborista Hugh Dalton al francés Guy Mollet— no era «simplemente una isla pequeña y densamente poblada situada frente a las costas occidentales de la Europa continental», sino antes bien «el centro neurálgico de una Commonwealth mundial» y el «centro neurálgico de una asociación mundial más amplia, la del área de la libra esterlina», es decir la «mayor zona comercial multilateral del mundo» [7]. Los «europeos» británicos perdieron en principio toda posibilidad de imponerse frente a la convicción de una clara mayoría de su nación de que Gran Bretaña debía desempeñar un papel especial, acabando por consumirse su propio entusiasmo [8].

Del hecho de que, a la vista del curso de los acontecimientos, los ministros integrantes de las asociaciones de la unión occidental de Bruselas y de la incipiente OTAN recurriesen a los llamamientos del Congreso de La Haya y abogasen por la creación de instituciones conjuntas en Europa occidental se derivaría un incremento muy limitado del entusiasmo por los ideales del Movimiento Europeo. Cierto es que la cooperación entre éste y el Tratado de Bruselas pronto habría de dar resultados aparentemente considerables. Por iniciativa de Bidault, Schuman y, de nuevo, Churchill, muy pronto se pusieron en marcha los trabajos

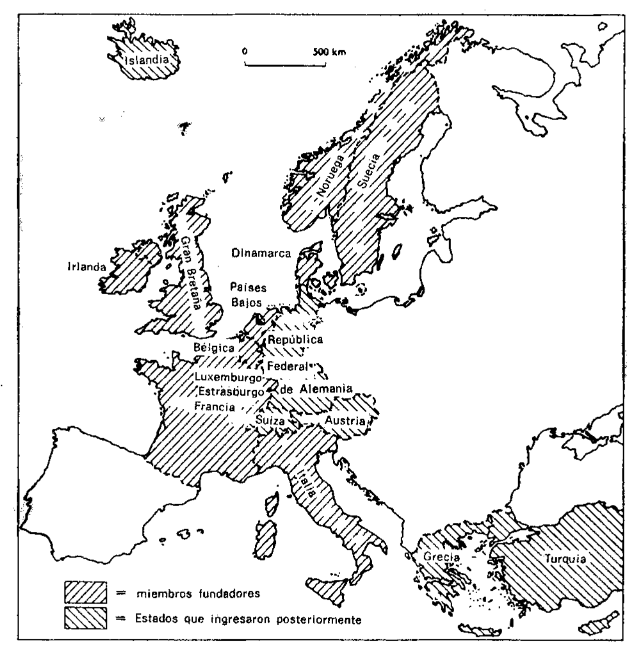


FIG. 3.—*Miembros del Consejo de Europa.*

preparatorios para la creación de una organización de Estados que abarcase toda la Europa no soviética —a excepción de España, proscrita, por así decirlo, por su actitud simpatizante con el Eje durante la guerra y por su régimen autoritario—, siendo firmado ya el 5 de mayo de 1949 en el palacio londinense de

St. James el estatuto de un Consejo de Europa por los representantes de diez países: Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suecia, a los que más tarde se añadirían Grecia (1949), Turquía (1949), Islandia (1950), la República Federal de Alemania (asociada en 1950 con el Sarre y, en 1951, como miembro de pleno derecho), Austria (1956), Chipre (1961), Suiza (1963) y Malta (1965). El artículo 1 de los estatutos define los objetivos del Consejo de Europa de la siguiente manera: «El Consejo de Europa aspira a una mayor unión entre sus miembros para la protección y el fomento de los ideales y principios que son su herencia común y en interés de su progreso económico y social». El Consejo parecía también significar ya de por sí un importante éxito organizativo en cuanto al objetivo formulado. Los Estados signatarios establecieron una Secretaría General permanente con sede en Estrasburgo, a propuesta británica. Se creó también otro órgano, el Comité de Ministros de Asuntos Exteriores, autorizado para tomar decisiones —si bien sólo por unanimidad— en nombre del Consejo en las conferencia que se celebrarían regularmente; con una Asamblea Consultiva que se reuniría dos veces al año —también en Estrasburgo— surgió incluso una especie de Parlamento de Europa occidental. Pero, por otra parte, ya desde un principio se puso de manifiesto que el Consejo de Europa tendría que circunscribirse en esencia al cultivo de la idea de Europa y a un intercambio de ideas políticas facultativo, al no reconocerle los Estados miembros competencias políticas efectivas. El Consejo fue declarado expresamente incompetente en algunos de los ámbitos más importantes de la cooperación internacional del momento dentro de Europa occidental, tales como el de la cooperación económica y militar, ya que no se podía atentar contra las funciones de la OECE y del Tratado de Bruselas o de la OTAN. El Consejo de Europa era, pues, inoperante como instrumento de una política de integración digna de tal nombre en tanto no fuese reformado. Ahora bien, no habría sido posible que fuese más efectivo, ya que, sin la obligación de abstenerse en el campo económico y militar, ni Gran Bretaña ni otros Estados como Suecia, y más tarde Austria o Suiza, hubiesen tomado parte en él.

Su objetivo y sus funciones a los ojos de los gobiernos representados en el Consejo de Europa también fueron distintos a los que los líderes del Movimiento Europeo habían imaginado. Era obvio que el Consejo podría servir de foro permanente para debates políticos informales entre sus Estados miembros, así como para unir —lo que tampoco era menos deseable— a los Estados comprometidos con la alianza militar occidental con aquellos

países de la Europa no soviética que temían, o estaban obligados a evitar, una toma clara de partido en la guerra fría. Aunque débil, esta vinculación era sin embargo política y políticamente útil. La tarea más importante del Consejo era entre tanto la superación de un problema muy concreto: la inclusión de Alemania —o mejor dicho, Alemania occidental— dentro del círculo de los Estados europeos occidentales. La misma recuperación y estabilización económica de Europa occidental sólo era pensable —con o sin el Plan Marshall— mediante una colaboración sin restricciones de Alemania occidental. De ahí que los gobernadores militares de las tres zonas occidentales de ocupación estuviesen ya desde el principio dentro de los órganos del Plan Marshall y que a finales de octubre de 1949 la República Federal, recién fundada, fuese ya acogida dentro de la OECE. Ahora bien, el sistema de alianza política y, a largo plazo, también militar, de Europa occidental requería asimismo la participación de Alemania occidental; la unión occidental de Bruselas y la misma OTAN no podrían lograr una efectividad plena en tanto Alemania occidental fuese únicamente una zona de ocupación y no estuviese vinculada como miembro activo. Cuanto más bajaba la temperatura en la guerra fría, tanto más urgente parecía la alianza con Alemania occidental. Por otra parte, la inserción de este país en la sociedad de Estados europeos occidentales no era asunto fácil, ya que, como es comprensible, en los países que habían sido atacados y ocupados por la Alemania nacionalsocialista los sentimientos antialemanes seguían siendo muy fuertes. Las dos guerras mundiales habían producido también un gran temor ante un segundo resurgimiento del expansionismo alemán. Pero los temores no se referían únicamente al pasado y a un nuevo retorno de éste. A los políticos de todas las tendencias y colores de los países de Europa occidental más débiles demográfica y económicamente, y potencialmente también política y militarmente, les preocupaba que incluso una Alemania pacífica —aun reducida a su fragmento germano-occidental— cobrase un peso aplastante dentro de las alianzas económicas, políticas y militares de Europa occidental si no se tomaban medidas de precaución.

Las organizaciones e instituciones supranacionales de Europa occidental parecían disponer de los medios adecuados para aplacar los tres temores. La colaboración de intelectuales y políticos alemanes, iniciada ya en 1946, dentro de las asociaciones internacionales cuya meta era la realización de la idea de Europa contribuyó de hecho de manera considerable a hacer desaparecer sensiblemente el resentimiento despertado por la Alemania na-

cionalsocialista y a acostumbrar nuevamente a Europa a la presencia alemana en los foros internacionales. El ritmo y el amplio efecto logrado por este proceso se pone de manifiesto en el hecho de que los federalistas alemanes asociados a la Unión Europa se incorporasen ya a la UFE el 20 de noviembre de 1947 y de que representantes alemanes como Konrad Adenauer pudiesen tomar parte ya en el Congreso de La Haya como interlocutores solicitados. A los gobiernos europeos occidentales les parecía lo más lógico utilizar precisamente ahora las instituciones creadas y dirigidas por ellos como vehículo para la reinserción de Alemania y contemplar su utilidad paulatinamente, sobre todo bajo este aspecto, de acuerdo con la situación internacional existente. El énfasis puesto por Churchill a partir de 1945 en la importancia de la unidad europea para posibilitar un resurgimiento controlado de Alemania nos lleva a sospechar que su destacada participación dentro del Movimiento Europeo se debió principalmente a su interés por resolver el problema alemán, habiendo insistido una y otra vez en que las difíciles relaciones franco-alemanas sólo podrían reestructurarse de forma satisfactoria dentro de un marco europeo. El primer período de sesiones del Consejo de Europa, del 8 de agosto al 9 de septiembre de 1949, fue utilizado por él sin dilación para repetir su *ceterum censeo* respecto a la política alemana (17 de agosto), siendo muy significativo que el comité de Ministros del Consejo sólo esperase hasta su segunda conferencia (del 3 al 5 de noviembre de 1949) para tomar el acuerdo fundamental de acoger a la República Federal. Una vez cursada la invitación oficial al gobierno de la RFA (1 de abril de 1950) y aceptada por éste (1 de julio de 1950), pudo constatarse que con ello se había dado el primer paso para la integración de Alemania occidental dentro del sistema europeo occidental, integración que por otra parte refrenaba cualquier posible afán de estrellato alemán.

Debido a la circunstancia de que el Consejo de Europa había sido condenado a la abstención en cuestiones económicas y militares, la integración de la República Federal dentro de esta institución no era sin embargo suficiente, ya que la aportación alemana en el campo económico y militar era de vital importancia para Europa occidental; por otro lado, el temor de los países europeos occidentales, y en particular de Francia, a una nueva preponderancia alemana en virtud de su fuerza económica y su potencial militar era más fuerte que ningún otro. Había que encontrar una salida al dilema y este imperativo hizo que las miradas se dirigiesen hacia las posibilidades que la europeización conllevaba; la integración, pese al sacrificio general de los dere-

chos de soberanía que llevaba implícito, pareció ser la receta para resolverlo. El problema alemán se perfilaría de hecho casi como único responsable de las dos iniciativas más importantes de aquellos años en lo relativo a la política europea. Recogiendo y ampliando antiguas propuestas, como las que ya partieran en enero de 1947 de John Foster Dulles, secretario de Estado americano en los años cincuenta, o en marzo de 1950 del canciller federal Adenauer, el ministro francés de Asuntos Exteriores Schuman presentó el 9 de mayo de 1950 el plan ya aceptado por el gabinente francés de «poner la totalidad de la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una Alta Autoridad común, dentro de una organización abierta al ingreso de los restantes países europeos». Tras un tiempo sorprendentemente breve, el 30 de junio de 1950, los gobiernos de Bélgica, la República Federal, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos aceptaron el Plan Schuman, firmándose después de otras negociaciones —que si bien no fueron fáciles, tampoco fueron tan difíciles como se hubiese podido pensar, habida cuenta del carácter revolucionario de la propuesta— el 18 de abril de 1951 en París el tratado para la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que entró en vigor el 23 de junio de 1952. De este modo se creó realmente una «Alta Autoridad» con derechos soberanos por tanto a administrar el carbón y el acero de forma autónoma y a tomar decisiones vinculantes para los países representados. Por vez primera, varios gobiernos de Europa occidental lograban entenderse a través de una institución que, por su carácter y función, podía considerarse como un instrumento que, además de su importancia dentro de los ámbitos claves de la economía, servía también para lograr una integración más allá de la simple cooperación.

La CECA tenía también, sin duda, sus puntos débiles. Y así, la no participación de Gran Bretaña puso definitivamente de manifiesto la imposibilidad de contar todavía durante mucho tiempo con los gobiernos británicos para llevar a cabo una política seria de integración. Pero el éxito del Plan Schuman, perfilado desde muy pronto, dio al movimiento de unificación de Europa occidental un indudable impulso, despertando en los gobiernos el deseo y la confianza de que ahora también se podría resolver de forma semejante el problema tan intensa y largamente debatido, aunque bastante más peliagudo, de la contribución militar de la República Federal. Esta cuestión se consideró inaplazable al precipitarse sobre Europa occidental una nueva ola de temor al imperialismo soviético con la explosión de la guerra de Corea, iniciada el 25 de junio de 1950 por el ataque nor-

coreano a Corea del Sur, de donde Estados Unidos acababa de retirarse en junio de 1949. De nuevo sería Churchill quien propusiera a la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, el 11 de agosto de 1950, la creación de un «ejército europeo», que en su opinión debía incluir a contingentes alemanes. Una vez que los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se hubieron pronunciado en favor de la colaboración defensiva de la República Federal en una conferencia celebrada en Nueva York del 12 al 18 de septiembre, el primer ministro francés René Pleven presentó el 25 de octubre de 1950 a la Asamblea Nacional de París un plan para la creación de un ejército europeo que respondía aproximadamente a la idea de Churchill, aunque de forma algo más concreta. Los Estados integrantes de la CECA —aunque sólo ellos— aceptaron de inmediato el Plan Pleven, pero las negociaciones se demoraron, estando no pocas veces a punto de interrumpirse. Los problemas de carácter político, legal y práctico de la integración militar resultaron difíciles de superar. Por otra parte, Francia se mostró partidaria en un principio de un fuerte control y discriminación de los contingentes alemanes, algo inaceptable por razones políticas para la República Federal, para la que la contribución defensiva era, no en último término, un medio de recuperar su soberanía, y para los cuatro Estados restantes por razones de conveniencia militar y por consideración a Bonn. De no ser por la presión americana, que había prestado ya sus servicios en el nacimiento del Consejo de Europa y de la CECA, Francia habría estado difícilmente dispuesta a hacer las concesiones que finalmente hizo. Hasta el 9 de mayo de 1952 no se podría acabar el proyecto de tratado que establecía el desarrollo de la organización militar supranacional llamada ahora Comunidad Europea de Defensa (CED). La estructura de la CED, sobre la que por fin se había llegado a un acuerdo, debería considerarse también como un modelo medianamente útil para la integración militar: el alto mando —desde la tropa hasta los jefes— sería supranacional, al igual que las instalaciones de aprovisionamiento; solamente serían nacionales las unidades básicas hasta el nivel de división. La dirección de la política armamentista y la estandarización del armamento se adjudicaba asimismo a instancias supranacionales integradas. Por un acta especial se regularon las relaciones entre la CED y la OTAN. Por el círculo de participantes y por su organización, la CED era pues el equivalente militar de la CECA.

Pero, a diferencia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CED seguiría siendo un mero proyecto. Cierto es que

el 27 de mayo de 1952, el tratado de la CED fue firmado en París por los ministros de Asuntos Exteriores de los seis países participantes y que en algunos Estados, como Bélgica, la República Federal y Holanda, también fue aprobado por el Parlamento. En Francia, sin embargo, aumentó la oposición, liquidándose el proyecto de la CED cuando la Asamblea Nacional francesa llegó incluso a rechazar el 30 de agosto de 1954 el debate del tratado. La actitud francesa no era debida al renacimiento de la animadversión de Francia por el ejército alemán, pues nada más

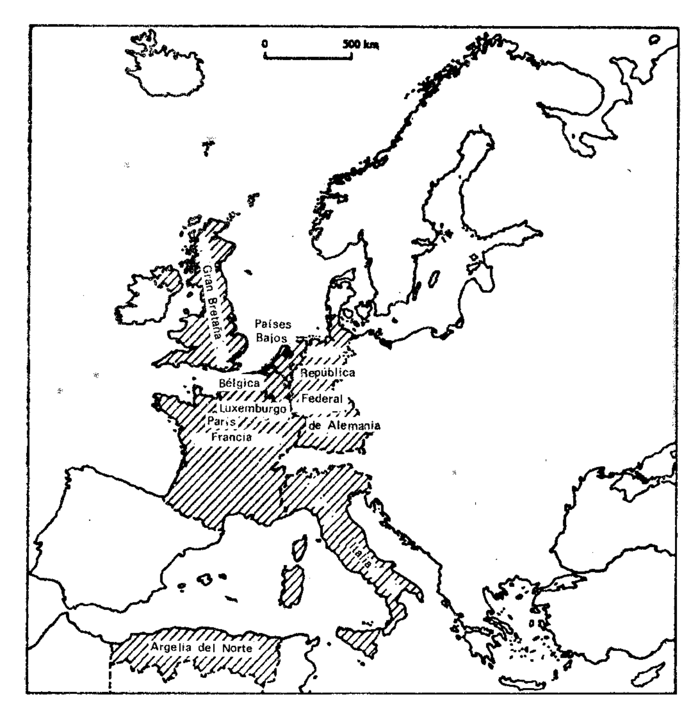


FIG. 4.—*Miembros de la Unión Europea Occidental.*
Tras la reconstrucción de la unión occidental (Pacto de Bruselas), que era una alianza colectiva de Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo y los Países Bajos contra Alemania, se creó la UEO con la entrada de Italia y la RFA el 6 de mayo de 1955. Argelia del Norte se separó tras la independencia de Argelia, el 1 de julio de 1962.

fracasar el proyecto de la CED se emprendía la salvación de la contribución defensiva alemana con la activa colaboración francesa, por lo que, en octubre de 1954 (del 19 al 23), los ministros de Asuntos Exteriores de la primitiva CED, además de los representantes de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, en una conferencia celebrada en París, lograban llegar a un acuerdo sobre una alternativa mediante la revitalización del Tratado de Bruselas, convertido ahora, al ampliarse a Italia y a la República Federal, en la Unión Europea Occidental (UEO) y mediante el ingreso de la República Federal en la OTAN; el 5 de mayo de 1955 entraron en vigor los Acuerdos de París. El motivo francés decisivo era mucho más peligroso para la unificación europea: la animadversión de los políticos franceses ya no se dirigía contra Alemania sino, una vez más, contra la renuncia exigida por la CED de los derechos de soberanía nacional y del poder de decisión sobre el ejército nacional. La UEO contenía también, como es lógico, ciertos elementos de integración. El hecho de que la Unión estuviese autorizada para controlar la renuncia de la República Federal a determinado armamento (por ejemplo, las armas nucleares) y la potencia máxima de los ejércitos de todos los Estados miembros significaba claramente una limitación de las soberanías nacionales; la UEO creó también un Consejo de Ministros que se reunía regularmente y una Asamblea Parlamentaria que se celebraba dos veces al año en París. Ahora bien, en lo esencial, la UEO sólo era una alianza ordinaria, una alianza especial dentro del marco del Tratado del Atlántico Norte, cuya principal misión era la de introducir a la República Federal dentro de la OTAN, y la victoria, simbolizada por la transición de la CED a la UEO, de un espíritu no dispuesto a renunciar a la soberanía del Estado nacional —encarnado en su forma más genuina por el general De Gaulle— eliminó un gran obstáculo en el camino hacia el proceso de unificación de Europa occidental. El 23 de enero de 1955, el V Congreso de la Unión de Federalistas Europeos aprobaría asimismo una resolución por la que se declaraba la guerra a la ruptura con la política de unificación europea reconocida por la UFE en los Acuerdos de París de octubre de 1954.

No obstante, el fracaso de la CED no acabó ni con la idea de Europa ni con su afianzamiento organizativo. Después de la resolución de la Asamblea Nacional francesa del 30 de agosto de 1954 se había puesto claramente de manifiesto que la mera existencia, totalmente libre de peligros, de las instituciones europeas surgidas entre tanto, ya fuese el Consejo de Europa o la CECA, era

ya como una especie de red fija dispuesta para recoger a quienes se caían de la cuerda y facilitarles de inmediato la posibilidad de intentarlo de nuevo. Por otra parte, el Consejo de Europa, a pesar —o tal vez a causa— de la limitación de sus competencias, cumplía con su destino en la medida en que era capaz de mantener vivo en la Europa no soviética el espíritu europeo y la idea de una asociación europea amplia; con la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que entró en vigor el 3 de septiembre de 1953, el Consejo podía presentar además resultados concretos de su trabajo. El fracaso del proyecto de la CED tampoco acabó con la buena disposición de los gobiernos europeos occidentales a una cooperación que, al menos, apuntaba hacia la integración. Cierto es que los federalistas europeos habían sufrido una derrota casi demoledora, pero la voluntad de una «integración funcionalista» siguió en pie. Del 1 al 3 de junio de 1955, los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la CECA celebraron un encuentro en Mesina, declarando en el comunicado final de la conferencia: «Los gobiernos de la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos consideran llegado el momento de cubrir una nueva etapa en el camino hacia la integración europea. Son de la opinión de que esta etapa ha de cubrirse, primeramente, en el terreno económico. Consideran que se ha de seguir persiguiendo la creación de una Europa unida mediante el desarrollo de instituciones comunes, la paulatina fusión de las economías nacionales, la creación de un mercado común y la paulatina armonización de su política social».

El 9 de julio de 1955 se iniciaban ya en Bruselas, bajo la presidencia de Spaak, conversaciones de los expertos en economía de los seis países en las cuales tomaron parte también representantes del Consejo de Europa y de la OECE. Políticos como el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés Johan Willem Beyen y el francés Jean Monnet, el verdadero padre del Plan Schuman y presidente de 1952 a 1955 de la Alta Autoridad de la CECA, instaron enérgicamente a que se progresara rápidamente. A pesar de que las negociaciones resultaron difíciles, habida cuenta de las numerosas cuestiones particulares que habían de resolverse precisamente por tratarse de una integración funcionalista, los expertos presentarían ya en noviembre informes parciales y, en febrero de 1956, el informe final. Los ministros competentes siguieron trabajando sobre esta base y, un año más tarde, el acuerdo estaría listo para ser firmado. Los jefes de gobierno y los ministros de Asuntos Exteriores firmarían en la

capital italiana, el 25 de marzo de 1957, el Tratado de Roma, por el cual los seis Estados participantes constituyeron, primero, una Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM) para la cooperación en el campo de la investigación nuclear y para la utilización pacífica de la energía atómica [9] y, en segundo lugar, una Comunidad Económica Europea (CEE) [10]. El Tratado de la CEE establecía así finalmente las condiciones necesarias para un mercado común, que se debería crear en un plazo de transición de doce años, y para la coordinación de la política económica de los Estados miembros. Se preveía asimismo una unión aduanera que garantizase el libre tráfico de mercancías dentro de la nueva zona económica, así como, principalmente, una política agraria común; un avance no menos importante sería el acuerdo por el que se concedía a los trabajadores libertad de residencia en la zona. Como órganos de la CEE surgieron el Consejo de Ministros, la Asamblea, la Comisión, el Tribunal y los Comités Económico y Social. Los seis gobiernos declararon además expresamente que, sobre la base de la unidad económica, pronto se habría de crear una «Unión Política» [11].

II. GRAN BRETAÑA

La era laborista

A los dos meses de haber finalizado en Europa la segunda guerra mundial, los electores británicos acudían a las urnas por primera vez desde hacía diez años, pronunciándose mediante un voto considerado por muchos como sensacional, el 7 de julio de 1945, por el abandono por parte de Winston Churchill de su residencia oficial en el número 10 de Downing Street, ocupada por él en mayo de 1940, en el momento en que sobre la isla se cernía la mayor amenaza militar. Los ciudadanos británicos otorgaron al Partido Laborista la mayor victoria electoral de su historia, expresando así su deseo de poner en sus manos, y no en las del brillante primer ministro durante la guerra y de su Partido Conservador, el gobierno de la nación en tiempos de paz. Los años de entreguerras, caracterizados por la penuria económica, el elevado desempleo y la agudización de los conflictos sociales, en los que los *tories* habían dado el tono, estaban tan poco olvidados como su política, restrospectivamente muy criticada, de *appeasement* frente a los dictadores del continente (a los que Churchill había atacado, sin embargo, vehementemente).

El catalizador del giro hacia la izquierda de 1945 fue la propia guerra [12]. La movilización general de la nación, más próxima en Inglaterra a la «movilización total» de la población predicada por Joseph Goebbels en la Alemania hitleriana, había exigido grandes sacrificios en todos los ámbitos de la vida por parte de todas las capas sociales, haciendo de la solidaridad social una imagen viva. La intervención estatal en muchos campos de la vida privada y pública, necesarios y efectivos durante la guerra, en 1945 había perdido ya en general el olor a igualitarismo y paternalismo. Por otra parte, los ministros laboristas de la coalición de guerra, a la que se puso fin el 23 de mayo de 1945, habían demostrado que no eran en absoluto unos utópicos socialistas, sino unos políticos pragmáticos y fiables.

Churchill erraría, pues, completamente en la interpretación del estado de ánimo predominante en el país al pintar como el fantasma de un colectivo autoritario, e incluso como una Gestapo socialista, en un mitin electoral pronunciado a primeros de junio, el amplio programa de reformas sociales y económicas del Partido Laborista. Con ello menospreció las expectativas, muy difundidas también fuera de la clase trabajadora, de la necesidad de evitar como fuese una vuelta a la situación de antes de la guerra, tras el esfuerzo común por derrotar al enemigo exterior, y de introducir una mejora decisiva en la situación social general de Gran Bretaña. Para el elector, los socialistas eran los más capacitados para hacer realidad lo que en 1940 había formulado ya el *Times:* «Cuando hablamos de democracia, no nos referimos a una democracia que defienda el derecho a votar, pero que descuide el derecho a trabajar y a vivir. Cuando hablamos de libertad, no nos referimos a un puro individualismo que excluya la configuración social y la planificación económica. Cuando hablamos de igualdad de derechos, no nos referimos a una igualdad de derechos política que sea destruida de nuevo por los privilegios sociales y económicos» [13].

El 27 de julio de 1945 se constituyó el nuevo gobierno, cuyo primer ministro sería Clement Attlee [14], presidente del Partido Laborista desde 1935, que por su estilo poco espectacular aparecía como el polo opuesto de Churchill. El Foreign Office pasó a manos de Ernest Bevin, que antes de la guerra había sido el dirigente sindical británico más influyente y durante la guerra, como ministro de Trabajo con amplios poderes especiales, el motor de la movilización del *home front* británico. Con hombres como Herbert Morrison, Stafford Cripps, Hugh Dalton, miembros asimismo del gobierno Churchill, y Aneurin Bevan, el gabinete laborista de 1945 fue, «en lo que a prudencia y laborio-

sidad se refiere, uno de los mejores de la historia británica» [15] y contó con el apoyo de 392 de los 640 diputados de la Cámara de los Comunes.

El gobierno Attlee se encontró en 1945 con cuatro tareas políticas estrechamente interrelacionadas: tenía que superar el agotamiento económico y financiero del país y, al mismo tiempo, tratar de imponer el amplio programa de reformas esbozado por el Partido Laborista en su manifiesto electoral *Let us face the future;* por otra parte, el gobierno tenía que reconsiderar el papel de Gran Bretaña dentro de la política internacional en el contexto de la constelación de fuerzas surgidas de la segunda guerra mundial y, finalmente, debía tratar de guiar la emancipación de los pueblos de color del imperio colonial salvaguardando los intereses británicos de manera que ello no supusiera nuevas cargas para el Reino Unido [16].

La situación económica de Gran Bretaña había empeorado dramáticamente durante los seis años de guerra. Entre 1939 y 1945 se perdió aproximadamente una cuarta parte del patrimonio nacional. Para el pago del armamento y las importaciones de productos alimenticios y materias primas, Gran Bretaña, que desde siempre había dependido en gran medida de las importaciones, se había visto obligada a utilizar una parte sustancial de sus reservas de oro y divisas, así como de su patrimonio exterior, perdiendo asimismo un tercio de la flota mercante. Pero el daño mayor fue el sufrido por las relaciones británicas tradicionales de comercio exterior. Se habían perdido los mercados de consumo y las exportaciones se habían reducido desde 1939 en aproximadamente dos tercios de su volumen. Con el descenso de los beneficios de la exportación y de los llamados ingresos invisibles, es decir el reflujo de los beneficios de las inversiones en el extranjero, los créditos, los fletes o los seguros, la balanza de pagos británica había desembocado en un grave déficit. En 1945, menos de una quinta parte de las importaciones podía ser financiada con los beneficios de la exportación. El destino económico de la isla dependía por completo de la reanimación del comercio exterior.

La situación de la que en otro tiempo fuese una potencia comercial mundial sufrió un agravamiento inmediato con la brusca interrupción de los suministros americanos en *lend-lease* (préstamo en arriendo) el 19 de agosto de 1945. Conforme a las disposiciones del programa del año 1941, Gran Bretaña podía recibir material bélico, productos alimenticios y otros bienes de consumo de Estados Unidos sin tener en principio que pagarlos. Teniendo en cuenta que las necesidades del país en materia de importa-

ción al final de la guerra aumentaron, hasta que no se recuperase una capacidad de exportación suficiente no quedaba otra salida que compensar el déficit de la balanza de pagos mediante la aceptación de créditos sobre todo naturalmente de Estados Unidos.

El resultado de las negociaciones iniciadas a finales de septiembre de 1945 en Washington, y en las que participó como representante del gobierno laborista nada menos que Lord Keynes, el teórico de economía más admirado de su tiempo, quedó muy por debajo de las expectativas [17]. Cierto es que Estados Unidos redujo las deudas de guerra británicas de 12 000 millones a 650 millones de dólares, pero con el préstamo concedido de 3 750 millones de dólares (Canadá añadiría, por su parte, otros 1 250 millones de dólares), Washington impuso dos condiciones que fueron consideradas discriminatorias. Gran Bretaña habría de volver hasta mediados de 1947 a la libre convertibilidad de la libra esterlina e iniciar la supresión de las preferencias comerciales dentro de la Commonwealth. Estas imposiciones, que habrían de favorecer principalmente a la economía de Estados Unidos, mucho más fuerte, desencadenaron en Inglaterra amargos comentarios acerca de las negociaciones, que en más de una ocasión estuvieron a punto de fracasar, y ello no en último término por considerarse que los americanos mantenían puntos de vista exclusivamente económicos. A este respecto se podía leer en el *Economist* lo siguiente: «Nuestra actual precariedad es la consecuencia directa de que hayamos sido los que primero, más tiempo y más duro hemos combatido. Desde el punto de vista moral, nosotros somos los acreedores». En 1945, Estados Unidos no había reconocido aún en toda su amplitud las pérdidas británicas sufridas durante la guerra. Por ello, Gran Bretaña no fue tampoco «tratada como un socio menor agotado en la lucha contra los tiranos, sino como un rival comercial importante que presenta de una forma exagerada sus dificultades económicas» [18].

Al gobierno laborista no le quedó otro remedio que aceptar las condiciones crediticias americanas. Sin la entrada de dólares de ultramar no existía ni la perspectiva de una pronta mejoría de tan crítica situación de abastecimiento ni la de una rápida recuperación económica. Por otra parte, las reformas sociales y económicas anunciadas, cuya realización se iniciaba ahora, apenas habrían tenido el margen necesario para llevarse a cabo.

El gobierno Attlee, que podía recurrir a planteamientos teóricos, pero no a planes detallados acerca de la realización de la tradicional reivindicación socialista de nacionalizar las ramas más

importantes de la economía, se puso cautelosamente manos a la obra ante la situación económica y su propia inseguridad. El programa de nacionalización comenzó en 1945 con la ley de nacionalización del Banco de Inglaterra, acto más bien simbólico que cambió en muy escasa medida el papel de esta institución y que sería el único ataque directo a la economía financiera y crediticia británica, por otra parte muy ramificada. En cuanto a la explotación de las minas de carbón, se evitó la clausura de muchas empresas anticuadas y no rentables mediante su conversión en propiedad estatal (Coal Industry Nationalisation Act, 1946). La nacionalización del gas y la electricidad eliminó sobre todo el fraccionamiento de este sector en más de quinientas empresas diferentes. En el ámbito de las comunicaciones, principalmente del ferrocarril, tras su nacionalización hubieron de realizarse enormes inversiones procedentes de los recursos tributarios para la renovación de las líneas y los materiales desgastados durante la guerra. Los sectores y las ramas de la economía afectados por las medidas nacionalizadoras fueron pues, primordialmente, aquellos que ya estaban sometidos de alguna forma al control estatal. El gobierno laborista no tenía el menor interés en arriesgarse a una prueba de fuerza con la economía privada. No se puede hablar, por tanto, del tan discutido control o simplemente asunción de los «mandos» de la economía británica. Los sectores más rentables siguieron estando en manos privadas. La incautación de una rama verdaderamente clave, como era la de la industria del hierro y del acero, bastante saneada en su conjunto, se demoraría hasta comienzos de 1951, debido a las diferencias de opinión existentes dentro del gabinete y a la oposición de los conservadores y de los propietarios afectados [19].

Los sectores económicos nacionalizados no pasaron directamente bajo el control estatal; antes bien, su dirección fue asumida por las llamadas *public corporations,* órganos administrativos bajo supervisión ministerial dotados de una cierta autonomía. Para decepción de muchos socialistas, las medidas de nacionalización no fueron aquella transformación revolucionaria de la estructura del poder en el país reivindicada en los escritos del Partido Laborista, ni tampoco cambió siquiera el carácter tradicional de las relaciones entre trabajadores y capitalistas tras la desaparición de los propietarios, generosamente indemnizados.

Las grandes reformas sociales del gobierno laborista posteriores a 1945 han determinado en cambio la vida del ciudadano medio británico hasta la actualidad. El establecimiento de un moderno Estado de bienestar social fue «tal vez el mayor logro de Gran Bretaña después de la guerra» [20]. Con la National Insurance Act

y la National Health Service Act, en el año denominado por el ministro de Hacienda Hugh Dalton *«annus mirabilis»*, el prodigioso año de 1946, el gobierno Attlee sentó las bases para un nuevo sistema de seguridad social y para una reestructuración de la sanidad. Ambas cosas habían sido exigidas ya durante la guerra por los sindicatos y el Partido Laborista, si bien las reformas sociales estuvieron estrechamente vinculadas con las correspondientes propuestas del año 1942 (Report on Social Insurance and Allied Services) del que fuera durante muchos años director de la London School of Economics y diputado liberal de la Cámara de los Comunes Sir William (más tarde Lord) Beveridge. Exceptuando la tibia acogida, en un primer momento, entre una parte de los conservadores, el informe Beveridge halló una amplia y creciente aceptación entre el público británico como documento sociopolítico con perspectivas de futuro.

El sistema de seguridad social creado en 1946 se basaba en el principio de la universalidad. En adelante, prácticamente todos los adultos estaban obligados a asegurarse, adquiriendo el derecho a prestaciones en caso por ejemplo de desempleo, pérdida de salario por enfermedad, accidente y jubilación. Con la seguridad social unificada, el laborismo inició al mismo tiempo y de forma consciente la redistribución de las rentas. El sistema de seguridad, en el que también se incluyó al empresariado, funcionaría admirablemente en los veinte años siguientes de pleno empleo también en el aspecto financiero; entre un 70 y un 90% de las prestaciones quedaban cubiertas por las cuotas.

La creación del National Health Service hubo de ser impuesta, tras duros debates, frente a la resistencia de la poderosa asociación médica británica, por el ministro de Sanidad Aneurin Bevan, portavoz del ala izquierda del laborismo y *enfant terrible* del gabinete. El objetivo principal de la reestructuración, que conllevaba el tratamiento médico gratuito para todos, era asegurar una asistencia médica igual para todas las zonas del país y garantizar a los ciudadanos unos servicios médicos óptimos con independencia de sus posibilidades económicas. Para ello, el Estado se hizo cargo de todos los hospitales, poniéndolos en manos de órganos administrativos regionales, los Hospital Boards, en los que el cuerpo médico se hallaba fuertemente representado. Para la medicina general y especializada se creó una estructura administrativa similar. La oposición de los médicos sólo cedió cuando Bevan, abandonando las reivindicaciones de su partido, prometió a los médicos que nunca, ni siquiera en un futuro, se convertirían en empleados a sueldo fijo del Estado y dejó a su arbitrio el que siguieran ejerciendo su profesión de forma privada o

dentro del National Health Service. Al entrar en vigor el nuevo sistema en 1948, el noventa por ciento de los médicos británicos habían decidido cooperar con él. Una inspección realizada cinco años más tarde puso de manifiesto que el National Health Service, financiado casi por completo con recursos fiscales, se ajustaba en general a los presupuestos, en contra de la opinión más extendida. Años después del enfrentamiento entre el cuerpo médico y el gobierno laborista, el renombrado *British Medical Journal* escribía que, a la hora de enumerar los grandes logros del siglo XX, habría que incluir también al National Health Service.

En la era laborista surgieron también nuevos planteamientos en el campo de la enseñanza, la planificación urbana y regional, los derechos de la juventud y las leyes de arrendamiento que, sin embargo, se quedarían un poco a la sombra de la gran obra de reforma social, destino que habrían de compartir con otras leyes reformistas, tales como la supresión de los castigos corporales en la aplicación de las penas o la garantía de asistencia jurídica para los económicamente débiles. Con la eliminación del *plural voting*, que entre otras cosas concedía a las Universidades una representación propia en la Cámara de los Comunes asegurada por el derecho al doble voto, en 1948 caería una de las prácticas más obsoletas del parlamentarismo inglés.

El impulso reformador del gobierno laborista se vio acelerado por una recuperación económica inesperadamente rápida del país durante el año 1946[21]. La adaptación de la producción de guerra a la de paz transcurrió sin problemas. A finales de 1946, el nivel de producción industrial era ya superior al de 1938 y las exportaciones superaban asimismo la situación de antes de la guerra. El aprovisionamiento de productos de primera necesidad mejoró sensiblemente y, pese a la existencia de una cierta presión inflacionaria, el nivel de vida de la población se consolidó moderadamente al ser subvencionados por el Estado toda una serie de alimentos básicos. Las tasas de desempleo, situadas en la época de entreguerras en una media del diez por ciento, pudieron mantenerse en aproximadamente un dos por ciento. Con ello, el laborismo salvaguardó un interés nacional proclamado ya durante la guerra por el gobierno de coalición (White Paper on Employment Policy, 1944). No obstante, en 1947 el gobierno y la población de Gran Bretaña hubieron de enfrentarse bruscamente al hecho de que la economía británica todavía no había superado la crisis. El crédito en dólares americanos se agotó dos años antes de lo esperado. A mediados de 1947 se habían consumido las nueve décimas partes del préstamo, por otra parte fuerte-

mente devaluado por el aumento de los precios en Estados Unidos. La consolidación de la economía y la reforma social habían costado mucho dinero y las obligaciones internacionales de Gran Bretaña suponían una pesada carga para los presupuestos. La sola presencia británica en Alemania y las ayudas para el mantenimiento de la zona de ocupación consumieron en el espacio de dos años más de doscientos millones de dólares. Hubo de solicitarse un nuevo crédito con mayor motivo al producirse un descenso transitorio de la producción, y con ello pérdidas en la exportación, en el invierno de 1946-47, el más duro desde hacía más de sesenta años, a consecuencia de las dificultades en el suministro de energía. La catástrofe se produjo cuando el gobierno británico, cumpliendo las obligaciones contraídas durante la negociación de los créditos de 1945, anunció el 15 de julio de 1947 la libre convertibilidad de la libra esterlina. La fuga de la débil libra al dólar USA que se inició de inmediato fue tal que, cinco semanas más tarde, el experimento sería interrumpido con la conformidad americana. La *convertibility crisis* de 1947 confirmó drásticamente la pérdida de capital sufrida en la guerra por la que antes había sido una potencia económica mundial. La estrategia de salvar el período hasta que la exportación británica alcanzase nuevamente un volumen suficiente para cubrir las importaciones con ayuda del préstamo en dólares había fracasado.

La inesperada gravedad de la crisis suscitó dudas acerca de la competencia del gobierno Attlee. El malogrado intento de algunos miembros del gabinete de sustituir al primer ministro por Ernest Bevin no contribuyó tampoco a aumentar su prestigio. El gobierno socialista inició sin embargo con éxito la fuga hacia adelante, logrando escapar a las sombras del *«annus horrendus»* (Hugh Dalton), el horrible año de 1947. Ello se debió en gran medida a Sir Stafford Cripps [22], que a finales de año se puso a la cabeza del recién fundado ministerio de Economía y asumió la dirección de Hacienda, antes en manos de Hugh Dalton. Ni antes ni después ha reunido un ministro británico tal cúmulo de poder para la dirección de la economía. Sir Stafford Cripps, cristiano comprometido e intelectual de vida ascética, había sido excluido transitoriamente en los años treinta del Partido Laborista por defender el frente popular; durante la guerra fue embajador en Moscú y, más tarde, ministro de Churchill. Primeramente perteneció al gobierno laborista como ministro de Comercio. La imaginación de los caricaturistas no hubiese podido encontrar una figura más acertada, pues su aspecto enjuto era, por así decirlo, la personificación ideal de la famosa política de austeridad iniciada ahora por Cripps. Sólo una reducción de las importaciones,

tal era su objetivo, y una limitación radical del consumo privado, acompañadas de un fomento en la industria de exportación, podrían tapar el agujero existente en la balanza de pagos. En una ocasión explicó a sus conciudadanos el rumbo tomado con estas sencillas palabras: «Nuestras exigencias de consumo ocupan el último lugar en la lista de prioridades. El primer lugar lo ocupa la exportación; el segundo, las inversiones, y, por último, aparecen las necesidades, las comodidades y las cosas agradables para la familia» [23]. Con la reducción de las importaciones de los países del dólar desaparecieron muchos artículos codiciados de los escaparates. Se racionó un número de productos alimenticios mayor que antes. Al racionamiento del pan introducido en 1946 se añadió en 1947 el de las patatas. Se recortaron las raciones de carne y se puso a la venta un tercio menos de combustible. La importación de tabaco de Estados Unidos quedó interrumpida y los viajes al extranjero prohibidos. Hasta 1950 seguiría racionada en Gran Bretaña la leche; el azúcar, hasta 1953, y el carbón incluso hasta 1958. A finales de la década de 1940, según escribiría posteriormente un escritor británico, «el Reino Unido parecía encontrarse bajo ocupación enemiga». Hasta mediados de 1950, Cripps pudo inducir a los sindicatos a observar una actitud moderada. Aunque entre 1948 y 1950 los precios subieron en un ocho por ciento, los salarios sólo se vieron incrementados en un cinco por ciento. Paralelamente a las medidas de ahorro, el funcionamiento conjunto de los innumerables Boards, Councils o Committees, estatales o semiestatales, de la esfera de la economía y de las finanzas mejoró hasta el punto de que la economía británica pudo recibir impulsos más adecuados y efectivos que hasta entonces. El gobierno disponía además del instrumental, heredado en su mayor parte de la guerra, de los controles directos de la economía si bien, a diferencia de lo pregonado por la retórica del partido en el gobierno, la economía británica de la era laborista no sería «'planificada' ni en cuanto a su estructura ni en cuanto a su desarrollo» [24].

A los esfuerzos propiamente británicos para lograr la consolidación de la situación económica se añadió muy pronto el programa de ayuda de Estados Unidos a Europa anunciado el 5 de junio de 1947 por el secretario de Estado americano George C. Marshall, de cuyos recursos aproximadamente la mitad fueron a parar a Gran Bretaña y Francia. Hasta finales de 1950 entraron en el Reino Unido cerca de 2 700 millones de dólares americanos (las cuatro quintas partes de los cuales eran a título de regalo) que sirvieron para tapar el «agujero de dólares».

La ayuda americana del Plan Marshall y los esfuerzos de los

propios británicos dieron fruto. En 1950, ya hacia el final de la era laborista, los problemas económicos ocasionados por la guerra habían sido superados. La producción industrial había vuelto a incrementarse en un treinta por ciento frente a la de 1947, había pleno empleo y se había logrado contener la tasa de inflación, pudiéndose eliminar también algunas medidas de control estatal. El volumen de las exportaciones británicas había aumentado en un sesenta por ciento frente al del año de la crisis de 1947, con tan sólo un incremento moderado de la tasa de importaciones. La radical devaluación de la libra en un treinta por ciento en septiembre de 1949 (nueva paridad: 1£=2,80$) siguió mejorando las posibilidades del comercio exterior. La balanza de pagos británica, que había iniciado una recuperación en 1948, en 1950 arrojaba un superávit de trescientos millones de libras. Cierto es que la devaluación y el brusco encarecimiento de las materias primas a consecuencia de la guerra de Corea habían provocado un aumento considerable de los precios y, de nuevo, preocupaciones en relación con la balanza de pagos, pero cuando los conservadores llegaron al poder a finales de 1951 era evidente que, desde el punto de vista económico, se habían «superado ya los problemas más acuciantes de los años de posguerra» [25].

No obstante, el masivo apoyo americano y la política de austeridad, acompañados de la construcción de una seguridad social y una sanidad eficientes, difícilmente habrían hecho posible la paulatina recuperación de Inglaterra de no ser porque el gobierno Attlee procuró reducir también parcialmente las obligaciones británicas a nivel internacional, que pesaban gravemente sobre los presupuestos. Después de la guerra, había soldados y funcionarios gubernamentales británicos en todas las partes del mundo: al este de Suez, desde Hong Kong, pasando por Birmania e India, hasta Palestina, y al oeste de Suez, desde Egipto, pasando por Sierra Leona, hasta Honduras británicas (Belice). Gran Bretaña era la potencia dominante en la zona mediterránea y una potencia de ocupación en Alemania, Austria e Italia; en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenía el mismo derecho decisivo de voto que en las conferencias de ministros de Asuntos Exteriores de la antigua coalición antihitleriana. Es indudable que la guerra ya había puesto de manifiesto el desarrollo inigualable del poder de Estados Unidos y de la Unión Soviética, pero dado que el Reino Unido siguió teniendo después de 1945 el rango de potencia mundial, aún pasaría bastante tiempo hasta que la opinión pública e incluso algunos políticos tuviesen plena conciencia de que el león británico ya no podría

dar saltos demasiado grandes. El argumento general de la existencia de una situación económica desolada pudo, sin embargo, ser utilizado también en otros casos en los que el *disengagement* británico no tenía motivos de índole exclusivamente económica. En ocasiones, los británicos trataron también de conseguir que Estados Unidos asumiera un compromiso político internacional mediante una presentación especialmente sugestiva de su precaria situación económica. Uno de los objetivos principales de la política exterior británica era vincular Estados Unidos a Europa de una forma especial e irreversible[26].

Al ministro de Asuntos Exteriores Bevin se le presentaba una tarea en modo alguno sencilla, pues tras la concordia angloamericana durante la guerra no sólo surgieron discrepancias en lo referente a la negociación de los créditos, sino que también reapareció con más fuerza la permanente desconfianza americana hacia el colonialismo británico. A su vez, algunos políticos del Partido Laborista empezaron a preocuparse por la idea de una «política exterior socialista», o bien, como por ejemplo Michael Foot, del ala izquierda, aconsejaron a Gran Bretaña y a la Commonwealth la búsqueda de una «tercera vía» entre el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. La política exterior bajo Ernest Bevin no se vio, sin embargo, demasiado influenciada por tales reflexiones en una época en la que por todas partes aparecían indicios de un enfrentamiento progresivo entre el Este y el Oeste. La postura de realismo pragmático adoptada por Bevin no se hallaba muy alejada de los puntos de vista de un Anthony Eden o un Winston Churchill. El escepticismo mostrado ya por el que fuera primer ministro durante la guerra frente a las ambiciones soviéticas en Europa oriental, en el Mediterráneo oriental o en Irán era compartido —y fue muy pronto expresado— también por Bevin, actitud que en la Administración Truman sólo se impondría a lo largo de 1945 y que, finalmente, desembocaría en la convicción común de la existencia de una amenaza soviética a Occidente.

El año de la crisis de 1947, que constantemente hizo patente a los ojos de Estados Unidos la situación crítica de Gran Bretaña y de los demás Estados europeos, marcó la fecha en que Estados Unidos rompió por completo con su tradición en política exterior, decidiéndose por un compromiso duradero con ultramar. El 12 de marzo de 1947, el presidente Truman hizo la promesa de «apoyar a todos los pueblos libres que se opongan a cualquier intento de sojuzgamiento por parte de minorías armadas o a cualquier presión extranjera». El impulso directo a la doctrina del *containment* sería dado por el dramático llama-

miento británico del 21 de febrero de 1947 a los Estados Unidos, Grecia y Turquía, en lucha con los guerrilleros comunistas o bajo la presión diplomática de la URSS, de «no caer bajo la influencia soviética» y asumir por ello de forma inmediata la ayuda económica a ambos países que Gran Bretaña no se veía capaz de dar por más tiempo[27]. Los Estados Unidos concedieron inmediatamente su apoyo, reemplazando en el Mediterráneo oriental a Gran Bretaña, país que a finales de 1944 ya había intervenido en Grecia con una postura anticomunista. La conocida debilidad económica de Inglaterra se reveló como una razón excelente para justificar la llamada de socorro, realizada inteligentemente en un momento muy oportuno. Bevin hizo grandes progresos en sus esfuerzos por lograr una vinculación más estrecha de los Estados Unidos en Europa al aceptar también de inmediato la oferta del secretario de Estado americano George C. Marshall, hecha tres meses más tarde, de un programa de ayuda para Europa y al participar decisivamente en la rápida reacción de los dieciséis países europeos beneficiarios del Plan Marshall que en abril de 1948 se unieron para crear la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). Las iniciativas y la habilidad negociadora del ministro laborista de Asuntos Exteriores se hicieron también visibles en otras etapas del camino hacia la formación del bloque occidental, tales como la firma del Tratado de Bruselas entre Francia, Gran Bretaña y los Estados del Benelux, igualmente en la primavera de 1948, o la del Tratado del Atlántico Norte, un año más tarde, que establecía la alianza militar entre diez Estados europeos, Canadá y los Estados Unidos.

En la Alemania ocupada[28], en donde los ingleses habían perdido ya antes que los americanos la fe en una colaboración fructífera con la Unión Soviética, Gran Bretaña cedería, como muy tarde a finales de 1947, el papel rector a los Estados Unidos como contrapartida a la disposición de este país a cargar con el peso que para los presupuestos británicos suponía el mantenimiento de la zona de ocupación. Tan sólo en los primeros cinco meses de 1947, el ministerio de Hacienda había tenido ya que facilitar fondos por un valor de noventa millones de dólares. La cooperación angloamericana, que en conjunto funcionó muy bien, se hizo patente en los esfuerzos por crear un Estado federal en Alemania occidental, así como en la operación del puente aéreo durante el bloqueo de Berlín de 1948-49, realizada con gran éxito. Esta arriesgada empresa, en la que un tercio de los aviones de transporte fueron ingleses, también revelaría, sin embargo, un aspecto preocupante de la estrategia —a la que por

otra parte no se veían alternativas— de apoyo en Estados Unidos: las obligaciones que pronto se derivaron de la agudización del enfrentamiento entre las superpotencias estaban nuevamente por encima de las posibilidades británicas.

Era inevitable que la pérdida de autonomía internacional de Gran Bretaña acelerase los cambios dentro del Imperio británico. Churchill ya había apuntado esta interdependencia cuando a finales de 1946, en un áspero debate, reprochó al primer ministro Attlee: «El Imperio británico parece desvanecerse casi con la misma rapidez que el préstamo americano»[29]. De hecho, el gobierno laborista pronto empezó a reducir las obligaciones de Inglaterra en ultramar y a iniciar el desmantelamiento del imperio colonial británico, en el cual vivían cerca de quinientos millones de personas. Aproximadamente medio millón de soldados británicos seguían estacionados en ultramar; su manutención absorbió en 1946 más de doscientos millones de libras, suma equivalente a los dos tercios del déficit de la balanza de pagos del mismo año. Al inicio del año de la crisis de 1947 se produjo un verdadero torrente de declaraciones de renuncia a la política colonial. El gobierno Attlee ratificó la intención de efectuar una reducción acelerada de las tropas en Egipto y de renunciar al mandato sobre Palestina a partir del 15 de mayo de 1948. A Birmania se le concedió prontamente la independencia, y el 20 de febrero de 1947 Attlee anunció la inminente retirada de las Indias Británicas, las posesiones más importantes de ultramar. Aun cuando la mayoría de los conservadores viesen en ello una renuncia británica a las bases de su posición como potencia mundial, el gobierno laborista no vaciló sin embargo en fomentar incluso los afanes independentistas de la India, que ya existían desde hacía largo tiempo. Tras la división de la colonia entre la India y Pakistán, resultante del enfrentamiento entre hindúes y musulmanes, ambos Estados consiguieron la independencia el 15 de agosto de 1947, después de la cual la imagen del subcontinente quedaría configurada por las expulsiones y la guerra civil; ahora bien, Inglaterra se había «librado de la India sin el esfuerzo ni el coste de una guerra colonial y, más aún, con el aplauso de la opinión pública internacional»[30]. La rápida decisión —tachada también a veces de precipitada— del gobierno Attlee de abandonar la India fue tanto más fácil de tomar cuanto que era asumida por un partido en el que la crítica al colonialismo y la comprensión de las aspiraciones de los pueblos de color a la autodeterminación se hallaba desde siempre mucho más arraigada que en las filas de los *tories*. La renuncia a las

posiciones británicas en Oriente Próximo fue contemplada asimismo sobre todo por razones de estrategia militar, aunque en principio fuese desechada. La descolonización de Africa no entraría sino algo más tarde en su estadio decisivo.

India, Pakistán y poco después Ceilán fueron los primeros Estados miembros de la Commonwealth con un gobierno no blanco que decidieron permanecer dentro de esta comunidad flexible y basada en la libre voluntad de unos Estados autónomos cuya cohesión se cimentaba en una herencia política e institucional común y en unas relaciones culturales recíprocas [31], pudiendo así disfrutar especialmente las preferencias comerciales dentro de la Commonwealth acordadas en 1932. Después de 1945, Inglaterra logró mantener en general unas relaciones amistosas con sus antiguas colonias, la mayor parte de las cuales se convertirían el día de su independencia en miembros de la Commonwealth. Los Estados que —como Birmania— mostraron deseos de separarse de la «familia de pueblos británicos» no encontraron obstáculos en ello por parte de Londres. Sólo en raras ocasiones permitió Inglaterra que fuese un movimiento militar el que dictase la forma y el ritmo en que había de retirarse de los territorios de ultramar, como lo demuestra la larga y costosa guerra en la selva contra la guerrilla comunista en Malasia iniciada en 1948, o la represión de los «mau-mau» en Kenia a comienzos de la década de 1950.

Las transformaciones dentro del Imperio británico no hicieron que perdiesen importancia, en un principio, las estrechas relaciones políticas, económicas e incluso afectivas entre el Reino Unido y la Commonwealth, siendo ésta una de las razones más importantes de la actitud vacilante de Inglaterra frente a la integración europea. «Gran Bretaña no es simplemente una isla pequeña y densamente poblada situada frente a las costas occidentales de la Europa continental», declaró Hugh Dalton a finales de 1949 a un socialista francés en la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa en Estrasburgo; «es el centro neurálgico de una Commonwealth mundial que abarca todos los continentes» [32]. Las tres cuartas partes del comercio inglés se efectuaban con países extraeuropeos y la mitad con Estados de la Commonwealth. Muchos de los protagonistas de la unificación europea no eran lo bastante conscientes de la existencia de los estrechos vínculos que unían al Reino Unido con ultramar. Por otra parte, en Gran Bretaña no existía una gran inclinación a que la soberanía de las instituciones políticas británicas tradicionales, que durante la segunda guerra mundial no habían sufrido ningún tipo de solución de continuidad, se viese recortada por autori-

dades europeas supranacionales. Ello se puede decir tanto de los conservadores como de la mayoría de los socialistas. En el continente, por el contrario, muchos eran de la opinión de que la actitud reservada de Inglaterra se debía ante todo al color político del gobierno en funciones. Los *tories* utilizaron esta impresión para poner en apuros en más de una ocasión al gobierno laborista, reprochándole su falta de compromiso político con Europa. De hecho, Gran Bretaña contribuiría en gran medida a que el Consejo de Europa, en el que aún no había ingresado, no obtuviese ninguna competencia decisiva. Tampoco participaría en la CECA, propuesta por Robert Schuman en mayo de 1950, casi en el mismo momento en que el laborismo imponía la nacionalización de la industria del hierro y del acero. Esta decisión no fue motivada sin embargo —según se creyó entonces— por una oposición, basada en razones de orden político, al nacimiento de un cártel poderoso de la economía privada, sino por la idea que en agosto de 1950 era expresada por el conservador Harold Macmillan en Estrasburgo de la siguiente manera: «Nuestras gentes no cederán a ninguna autoridad el derecho a cerrar nuestros pozos y acerías»[33]. La repugnancia ante la idea de ceder una parte de la soberanía británica a una autoridad supraestatal se puso también de manifiesto en el rechazo de la Comunidad Europea de Defensa propugnada por Francia y calificada posteriormente por Churchill, en una ocasión, de «confusa amalgama». La idea que de una cooperación europea tenía el ministro de Exteriores Bevin apuntaba hacia una colaboración más estrecha entre los gobiernos. Pero, tras las declaraciones británicas, que a veces irían aún más lejos, se escondía en no pocas ocasiones el móvil de no provocar una controversia importante en esta cuestión con los Estados Unidos, interesados en una integración de Europa con participación de Gran Bretaña. La reserva de Londres, para gran decepción de muchos «europeos» comprometidos, tampoco cambiaría con el regreso de Winston Churchill, el gran protagonista de «una especie de Estados Unidos de Europa», al número 10 de Downing Street al finalizar la era laborista.

El alejamiento laborista del poder se produjo por etapas. Los socialistas consiguieron ganar nuevamente las elecciones a la Cámara de los Comunes del 23 de febrero de 1950, tras una campaña electoral sin grandes temas. En primer plano se situó el debate en torno a la nacionalización de la industria del hierro y del acero, sobre la que el gobierno quería dejar al elector la última palabra. La izquierda del laborismo reclamaba otras na-

cionalizaciones, pero no era ningún secreto que el *establishment* del partido y gran parte de la opinión pública estaban cansados del tema. Las ramas amenazadas por próximas nacionalizaciones organizaron con mucho dinero una brillante campaña en contra de las nacionalizaciones en todo el país. Los *tories* centraron su atención en algunas medidas de racionamiento aún vigentes y en los controles económicos. Churchill tachó al socialismo laborista de error costoso y peligroso. El voto de los electores redujo la mayoría del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes en cinco escaños. El número de diputados laboristas era de 315 frente a 298 conservadores; los liberales obtuvieron nueve escaños, tres pasaron a otros grupos políticos. La posición del laborismo sufrió un debilitamiento en la clase media, donde los argumentos del Partido Conservador habían logrado hacer mella.

Siguió un período de año y medio de inseguridad. La escasa base parlamentaria convertía en una aventura el trabajo del gobierno. El gabinete Attlee se encontraba además «física e ideológicamente agotado» (Alan Sked y Chris Cook). Stafford Cripps dimitió del cargo a finales de 1950 y Ernest Bevin a comienzos de 1951, por razones de salud. La devaluación de la libra en el otoño de 1949 había encontrado ya una acogida muy poco favorable por parte de un amplio sector de la opinión pública y había mermado mucho el prestigio del gabinete laborista. Pero lo más importante era la incapacidad del debilitado gobierno para afrontar los problemas surgidos al estallar la guerra de Corea (25 de junio de 1950).

El primer ministro Attlee, aunque preocupado por actuar prudentemente, no vaciló en apoyar, en una manifestación de solidaridad angloamericana, a los Estados Unidos, que intervenían en Corea, con un importante contingente naval, aviones de combate y un pequeño destacamento militar. De la noche a la mañana, Gran Bretaña se encontró implicada en la guerra y también en una situación peliaguda por demás al no darse por descartada una prueba de fuerza nuclear entre las superpotencias. De Estados Unidos llegaban los más sombríos pronósticos acerca de las intenciones del comunismo internacional y Churchill criticó públicamente la indiscutible debilidad de la OTAN en Europa central desde el punto de vista del armamento convencional. En un ambiente tan caldeado y a consecuencia, no en último término, de la presión americana, el gobierno Attlee no pudo prácticamente por menos que decretar un programa gigantesco de rearme [34], que preveía la creación de diez divisiones y una inversión de no menos de 4 700 millones de libras esterlinas en el espacio de tres años. Los recursos necesarios habrían de obte-

nerse, por otra parte, gracias a un ahorro en los presupuestos. El *casus belli* para la izquierda del laborismo surgió cuando Hugh Gaitskell, sucesor de Stafford Cripps y gran antagonista de Aneurin Bevan, elaboró un presupuesto «conservador» —según escribió la prensa— con subidas fiscales y recortes en las prestaciones sociales. Incluso el Servicio Nacional de la Salud, desarrollado enérgicamente por Bevan, que se había convertido ya en la «vaca sagrada» del Estado del bienestar, se vio afectado, si bien escasamente, por las medidas de austeridad. El hecho de que ello sucediera además por las presiones de Churchill y los Estados Unidos, que en opinión del ala izquierda del partido habían sucumbido claramente a la histeria anticomunista, hizo que estallaran las tensiones existentes desde hacía tiempo dentro del Partido Laborista y el gabinete. Aneurin Bevan abandonó el gobierno en abril de 1951, acompañado del joven ministro de Comercio Harold Wilson. Pero eso no sería todo. Debido a las fuertes subidas de precios a consecuencia de la guerra de Corea, también los sindicatos dejaron de colaborar con el gobierno. La balanza de pagos británica sufrió asimismo un nuevo hundimiento, aunque transitorio. Ello supuso un nuevo golpe para la confianza en la política económica de los socialistas, que desde la devaluación de la libra a finales de 1949 venía experimentando un creciente quebranto.

Tras la entrada en el Foreign Office del hasta entonces Lord Presidente del Privy Council, Herbert Morrison, incluso la política exterior se convertiría en una hipoteca para el laborismo. La carrera de Morrison como ministro de Asuntos Exteriores fue «corta, pero nefasta» (Medlicott). Tanto el desarrollo de los acontecimientos en Persia, donde el gobierno Mosadeq expropió la Compañía Petrolífera Anglo-Iraní de propiedad británica con la gran refinería de Abadán, como la crisis en Africa, donde el rey Faruk de Egipto extendió sus aspiraciones de soberanía al Sudán contraviniendo los acuerdos con Inglaterra, parecieron desbordar al nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Este triste cuadro acabaría de quedar redondeado por un caso de espionaje en el Foreign Office.

A finales de 1951, la celebración de nuevos comicios aparecía ya como un hecho inevitable. Churchill comentaría los resultados del gabinete laborista en los meses anteriores con una de sus inimitables sutilezas políticas: «Abadán, Sudán, Bevan». El laborismo trató de colgar al conservador Churchill la etiqueta de instigador de la guerra, pero muchos electores, poco impresionados por tales escaramuzas, habían llegado entretanto al convencimiento, peligroso para el laborismo, de que era posible con-

fiar a los conservadores la dirección del país sin el peligro de una recaída —profetizada por el laborismo— en la opresiva situación de antes de la guerra.

El Partido Conservador de 1951 ya no era el mismo de 1945[35]. En la oposición, y bajo la dirección del popular Lord Woolton, había hecho grandes esfuerzos por corregir su estructura organizativa. R. A. Butler, quien más tarde sería ministro de Hacienda conservador, y hombres como Reginald Maudling, Harold Macmillan, Edward Heath o incluso Anthony Eden trabajaban para lograr una apertura del partido a las ideas de reforma social y económica discutidas en Inglaterra entre 1940 y 1950 y hechas en gran medida realidad por el gobierno laborista. En 1951, el mantenimiento y desarrollo del Estado del bienestar británico y la consolidación del pleno empleo eran parte integrante del programa de los *tories* en la misma medida que la conciencia de la imposibilidad de una vuelta al capitalismo de Manchester (Industrial Charter de 1947). El instrumental de la política económica del ministro laborista de Hacienda, Gaitskell, y el de su sucesor conservador, Butler, se diferenciaban por otra parte tan poco que a mediados de la década de 1950 se podría acuñar el término de «butskellismo».

Con las elecciones a la Cámara de los Comunes del 25 de octubre de 1951 se puso fin a la era laborista. Por el número de votos emitidos, los socialistas se seguían situando, con un 1% escaso, por delante de los conservadores, pero el sistema mayoritario concedió a los *tories* 321 de los 625 escaños; el Partido Laborista obtuvo 295 escaños (en 1945, y con un 1% menos de votos que en 1951, había conseguido cien escaños más). Los liberales, cuya debilidad favoreció a los conservadores, obtuvieron seis escaños y otros grupos políticos tres. Los conservadores volvieron por trece años al poder. Pero, a pesar de los errores cometidos, el gobierno Attlee pudo presentar un balance impresionante. En los seis años de mandato había dado al país un rostro nuevo.

El gobierno Churchill (1951-1955)

En octubre de 1951, Winston Churchill, que contaba a la sazón setenta y siete años, volvió a ocupar el cargo de primer ministro[36], llamando a formar parte de su gabinete, junto a los más estrechos colaboradores de los tiempos de la guerra, a otros políticos más jóvenes que habían colaborado en la reforma del Partido Conservador. El Foreign Office pasó a manos de An-

thony Eden, considerado en general como el «delfín» de Churchill, que entre 1935 y 1938, así como durante la guerra, había sido ya ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. Richard Austen Butler, antiguo miembro también del gabinete de la guerra, se convirtió en ministro de Hacienda. Harold Macmillan, con el cumplimiento de la promesa electoral más importante de los conservadores de construir al menos 300 000 viviendas al año, colocó en el ministerio de la Vivienda la piedra angular para su posterior ascensión a jefe de gobierno.

El gobierno conservador se dedicó primeramente a sanear la balanza de pagos británica, que a consecuencia de los efectos producidos en la economía mundial por la guerra de Corea se encontraba, una vez más, en números rojos. El gabinete se vio obligado a tomar incluso medidas reguladoras adicionales, en vez de eliminar los controles estatales económicos de la era laborista como había prometido durante la campaña electoral. También debió recortar el gran programa armamentista impuesto, no en último término, al laborismo por el propio Churchill.

Pero pronto cambió el panorama: las medidas de saneamiento de los conservadores parecieron dar fruto, pues en 1952 la balanza de pagos arrojaba ya de nuevo un superávit bastante notable. La mejora de la situación económica, sorprendentemente rápida, no fue sin embargo tanto el resultado de la intervención del gobierno como el de un cambio favorable de los términos de intercambio: los precios del mercado mundial de las materias primas importadas cayeron en aproximadamente un 25 por ciento, en tanto que los productos británicos de exportación pudieran ser vendidos a precios en ascenso. Entre 1952 y 1955 se produjo un auténtico *boom* económico que permitió a los conservadores eliminar prácticamente todos los controles estatales económicos y financieros. El racionamiento de productos alimenticios y la administración pública de otros productos tampoco tardarían en hacerse innecesarios. En 1953 se llevó a cabo la reprivatización de la industria del hierro y del acero, así como la del transporte por carretera, anunciada durante la campaña electoral. Los sindicatos aprovecharon la coyuntura favorable de la mayor parte de las empresas para lograr acuerdos salariales elevados. En 1955 el aumento vertiginoso del nivel de vida británico desde la toma del poder por los conservadores era algo que ya no podía pasar inadvertido. El número de automóviles privados había aumentado en un cincuenta por ciento, habiéndose cuadriplicado también, frente a 1951, el número de ingleses que poseían televisor propio [37].

El auge económico hizo que aumentase también la aceptación de la política conservadora. Era muy lógico que el Partido Conservador atribuyese la nueva prosperidad inglesa a su política financiera y económica. «La libertad conservadora funciona». era, en versión abreviada, la filosofía difícilmente refutable de su éxito. Los conservadores habían recuperado la confianza en sí mismos, duramente quebrantada en 1945, y a muchos ingleses hablar del comienzo de una nueva «era elisabetiana» no les parecía demasiado exagerado, y ésta llegó cuando la joven Isabel II sucedió en el trono del Reino Unido en 1952 al fallecido Jorge VI. No faltaron, sin embargo, voces escépticas que advertían del peligro de una excesiva confianza en el futuro económico de Gran Bretaña. La tasa de inversión, muy baja comparada con la de los restantes países europeos, despertó la preocupación de los expertos; Harold Macmillan llamó la atención sobre la pérdida de importancia de la Commonwealth como mercado de exportación y abogó por una nueva orientación del comercio exterior británico. No obstante, estos análisis previsores no impidieron que siguiera predominando la idea de que Inglaterra había superado definitivamente los años de crisis y privaciones.

La política exterior, dirigida con soberanía por Anthony Eden, también desempeñó su papel en el balance de resultados de la segunda era Churchill. Las buenas relaciones con Estados Unidos pudieron ser preservadas, a pesar de algunos roces, sin que Gran Bretaña se viese arrastrada en demasía por la «política de fuerza» defendida por el secretario de Estado americano John Foster Dulles y sin que se produjese una excesiva identificación con el exaltado anticomunismo cuyas formas extremas habrían de ponerse de manifiesto en las campañas del senador Joseph McCarthy en Estados Unidos. Para Eden no fue ciertamente tarea fácil exhortar a la sensatez sin provocar al mismo tiempo en Estados Unidos a «manifestaciones irreflexivas de irritación frente a amigos tan irresolutos» (Medlicott)[38]. Gran Bretaña logró hacer valer su moderada influencia tanto en la solución del conflicto de Corea en 1953 como en la finalización de la guerra de Indochina en la Conferencia de Ginebra de 1954. La política exterior británica —siguiendo la tradición de las iniciativas de Bevin a finales de la década de 1940— dio también pruebas de una notable perseverancia en sus esfuerzos por conseguir la integración de Alemania occidental e Italia en la alianza occidental, siendo principalmente Anthony Eden quien, tras el fracaso del proyecto de la Comunidad Europea de Defensa en el verano de 1954, habría de allanar el camino hacia los Acuerdos de Lon-

dres y París, con cuya entrada en vigor, en mayo de 1955, la República Federal de Alemania e Italia se convertirían en miembros de la OTAN. La promesa de Gran Bretaña de estacionar en el futuro una parte de sus fuerzas armadas en el continente facilitó, sobre todo en Francia, la conformidad con la nueva solución.

Las negociaciones en el plano internacional, según testimonio del propio Eden, agudizaron su conciencia de la importancia de las armas nucleares en la política internacional. En su opinión, sin la existencia de éstas, difícilmente se hubiese superado el conflicto de Indochina en 1954. Desde 1952, Gran Bretaña gozó también del *status* de potencia nuclear. El gobierno Churchill cosechó con ello los frutos madurados durante la etapa laborista, ya que el gabinete Attlee, a espaldas del Parlamento, había venido impulsando desde 1946 el desarrollo de una bomba atómica británica. El gobierno conservador siguió el mismo rumbo. La decisión de construir una bomba de hidrógeno, tomada ya en 1952, sólo se daría a conocer tres años más tarde; la primera prueba con éxito de la bomba H británica tuvo lugar en el año 1957 [39].

Para los conservadores era lógico aprovechar la buena coyuntura económica de Gran Bretaña y el «veranillo de su trayectoria como potencia mundial» (Bartlett) para ampliar su base política en la Cámara de los Comunes mediante nuevos comicios. Pero primeramente había que dejar resuelta la sucesión de Churchill, pues indudablemente no se podía pasar por alto que el primer ministro, después de varios ataques de apoplejía, decaía mental y físicamente. Sólo la esperanza en un encuentro con los dirigentes soviéticos que, según escribía *Der Spiegel,* habría de «coronar la obra bélica de su vida con una gran acción de paz» [40], le mantendría aún algún tiempo en el cargo. Pero el encuentro no se celebró. El 5 de abril de 1955, sesenta años después de entrar al servicio de la reina Victoria, Winston S. Churchill se retiró a la vida privada (muriendo en Londres el 24 de enero de 1965, a la edad de noventa años).

El gobierno Eden (1955-1957)

Como todos esperaban, el cargo de primer ministro fue asumido por Anthony Eden [41], compañero político de viaje de Churchill durante largos años y *la* autoridad británica en el campo de la política exterior. Los auspicios del nuevo jefe de gobierno, que por su porte y su aspecto físico era la «quintaesencia del *gentle-*

man británico» (Alan Sked y Chris Cook), se mostraban favorables. La situación económica del país era excelente y los éxitos diplomáticos del año anterior eran incluso personalmente atribuibles al nuevo primer ministro. El resultado de las elecciones para la Cámara de los Comunes, a celebrar a finales de mayo y en las que Eden quería ratificar también su nombramiento como *premier* con el voto de los electores, no dejaba lugar a dudas. La fecha había sido fijada inteligentemente por cuanto la oposición ofrecía una imagen de fraccionamiento interno. Después de 1951, los socialistas habían llegado a un dilema político e ideológico pues, contrariamente a sus pronósticos, los conservadores no sólo habían dejado intactos los logros del Estado de bienestar, sino que el nivel de vida de las capas medias y de la clase obrera había comenzado a subir de forma evidente justamente bajo la égida del gobierno conservador. En el debate acerca del rumbo político futuro, la mayoría del Partido Laborista había llegado a la conclusión de que el mantenimiento y la consolidación de las reformas realizadas después de 1945 eran la tarea prioritaria del partido, considerando, con su dirigente Attlee, que la discusión en torno a ulteriores nacionalizaciones o a la ampliación de las tareas del Estado era tan poco realista como falta de atractivo. Los seguidores de Aneurin Bevan (los «bevanites»), de orientación progresista, sólo veían en las reformas de la era Attlee un preludio a la transformación del Estado y de la sociedad desde el punto de vista del socialismo democrático. Las fuerzas de orientación izquierdista del partido también se oponían a la política de formación de un bloque occidental y al forzado rearme y, sobre todo, a la construcción de armas atómicas británicas y a los proyectos militares a ella ligados. Pocas semanas antes de las elecciones se produjo en la Cámara de los Comunes una fuerte discusión en este sentido entre el dirigente del partido Attlee y Bevan, que estuvo a punto de provocar la expulsión de este último del Partido Laborista. El grupo en torno a Bevan, que reunía en el Parlamento a aproximadamente una quinta parte de los diputados socialistas y votaba una y otra vez en contra de la línea del partido, no logró finalmente ejercer una influencia decisiva sobre el Partido Laborista, fracasando reiteradamente la candidatura de Bevan a cargos importantes dentro del partido. A finales de 1955, Hugh Gaitskell, uno de sus más encarnizados rivales, pasaría a suceder a Attlee como presidente del partido[42].

El resultado de los comicios del 26 de mayo de 1955 fue un voto en contra de la fragmentada oposición y un mandato a los conservadores para mantener el rumbo seguido. Por vez primera

desde hacía casi cien años, un partido en el gobierno lograba ampliar su ventaja en unas elecciones generales. Con 344 diputados, los conservadores disponían ahora de una mayoría absoluta de casi sesenta escaños. El laborismo perdió dieciocho escaños, obteniendo 277 (los liberales y otros grupos políticos sumaban un total de nueve escaños). El nuevo primer ministro pudo añadir a su capital inicial, ciertamente no escaso, el anticipo de confianza de los electores. Pero, apenas transcurrido un año, Eden se vio obligado a desmentir que tuviese intención de dimitir. Un año después había abandonado ya el cargo.

Las desgracias del gobierno Eden comenzaron con el hecho de que el *boom* económico, en palabras de la prensa británica, se convirtió en un *boomerang.* La fuerte demanda interior, que el ministro Butler había fomentado aún más con la reducción de los impuestos sobre la renta cuatro semanas antes de las elecciones, provocó un aumento considerable de los precios y de la demanda de importaciones. Las exportaciones no pudieron soportar durante mucho tiempo el ritmo de las importaciones, siendo la consecuencia de todo ello un nuevo hundimiento de la balanza de pagos británica. Con un presupuesto suplementario en otoño de 1955, en el que se volvieron a cosechar los frutos electorales de la primavera, el ministerio de Hacienda tomó una serie de medidas destinadas a hacer frente a la coyuntura. Junto con la elevación de los intereses crediticios, la reducción de las inversiones estatales y el ahorro en lo relativo a las leyes de prestaciones, el gobierno decretó también algunas disposiciones tan impopulares como decisivas para contener las compras privadas a plazos, provocando una notable falta de confianza tanto en el ciudadano medio como en los círculos económicos. Las medidas estatales pronto ejercieron el efecto deseado sobre la balanza de pagos, pero la política financiera de restricciones frenó al mismo tiempo el crecimiento económico británico, que sin duda no era bajo dentro de una escala internacional.

La política presupuestaria, que parecía confusa, se convirtió en el blanco de los expertos y de la oposición. En diciembre de 1955, Eden se vio obligado a remodelar su gabinete, del que constantemente transcendían nuevas noticias acerca de los escasos frutos del trabajo en común. Harold Macmillan[43], el hombre fuerte del gobierno, se hizo cargo del ministerio de Hacienda. Selwyn Lloyd fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. A muchos, estos cambios les parecieron demasiado tardíos para poder elevar aún el prestigio del gobierno Eden, fuertemente menguado. Se empezó a poner en duda —incluso en la prensa conservadora— la capacidad de gobierno del primer ministro,

extendiéndose asimismo las opiniones que apuntaban hacia su escasa experiencia en política interior. El gobierno conservador no tardaría tampoco mucho en perder su buena estrella en el antiguo terreno del primero ministro. En Oriente Próximo se inició una crisis que habría de poner fin a la carrera política de Anthony Eden, quedando de manifiesto en toda su amplitud la mermada capacidad de acción de Gran Bretaña como potencia mundial.

Desde la ascensión al poder de Gamal Abdel Nasser, que se convertiría en jefe del Estado egipcio (1954) y en líder del nacionalismo árabe, para los círculos gubernamentales londinenses era obvio que la forma más rápida de atajar la pérdida de influencia de Gran Bretaña en Oriente Próximo era la caída de Nasser. Esta consideración determinó la conducta del Gobierno británico frente al conflicto de Suez en 1956. La crisis fue provocada por la nacionalización de la Compañía del Canal de Suez, dada a conocer por Nasser el 26 de julio. Esta decisión de Nasser fue condenada unánimemente en Inglaterra y, en un primer momento, también en Estados Unidos. Aunque este país, por otra parte, no tuviese nunca durante la crisis una actitud totalmente clara, pronto abogó por una solución internacional del conflicto, no aprobada sin embargo por Egipto. El gobierno francés, que veía en Nasser a un posible aliado influyente del movimiento de liberación argelino, pensó ya muy pronto en la posibilidad de una intervención militar, para la que finalmente pudo conseguir también el apoyo de Eden, que en un principio había vacilado. El tercer aliado era Israel, país en conflicto permanente con los Estados árabes. Se trataba de avanzar hacia el canal a través del Sinaí y ofrecer así a las dos potencias occidentales la posibilidad de realizar la «separación» de los ejércitos israelí y egipcio. Del 22 al 24 de octubre en Sèvres, cerca de París, se llegó a un acuerdo franco-británico-israelí —que sólo se llegaría a conocer años más tarde— por el cual se determinaba el desarrollo de la acción común. Ni siquiera todos los miembros del gabinete británico estaban informados de que la ocasión y las demás circunstancias de la intervención habían sido fijadas ya con precisión antes del inicio del ataque israelí el 24 de octubre. Según lo acordado en Sèvres, Gran Bretaña y Francia, al día siguiente de iniciarse la guerra egipcio-israelí, «instaron» a ambos contendientes a interrumpir sus acciones bélicas y a retirar todas las tropas de la zona del canal. El ultimátum era absolutamente inaceptable para Nasser, ya que no sólo le exigía la retirada de sus tropas de su propio territorio, sino que llevaba también implícito la invitación a Egipto a aceptar la ocupación

temporal de posiciones clave del canal por las tropas británicas y francesas. Gran Bretaña y Francia utilizaron la negativa a satisfacer sus exigencias como pretexto para bombardear las instalaciones militares egipcias y para ocupar el 5 de noviembre de 1956 Port Said y una parte de la zona del canal. Entretanto, Israel había asestado un duro golpe al ejército egipcio, consiguiendo colocar bajo su control casi toda la península del Sinaí. Pero el 7 de noviembre Gran Bretaña, presionada por Estados Unidos, abandonó la aventura a pesar de las protestas del aliado francés. Los americanos habían atacado por el punto más débil, amenazando con dejar de respaldar la libra, que pasaba un difícil momento [44].

Los soldados británicos se retiraron de Egipto antes de fin de año. Para Israel, que retiraría sus tropas del Sinaí algunos meses más tarde, la acción conjunta contra Egipto había supuesto al menos la apertura del golfo de Akaba. Eden, en cambio, no había logrado ninguno de sus objetivos. El canal permaneció en manos de Egipto; Nasser salió reforzado del fracaso de las dos potencias coloniales y el prestigio de Gran Bretaña en el mundo árabe quedó gravemente afectado; las relaciones con Francia y Estados Unidos estaban en su momento más bajo. La Unión Soviética se aproximó a Egipto, pudiendo afirmar que las dos potencias occidentales habían cedido a consecuencia de su amenaza con armas nucleares, que sin embargo no había sido decisiva. Una parte de los conservadores había quedado consternada por la intervención y otra parte por su interrupción antes de tiempo. Hugh Gaitskell, en una alocución por radio, instó a los conservadores a destituir a Eden. El 9 de enero de 1957, dos meses después del final catastrófico de la acción militar que haría que muchos tomasen conciencia por vez primera de la decadencia de Gran Bretaña como potencia mundial, Anthony Eden presentó su dimisión. No fue posible reparar todos los daños que la aventura británica de Suez había provocado, pero el nuevo primer ministro, Harold Macmillan, pronto logró restablecer al menos la «relación especial» entre Gran Bretaña y Estados Unidos que se había venido desarrollando de una forma nueva desde la segunda guerra mundial.

Los gobiernos de Francia, Italia, la República Federal de Alemania y los países del Benelux dieron entretanto un paso decisivo al firmar el 25 de marzo de 1957 el Tratado de Roma para la creación de una Comunidad Económica Europea (CEE). La unión de los Seis se vio fuertemente acelerada por el conflicto de Suez, en el que Gran Bretaña y Francia habían podido comprobar su dependencia de Estados Unidos, siendo los franceses

los que con más empeño impulsarían ahora la creación del mercado común acordado en Mesina en el verano de 1955. Dadas las tensiones con Gran Bretaña, derivadas de la fracasada empresa de Oriente Próximo, y su acercamiento a sus vecinos alemanes, París renunció a sus intentos de incluir a Inglaterra en los empeños de unificación europea como contrapeso de la fortalecida Alemania occidental.

En Londres no se contaba con una pronta unificación del continente [45]. Muchos británicos consideraban la creación de un mercado común con órganos supranacionales, una aduana común y una política financiera, social y económica armonizada como una utopía. La actitud del gobierno Eden había seguido la tradición de la política británica desde el fin de la guerra, que si bien celebraba y apoyaba los esfuerzos en pro de la unificación europea, evitaba sin embargo una vinculación más estrecha de Gran Bretaña con el continente. Hasta el otoño de 1956, momento en que ya no se pudo cerrar los ojos por más tiempo a los progresos realizados por los seis Estados de la CECA y en que Inglaterra se enfrentó a la amenaza de ser excluida de uno de los mercados mundiales más importantes y ricos, no presentaría Londres sus propuestas para la cooperación económica dentro de Europa.

A la unión aduanera de los Seis, los británicos contrapusieron la idea de crear una gran zona europea de libre comercio integrada por los diecisiete Estados de la OECE, organización que desde 1948 se había convertido en un foro de cooperación económica interestatal muy estimado por Gran Bretaña. La propuesta británica tenía como objetivo la liberalización del comercio interestatal, pero no contenía ningún elemento supranacional, pretendiendo —ambas cosas en oposición a los puntos de vista de los Seis— dejar en manos de cada uno de los países miembros la regulación de sus relaciones comerciales con terceros Estados. Sólo dentro de una agrupación tan flexible creía Gran Bretaña poder preservar sus lazos políticos y económicos con los países de la Commonwealth y en particular las preferencias comerciales existentes desde 1932. El plan fue acogido fríamente por los Seis. Su presentación en hora tan tardía hizo que muchos lo considerasen más bien como un intento de perturbar las avanzadas negociaciones para la integración en el continente. Los Seis no querían demorarse «ni un solo día», como diría el ministro belga de Asuntos Exteriores, Paul-Henri Spaak, en su camino hacia la creación de la Comunidad Económica Europea. Tras la firma del tratado de la CEE, los países miembros volvieron a considerar la idea de una gran zona europea de libre comercio, pero las negociaciones no dieron fruto, quedando interrumpidas a

finales de 1958. A continuación. Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Suecia, Austria, Suiza y Portugal crearon la llamada pequeña zona de libre comercio. Los Siete firmarían el acuerdo el 4 de enero de 1960, que entraría cuatro meses después en vigor. La EFTA (European Free Trade Association) respondía ciertamente, en lo que a su concepción interna se refiere, a los puntos de vista británicos, pero seguía siendo menos atractiva en el aspecto económico para Gran Bretaña que la CEE, en fuerte expansión, y por lo mismo un simple «recurso de urgencia» (Wolfgang Wagner).

Las propuestas del gobierno Eden de 1956-57 aún se encontraban muy en la línea de la política europea seguida desde 1945 por Gran Bretaña. Ni las transformaciones dentro de la Commonwealth ni los cambios políticos y económicos en el continente habían hecho todavía entonces suficiente mella en la conciencia británica como para influir decisivamente en la toma de decisiones del gobierno. Cierto es que se oyeron voces aisladas que, como el *Economist,* ya desde 1954 señalaban que el futuro económico de Inglaterra habría de estar más fuertemente ligado con el del continente que con el de la Commonwealth, pero a pesar de todo seguían predominando los lazos políticos, económicos y afectivos con la Commonwealth, cuyos Estados miembros habían comenzado entre tanto a seguir su propio camino en política y comercio exterior. También se perfiló la tendencia a un retroceso del espacio comercial británico tradicional, y de la propia Gran Bretaña, en su dinámica económica con respecto al continente. Esta evolución, de gran importancia para la orientación de la política comercial y económica de la isla, apenas sería admitida durante la era Eden. Entre 1950 y 1956, las exportaciones de los países de la CECA aumentaron, por ejemplo, en un 116%, y las de Gran Bretaña en un 47%; el índice de producción aumentó, en el caso de los Seis y en el mismo período de tiempo, en un 158%, y en Inglaterra en un 121%; la tasa media de crecimiento anual del producto interior bruto aumentó en los países de la CECA en un 5,5%, frente al 2,9% en Gran Bretaña.

El estancamiento de la capacidad económica británica no calaría en la conciencia pública hasta comienzos de la década de 1960. En la de 1950, el *«Britain's decline»* [decadencia de Gran Bretaña] todavía no era objeto de preocupación nacional. Al contrario; el nivel de vida y la situación social habían mejorado después de la guerra hasta tal punto que en 1959 los conservadores aún podían hacer propaganda para conseguir los votos de los electores, y no sin razón, con el famoso *slogan* de Macmillan *«You've never had it so good»* [Nunca has estado tan bien].

Dos años más tarde, bajo el efecto del desarrollo económico en la isla y en el continente, Gran Bretaña renunciaría a su aislamiento de la Comunidad Económica Europea, considerado como algo en modo alguno glorioso, y presentaría su solicitud de ingreso en la CEE el 9 de agosto de 1961. Con este «giro copernicano» (Walter Hallstein), Inglaterra daba a entender, al mismo tiempo, que estaba dispuesta a «reconocer el relativo debilitamiento de su posición mundial» [46].

III. FRANCIA

El 9 de septiembre de 1944 se constituyó en París el «gobierno provisional de la República Francesa». Charles de Gaulle, personificación de la voluntad de resistencia francesa desde la derrota de 1940 y autoridad indiscutible en adelante dentro de la Francia liberada, a la hora de formar su gabinete de «concordia nacional» tuvo en cuenta las tendencias políticas más importantes y a los representantes de todas las ramas del movimiento de resistencia. El general sabía que sólo una colación cuidadosamente equilibrada estaría en condiciones de iniciar la estabilización del país, destruido económicamente y quebrantado en cuanto a su identidad nacional. Pero no se consideraba simplemente jefe de un gobierno de todos los partidos, sino portador de la misión histórica de salvaguardar la continuidad del Estado francés y restablecer el «rango» de la nación en el mundo.

La situación del país, cuyos puertos atlánticos y zonas fronterizas orientales seguirían en parte, hasta la primavera de 1945, en manos de Alemania, era catastrófica [47]. Sólo los costes de la reconstrucción de edificios, instalaciones industriales, vías de comunicación, etc., destruidos durante la guerra ascendieron, de acuerdo con una estimación del gobierno del año 1946, a una suma de dos a tres veces superior a la renta nacional de antes de la guerra. El índice de producción industrial había decendido de 100 (1929, el mejor año de entreguerras) a 29 (1944). La balanza comercial presentaba un fuerte desequilibrio: en la segunda mitad de 1944, por ejemplo, se importó cinco veces más de lo que se exportó. Faltaban las cosas más necesarias, sobre todo carbón, que era muy escaso. Los beneficios de la agricultura habían descendido en 1945 entre el 25 y el 40%, las raciones oficiales para los adultos ascendían en septiembre de 1944, en París, a tan sólo 1 200 calorías.

Ante tal situación era de vital importancia que, con el nombramiento de «comisarios de la República» y visitas personales de De Gaulle a las provincias, París lograse restablecer rápida-

mente la autoridad estatal y contener las aspiraciones regionales. El gobierno provisional pudo así obviar en gran medida la administración anglo-americana prevista para Francia, sabiendo también convencer a las numerosas asociaciones de combatientes de la Resistencia de que, aunque no de buen grado, depusieran las armas. El gobierno De Gaulle pudo encauzar también rápidamente por vías legales la depuración política «salvaje», es decir, el ajuste de cuentas inmediato y sangriento, no sujeto a procedimientos judiciales, con los «colaboracionistas» de la potencia de ocupación alemana, que costaría la vida a unas 10 000 personas, más de las tres cuartas partes de ellas antes incluso de que el gobierno francés tuviese la posibilidad de intervenir de forma eficaz. La eficacia del gobierno De Gaulle y su notorio respaldo por parte de la población movieron a los aliados a reconocerlo, conforme al derecho internacional, el 23 de octubre de 1944.

La apelación de De Gaulle a la unidad de los franceses, sus llamamientos a «construir fraternalmente el edificio de la renovación» fueron más que simples llamamientos a la lealtad ante la difícil e inminente tarea a realizar. El gobierno provisional pudo enlazar con la «unidad de esperanza y acción alumbrada por la Resistencia» y utilizarla políticamente. Tras la liberación exterior —tal era la convicción compartida dentro de la Resistencia— había que iniciar la eliminación de las obsoletas estructuras económicas y sociales. El periódico *Combat,* uno de los órganos no comunistas más importantes de la Resistencia, aparecería incluso con el subtítulo: «De la Resistencia a la Revolución». El propio general De Gaulle, hombre políticamente poco sospechoso de izquierdismo, no quiso ni pudo tampoco sustraerse al mandato reformista del movimiento de oposición y así, con la euforia de la «Libération de la France», en el transcurso de dos años se implantó un paquete de reformas sociales y económicas desconocidas desde la Revolución de 1789 [48].

En primer lugar, en octubre de 1944 se introdujo el derecho de voto para la mujer, se decretó una ley sobre comités de empresa (22 de febrero de 1945) y se creó un amplio sistema de seguridad social (4 de octubre de 1945). Aumentó asimismo la renta familiar y el apoyo a los económicamente débiles. Ya en 1944, el gobierno provisional inició toda una serie de nacionalizaciones que incluyeron, entre otras, las minas del norte de Francia, las empresas de armamento Gnome & Rhône y las grandes fábricas de automóviles Renault, así como la Banque de France, parcialmente nacionalizada en 1936, y otros cuatro grandes bancos, a los cuales se añadirían en 1946 las empresas de gas y electricidad y las 34 compañías de seguros más importantes.

Los empresarios y capitalistas, comprometidos en su mayoría por su colaboración con la fuerza de ocupación alemana, tuvieron poco que objetar a estas medidas; el estado de ánimo político general estaba en contra de ellos, y el propio De Gaulle, después de su entrada en París, recibiría a una delegación de empresarios con la observación de que en su exilio de Londres no había tenido la ocasión de encontrarse con ninguna de ellos. No obstante, la ola nacionalizadora no abarcó todos los ámbitos clave de la economía; los grandes bancos de participación o las fábricas de hierro y acero, por ejemplo, permanecieron intactos.

Aunque en lo relativo a la implantación de reformas estructurales en el interior De Gaulle había sido más el ejecutor que el motor, la dirección de las relaciones exteriores fue considerada por él como su campo por excelencia. Su política de prestigio, a veces presuntuosa, garantizó a Francia un escaño en el Consejo de Seguridad de la ONU y su acogida dentro del círculo de las potencias vencedoras, junto a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Este aumento de *status*, en llamativo contraste con el potencial francés, lo debería Francia no en último término, a la persistente intercesión británica [49].

Los brillantes éxitos del gobierno provisional no impidieron que se perdiesen paulatinamente el impulso y las afinidades políticas de la Resistencia («la ilusión entusiasta de la Resistencia»), cuyo gran partido único se malogró; fue imposible que naciese, ya que el espectro político era demasiado amplio [50]: desde la derecha patriótica hasta la izquierda comunista. Las diferencias entre los partidos, que nunca habían sido borradas, sino que habían pasado temporalmente a un segundo plano, pronto reaparecieron.

Las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente del 21 de octubre de 1945, en las que, al mismo tiempo, el 96% de los electores franceses se pronunciarían en contra de la Constitución de la Tercera República de 1875, dieron como resultado un equilibrio casi perfecto de fuerzas entre los tres grandes partidos del país. El Parti Communiste Français (PCF) obtuvo el 26%, los republicanos populares —el Mouvement Républicain Populaire (MRP), movimiento católico y reformista fundado en 1944— obtuvieron un amplio 25% y la tradicional SFIO socialista (Section Française de l'Internationale Ouvrière) obtuvo el 24% de los votos emitidos.

En un punto existía acuerdo entre los partidos: en la nueva Constitución debería quedar esablecido el papel esencial del Parlamento, y con él el de los partidos políticos, en el sistema de gobierno francés. En oposición irreconciliable, el general De Gaulle abogaba por un ejecutivo fuerte y relativamente indepen-

diente del Parlamento. El siempre había considerado perniciosa la dependencia del gobierno del «poder de los partidos», viendo en ello también una de las causas principales de la caída de la III República, con sus frecuentes cambios de gabinete. El Estado —tal era su credo— no podía «estar a merced» de los partidos. Pero, al no poder imponer sus puntos de vista, dimitió inesperadamente el 20 de enero de 1946.

Con la partida de De Gaulle se inició el período, de algo más de un año, del llamado «tripartidismo», en el que la responsabilidad de gobierno fue asumida conjuntamente por comunistas, socialistas y republicanos. Cuatro gabinetes se sucedieron durante este «matrimonio de conveniencia», en el que las controversias entre PCF, SFIO y MRP, cada vez más fuertes, pronto se asemejarían a una guerra fría de unos contra otros [51].

La elaboración de la Constitución se convirtió en una maratón. Un proyecto propugnado por socialistas y comunistas, que preveía un sistema unicameral, fue rechazado en el referéndum de mayo de 1946, algo sin precedentes en la historia de Francia. El rechazo se debió sobre todo —según revelarían encuestas posteriores— al hecho de que la mayoría de los electores desconfiaba de las ambiciones de los comunistas. El segundo proyecto de Constitución presentado por una nueva Asamblea Constituyente, que no contenía modificaciones esenciales respecto al rechazado, fue ratificado finalmente por un escaso margen en la consulta popular del 13 de octubre de 1946. En él se ampliaban un poco los derechos del jefe del Estado y se preveía también una segunda Cámara (Conseil de la République), pero la Asamblea Nacional siguió siendo la institución dominante de la IV República, ya que los gobiernos dependían por completo del Parlamento. Ante la escasa participación y el ajustado resultado del referéndum, De Gaulle se burlaría diciendo que nueve millones de franceses habían aceptado la Constitución, ocho millones la habían rechazado y ocho millones la habían ignorado. Sus propios puntos de vista, de orientación presidencialista, ya habían sido esbozados públicamente por él en múltiples ocasiones después de su dimisión en 1946. Con ello el prestigioso general, que seguía gozando del respeto de la población, gravaba con una fuerte hipoteca, en el mismo momento de su nacimiento, a esta IV República «impopular, pero legítima» (Jean-Pierre Rioux), cuyos cimientos constitucionales, no obstante, quedaban por fin establecidos.

En las elecciones para el primer período de legislatura de cinco años de la Asamblea Nacional, el 10 de noviembre de 1946, el PCF se convirtió en el partido más fuerte, con casi un 29%

de los votos (el mejor resultado obtenido por él desde 1945). El MRP obtuvo un 26% amplio y los socialistas sólo el 18%. La cuarta parte de los escaños pasó a una derecha fortalecida. Con la elección del socialista Vincent Auriol como presidente el 16 de enero de 1947 concluía la implantación de las instituciones políticas de la IV República, dos años y medio después de la liberación de París.

La cooperación entre los partidos del «tripartidismo», que si bien seguían disponiendo de más de las tres cuartas partes de los escaños del Parlamento habían sufrido graves heridas a lo largo de la discusión en torno a la Constitución, se hizo cada vez más difícil. El choque decisivo entre el jefe de gobierno, el socialista Paul Ramadier, y los comunistas se produjo por divergencias en política social y económica. Al igual que en la mayor parte de los países europeos, la situación económica se había agravado en Francia en 1946-47. La producción se estancó, los alimentos empezaron a escasear y el coste de la vida subió vertiginosamente. No obstante, el gobierno mantuvo los topes salariales para combatir la inflación. Entre la clase obrera reinaba una gran agitación, lo que dio lugar a huelgas salvajes. Con ello, el PCF pronto se vio en peligro de perder su influencia sobre los trabajadores. En una moción de confianza de la Asamblea Nacional, cuyo resultado favoreció indudablemente al gobierno Ramadier, el PCF y los miembros comunistas del gabinete votaron sin embargo en contra del gobierno. Esto le sirvió a Ramadier, el 4 de mayo de 1947, de pretexto para destituir a los cuatro ministros del PCF, entre ellos a su presidente Maurice Thorez[52]. El período «tripartito» había finalizado, no volviendo a formarse durante la IV República ningún gobierno con participación comunista. Esta ruptura fue algo inesperado para el PCF, que hasta entonces se había mostrado muy cooperativo, y el propio Ramadier tuvo que hacer grandes esfuerzos para obtener de su partido la ulterior ratificación de su actuación.

Indudablemente, en la exclusión de los comunistas también desempeñó un papel importante el agudizamiento del enfrentamiento Este-Oeste. El ministro de Asuntos Exteriores Bidault (MRP) coincidiría con Ramadier, como muy tarde tras el fracaso de la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de Moscú (abril de 1947), en que la cooperación con los comunistas no tenía ningún futuro, ni en el plano nacional ni en el internacional. El alejamiento de los ministros comunistas del gobierno no fue, sin embargo, condición previa para el mantenimiento de la ayuda financiera americana, iniciada ya hacía algún tiempo,

sino antes bien un efecto secundario, deseado y celebrado por Estados Unidos.

Los desórdenes temidos por el gobierno Ramadier entre los trabajadores no se produjeron; los comunistas se esforzaron incluso, en un principio por reasumir la responsabilidad de gobierno. Hasta el otoño de 1947, tras la conferencia del Kominform en Polonia, no se habría de producir en el PCF el giro radical con respecto a su anterior actitud de cooperación. El PCF volvería a inscribir en sus banderas los lemas ya casi olvidados del antiimperialismo y la lucha de clases e iniciaría una fuerte campaña extraparlamentaria contra la IV República. Esta, por su parte, no sólo tenía ahora en contra al PCF, sino también al sindicato CGT (Confédération Générale du Travail), dominado por los comunistas y cuya ala socialista se constituiría en abril de 1948 en sindicato independiente (CGT-FO, Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière).

En el espacio de unos pocos meses, la República hubo de enfrentarse también a un poderoso adversario de la derecha. El general De Gaulle aprovechó la crisis de 1947 para invitar a todos los franceses a unirse al «Reagrupamiento del Pueblo Francés (RPF, Rassemblement du Peuple Français), fundado por él para reformar las instituciones de la IV República, combatir el comunismo y renovar profundamente la vida política de Francia. La resonancia fue grande. En las elecciones municipales de octubre del mismo año el RPF, al que por ironías del destino se unieron también muchos antiguos partidarios del régimen de Vichy, obtuvo el 40% de los votos, conquistando las 13 ciudades más importantes del país. Gaullistas y comunistas, que tanto habían contribuido al nacimiento de la IV República, trabajaban ahora para derrumbarla.

El año 1947 fue también decisivo desde el punto de vista de la política exterior. Francia, que en un principio había aspirado a desempeñar un papel autónomo entre el Este y el Oeste, se pasaría ahora claramente al campo occidental. En cuanto a la política con respecto a Alemania, tuvo lugar asimismo un «reajuste» (Wilfried Loth). La idea de incluir las tres zonas de ocupación occidental en un bloque occidental acabaría por imponerse dentro de los partidos gubernamentales y en la opinión pública francesa [53].

En tanto que la IV República parecía volver a la inestabilidad de la III República en el plano parlamentario-político, el desarrollo de la economía francesa después de la segunda guerra mundial tendía a progresar. En 1945, tras quince años de crisis y guerra,

no se trataba sólo de encauzar la reconstrucción; la economía francesa debía intentar, al mismo tiempo, superar su postergación frente a otros países industriales [54].

El 21 de diciembre de 1945 se creó el Commissariat Général au Plan, autoridad estatal para la planificación económica cuya dirección encargó De Gaulle a Jean Monnet, que había aconsejado ya durante la guerra al general en temas económicos. Esta pequeña plantilla de expertos tenía la misión de elaborar planes marco para el desarrollo económico del país de acuerdo con los grupos más importantes de la vida económica en una especie de «acción concertada». El comisariado de planificación no ejercía ningún control sobre la producción, sino que dirigía la economía con ayuda de la adjudicación de créditos y la distribución de materias primas.

El I Plan (1947-1952) tenía como objetivo la puesta en marcha y la ampliación de la producción, al tiempo que la modernización de la industria. Los aspectos centrales del programa eran los sectores clave de la economía (carbón, electricidad, hierro y acero, cemento) y los transportes. Aunque por lo general no se alcanzasen los altos objetivos del plan, la producción industrial en 1952 se situaba no obstante en su conjunto en un 16% por encima de la de 1929; el producto interior bruto y el nivel de vida habían vuelto a ser aproximadamente los mismos. El crecimiento anual de la economía en una media del 4,5% (producción industrial: 7%) era sin duda inferior al alemán e italiano, pero habida cuenta del estancamiento que había tenido lugar en Francia durante decenios podía ser considerado un éxito «innegablemente magnífico» [55], más aún si se piensa que los permanentes gastos para la guerra de Indochina, y más tarde de Argelia, eran una carga para la economía nacional francesa.

El peso mayor del II Plan (1954-1957) recayó sobre el fomento del progreso tecnológico, la formación y reconversión profesional en la industria y la intensificación de la producción de bienes de consumo. En este período de planificación también se consiguieron importantes resultados. Frente a 1952, el producto social de 1957 había crecido en un 20% y la producción industrial en un 46%. La *«planification française»* [56] fue por otra parte —al igual que la Administración estatal— un elemento importante de estabilidad y continuidad para la IV República, políticamente muy inestable. Evidentemente, los resultados positivos después de 1945 no sólo son atribuibles a la planificación económica. Las nacionalizaciones y la expansión general del sector público fueron igualmente condiciones previas importantes para una dirección eficaz de la economía. Los positivos resultados económicos en

sectores de importancia condujeron a un reconocimiento general —hasta ese momento en modo alguno natural— de la necesidad del crecimiento económico. En ello consistiría, según los historiadores económicos François Caron y Jean Bouvier, la «revolución» de 1945 propiamente dicha[57].

Sin la masiva ayuda financiera de Estados Unidos, muy preocupados por una pronta estabilización económica y política de Francia, el rápido auge de la economía francesa no habría sido posible. El apoyo americano ascendió entre 1945 y 1953 a por lo menos 6 000 millones de dólares, de los cuales Francia ya había recibido más de un tercio antes de que el Plan Marshall le permitiera solicitar nuevamente 2 800 millones de dólares. (Las deudas francesas de la guerra habían quedado ya reducidas por el tratado Blum-Byrnes del 28 de mayo de 1946, de casi 3 500 millones a 700 millones de dólares.) Con este dinero se pudo eliminar, por primera vez, la escasez crónica de dólares, hasta el punto de poder pagar los artículos de importación imprescindibles para un auge económico.

El crecimiento demográfico iniciado en la guerra tuvo también un efecto estimulador sobre el desarrollo de la economía. (El crecimiento de la población de 1940 a 1960 en cerca de 10 millones de habitantes fue más de dos veces superior al que se produjo entre 1840 y 1940.) A la vida económica afluyeron fuerzas jóvenes y productivas y la demanda experimentó una activación adicional.

El problema cardinal de la economía francesa desde la primera guerra mundial, la depreciación de la moneda, no pudo sin embargo ser atajado tampoco por los gobiernos de la IV República. De Gaulle había optado en 1945 por no dar un paso tan impopular como el de la reforma monetaria. Ahora bien, las medidas de control estatal aplicadas en su lugar no pudieron frenar la inflación. La mayor alza de precios se produjo en los años de grave carencia, inmediatamente después del fin de la guerra. El índice de precios del comercio minorista pasó de 100 (1938) a 285 (1944) y finalmente a 1 817 (1949). El débil franco (1944: 1 dólar=80 francos; 1949: 1 dólar=420 francos) habría de sufrir entre 1945 y 1957 no menos de siete devaluaciones. Al final del segundo período de planificación (1957), el déficit de la balanza de pagos francesa, reducible sólo con los créditos americanos, ascendía a más de 1 500 millones de dólares[58].

Los beneficiarios de la inflación habrían de ser, entre otros, las empresas en expansión del sector industrial y el propio Estado, que se habían endeudado fuertemente para la financiación de sus inversiones. También los agricultores y los pequeños comerciantes

habrían de conocer, una vez más, una época de vacas gordas durante el período de mayor inflación. Pero las capas medias pronto sufrirían las consecuencias de la expansión y de la modernización de la economía francesa. Y así la atrofia del sector agrario, iniciada en otros países industriales mucho más pronto, en Francia no desembocaría hasta años después de la guerra en la emigración rural y en un «desplazamiento sin precedentes de la población hacia las zonas urbanas» [59]. Muchas de las explotaciones agrícolas familiares, típicamente pequeñas y técnicamente atrasadas, se vieron en apuros. El pequeño comercio, el artesanado y la pequeña industria en su conjunto hubieron de enfrentarse a un proceso de concentración que puso en peligro su existencia económica. A mediados de la década de 1950, la protesta social de la clase media, que se veía como la desheredada del auge económico francés, cristalizó en el movimiento pequeñoburgués radical del poujadismo, que resultó sorprendentemente fuerte aunque sólo fuera de forma transitoria. Hasta mediados de esa década, la mayor parte de los gabinetes serían víctimas de las controversias entre los partidos en política social y económica. De esta manera, las consecuencias sociales y económicas de la rápida transformación estructural del país —y los problemas de los gobiernos al tratar de superarlas— después de 1945 contribuyeron también a la manifiesta inestabilidad política de la IV República.

Tras el fin del «tripartidismo» en la primavera de 1947, los gobiernos ulteriores, que cambiaron con frecuencia —veintitrés durante los doce años de existencia de la IV República—, se apoyaron en los partidos de la denominada «Tercera Fuerza». Tras la salida de los comunistas, el MRP y la SFIO se vieron obligados a buscar apoyo en los partidos pequeños de centro y derecha, esto es, en el partido decisivo de la III República, el de los «socialistas radicales», liberal conservador y laico, en la derecha «moderada» y en la Unión Democrática y Socialista de la Resistencia de René Pleven. El rasgo fundamental de esta alianza era su fraccionamiento interno. Y así, entre los socialistas radicales y los socialistas, por un lado, y el MRP, por otro, imperaban por ejemplo puntos de vista tan irreconciliables en cuanto a la escuela confesional, como entre la SFIO y el MRP, por una parte, y los socialistas radicales y los moderados, por otra, en cuanto a la política económica y social: la típica constelación de frentes cruzados entre los partidos, e incluso dentro de ellos, de la cual se derivaba también la debilidad a la hora de actuar y el inmovilismo político de la IV República. La coalición gubernamental

encontró un consenso mínimo en el rechazo de la presión intra y extraparlamentaria del PCF y del RPF. Los nuevos gobiernos de la alianza de la «Tercera Fuerza», de paulatina orientación derechista, cuya presidencia no sería ostentada desde 1947 por ningún primer ministro socialista, estuvieron formados por los políticos del MRP Robert Schuman y Georges Bidault, por los socialistas radicales Henri Queuille y André Marie, así como por René Pleven. El personal ministerial no experimentó grandes variaciones, lo cual permitiría a André Siegfried hablar en su historia de la IV República de un «ajedrez de partidos» [60] que produjo pocos cambios y tropezó sin embargo, tanto entre la opinión pública francesa como en el extranjero, con una creciente incomprensión. La fraccionada alianza de la «Tercera Fuerza» tenía pocas posibilidades de afrontar la presión de las grandes formaciones; la política de entonces, en palabras del primer ministro Henri Queuille, no consistía tanto en resolver problemas cuanto en aplacar a aquellos que los planteaban.

El fin de la alianza de la «Tercera Fuerza» se produjo poco después de las elecciones para la segunda legislatura de la Asamblea Nacional, que se celebraron el 17 de junio de 1951 y en las que los dos grandes partidos que habían desempeñado un papel destacado desde el establecimiento de la IV República sufrieron una derrota. Los republicanos perdieron la mitad y los socialistas un tercio de sus electores. Sólo la rápida promulgación de un nuevo procedimiento electoral que favorecía a los partidos de la coalición existente hasta ese momento evitaría que obtuvieran la mayoría de los escaños los comunistas y los gaullistas quienes de esta manera sólo reunieron entre ambas cerca de un tercio de los escaños. La fracción más fuerte dentro del Parlamento era ahora la de los gaullistas. Los partidos de centro y derecha registraron también un aumento de votos. El RPF gaullista, que era en realidad un «movimiento» hostil al «poder de los partidos», asumió un papel clave en el Parlamento. Primeramente logró dividir a la antigua mayoría en lo relativo al problema de las escuelas confesionales; poco después —en marzo de 1952—, 27 disidentes gaullistas que le habían cogido gusto al parlamentarismo, con la elección del primer ministro Antoine Pinay (republicano independiente) contribuyeron al nacimiento de la coalición gubernamental más conservadora desde hacía veinte años [61].

El apoyo gaullista a las coaliciones de centro-derecha de los dos años posteriores tuvo su precio. En política exterior, Francia cayó en un inmovilismo preocupante por cuanto hasta 1954 ningún gabinete tuvo la fuerza suficiente como para impulsar, frente

a la encarnizada oposición de los gaullistas, una decisión de la Asamblea Nacional sobre el destino de la Comunidad Europea de Defensa (CED). La CED era el resultado de una iniciativa del primer ministro francés René Pleven en el año 1950. Pleven, ante la insistencia americana en un rearme de Alemania occidental, había respondido con el plan más aceptable para Francia de un ejército europeo integrado con la inclusión de contingentes alemanes. Pero en tanto que esta idea había ido ganando terreno en Estados Unidos y en los países asociados (el 27 de mayo de 1952 los seis países europeos participantes firmaban los acuerdos de la CED), el bando de los adversarios de la CED se había fortalecido progresivamente en Francia. A éste pertenecían, por los más diversos motivos, además de los gaullistas y los comunistas, sectores de la SFIO, e incluso un pequeño grupo del MRP, que por lo demás siempre se había pronunciado decididamente por la integración europea. La segmentada coalición de centro-derecha, quebrantada por continuas y largas crisis de gobierno, se vio por otra parte enfrentada a la izquierda en la oposición, a los sindicatos y a un conglomerado de descontentos que iba desde los funcionarios, pasando por los viticultores del Midi, hasta los obreros industriales. En el verano de 1953 se produjo una oleada de desorden social y acciones huelguísticas, acompañada de violentas protestas, contra la coalición «de derechas» que llevaba a cabo una política antiinflacionaria de austeridad que daría buenos resultados pero iba acompañada de injusticias en los aspectos sociales.

La «paralización general» [62] de la República, puesta de manifiesto en las crisis de la alianza de centro-derecha, aún quedó más evidenciada por la parodia —tan significativa como indigna— de la elección del jefe del Estado a finales de 1953. Sólo en la decimotercera vuelta podría la comisión electoral ponerse de acuerdo sobre la elección de René Coty, hombre de centro-derecha que si bien había sido un político respetado por todos como vicepresidente de la segunda Cámara, estaba hecho sin embargo «de la madera con la que se habían tallado los presidentes de la III República» (Philip Williams). Su elección como jefe del Estado francés pareció simbolizar la desaparición definitiva de la época de las grandes ideas de la Resistencia y la Liberación [63].

Medio año después de su elección, en junio de 1954, el nuevo presidente propuso a la Asamblea Nacional al socialista radical Pierre Mendès-France como candidato para el cargo de primer ministro. Su gobierno, interesado principalmente en el saneamiento de las finanzas francesas y en el fomento simultáneo de

la modernización de la economía, quiso en primer lugar saldar dos hipotecas que gravaban al país desde hacía años: la guerra de Indochina y las luchas políticas intestinas en torno a los acuerdos de la CED.

Mendès-France, que en 1945 había abandonado el gobierno provisional debido a que De Gaulle se había negado, en contra de su consejo, a realizar un recorte monetario radical, sería uno de los personajes más excepcionales de la IV República. Ante el Parlamento, del que había sido ya miembro en los años treinta, se presentaba como una persona no dispuesta a someterse a los rituales y a las intrigas de los partidos. De tendencia izquierdista, aunque no encuadrado ideológicamente, muy respetado como experto en economía y finanzas, brillante orador y con un fuerte carisma personal, había exigido, en lenguaje cortante y ciñéndose estrictamente a los problemas concretos, el apoyo de los diputados a su programa. Una «fuerte corriente de aire» pareció barrer la Asamblea Nacional (Wolfgang Wagner). Amplios sectores de la opinión pública, y especialmente de la juventud, hastiados desde hacía tiempo de la debilidad crónica de los gobernantes de la República, volvieron la mirada hacia este hombre. Mendès-France no los decepcionó, y en pocos días y sin los tanteos habituales de la política de partidos formó un gobinete de expertos. Dos tercios de los diputados (entre ellos, por vez primera desde 1947, también los comunistas) expresaron su confianza al gobierno el 18 de junio de 1954[64].

El ritmo con que el gobierno de Mendès-France se puso manos a la obra fue sorprendente, consiguiendo en el espacio de cinco semanas sacar al país de la guerra colonial en Indochina en la que Francia estaba envuelta desde el fin de la segunda guerra mundial. Desde entonces habían caído más de 90 000 soldados franceses; sólo la terrible derrota de Dien Bien Phu, a comienzos de mayo de 1954, había costado 16 000 muertos y prisioneros. Francia tampoco era ya capaz de soportar las cargas financieras, a pesar de que los Estados Unidos sufragaban el 70% de los costes. Conforme a los acuerdos de la Conferencia de Ginebra, firmados el 21 de julio de 1954, Francia pudo iniciar la retirada de sus tropas. Los franceses respiraron aliviados. Por primera vez, decían, un perdedor lograba imponer un ultimátum al vencedor. (Mendès-France había amenazado con una escalada de la guerra en caso de un fracaso de las negociaciones.) Es innegable que el ejército francés había sufrido una grave derrota en Indochina. Los militares achacaron la responsabilidad principal de ello a «la política», a la endeble IV República.

Mendès-France hizo también avanzar a pasos espectaculares la independencia de Túnez, que pudo ser sellada en marzo del año 1956. (Marruecos obtuvo la soberanía en el mismo mes; la mayor parte de las colonias francesas en el Africa negra alcanzarían la independencia en 1960). Mendès-France midió las posesiones coloniales francesas, que para muchos franceses seguían siendo el símbolo del *status* propio de una gran potencia, según el criterio de su utilidad práctica, y sobre todo nunca se engañó acerca del hecho de que el bienetsar y la capacidad de actuación nacionales, a mediados del siglo XX, no dependían de la posesión de «tierras lejanas», sino, por el contrario, de la capacidad económica del propio país [65].

En la liquidación de la guerra de Indochina, Mendès-France se sabía respaldado mayoritariamente por los partidos y por la población. La polémica en torno a la Comunidad Europea de Defensa, en cambio, se había convertido en una auténtica «guerra de religión» [66]. En 1954 era imposible saber quiénes tenían de su parte más fuerzas, si los «europeos» (prácticamente todo el MRP, la mitad de los socialistas y una parte de los radicales) o los «antieuropeos» (gaullistas, comunistas y la mitad de la SFIO), como entonces se les llamaba para simplificar. Los defensores de la CED destacaban la importancia de ésta como un paso más en el camino hacia una auténtica unión política de Europa que había sido iniciado por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) impulsada por Robert Schuman en mayo de 1950. Los detractores no querían sobre todo resignarse a que las fuerzas armadas francesas pudieran ser absorbidas por una organización supranacional.

Lo intrincado de la situación se puso de manifiesto cuando Mendès-France quiso iniciar conversaciones *a posteriori*, que sin embargo fueron rechazadas por los signatarios europeos del tratado. En Francia, los «europeos» dieron la voz de alarma al considerar que el contenido de los acuerdos en materia de política europea estaba en peligro. Los gaullistas se mostraron indignados porque en su opinión la idea, con un planteamiento erróneo de base, no era susceptible de mejoras. Tres de sus ministros abandonaron por ello el gobierno. Tres ministros «europeos» dimitieron cuando Mendès-France resolvió presentar el tratado de la CED a la Asamblea Nacional para su ratificación sin una toma de postura previa a su favor por parte del gobierno, lo cual empeoraba sin duda aún más las posibilidades de los acuerdos. El 30 de agosto de 1954, el Parlamento acordó por una mayoría de más de cincuenta votos no iniciar siquiera el debate de mo-

mento. Con ello fracasaba el proyecto presentado cuatro años antes por un primer ministro francés.

El hecho del rearme alemán, por sí solo, no fue la razón decisiva del rechazo de la CED. Esto se hizo patente poco después en la aceptación por el Parlamento de los «Acuerdos de París» (23 de octubre de 1954), que preveían entre otras cosas el ingreso de la República Federal de Alemania —y con ello también el del ejército alemán— en la OTAN. El secretario de Estado americano, John Foster Dulles, daría por este motivo al jefe del gobierno francés el nombre de «Superman», calificativo que sin duda habrían reconocido también muchos franceses a Pierre Mendès-France, uno de los pocos primeros ministros realmente populares de la IV República. Pero los días de su gobierno estaban contados.

Los partidos, para los que el «preocupante autoritarismo» (Jacques Julliard) y los intentos del jefe del gobierno de establecer un diálogo directo con el país se habían hecho cada vez más sospechosos, presentaron a Mendès-France el 6 de febrero de 1955 la factura del atrevido rumbo tomado en los últimos meses. En un debate sobre política norteafricana, el gobierno se convirtió en víctima de la «venganza de los partidarios de la CED»[67]; incluso los comunistas retiraron su apoyo a Mendès-France que, para su decepción, se había desenmascarado como «atlantista». Ya no habría lugar para las reformas internas, verdadero objetivo del gobierno Mendès-France. Los partidos habían prevalecido, pero el malestar por el «poder de los partidos», que parecían más preocupados por sus propios problemas que por los del país, fue en aumento.

Cien días después de finalizar la guerra de Indochina y cien días antes de la caída del gobierno Mendès-France, la IV República se vio enfrentada a un conflicto que acabaría por ser fatal para ella. La guerra de Argelia, iniciada el 1 de noviembre de 1954 con un levantamiento de los nacionalistas argelinos (1954-1962)[68] no fue simplemente una nueva guerra colonial, sino una guerra civil, pues Argelia no era una colonia en el sentido habitual de la palabra, sino (desde 1881) una parte de la metrópoli. El millón escaso de habitantes blancos («franceses argelinos») tenían una clara preponderancia económica y política frente a los 8,5 millones de habitantes autóctonos, circunstancia que tampoco había cambiado tras la promulgación del Estatuto de Argelia en 1947. La asimilación de la población musulmana nunca había sido impulsada seriamente. A lo largo de 1955, durante el gobierno del socialista radical Edgar Faure, que ante la inminencia de las elecciones prefirió evitar tomar decisiones definitivas en la cues-

tión argelina, la actuación francesa en Argelia tuvo por añadidura el carácter de una acción policial. Con ello se esperaba erradicar el «terror» argelino. Pero ya era demasiado tarde: el movimiento militante de liberación FLN (Front de Libération Nationale) se había propuesto como meta la independencia nacional del país.

Las elecciones para la Asamblea Nacional celebradas a comienzos de 1956, las últimas de la IV República, volvieron a transformar considerablemente el panorama político al producirse un giro hacia la izquierda sin que, una vez más, surgiese base alguna para una mayoría estable. El RPF, del que De Gaulle ya había renegado en 1953 y que desde entonces había perdido cada vez más terreno en las elecciones municipales, perdió las cuatro quintas partes de sus votos. Los socialistas y los comunistas lograron afirmarse. El ala izquierda «mendesista» de los socialistas radicales obtuvo el 10% de los votos. La auténtica sorpresa fue el auge del movimiento de concentración antiparlamentarista y demagógico del comerciante de artículos de escritorio Pierre Poujade [69]. Este «antipartido» de las clases medias descontentas, las más afectadas por los cambios estructurales de la economía nacional francesa, obtuvo, con un 11,5%, más votos que los demócratas populares. El 31 de enero de 1956, el socialista Guy Mollet, apoyado en el denominado «Frente Republicano», integrado por socialistas, socialistas radicales y otras formaciones menores de centro-izquierda, formó un gobierno minoritario que, con casi diecisiete meses de duración, pudo mantenerse durante más tiempo que los demás gobiernos de la IV República. (El 25 de marzo de 1957, el primer ministro firmó el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea [70]).

Durante el gobierno de Guy Mollet, que a lo largo de la campaña electoral se había declarado a favor de una solución conciliadora para Argelia y en contra de la «política de represión», la guerra en el norte de Africa estalló con toda su virulencia y brutalidad. Nada más tomar posesión del cargo, el primer ministro cometió un grave error, como él mismo reconocería posteriormente. Al visitar Argel el 6 de febrero de 1956 para nombrar a un nuevo gobernador general liberal, fue recibido con tomates podridos por los franceses argelinos, temerosos de una «política de renuncia» de izquierdas. Guy Mollet se sometió a las exigencias de los colonos y retiró al punto a su candidato, lo cual no sólo fue una muestra de debilidad del gobierno central de París, sino que sirvió también para poner de manifiesto a los últimos argelinos que aún estaban dispuestos a cooperar que París

apoyaba «a la todopoderosa minoría en contra de la humillada mayoría» [71].

En la ulterior escalada de violencia, el gobierno francés se inclinaría progresivamente por una solución militar. En 1956-57, finalmente, en Argelia se encontraban destacados casi medio millón de hombres, la mayor parte del ejército francés. La proporción era de dos colonos por soldado. Con ello, el papel principal sería desempeñado por un ejército que, ya desde Indochina y de nuevo con la interrupción forzosa en noviembre de 1956, por parte de ambas superpotencias, de la aventura franco-británica de Suez (que, entre otras cosas, se dirigió contra el movimiento de liberación argelino apoyado por Nasser), se creía privado por «la política» de éxitos palpables y que ahora se proponía llevar a cabo conforme a sus puntos de vista la «pacificación» de Argelia encargada por París. Durante los años de la guerra de Indochina, una gran parte del cuerpo de oficiales había llegado a la conclusión de que una guerra contra movimientos revolucionarios sólo podía ganarse con medios revolucionarios. En su opinión, en estos medios entraba tanto el adoctrinamiento de la población como la tortura. Las fuerzas armadas pronto cosiderarían el mantenimiento de una «Algérie française» como una labor misionera. Era inevitable que, con la realización de su cometido político, el ejército acabase por politizarse él mismo [72].

La escalada de la guerra trajo consigo, al tiempo que nuevas cargas económicas, una auténtica crisis moral en el país que, a principios de 1958, desembocó finalmente en una crisis de Estado. El gobierno trató de encubrir el brutal proceder del ejército en Argelia controlando las informaciones de la prensa; los críticos de la forma francesa de llevar la guerra se vieron expuestos a la intimidación y a la persecución por parte de la autoridad judicial. Con frecuencia, los militares vieron en las críticas de la metrópoli simplemente una traición a la patria, considerándose por otra parte insuficientemente apoyados por París. En tanto que en Argelia el ejército empuñaba todavía con más fuerza las riendas, en Francia la autoridad del Estado se resquebrajaba visiblemente. Por último, incluso los policías acabarían manifestándose en París, ante la Asamblea Nacional, con consignas antiparlamentarias. El «cáncer argelino» (Jacques Julliard) se había extendido a todo el organismo francés. El conflicto de Argelia, considerado insoluble, aún habría de prolongarse durante años, acompañado de rebeliones generales y enfrentamientos sangrientos, antes de que, con el Tratado de Evian (18 de marzo de 1962), pudiera encontrarse un arreglo entre Francia y el gobierno argelino en el exilio que finalmente diera la independencia nacional.

al país. La IV República no tenía ya fuerzas para resolver el conflicto; sus días estaban contados y esto no podrían cambiarlo los dos nuevos gobiernos formados tras la caída de Mollet en mayo de 1957: «La IV República se desmoronaba tanto desde la cúspide como desde la base» [73].

Una «institución política» había podido sin embargo conservar su autoridad: el general De Gaulle, mito viviente de la salvación francesa desde la guerra, que se convirtió en el punto de mira de los esfuerzos por hallar una salida a la embrollada situación. Políticos de todas las tendencias iniciaron una verdadera peregrinación hacia De Gaulle, en Colombey-les-deux-Églises. Su hora llegó cuando la crisis estatal alcanzó su apogeo. El 13 de mayo de 1958, el republicano Pierre Pflimlin, conocido por su actitud conciliadora en la cuestión argelina, fue elegido primer ministro. Aquel mismo día, los franceses argelinos y fracciones del ejército que veían en ello el primer paso hacia la capitulación ante el FLN asaltaron el gobierno general de Argelia y crearon el llamado Comité de Salvación Pública. El primer ministro Pflimlin traspasó a continuación todos los poderes al general Raoul Salan para que controlase la situación en Argelia, pero tampoco éste tuvo reparos en demostrar sus simpatías por una vuelta de De Gaulle al poder. El gobierno de París tenía que contar con que, de un momento a otro, podía producirse una intervención del ejército y de las fuerzas aéreas en la propia Francia; tampoco podía confiar plenamente en la policía; la Administración mantenía una actitud pasiva [74]. El 28 de mayo, Pierre Pflimlin dimitió; un día después, el presidente de la República Coty anunció también su intención de dimitir en caso de que la Asamblea Nacional no eligiese a De Gaulle como primer ministro.

El domingo 1 de junio de 1958, De Gaulle, de quien todas las partes implicadas en el conflicto creían que actuaría en su nombre, se presentó ante el Parlamento, pronunció el discurso de investidura más corto en toda la breve historia de la IV República y fue elegido jefe de gobierno con una mayoría de cien votos. Además obtuvo una concesión decisiva para él: sería su gobierno —y no una Asamblea Constituyente— el que elaborase una nueva Constitución francesa y la presentase a referéndum popular. El 29 de septiembre de 1958, los electores franceses ratificaron, con cuatro quintos de los votos emitidos, la nueva Constitución presidencialista francesa; definitivamente hastiados del poder del Parlamento y del «ajedrez de los partidos», los franceses se despidieron ahora de la IV República con casi igual unanimidad con que lo hicieran ya en 1945 de la III. No se movió ni un dedo para defenderla, y si sucumbió finalmente

no fue tanto por el ataque de sus adversarios como por su propia debilidad interna.

IV. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Con la capitulación incondicional del ejército alemán los días 7-9 de mayo de 1945, una semana después del suicidio de Hitler, acabó la dictadura nacionalsocialista y con ella la existencia estatal del Reich alemán. El poder político, según lo establecido por los mandos supremos aliados en la Declaración de Berlín el 5 de junio de 1945, pasó a las potencias vencedoras. El término «Alemania» seguía definiéndose como el territorio del Reich alemán dentro de las fornteras del 31 de diciembre de 1937, esto es, sin las anexiones y conquistas del régimen nazi. Que el *Anschluss* de Austria quedaría anulado tras la derrota alemana era desde hacía tiempo una cuestión indiscutible; la cesión de los territorios alemanes orientales a Polonia y la Unión Soviética sancionada en Potsdam, aunque con vacilaciones, por Truman y Attlee, limitaba todavía más la denominación de Alemania, que desde el verano de 1945 se utilizaría para designar el territorio de las cuatro zonas de ocupación. Al oeste, la región del Sarre pronto dejaría de estar incluida en él, ya que los franceses —con el consentimiento tácito de americanos y británicos— la separaron de su zona, integrándola paulatinamente dentro del área monetaria y aduanera francesa a fin de deslindarla del resto de Alemania.

Las potencias ocupantes no tenían ningún programa de política alemana que fuese más allá de los objetivos prioritarios de la ocupación —desarme, desmilitarización, reparación, sanción y reducción del potencial industrial alemán— y las ideas acerca de la realización del programa de ocupación —democratización y reinserción de Alemania en la comunidad de los pueblos democráticos— eran, como es lógico, muy distintas entre las potencias vencedoras [75].

En la Conferencia de Potsdam, en julio de 1945, los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética habían adoptado acuerdos de principio sobre el tratamiento a dar a la Alemania vencida que en parte ponían en práctica la política de las conferencias de guerra de los aliados en Teherán (noviembre de 1943) y Yalta (febrero de 1945) y en parte la revisaban tácitamente. Parecía como si se hubiese renunciado al objetivo de desmembrar Alemania, pues los representantes de las tres potencias mundiales habían acordado tratar como una unidad, en el plano económico, a la Alemania dividida en cuatro zonas de ocupación y establecer

en un futuro no lejano autoridades alemanas centrales (como órganos auxiliares del Consejo de Control Aliado en Berlín, en el que los cuatro gobernadores militares debían ejercer conjuntamente el poder supremo sobre Alemania).

Francia, que no había participado en la Conferencia de Potsdam, no se sentía ligada en absoluto por los escasos resultados de la conferencia de agosto de 1945 y trataba ante todo de velar por sus intereses en materia de seguridad, para los cuales lo mejor parecía ser una Alemania lo más fraccionada posible; en el primer plano de la política francesa se encontraba también el debilitamiento de la economía alemana y el reforzamiento de la suya propia. A fin de hacer valer sus reivindicaciones con respecto a la separación de la región del Sarre y la internacionalización de la región del Ruhr, el representante francés en el Consejo de Control Aliado tenía indicaciones muy precisas de llevar a cabo una labor de obstrucción. El programa de reparaciones acordado en Potsdam preveía una intervención drástica en la economía alemana, pero a diferencia del Tratado de Versalles de 1919 en vez de pagos a largo plazo y entrega de parte de la producción industrial, se decretaba el embargo de todo el potencial económico alemán en el extranjero y se proyectaba el desmontaje de una parte importante de la industria alemana. La URSS satisfaría sus aspiraciones dentro de su zona, además de obtener —en parte a cambio de alimentos y materias primas— equipamientos industriales de las zonas occidentales. Después de largas negociaciones en el Consejo de Control Aliado, en marzo de 1946 se dio a conocer el «plan industrial» según el cual la economía alemana de posguerra habría de reducirse al nivel del año de crisis de 1932 para que su nivel de vida no fuese superior a la media europea. El plan industrial distinguía esencialmente las industrias prohibidas, que eran, además de las relativas a armamento, instrumentos bélicos, aviones y barcos de altura de todo tipo, las de aceites minerales, goma, amoníaco, rodamientos de bolas, ciertas máquinas-herramientas pesadas, tractores pesados, aluminio en bruto, magnesio, berilio, vanadio, sustancias radioactivas, instalaciones de radio y otras.

El plan industrial, pese a sus deficientes precisas estadísticas y económicas, se basaba no obstante en la idea de un espacio económico que comprendiese las cuatro zonas. Ahora bien, dado que ni Francia ni la Unión Soviética se atuvieron a las actas de Potsdam, el plan se quedó en pura teoría. La excesiva explotación de sus zonas provocaría necesariamente escasez en los restantes territorios ocupados; los Estados Unidos y Gran Bretaña pagaron de hecho reparaciones a Francia y la Unión Soviética para evitar

que los alemanes de ambas zonas muriesen de hambre. Después de hacer algunas advertencias a sus colegas franceses y soviéticos, el general Clay, que por entonces era aún gobernador militar interino, además de ser el hombre decisivo de la zona americana, dispuso a principios de mayo de 1946 una interrupción demostrativa del desmontaje que impedía la fuga de bienes de producción de la zona americana a la soviética y a la francesa. Después de un año de ocupación aliada, las cuatro zonas se encontraban herméticamente aisladas entre sí [76]. Al no funcionar como órgano de coordinación el Consejo de Control Aliado en Berlín, los cuatro gobernadores militares hicieron y deshicieron a su capricho en sus zonas respectivas, con el resultado de un desarrollo diferente de prácticamente todos los campos, desde la economía hasta la forma de llevar a cabo la desnazificación, pasando por la reconstrucción de instituciones y organizaciones. La activa intervención de la administración militar soviética —reforma del suelo, unificación forzosa del SPD y el KPD (Kommunistische Partei Deutschlands, Partido Comunista Alemán) con el SED, y otros cambios revolucionarios en las estructuras sociales y políticas— provocó un distanciamiento cada vez mayor entre la zona oriental y las occidentales. Las posibilidades de desarrollo de la política alemana (que, naturalmente, fue en principio una administración delegada en todas las zonas) se hallaban especialmente limitadas en la zona francesa y llegaron, todo lo más, al plano de los tres *Länder* del sudoeste lemán. En la zona americana, desde el otoño de 1945, existió en cambio una representación política alemana por encima del plano de los *Länder*, el Consejo de los *Länder*, con sede en Stuttgart, y en la zona británica existió desde 1946 al menos un órgano consultivo alemán prácticamente parlamentario de gobierno militar, el Consejo Consultivo de las Zonas, con sede en Hamburgo.

En el famoso discurso del 6 de septiembre de 1946, en Stuttgart, el secretario de Estado James F. Byrnes explicó las líneas generales de la política americana respecto a Alemania. Byrnes destacó claramente la intención de los americanos de atenerse a los acuerdos esenciales de Potsdam, y en particular en lo relativo al restablecimiento de la unidad económica [77]. En caso de necesidad, esto se haría a una escala menor. Los preparativos en este sentido ya estaban en marcha: Gran Bretaña había aceptado a finales de julio la oferta de unir su territorio de ocupación a la zona de Estados Unidos. París y Moscú, como era de esperar, habían declinado la invitación relativa a una fusión de las zonas. El acuerdo angloamericano, que entraría en vigor el 1 de enero de 1947, fue el primer paso, aunque sin duda aún no muy re-

suelto, hacia la creación de un Estado alemán occidental. A pesar del cuidado puesto en evitar conferir a la «bizona» el menor distintivo de estatalidad, ésta se convertiría, sobre todo tras las reformas organizativas del verano de 1947 y comienzos de 1948, en la piedra angular de la República Federal. La Zona Económica Unificada, tal como se acabaría llamando oficialmente la bizona, dispuso con el Consejo Económico Alemán, con sede en Francfort, de un Parlamento y, con los directores y un director general, de un gobierno con capacidad de maniobra restringida. Los órganos de la bizona fueron —bajo la soberanía angloamericana— los puntales del futuro, sobre todo en política económica y social, mediante el establecimiento, por entonces muy controvertido, de la «economía social de mercado». La opción en favor de un orden económico neoliberal tomada en el verano de 1948, verdadero logro de la Administracón y del poder legislativo alemán de la bizona, sería un elemento constitutivo de la República Federal [78].

Con la fusión de sus respectivas zonas, Washington y Londres habían iniciado un camino del cual esperaban reducir el control de las cuatro potencias sobre Alemania. La construcción de la bizona no sólo habría de aliviar la carga de los contribuyentes británicos; su potencial económico debería ejercer además un efecto magnético sobre las restantes zonas. El riesgo de esta política, inaugurada con intenciones unificadoras, estaba en la separación de la zona de ocupación soviética y la división de Alemania. Este riesgo fue asumido en 1946, haciéndose paulatinamente realidad en el curso de los dos años sucesivos.

En tanto que las pautas de la política británica y americana respecto a Alemania coincidirían en lo esencial, como muy tarde, a partir del verano de 1946 (el consenso le vino impuesto también a Gran Bretaña por necesidades financieras), Francia, por su parte, habría de practicar hasta el verano de 1948 una política de ocupación destructiva. Los planes para Alemania, esbozados ya en 1944 por De Gaulle, estaban exclusivamente determinados, de forma consecuente y lógica, por los intereses de Francia. La necesidad francesa de una reconstrucción económica y de una seguridad estratégica debía ser satisfecha mediante tres exigencias a Alemania:

1. Separación de Renania, el Ruhr y el Sarre de Alemania para crear una zona de seguridad en la frontera francesa oriental. La modificación de las fronteras en el oeste habría asegurado el abastecimiento francés de carbón y, previsiblemente, habría debilitado definitivamente el potencial económico de Alemania.

2. La ocupación prolongada de Alemania, acompañada de un plan de desmantelamiento, explotación de las fuentes de materias primas alemanas y entregas de parte de la producción cotidiana, habría de acelerar la reconstrucción francesa, posibilitar la desmilitarización de Alemania hasta las raíces del potencial económico e impulsar, en cierta manera, la democratización de Alemania.
3. División de Alemania en *Länder* organizados con la menor rigidez posible dentro de una federación de Estados.

Con sus conceptos de política constitucional que remitían a las tradiciones de la Confederación Renana napoleónica, Francia ponía sus esperanzas en las tendencias autonomistas de los *Länder* alemanes y en particular los del sur de Alemania; los políticos franceses también se esforzaron, en la teoría y en la práctica, por lograr sus objetivos. La prohibición de colaboración entre los partidos y los órganos administrativos alemanes más allá de las fronteras de los *Länder* de la zona francesa debía limitar la vida política a los futuros Estados federales y reforzar su autoconciencia; al mismo tiempo, la idea de Europa sería cultivada por Francia en el Rin, el Ruhr y el Sarre de una forma tan afectuosa como interesada.

Sin embargo, Francia fue también la única potencia ocupante predispuesta a reflexionar sobre los detalles de un ordenamiento constitucional para Alemania. El memorándum sobre un nuevo orden constitucional alemán del ministro de Exteriores Georges Bidault, ratificado el 29 de enero de 1947 unánimemente por el gabinente Ramadier, consistía en un verdadero proyecto de Constitución que, empezando por un catálogo de derechos fundamentales y pasando por la delimitación de competencias, hasta llegar al ordenamiento económico y al sistema financiero, contenía todo lo esencial. De acuerdo con la concepción federal, las competencias esenciales y, sobre todo, la autonomía financiera pasarían a depender progresivamente de cada Estado en particular [79].

La cuestión alemana apareció por primera vez en la primavera de 1947 como punto central de una conferencia —la cuarta— del consejo de ministros de Asuntos Exteriores de las cuatro grandes potencias, el órgano instituido en Potsdam para la preparación de paz con Alemania y con sus antiguos aliados. Por un momento se produjo el consenso en la Conferencia de Moscú (del 10 de marzo al 24 de abril de 1947) en lo relativo a la creación de administraciones centrales alemanas y de un Consejo Consultivo alemán que participase en la elaboración de una Constitución democrática provisional a través del Consejo de Control Aliado. A la propuesta británica de que estos pasos fuesen seguidos

paulatinamente de un gobierno provisional se adhirieron también los ministros de Exteriores, pero la actitud soviética frente al problema de las reparaciones y la discrepancia fundamental entre las potencias occidentales y la Unión Soviética en cuanto a la cuestión de la federalización de Alemania pronto acabarían con el consenso.

El hecho de que el inicio de la conferencia coincidiese con el anuncio de la doctrina Truman (12 de marzo de 1947) fue sintomático de las relaciones existentes entre las grandes potencias mundiales, Estados Unidos y la URSS, y determinó prácticamente el fracaso de la Conferencia de Moscú de ministros de Asuntos Exteriores. La declaración del presidente americano, a la vista de la infiltración comunista en Grecia y Turquía, de que América estaba decidida a aportar ayuda material a los países «libres» en el caso de que su libertad se viese amenazada marcó el comienzo de la política americana de *containment,* con la cual se habría de «contener» la ofensiva comunista e inducir a Moscú, a la larga, a abandonar su política intransigente de *statu quo.*

A la concepción de la política exterior americana, concentrada transitoriamente en Europa, respondió el Plan Marshall, desarrollado en junio de 1947 por el nuevo secretario de Estado americano y referido a un generoso programa de ayuda económica (European Recovery Program) ofrecido también a la Unión Soviética y a los Estados del bloque oriental[80]. Pero el aspecto central del Plan Marshall no lo constituía, en modo alguno, el problema de Alemania. Sus destinatarios más importantes eran Gran Bretaña, Francia e incluso Italia, y las consideraciones de tipo económico —coordinación e integración de la economía europea occidental para la obtención a largo plazo de mercados estables (y libres)— eran al menos tan importantes como las implicaciones políticas. El Kremlin sería el responsable del distanciamiento del área de influencia soviética con respecto al Plan Marshall, en absoluto inesperado y precedente asimismo de la división de Alemania. Francia, perentoriamente dependiente de la ayuda económica americana, ahora se integraría en el bando occidental y, cediendo a la presión económica, pondría de manifiesto su buena disposición hacia una política alemana más constructiva. No es de extrañar que la actitud soviética frente a las potencias occidentales se convirtiese en abierta hostilidad bajo los efectos de la participación americana en la integración económica y política de Europa occidental.

Las esperanzas puestas aún en el quinto encuentro de ministros de Asuntos Exteriores de Londres (25 de noviembre-15 de diciembre de 1947) serían vanas desde un principio teniendo

en cuenta el clima político general. La conferencia supuso únicamente un enfrentamiento de posiciones endurecidas. Molotov reprochó a americanos y británicos la intención de esclavizar económicamente a Alemania con ayuda del Plan Marshall y de dividirla políticamente. En represalia, los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y Estados Unidos destacaron que la frontera oriental de Alemania sólo se había establecido de forma provisional y que, en particular, la administración polaca de los territorios al este del Oder y del Neisse todavía no había sido reconocida. La Conferencia de Londres no sólo concluyó sin resultados, sino que ni siquiera tomó ya en consideración la prosecución de los debates dentro del consejo de ministros de Asuntos Exteriores. Con ello se anulaba también otro acuerdo de Potsdam. A pesar de que en diciembre de 1947 la controvertida alianza de guerra se había comprometido a realizar una política alemana bajo la responsabilidad de las cuatro potencias, en marzo de 1948 era evidente que la Unión Soviética pondría fin a su participación en el Consejo de Control Aliado. Las decisiones que condujeron a la creación del Estado alemán occidental se desencadenarían ahora rápidamente. En abril de 1948, la Zona Económica Unificada y la zona francesa se integraron dentro de la organización del Plan Marshall (OECE), firmando como representantes de los alemanes los tres gobernadores militares. En junio de 1948 tuvo lugar la reforma monetaria, tanto tiempo esperada, preparada por expertos aliados (sobre todo americanos) e implantada por los tres gobiernos militares en las zonas occidentales. La reacción de la Unión Soviética consistió en un bloqueo total de todas las vías de acceso a Berlín. Los sectores occidentales de la antigua capital del Reich sólo podrían ser abastecidos, a partir del 26 de junio de 1948, a través de un puente aéreo, primeramente improvisado y más tarde cada vez más perfeccionado.

Con el bloqueo de Berlín, la Unión Soviética trataba de frenar de forma drástica el desarrollo del nuevo Estado de Alemania. Pero en cierto sentido el Kremlin consiguió justamente lo contrario: gracias a los intrépidos logros de la aviación americana y británica, la política de presión frente a Berlín tuvo exclusivamente un efecto de solidaridad entre los alemanes y las potencias occidentales y no el esperado por sus promotores orientales. La brutalidad de los soviets dominó durante meses los titulares de los periódicos y se convirtió en la música de fondo de la fundación de la República Federal, contribuyendo además a mitigar las dudas en cuanto a la división de la nación.

La necesidad de llegar al menos a un acuerdo con Francia respecto a una política alemana a largo plazo no podía ser igno-

rada a finales de 1947 por Washington y Londres; las conversaciones oficiosas de las tres potencias occidentales tras la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de Londres fueron seguidas por la conferencia de los Seis, que se celebraría nuevamente en Londres del 23 de febrero al 5 de marzo y del 20 de abril al 2 de junio de 1948 con la inclusión de la vecina Alemania occidental Los franceses obtuvieron concesiones en la cuestión del Sarre y el control del Ruhr que indujeron a París a colaborar en la búsqueda de una solución al problema alemán. Pero dada la situación internacional, ésta sólo podía ser una solución occidental. No obstante, las potencias occidentales llegaron a un acuerdo mínimo, aceptado también por los países del Benelux, que concedía por primera vez a los alemanes de las tres zonas occidentales poderes restringidos para la reorganización de su vida estatal. La concepción de Londres del problema alemán escondía la teoría del imán que también había servido de base, con poco éxito, a la creación de la bizona y cuyo contenido se resumía en que un Estado nuclear de Alemania occidental tendría, en virtud de su fuerza de atracción económica y política y una vez consolidado, un efecto magnético sobre la zona oriental que, en algún momento, provocaría la unión.

Los resultados de la Conferencia de los Seis en Londres fueron presentados el 1 de julio de 1948 a los once presidentes de gobierno de las tres zonas occidentales. Estos recibirían de manos de los gobernadores militares el encargo de la fundación del Estado en forma de los tres «Documentos de Francfort». Por el primer documento, los jefes de los *Länder* eran autorizados a convocar un gobierno constituyente que elaboraría una Constitución cuyos principios generales —democracia y federalismo, garantía de las libertades y de los derechos individuales— ya estaban preestablecidos y que sería sancionada por los gobiernos militares. En el segundo documento se instaba a los presidentes de gobierno a examinar las fronteras de los *Länder* —establecidas después de 1945 de forma más o menos arbitraria— y a proponer, en caso necesario, los cambios pertinentes. Los jefes de los *Länder* no hicieron uso de esta invitación; el único cambio territorial en el ámbito de la República Federal no se produciría hasta 1952 con la creación del Estado sudoccidental que, con el nombre de Baden-Württemberg, sustituiría a la formación artificial surgida en 1945 y dividida por fronteras entre las zonas de Württemberg-Hohenzollern y Baden (del Sur).

En el tercer documento de Francfort se esbozaban los rasgos fundamentales de un Estatuto de Ocupación. De este modo quedaba claro que con la ratificación de la Constitución del nuevo

Estado de Alemania occidental no se ponía fin al poder de ocupación. Ahora bien, la autoridad ilimitada de los gobernadores militares quedaría restringida en el futuro; su función, en situación normal, se reduciría a la dirección de las relaciones exteriores de «Alemania», el control del comercio exterior, las reparaciones, el nivel industrial, la descartelización, el desarme y la desmilitarización, si bien con derecho a recuperar, en cualquier momento, sus poderes ilimitados en el caso de una situación de emergencia que pusiera en peligro la seguridad, o «para asegurar, en caso de necesidad, la observación de las Constituciones y del Estatuto de Ocupación». La tesis proclamada reiteradamente durante los meses siguientes, hasta la primavera de 1949, por los socialdemócratas, según la cual la verdadera Constitución de Alemania occidental no serían las Leyes Fundamentales sino el Estatuto de Ocupación, no era pues del todo equivocada.

En julio de 1948, los jefes de los *Länder* de Alemania occidental discutieron a lo largo de varias conferencias la oferta aliada acerca de la fundación de un Estado. Los políticos de Alemania occidental no pensaron en ningún momento en rechazar la propuesta «de dar al pueblo alemán la posibilidad de conseguir, sobre la base de una forma de gobierno libre y democrática, la restauración final de la unidad alemana, inexistente en la actualidad» (comunicado final de Londres), pero sí reflexionaron sobre los medios y vías de evitar la hostilidad a la creación de un Estado separado, a la exclusión de la zona de ocupación soviética y a la división de la nación. En duras negociaciones con los gobernadores militares, los presidentes de gobierno trataron de dar a los Documentos de Francfort un contenido menos tajante desde el punto de vista legal o que, al menos, no sonase tan perentorio. Pero las concesiones a las que finalmente se avendrían los gobernadores de los aliados tuvieron más un carácter ornamental que jurídico: la Constitución sólo se denominaría *Grundgesetz* (Ley Fundamental), el gobierno constituyente llevaría el nombre de *Parlamentarischer Rat* (Consejo Parlamentario y no Asamblea Nacional o Asamblea Constituyente) y se renunciaría a la consulta popular inicialmente exigida acerca de la Ley Fundamental. Con estas concesiones se satisfacían en cierta medida los deseos alemanes de acentuar el carácter provisional de la fundación del Estado[81].

El intento de incluir el Estatuto de Ocupación en las negociaciones —los jefes de los *Länder,* un tanto ingenuos, llegarían incluso a esbozar las tesis correspondientes y a presentarlas a los gobernadores militares— había sido inútil desde un principio, al igual que el de inducir a los aliados a promulgar el Esta-

tuto de Ocupación antes de la Ley Fundamental. Habría sido muy conveniente aducir el mandato aliado de que la fundación del Estado se realizara dentro del Estatuto de Ocupación como argumento en los debates sobre el problema de la unidad alemana: en el difícil intento de demostrar que la unidad de la nación alemana, rota por la fundación de un Estado parcial, podría restablecerse a largo plazo, habría resultado agradable invocar órdenes aliadas. La decisión de los políticos de Alemania occidental en julio de 1948 no fue sin embargo forzada y el gobernador militar francés llegó incluso a celebrar las muestras de rechazo por parte alemana, pues a diferencia de Washington y Londres en París se habría visto con buenos ojos el aplazamiento del inicio de un nuevo Estado alemán. La decisión de crear el Estado occidental no se tomó indudablemente tampoco en contra de la voluntad de la población: el clima de la guerra fría reforzó el tradicional anticomunismo que permitía a todos tachar a la zona soviética de semicolonia rusa y el bloqueo soviético de Berlín contribuyó en gran medida, como dramático telón de fondo de la fundación del Estado occidental, a su justificación moral, política y psicológica.

La empresa progresó rápidamente. En agosto de 1948, una comisión de expertos nombrada por los presidentes de gobierno elaboró el proyecto de Ley Fundamental[82]. El resultado de la convención constituyente reunida en Herrenchiemsee recogía las orientaciones con respecto a la Constitución aceptadas por el Consejo Parlamentario el 1 de septiembre en Bonn en sus puntos fundamentales. Tanto en el proyecto de Herrenchiemsee (que no tenía carácter oficial) como en los debates de Bonn, la Constitución de Weimar seguía siendo sin duda alguna el modelo, existiendo unanimidad en cuanto a la necesidad de evitar el defecto de construcción de la Constitución del Reich de 1919 en razón de las experiencias de la primera República. El jefe del Estado sólo tendría, pues, una función decorativa, excluyéndose los artículos que autorizaban a formar gobiernos sin base parlamentaria; se determinaba asimismo que los gobiernos sólo podrían ser derrocados mediante un voto de censura constructivo y que el Parlamento debía quedar asegurado frente a la paralización provocada por los partidos pequeños. De esta forma se anticipaba la obligación de construir un nuevo Estado federalista, cuya observación sería exigida de múltiples maneras por los aliados.

El veto de las potencias de ocupación, que hasta el final de las deliberaciones defendieron una concepción de las finanzas muy poco favorable a los *Länder* y propusieron que la prioridad

legislativa fuese atribuida a los Estados federales, provocó en marzo de 1949 una polémica en torno a la Constitución que provocó enfrentamientos cruzados entre alemanes y aliados. El compromiso de los partidos decisivos dentro del Consejo Parlamentario —composición: 27 diputados, respectivamente, de la CDU/CSU (Christlich-Demokratische Union/Christlich-Soziale Union, Unión Cristiano-Demócrata/Unión Socialcristiana) y del SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Partido Socialdemócrata Alemán), cinco del FDP (Freie Demokratische Partei - Partido Liberal) y dos de Centro, del Partido Alemán (Deutsche Partei) y del KPD (Kommunistische Partei Deutschlands, Partido Comunista Alemán), respectivamente—, el resultado del cual sería el controvertido proyecto de Ley Fundamental de marzo de 1949, parecía haber sido inútil. En tanto que los partidos de la Unión, encabezados por el presidente de la Asamblea Constituyente Konrad Adenauer, se mostraban inclinados a considerar los reparos de los aliados, el SPD planteó una prueba de fuerza amenazando con el fracaso de la Constitución (no era posible «hacer una Ley Fundamental por orden de las potencias de ocupación», había declarado Kurt Schumacher). Para disgusto del general Clay, gobernador militar americano, los británicos no quisieron sin embargo imponer nada en contra de la voluntad del SPD, y en Washington, donde los ministros de Exteriores de las tres potencias occidentales se reunieron a principios de abril para decidir el Estatuto de Ocupación, existía asimismo una predisposición a hacer concesiones. La Ley Fundamenral sería promulgada, por fin, tras unos últimos retoques y por gran mayoría, el 8 de mayo, cuatro años después de la firma de la capitulación sin condiciones. El 12 de mayo, los gobernadores militares sancionaron el texto de la Constitución que, una vez ratificado por los Parlamentos de los *Länder* (a excepción de Baviera), sería publicado y entraría en vigor el 23 de mayo de 1949[83].

Otro documento constitutivo de la República Federal, el acuerdo del 28 de diciembre de 1948 relativo a la creación de una Autoridad Internacional del Ruhr (Estatuto del Ruhr), entraría en vigor el 22 de abril. Aunque en un principio Alemania occidental aún estaría representada en ella por los gobernadores militares— al igual que en la OECE—, el Estatuto del Rhur sería considerado como un paso hacia la unidad europea —haciendo de la necesidad virtud— o como una imposición insoportable, por el disgusto que acarrearía la pérdida de las posibilidades de la nación de disponer de la producción de carbón y de acero.

El tercer documento constitutivo, conocido por los alemanes desde el 10 de abril de 1949 y que habría de entrar en vigor

en el momento en que se formase el primer gobierno federal, era el Estatuto de Ocupación. Su artículo más amenazador era el primero, por el cual las autoridades de ocupación podrían recuperar en cualquier momento todos los poderes del gobierno alemán «siempre y cuando lo consideren indispensable por razones de seguridad o para el mantenimiento de una forma de gobierno democrática en Alemania o en cumplimiento de las obligaciones internacionales de sus gobiernos». Por lo demás —observando la cláusula de buena conducta del Estatuto de Ocupación— los derechos de la República Federal eran considerables y susceptibles de ser ampliados por encima de lo esperado en 1949 y mucho más rápidamente de lo que se pensaba. Extraordinariamente impresionante fue, sobre todo, la sustitución de los gobernadores militares por «altos comisarios»; a partir de mayo de 1949, los generales serían reemplazados por civiles con estatuto diplomático. El representante de Gran Bretaña se sustituyó a sí mismo: el general Robertson se retiró del ejército para poder ejercer las funciones de alto comisario. Lucius D. Clay regresó a Estados Unidos tras la gira de despedida más triunfal que nunca haya podido tener un procónsul en un país ocupado; el americano John McCloy fue nombrado alto comisario y el general francés Koenig fue relevado por André François-Poncet.

En el verano de 1949, período de transición entre el régimen directo de ocupación y la República Federal, sonó finalmente la hora de los partidos. Estos ya existían desde el otoño de 1945, en un principio como formaciones locales y regionales de nueva fundación o reinstauradas, cuya autorización dependía de los gobiernos militares, no pudiendo agruparse en asociaciones situadas por encima del nivel de los *Länder* salvo en la zona de ocupación británica[84]. El campo de acción de los partidos se amplió muy pronto, pasando de los Parlamentos municipales a los regionales; desde mediados de 1947, el Consejo Económico de Francfort ofrecería posibilidades de actuaciones parlamentarias, si bien —a pesar de las importantes decisiones tomadas en el campo de la política económica y social en Francfort— en muchos aspectos éstos tenían aún el carácter de estudios. Los interlocutores (y durante mucho tiempo, ni siquiera esto, sino simplemente receptores de órdenes) de los gobernadores militares hasta la promulgación de la Ley Fundamental serían los presidentes de gobierno de los *Länder,* que en su totalidad se sentían más como príncipes territoriales que como políticos de partido[85]. El Consejo Parlamentario, elegido de forma indirecta y exclusivamente autorizado para la elaboración de la Ley Fundamental, era sin duda el escenario de las discusiones de política de par-

tido, aunque éstas se limitaban a lo que era de su competencia y dependían en cierta medida del consenso. Después de la promulgación de la Ley Fundamental, el campo quedó libre por fin para la primera gran prueba de fuerza entre los partidos; la lucha por los escaños en el primer *Bundestag* (Parlamento Federal) tendría una virulencia sin parangón posterior, prolongándose hasta el 14 de agosto de 1949.

El Partido Socialdemócrata Alemán, a diferencia de los partidos «burgueses», no se vio obligado a atravesar después de la guerra ningún difícil proceso de fundación y formación [86], ya que podía entroncar con sus tradiciones; su restauración, o reorganización, que partió de Hannover, donde Kurt Schumacher había establecido su cuartel general, concluiría básicamente en la primavera de 1946 con su primer congreso. El liderazgo de Schumacher había sido indiscutible, ya desde un principio, en las tres zonas occidentales. El partido socialdemócrata tendía a mantenerse en el modesto campo de acción política del período de posguerra, no en último término por el trauma de la unión forzosa del SPD y el KPD con el SED en la zona soviética en la primavera de 1946. Ello se debió a varias razones, siendo una de las más importantes el abismo entre las aspiraciones programáticas y su posibilidad de realización, pues el SPD había comenzado exigiendo unas medidas sociales y políticas que preveían un orden socialista democrático en Alemania dentro de una Europa estructurada de forma similar. La imposibilidad de hacer realidad esta idea bajo un régimen de ocupación y con el telón de fondo de la contradictoria política aliada condujo al SPD a una situación de «todo o nada» a partir de la cual era escasa la disposición a asumir responsabilidades políticas de un estado de cosas impuesto. Y finalmente, a la dirección central del SPD pareció faltarle también la visión necesaria para comprender «que hasta las decisiones administrativas más pequeñas daban lugar a hechos, también de carácter social, prácticamente irreversibles» [87]. Por el contrario, la visión de los partidos de la Unión fue muy aguda en este sentido; la mayor amplitud programática de la CDU/CSU le sirvió además para evitar la pusilanimidad a la hora de tomar decisiones y las dudas dogmáticas. En julio de 1947, en el Consejo Económico de Francfort, el SPD optó por pasar a la oposición, en tanto que los representantes de la Unión, coaligados con los liberales, hicieron la política más pragmática que les fue posible, creando así las condiciones esenciales para el desarrollo de su papel futuro.

Hasta el I Congreso Federal del Partido, en 1950, la Unión, con sus centros de gravedad en Renania, Alemania meridional

y Berlín, sería, desde el punto de vista programático y organizativo, un conjunto heterogéneo, de partidos autónomos y homónimos, por cuyo liderazgo rivalizarían, ante todo, Konrad Adenauer, a la cabeza del comité regional de la CDU en la zona británica (una especie de Parlamento de delegados de las agrupaciones regionales de la CDU), y Jakob Kaiser, figura central de la agrupación regional de Berlín. Esta última pondría de manifiesto de forma externa su aspiración hegemónica mediante la denominación Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDUD). Las aspiraciones de Kaiser fueron apoyadas también, hasta 1948, por las cinco agrupaciones regionales de la zona de ocupación soviética. La fusión de la CDU en la zona americana había fracasado ya en sus inicios, en la primavera de 1946, a causa de las rivalidades por el liderazgo y de la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre un nombre común para los partidos de la Unión de Alemania meridional [88].

Los comienzos del FDP fueron más difíciles que los del SPD y los de los partidos de la Unión. Por una parte, los liberales tenían menos posibilidades de recurrir a sus antiguos simpatizantes, y por otra recibieron menos ánimos de las potencias de ocupación. Con diversos nombres, y en un principio con escaso contacto entre sí, los diferentes partidos liberales estuvieron presentes en todas las zonas a nivel de distrito y más tarde también de región y zona. En la zona británica se unieron en enero de 1946 para formar el FDP; en la zona americana se agruparon en septiembre de 1946 en el DVP (Demokratische Volksparrei, Partido Democrático Popular), en tanto que en la zona francesa no se produjo ninguna fusión. En diciembre de 1948, los partidos liberales regionales de las tres zonas occidentales se unieron para formar el FDP [89].

En tanto que los liberales apoyaban incondicionalmente la política de economía de mercado de la CDU/CSU en el Consejo Económico de la bizona, en el Consejo Parlamentario se mostraban de acuerdo en numerosas cuestiones —competencia legislativa, política cultural y educativa, problema Iglesia-Estado— con los puntos de vista socialdemócratas. En la primavera y el verano de 1949, la polémica pública estuvo sin embargo dominada por el tema de la política económica, y en este sentido CDU/CSU y FDP lucharían codo con codo por obtener el favor de los electores. Los partidos de la Unión defendían en sus «Tesis de Düsseldorf» de julio de 1949 la «economía social de mercado» (con lo cual hacían también pública la corrección de rumbo con respecto al socialismo cristiano del «Programa de Ahlen»). Los socialdemócratas profetizaban el pronto y amargo final del progra-

ma económico de Ludwig Erhard y aconsejaban su propio modelo de economía dirigida y socialización de la gran industria, la banca y las compañías de seguros. La polémica se desarrolló en una especie de ambiente de lucha cultural y, por lo desmedido de sus ataques a la Iglesia y a sus fieles, Kurt Schumacher perdió finalmente las elecciones para la socialdemocracia. La CDU y la CSU se convirtieron en la fracción más fuerte del primer Bundestag, con el 31,0% de los votos y 139 escaños, el SPD obtuvo el 29,2% (131 escaños), y el FDP entró en el Parlamento con el 11,9% de los votos y 52 diputados. Los liberales se habían comprometido desde hacía ya tiempo a participar en un bloque cívico y, para el Deutsche Partei (4,0% y 17 escaños), conservador y con mayor peso específico en la Baja Sajonia, ésta era la única posibilidad a tener en cuenta. Cerca de un tercio del total de votos había correspondido a partidos pequeños que representaban intereses regionales, como el Bayernpartei (Partido Bávaro, 17 escaños), confesionales o sociales, como el Centro (17 escaños); la agonizante Asociación para el Desarrollo Económico (Wirtschaftliche Aufbauvereinigung, WAV) del demagogo Loritz obtuvo 12 escaños en Baviera, el KPD obtuvo 15 representantes y otras formaciones (entre ellas, algunas situadas muy a la derecha) obtuvieron un total de nueve escaños. El resultado de los comicios parecía señalar el renacimiento de la situación de Weimar, pero en realidad era el comienzo de un proceso de concentración, tal como quedaría confirmado en las elecciones de 1953 y 1957. Cierto es que en 1953 se sumaron los 27 escaños del partido de los refugiados (Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, Alianza de los Desterrados y Desposeídos), fundado en 1950, pero el BHE desaparecería del tercer Bundestag. Del segundo estuvieron ya ausentes los comunistas, así como el Partido Bávaro y la WAV; junto al Deutsche Partei, que gracias a los acuerdos electorales con la CDU podría mantenerse en el segundo y tercer período electoral con 15 y 17 escaños respectivamente, en 1953 sólo entrarían en el *Bundestag* tres diputados del Centro como representantes de los partidos pequeños [90].

La decisión de formar una coalición burguesa había sido tomada el 21 de agosto de 1949 en un encuentro informal de dirigentes de la Unión en casa de Konrad Adenauer. Adenauer gozaba entre tanto de tal prestigio que pudo ser declarado candidato indiscutible a canciller; la creación de una gran coalición con el SPD apenas se planteó ya. El apoyo del candidato del FDP, Theodor Heuss, que el 12 de septiembre sería elegido primer presidente federal por la Asamblea Federal, aseguró a los demo-

cratacristianos los votos del FDP para la elección del canciller el 15 de septiembre de 1949, en la que Adenauer conseguiría la victoria por escasísima mayoría (202 votos frente a 142 de los 389 emitidos). Con la jura del cargo de los trece ministros del primer gabinete (5 CDU, 3 FDP, 3 CSU, 2 DP) el 20 de septiembre y con la primera visita del canciller federal y de algunos ministros a los tres altos comisarios en Petersberg, cerca de Bonn, al día siguiente, nacía oficialmente la República Federal.

Al nuevo Estado no sólo le faltaba credibilidad, sino que además estaba sometido todavía a tutela y tenía también en la figura de la República Democrática Alemana, fundada en octubre de 1949, un Estado vecino cuya legitimidad era enérgicamente contestada, cuyo Gobierno era considerado en consecuencia ilegal y también ignorado, y cuya población era considerada como los parientes pobres y esclavizados sin culpa por quienes había que velar. La Constitución de la República Federal prescribía expresamente esta tutela, en relación con el precepto de reunificación, en el preámbulo de la Ley Fundamental: el «pueblo alemán» de los territorios de las tres zonas occidentales de ocupación ha «actuado también en representación de aquellos alemanes a los que les ha sido negada la posibilidad de participar». De ello surgió muy pronto la aspiración a la representación única de la República Federal, ratificada solemnemente en el otoño de 1950 por los ministros de Exteriores de las tres potencias occidentales, según la cual el gobierno de Bonn era el único gobierno alemán legalmente constituido y autorizado a hablar en nombre de Alemania y a representar al pueblo alemán frente al resto del mundo. Cinco años después, en diciembre de 1955, esta reivindicación fue remachada por el Estado alemán occidental, entre tanto soberano, con ayuda de la doctrina Hallstein; esta doctrina, que tomó su nombre del entonces subsecretario de Asuntos Exteriores, amenazaba con represalias por parte del gobierno federal a quienes reconocieran a la RDA e iniciaran relaciones diplomáticas con ella. Y así se procedería hasta finales de la década de 1960 con el fin de imponer o al menos proclamar la aspiración a la representación única de los intereses alemanes por el Estado provisional de la República Federal: en octubre de 1957 se interrumpieron las relaciones con Yugoslavia debido a que Belgrado reconoció a la RDA, y en enero de 1963 la doctrina Hallstein se aplicó igualmente contra Cuba. Hasta mediados de la década de 1960, frente a los países más pobres bastaron por supuesto en general los argumentos económicos y, en caso necesario, las correspondientes amenazas. Desde la crisis en las relaciones entre los países árabes y la Repú-

blica Federal, a partir de 1965, el instrumento de política exterior que era la doctrina Hallstein fue perdiendo paulatinamente utilidad, desapareciendo poco a poco. La realidad de los dos Estados alemanes también había sido negada durante bastante tiempo por el empeño del Estado occidental de dar a la RDA el nombre de SBZ (*Sowjetische Besatzungszone,* Zona de Ocupación Soviética) o simplemente Zona, citándose, en el mejor de los casos, las siglas DDR (RDA) entrecomilladas, en tanto que los habitantes de la República Federal, por su parte, mostraban una animosidad difícilmente explicable, aunque persistente, contra las siglas BRD (RFA).

En lo que a la marginación del Este se refiere, en la República Federal reinaba un amplio consenso entre el gobierno y la oposición socialdemócrata, que acentuaba su carácter nacional; la unanimidad se daba en especial en cuanto a la idea de que la RDA era, y seguiría siendo una formación inestable, un pseudo-Estado por la gracia de Moscú y sin futuro. La huida de cientos de miles de personas cada año y, concretamente, la sublevación popular del 17 de junio de 1953 afianzaron en la conciencia de la mayoría de los ciudadanos de la República Federal la tesis de la falta de legitimación del gobierno de Berlín oriental, y el desnivel económico entre el Este y el Oeste sirvió de prueba adicional para la localización geográfica de la «Alemania mejor». El problema de la unidad alemana, la reivindicación de la reunificación se convirtió en la «era Adenauer» en la idea fundamental de la política; la polémica en torno a las vías correctas para llegar a una meta cada vez más lejana ha seguido ocupando incluso en la década de 1980, de forma ocasional, la atención de los partidos del gobierno y de la oposición[91]. A la propuesta de Adenauer de obtener primeramente credibilidad y libertad de acción mediante la integración occidental de la República Federal —lo cual significaba tanto la reconciliación con Francia como la búsqueda de la protección de Estados Unidos—, para lo cual utilizó de forma hábil y convincente la idea de la unidad europea, el SPD de Kurt Schuhmacher no supo oponer nada mejor que argumentos del baúl de los recuerdos de Weimar, tales como oposición verbal contra el poder ocupante en general, advertencias acerca de la participación en el Estatuto del Ruhr y rechazo de la entrada de la República Federal en el Consejo de Europa como miembro asociado (ya que la región del Sarre debía tener el mismo *status).* La socialdemocracia rechazó la «política de ejecución» de Adenauer —expresión sacada del arsenal de insultos políticos de Weimar— frente a los aliados occidentales, aunque, a diferencia de los intentos más o me-

nos comparables de la década de 1920, esta política pronto daría buenos resultados.

El primer éxito fue el «acuerdo de Petersberg», del 22 de noviembre de 1949, por el que la Alta Comisión Aliada autorizó a la República Federal a iniciar relaciones consulares; se concedieron además ciertas deducciones económicas, ya que se suavizaron las restricciones en la construcción de buques de altura y se atenuó una vez más el programa de desmantelamiento, suavizado ya en múltiples ocasiones desde 1945 (y que en 1951 se daría por terminado). El premio de todo ello fue el ingreso de la República Federal en el tratado sobre control internacional del Ruhr (previsto de todos modos, sin olvidar que desde abril de 1949 los alemanes occidentales ya participaban en el Estatuto del Ruhr a través de sus tres tutores aliados). Este paso fue muy controvertido desde el punto de vista de la política interior y Kurt Schuhmacher calificaría por ello a su oponente Adenauer en el Bundestag —provocando con ello una terrible agitación general— de «canciller federal de los aliados»; pero la condescendencia pronto daría abundantes frutos. Apenas tres años después, el Estatuto del Ruhr dejaría de existir como instrumento disciplinario y de control «para que las riquezas del subsuelo no sean utilizadas con fines agresivos, sino únicamente en interés de la paz», siendo sustituido por la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, a propuesta de Francia. Con la entrada en vigor de este tratado (25 de julio de 1952) desaparecieron los controles y las limitaciones a la industria pesada alemana; Francia y la República Federal acababan de convertirse en socios de la primera organización supranacional de la incipiente Europa de los Seis.

En marzo de 1951 tuvo lugar la primera revisión del Estatuto de Ocupación, por la que los altos comisarios aliados renunciaban a la supervisión de las leyes federales y regionales, cediendo a los alemanes una porción de soberanía en lo relativo a las divisas y permitiendo a la República Federal el inicio de relaciones exteriores, si bien dentro de un marco todavía modesto; tras la reinstauración del ministerio de Asuntos Exteriores a mediados de marzo de 1951, Adenauer asumió también el cargo de ministro de Exteriores (hasta junio de 1955). Como contrapartida de la atenuación del Estatuto de Ocupación, el gobierno federal reconoció las deudas exteriores de Alemania. El reconocimiento de principio de estas obligaciones, retroactivas hasta la época de Weimar (Plan Dawes-Young), suponía asumir la quiebra del Reich alemán. Las cuotas y el servicio de deudas (567 millones de marcos anuales), determinados a lo largo de penosas

negociaciones en las que la delegación alemana estuvo dirigida por Hermann Josef Abs, fueron moderados, contabilizándose finalmente unos 13 000 millones de marcos. El gobierno federal había dejado claro con el Acuerdo sobre Deudas de Londres (firmado el 27 de febrero de 1953 y en el que, además de las tres potencias occidentales, participaron un total de 30 Estados acreedores más) que la amortización de estas deudas no permitía pagos especiales de reparación y con esta declaración, efectivamente, se dieron por satisfechas las obligaciones. El pago de las viejas deudas convirtió a la República Federal en un país digno de crédito a nivel internacional, contribuyendo a acrecentar su reputación. En el otoño de 1952 ya se había firmado en Luxemburgo otro acuerdo que preveía el pago de 3 000 millones de marcos a Israel como reparación por los crímenes cometidos contra los judíos europeos en nombre de Alemania. Además se transfirieron 450 millones de marcos a la Jewish Claims Conference, que representaba los intereses de los refugiados judíos que no vivían en Israel. Con la asunción de las obligaciones del Reich alemán y la predisposición a pagar indemnizaciones y reparaciones materiales, la República Federal obtuvo el derecho al crédito moral, pero de este modo aseguró también su reivindicación en cuanto a la representación exclusiva y legítima de los intereses alemanes en el mundo.

La guerra que estalló en junio de 1950 en Corea —país dividido como Alemania— con la invasión del Sur por el ejército comunista del Norte, equipado por la Unión Soviética, apenas asegurado, aceleró extraordinariamente la integración occidental de la República Federal. El bloqueo soviético de Berlín estaba aún fresco en la memoria de los ciudadanos de Alemania occidental, por lo cual no es de extrañar que la mayoría considerase como muy posible, e incluso inminente, el paso de la guerra fría a la caliente entre las dos potencias mundiales. Ante la agresión comunista en el Lejano Oriente, la cuestión de la propia seguridad pasó a un primer plano, y no sólo en la República Federal. Cuando en agosto de 1950 Adenauer solicitó a los altos comisarios un reforzamiento de las tropas aliadas, ofreciendo la contribución alemana para la creación de un ejército multinacional en Europa occidental —idea que procedía de Winston Churchill—, la discusión sobre el rearme ya estaba en marcha; cuatro semanas antes se había podido leer en el *Frankfurter Allgemeine* que la idea del rearme alemán «se extiende entre las potencias vencedoras como una mancha de aceite» [92]. En Washington se venía pensando desde mucho antes de Corea en la posibilidad de una participación de Alemania occidental den-

tro del marco de unas fuerzas armadas defensivas convencionales por razones puramente pragmáticas (¿por qué no se habían de utilizar los recursos humanos y materiales?). Dentro de la República Federal, la idea de un nuevo ejército alemán era difícil de imaginar para la mayoría de los ciudadanos; todos y cada uno en particular estaban sufriendo demasiado las secuelas de la guerra. Pero el sentimiento de amenaza y el anticomunismo, actitud muy extendida, constituyeron una razón igualmente importante en favor de la defensa armada de la libertad. El problema del rearme fue discutido con apasionamiento y encono; el argumento político de más peso en contra de la remilitarización, utilizado incansablemente, sobre todo por los socialdemócratas, era que una contribución de Alemania occidental a la formación de un ejército europeo occidental sería el mayor obstáculo a toda política de reunificación. A causa de la inesperada oferta del Canciller en el otoño de 1950, el gobierno federal perdió a su ministro del Interior. Gustav Heinemann dimitió como protesta por la decisión unilateral del jefe del gobierno —la autoridad y la actuación en solitario fueron muy características de Adenauer—, abandonando también después la CDU para, entre 1952 y 1957, luchar dentro del Gesamtdeutsche Volkspartei (Partido Popular de Todos los Alemanes), neutral, contra el rearme y la vinculación occidental unilateral.

La concepción de Adenauer, que se haría pública en la oferta de una contribución alemana a la defensa de Europa occidental, preveía como recompensa por el rearme la eliminación progresiva del Estatuto de Ocupación y, con ello, la obtención paulatina de la soberanía. El plan del primer ministro francés Pleven de crear un ejército europeo estructurado de forma supranacional, en el cual participaran batallones alemanes, constituiría desde el otoño de 1950 un punto de partida para el desarrollo del proyecto de la Comunidad Europea de Defensa, que en la primavera de 1952 estaría listo para su firma. El debate en torno a la CED se prolongó en la República Federal hasta el 19 de marzo de 1953, día en que el Bundestag ratificó, en contra de la postura del SPD, el tratado de la CED y el relativo a Alemania a él vinculado. La victoria electoral de los partidos de la Unión en el otoño de 1953 puso de manifiesto que sus ideas sobre política exterior y seguridad eran también compartidas por la mayoría de la población.

Cierto es que la CED nunca se haría realidad debido al rechazo del Parlamento francés a finales de agosto de 1954, pero la estrategia del gobierno de Bonn produjo no obstante los frutos apetecidos, ya que el proceso de integración siguió adelante,

con lo que el premio de la participación de Alemania occidental —seguridad y soberanía— sólo sufriría una breve demora. El hecho de que la integración occidental y la contribución defensiva de la República Federal convertía el postulado de la reunificación en mera declamación e ilusión política se haría evidente, como muy tarde, en el curso de las negociaciones en torno a la CED. En la espectacular nota sobre Alemania del 10 de marzo de 1952, la Unión Soviética hizo a las potencias occidentales la propuesta de «considerar sin demora la cuestión de un tratado de paz con Alemania» que fuese elaborado con la participación directa de un gobierno alemán conjunto. El proyecto iba acompañado de un tratado de paz en el cual no sólo se ofrecía la reunificación de Alemania, sino también la retirada de todas las tropas de ocupación y la autorización de unas fuerzas armadas nacionales junto con la correspondiente industria armamentística, exigiendo como contrapartida la neutralización de Alemania. Las potencias occidentales, de acuerdo con el gobierno de Bonn, rechazaron las ofertas del Kremlin a lo largo de un intercambio de cuatro notas que se prolongaría hasta septiembre de 1952. La postura de Occidente estaba determinada por la exigencia de elecciones libres en toda Alemania como condición previa a cualquier tipo de negociación; dado que en el intercambio de notas se hizo patente que la Unión Soviética no aceptaría estas elecciones como inicio del procedimiento, tampoco se llegó a celebrar la conferencia en la que habría sido posible analizar la seriedad de la oferta soviética de forma detallada, con gran disgusto por parte de la oposición socialdemócrata y también de algunos miembros de los partidos de la coalición CDU/CSU y FDP, y entre las protestas de aquellos grupos políticos que propugnaban la neutralidad de Alemania. La oferta soviética era claramente una maniobra propagandística tendente a alterar la política de integración en Europa occidental y al mismo tiempo (a través de la culpabilización de las potencias occidentales) a fomentar la revalorización y la estabilización de la RDA. Esto fue también puesto de manifiesto por el momento en que tuvo lugar la campaña de notas: constituyó la música de fondo de la discusión en torno a la Comunidad Europa de Defensa. Sin embargo, ello no impediría el nacimiento de la leyenda de la ocasión desaprovechada [93].

Apenas tres años después se produjo un nuevo intento: en enero de 1955, Moscú trató nuevamente de frenar la integración occidental mediante una oferta de reunificación sobre la base de la celebración de elecciones en toda Alemania con la condición de la renuncia a ratificar los Acuerdos de París relativos al in-

greso de la República Federal en la Unión Europa Occidental y en la OTAN. Ante el rechazo de esta propuesta, Moscú respondió que, a partir de este momento, la Unión Soviética consideraba la reunificación como un asunto de los dos Estados alemanes, reconociendo definitivamente la plena soberanía de la RDA en un tratado internacional de amistad el 20 de septiembre de 1955. La política de la Unión Soviética con respecto a Alemania estaría marcada en adelante por la teoría de los dos Estados, que sólo permitía la búsqueda de soluciones a la «cuestión alemana» a través de la vía negociadora entre los dos Estados alemanes, sin responsabilidad por parte de las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial.

El fracaso de la CED en el verano de 1954 sólo retrasó brevemente la vinculación definitiva de la República Federal al sistema estatal occidental, así como la obtención de la soberanía a ella ligada. En una serie de conferencias celebradas en París entre el 19 y el 23 de octubre oe 1954 y distintas en su composició —tres potencias occidentales más la RFA; miembros de la OTAN; los Nueve del Tratado de Bruselas; la República Federal y Francia bilateralmente—, se firmó todo un paquete de tratados. El tratado de Alemania (nueva versión del de 1952, que no entraría en vigor) pasó a sustituir, con carácter vinculante, al Estatuto de Ocupación en lo referente a las relaciones de la República Federal con las tres potencias occidentales (otros tratados adicionales regularon, entre otras cosas, el estacionamiento de fuerzas armadas extranjeras), y los representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia suscribieron un acta solemne sobre el término del régimen de ocupación, reforzando al mismo tiempo las garantías de seguridad de Berlín (Oeste). Los quince miembros de la OTAN levantaron acta de la invitación a la participación de la República Federal. La conferencia de los Nueve había convertido el Tratado de Bruselas de 1948 «sobre cooperación económica, social y cultural y sobre autodefensa colectiva legítima» en el tratado de la Unión Europea Occidental, en la que ahora podían ingresar también Alemania occidental e Italia. París y Bonn habían acordado de forma bilateral un estatuto para el Sarre que preveía un *status* europeo autónomo para esta región, aunque también una consulta popular una vez entrado en vigor. Desde el punto de vista de la política interior, muchos reprocharon a Adenauer su intención de sacrificar el Sarre como pago por el ingreso de la República Federal dentro de la familia de los Estados occidentales, pero a la hora de ratificar los difererentes Acuerdos de París ya no existió ningún reparo; el 5 de mayo de 1955 entraron en vigor, la

República Federal se convirtió en nación soberana y el 9 de mayo fue acogida dentro de la OTAN. El estatuto del Sarre pronto dejó de tener validez; en octubre de 1955, su población votó por segunda vez (como en 1935), y por gran mayoría, en favor de su reinserción en Alemania, la cual tuvo lugar el 1 de enero de 1957, tres meses antes de la firma del acta de constitución de la Comunidad Económica Europea (CEE) por Francia, Italia, los países del Benelux y la República Federal.

En el terreno económico también se habían tomado importantes decisiones —con toda seguridad, las más importantes en las conciencias individuales— para el futuro desarrollo de la República Federal ya antes de su fundación: la reforma monetaria en el territorio de las tres zonas occidentales en junio de 1948 y la vuelta a la economía de libre mercado inmediata a aquélla dentro del ámbito de la bizona. Por muy necesario que fuera sanear la moneda y por mucha que fuera la impaciencia con que era esperada, la anulación de las disposiciones relativas a los precios y al racionamiento no dejó por ello de producir una conmoción. La reforma monetaria fue preparada y llevada a cabo por los aliados con escasa participación de los expertos alemanes; con la caída del *Reichmark* (RM) el 20 de junio de 1948, todas las deudas interiores del Reich alemán fueron dadas por canceladas. Las obligaciones privadas y todos los ahorros y créditos bancarios fueron devaluados en la proporción de 1:10, percibiéndose en un principio una cuota *per capita* de 40 «marcos alemanes» (DM) al contado. Al concluir la reestructuración monetaria se pagó el segundo plazo de la cuota, 20 *DM*, en agosto-septiembre, ascendiendo la proporción del cambio, en conjunto, a 100 RM por 6,50 DM.

El apuntalamiento del nuevo orden económico, que en un principio fue acogido con más recelos que aplausos, fue obra de Ludwig Erhard, que desde la primavera de 1948 ocupaba el cargo de director de la Administración Económica de la bizona y defendía una concepción neoliberal de la economía social de mercado que, con sus planteamientos de libre competencia, habría de reemplazar al dirigismo estatal. La ley de «Normas para la administración y la política de precios después de la reforma monetaria», promulgada por el Consejo Económico de Francfort en junio de 1948, era casi revolucionaria tras la experiencia de la economía impuesta de la época del nacionalsocialismo y de la administración de la escasez y del hambre de los primeros años de posguerra. Y, de hecho, el experimento de la economía de mercado pronto pareció estar condenado al fracaso. El impulso dado a la capacidad adquisitiva por la reforma monetaria había

sacado sin duda a la superficie los productos acaparados, pero el abismo existente entre los salarios y los precios se agrandó hasta límites insostenibles. La oposición socialdemócrata dentro del Consejo Económico exigió, en consonancia con una gran parte de la prensa, la interrupción del experimento y la dimisión del especialista en política económica Erhard. Un año después, Ludwig Erhard sería la locomotora electoral de CDU/CSU y FDP en las primeras elecciones para el *Bundestag*, función que aún habría de desempeñar en tres ocasiones más como ministro federal de Economía.

Las protestas contra la insólita economía de mercado alcanzarían su apogeo en noviembre de 1948, cuando nueve millones de trabajadores iniciaron una «huelga general» de 24 horas en la bizona. Hasta mediados de 1950, los precios volvieron a bajar al nivel de junio de 1948; desde finales de 1948, tras la anulación del tope salarial establecido durante el nacionalsocialismo, empezarían también a evolucionar los ingresos de los trabajadores. No obstante, el desempleo seguiría siendo aún durante largo tiempo un serio problema. El número de parados aumentó de 472 000 registrados en marzo de 1948 a 963 000 en enero de 1949; en diciembre de 1949, había ascendido ya a 1 558 000, alcanzándose la cifra máxima de más de 2 000 000 en febrero de 1950 (porcentualmente, las cifras de 1950 representaban un promedio del 7,2%, que en 1955 seguiría siendo del 3,9%). El desempleo se debió fundamentalmente a dos factores extraordinarios y desusados en una economía nacional normal: el elevado número de entradas en el mercado de trabajo resultante de los refugiados y de los soldados repatriados, que sólo era posible absorber a largo plazo, y el número igualmente elevado de trabajadores parcialmente incapacitados a consecuencia de la guerra[94].

La agitada reconstrucción pronto se convertiría en el «milagro económico» alemán, internacionalmente admirado; más tarde, la generación posterior habría de reprochar a sus padres el haber evitado a sabiendas, en la euforia de la reconstrucción, reformas muy necesarias y el haber llevado a cabo, en lugar de la construcción de un edificio de nueva planta, una mera restauración del Estado y de la sociedad. En efecto, hasta finales de la década de 1950, la legislación, cuyos inicios estuvieron marcados por los diputados del Consejo Económico de Francfort, sólo prestó atención a las secuelas de la guerra; muchas cosas quedaron así pospuestas, y muchas sólo fueron resueltas a medias, si bien en algunos campos (como por ejemplo en el de la función pública) la restauración fue consciente; sea como fuere, teniendo en cuenta el número y las proporciones de los problemas, los logros

de los dos primeros *Bundestag* fueron bastante considerables. El problema más difícil era, sin duda, la inserción de los desterrados y de los refugiados de las regiones situadas al este de la línea Oder-Neisse, Checoslovaquia y la Europa oriental y sudoriental, así como el alojamiento de los evacuados durante la guerra y el mantenimiento de los refugiados de la RDA, cuyo número ascendió a casi tres millones en sólo tres decenios. La dureza de la reforma monetaria, que benefició claramente a los propietarios de valores efectivos, se suavizaría relativamente tarde mediante la ley de nivelación de las cargas, que entró en vigor en septiembre de 1952. La nivelación de las cargas, de la que se beneficiaron también las víctimas de la guerra, el destierro y los bombardeos y otros damnificados, no era por supuesto la gran «redistribución de bienes», como en ocasiones se la calificaría reprobatoriamente, pero para muchos fue la base para construir una nueva vida.

La construcción de viviendas, uno de los problemas prioritarios, se vio considerablemente fomentada con medios públicos, así como a través de una ley de primas a la construcción de viviendas (marzo de 1952) que creaba un estímulo para el ahorro-vivienda. La ley de organización de la empresa de 1952 reguló la posición y los derechos de los comités de empresa dentro de la economía; en la industria del carbón y del acero se introdujo incluso, en 1951, la gestión paritaria como compromiso entre el Gobierno Federal y el sindicato; éste pagaría esta buena disposición con el apoyo de la política de integración occidental [95].

El acuerdo del *Bundestag* (con los votos de CDU/CSU y SPD) en favor de la jubilación dinámica en enero de 1957, con el que se establecía el principio de un ajuste permanente de las pensiones al desarrollo económico, no fue sólo una innovación en política social, sino también la primera reforma profunda del sistema legal de pensiones desde su introducción en tiempos de Bismarck [96].

V. NORUEGA, DINAMARCA, ISLANDIA

En mayo de 1938, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia habían hecho en Estocolmo una «Declaración Nórdica de Neutralidad» que ampliaba y reforzaba el acuerdo entre Dinamarca, Noruega y Suecia de 1912. Pero pocos años después el simple deseo de neutralidad ya no bastaba. Al contrario que en la primera guerra mundial, en el norte de Europa sólo Suecia

lograría mantener la tradicional neutralidad también en la segunda guerra mundial. Dinamarca, a pesar del pacto de no agresión firmado con Alemania en mayo de 1939, no pudo evitar que las tropas alemanas invadiesen el país el 9 de abril de 1940 con la consiguiente ocupación hasta el fin de la guerra. El mismo día comenzó también la invasión de Noruega, con la que Alemania se adelantó escasamente a los aliados para asegurar los suministros de mineral sueco a través de Narvik. El régimen alemán de ocupación y el gobierno colaboracionista noruego de Vidkun Quisling —ambos objeto de una resistencia virulenta— se mantendrían hasta mayo de 1945[97].

El rey Haakon de Noruega, tras la invasión alemana en abril de 1940, se había negado a nombrar un gobierno del agrado de Hitler. El monarca noruego abandonaría primero Oslo y más tarde el país en compañía del gabinete socialdemócrata, que hasta el fin de la guerra funcionaría en Londres como gobierno en el exilio; el antiguo príncipe de Dinamarca era rey de Noruega desde 1905, año en que el país se había independizado de Suecia, y el gobierno socialdemócrata de Nygaardsvold ejercía sus funciones desde 1935. Con el regreso del monarca y del gabinete en el exilio en mayo de 1945 comenzó la depuración política del país. En procesos ante tribunales especiales, más de 50 000 noruegos se vieron obligados a justificar su conducta durante la ocupación del país. Quisling y otros treinta colaboracionistas fueron condenados a muerte por alta traición. Durante, y a causa de, las discusiones políticas entre emigrantes, combatientes de la Resistencia y colaboracionistas, Johan Nygaardsvold dimitió. Su sucesor sería el alcalde de Oslo, Einar Gerhardsen, que durante la ocupación del país había estado recluido en un campo de concentración alemán. En las primeras elecciones de la posguerra, en octubre de 1945, el Partido Laborista se destacaría como claro vencedor; la coalición multipartidista fue sustituida por un gabinete socialdemócrata. El Partido Laborista, bajo la dirección de Gerhardsen (1945-1951 y 1955-1965) y de Oskar Torp (1951-1955) habría de dirigir los destinos de Noruega por espacio de veinte años, excepción hecha del interludio conservador de cuatro semanas escasas de duración en agosto-septiembre de 1963.

A comienzos de la década de 1960, a causa de la polémica en torno a la política de seguridad en el marco de la OTAN, a la participación de tropas alemanas en maniobras de la OTAN en Noruega y al uso de armas atómicas, el Partido Socialista del Pueblo (posteriormente Partido de Izquierda Socialista) se separó del Partido Laborista, que debido a los problemas cada vez mayores

en el campo de la política interior y exterior perdería la mayoría absoluta en 1965.

En la coalición burguesa de Per Borten, jefe del antiguo Partido Agrarista, convertido ahora en Partido del Centro, participaron los conservadores —el segundo partido tradicionalmente más fuerte de Noruega—, los liberales y el Partido Cristiano del Pueblo, movimiento separado de los liberales en la década de 1930 que, con su programa basado en la religión (Misión Interior) y la templanza, acaparaba regularmente el 10% de los votos de los electores.

La coalición burguesa tropezó en la primavera de 1971 con la cuestión del ingreso en la Comunidad Económica Europea. Pero el gobierno de minoría socialdemócrata que le sucedió y que también propugnaba la integración en la CEE, caería igualmente en el otoño de 1972 después de que los noruegos rechazasen la participación en la CEE en consulta popular. La mayoritaria respuesta negativa no se debió únicamente a los intereses de los pescadores: el voto en contra de la CEE estuvo determinado también por las corrientes aislacionistas y neutralistas, así como anticapitalistas que en Noruega, como en el resto de Escandinavia, partiendo de las agrupaciones de izquierdas, verdes y fundamentalistas, habían ido ganando terreno. El ingreso de Noruega en la CEE fracasaría finalmente por los reparos ante el predominio en ella de las naciones industriales y, no en último término, por la desconfianza frente a la potencia económica de la República Federal; no obstante, gracias al acuerdo de libre comercio, Noruega, al igual que sus vecinos Suecia y Finlandia, disfruta de algunas ventajas de la CEE.

La reconstrucción económica puesta en marcha después de la guerra con créditos suecos y con medios del European Recovery Program (ERP), se llevó a cabo de forma relativamente rápida. En 1950 la flota mercante noruega ya se encontraba al nivel de antes de la guerra, y algunos años más tarde ocuparía el tercer puesto del tonelaje mundial. En un principio Noruega siguió orientada hacia la economía agraria y forestal y hacia la pesca en mayor medida que sus vecinos; el hallazgo y la explotación de yacimientos petrolíferos y de gas natural en el mar del Norte proporcionaron sin duda a Noruega, a partir de 1947, la autarquía en el sector energético y pronto también el *status* de nación exportadora de petróleo, pero la nueva riqueza provocó también problemas dentro del mercado de trabajo, aceleró la inflación y, en la primavera de 1977, provocó una catástrofe ecológica cuando, en el campo de perforación de Ekofisk, debido

a una avería en una plataforma de sondeo, se vertieron al mar considerables cantidades de petróleo.

Las cesiones territoriales de Finlandia a la Unión Soviética habían deparado a Noruega, en 1944, una frontera de 150 km. de longitud con la URSS en su extremo nororiental. Este hecho, unido a las discusiones en torno a Spitzberg, facilitó la decisión noruega de abandonar la política de neutralidad de los primeros años de posguerra para ingresar en la OTAN en abril de 1949 [98]. El archipiélago de Spitzberg, en el océano Glacial Ártico, había sido adjudicado en 1920 a Noruega, que tomaría posesión de él en 1925, después de haber reconocido diplomáticamente a la Rusia soviética. La existencia de ricos yacimientos de hulla, principalmente, hacían de Spitzberg una propiedad muy atractiva en la que, sin embargo, Noruega hubo de permitir el establecimiento de bases soviéticas.

La reacción danesa frente a la ocupación del país por la *Wehrmacht* alemana en abril de 1940 parece, vista de forma superficial, menos heroica que la conducta de los noruegos. El rey permaneció en el país y el gobierno siguió ejerciendo sus funciones, si bien se vio obligado en lo sucesivo a colaborar con un «embajador plenipotenciario del Reich». Hasta 1943, la situación de Dinamarca en comparación con otros Estados bajo el dominio alemán fue excepcional: el gobierno, el Parlamento y el ejército siguieron existiendo tras la conquista sin combate del país; no había ningún gobernador militar alemán y Dinamarca disfrutaría de una autonomía interna, manteniéndose incluso en funciones el ministerio de Asuntos Exteriores. En agosto de 1943 se produjeron sin embargo graves conflictos, tras huelgas, disturbios y actos de sabotaje, entre la potencia ocupante y el gobierno danés, que dimitió, encargando la prosecución de sus tareas a una Administración apolítica bajo la dirección del subsecretario de Estado con categoría de funcionarios. A continuación se disolvieron las fuerzas armadas danesas, siendo hundidos los barcos por la Marina para que no cayesen en manos de Alemania. En una acción única en su género, los daneses lograron también salvar a los judíos del país, o al menos a una gran mayoría de ellos, de la deportación y el exterminio por parte de los dominadores alemanes. Durante el mes de octubre de 1943, casi 8 000 personas fueron llevadas a lugar seguro en barcos de pesca a través del estrecho de Sund. La resistencia contra la ocupación y contra las medidas alemanas de terror para quebrantar la resistencia iría en aumento hasta el fin de la guerra; en septiembre de 1944, toda la policía danesa

fue hecha prisionera y deportada en su mayor parte a campos de concentración alemanes [99].

Las posesiones danesas en el exterior habían quedado incomunicadas con la metrópoli tras la ocupación de Dinamarca. Las tropas británicas ocuparon en abril de 1940 las islas Feroe sin intervenir en sus asuntos internos. Antes bien, la ocupación británica reforzó las aspiraciones independentistas de los habitantes de las islas, estableciéndose un gobierno y un Parlamento; desde entonces, sobre las 21 islas ondea una bandera nacional propia. Tras algunas discusiones en cuanto a si los vínculos estatales con Dinamarca se habían de romper o mantener, una escasa mayoría se decidió en 1946 por Copenhague. En la primavera de 1948, las islas obtuvieron la autonomía y, a finales de 1948, las Feroe abandonaron también el área monetaria británica, en la que se habían integrado durante la guerra, volviendo a la danesa.

Groenlandia, que hasta 1953 había tenido el *status* de colonia danesa, desde 1940 estuvo igualmente desvinculada de su metrópoli, cincuenta veces más pequeña. De modo semejante a Islandia, Groenlandia había adquirido importancia estratégica tras la entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial. El enviado danés en Washington firmó en 1941, por su propia cuenta, un tratado (Tratado Kauffmann) con Estados Unidos que permitía a los americanos el establecimiento de bases aéreas y navales en Groenlandia. El gobierno de Copenhague insistiría durante los primeros años de la posguerra en el desalojo de las bases militares americanas pero, tras el ingreso de Dinamarca en la OTAN y en relación con éste, en abril de 1951 se firmó un tratado entre Dinamarca y los Estados Unidos en virtud del cual la defensa de Groenlandia pasaba a manos de Estados Unidos sin perjuicio de los derechos de soberanía danesa. Con ello, los Estados Unidos obtenían el derecho a establecer bases, la más importante de las cuales sería Thule, con importancia también para el tráfico aéreo civil.

En 1953, Groenlandia obtuvo el *status* de provincia danesa de pleno derecho. Desde entonces, los 50 000 groenlandeses están representados, al igual que los habitantes de las Feroe desde 1948, en el *Folketing* de Copenhague por 2 diputados. Desde 1979, Groenlandia goza también de una autonomía interna, con Parlamento propio y con un gobierno regional. En febrero de 1982, los groenlandeses votaron en referéndum en favor de la salida de la isla mayor del mundo de la Comunidad Económica Europea [100].

Además de los problemas de la posguerra, a resolver en una situación equiparable a la de Noruega y otros países de Europa

occidental —reconstrucción económica y social, enfrentamientos morales con los traidores a la patria durante el período de ocupación—, el gobierno multipartidario danés, nombrado en mayo de 1945 por el rey y presidido por el socialdemócrata Vilhelm Buhl, tuvo que afrontar algunos problemas especiales. El problema más urgente era el de la afluencia de refugiados que, desde comienzos de 1945, habrían de llegar a Dinamarca, en donde se encontraría casi un cuarto de millón de personas, entre ellas 220 000 alemanes huidos, a través del Báltico, del Ejército Rojo; la frontera con el norte de Alemania, ocupado por los británicos, estaba cerrada y éstos ya tenían suficientes problemas con los refugiados en Schleswig-Holstein y en la Baja Sajonia como para abrir las fronteras a una afluencia mayor de asilados. Los últimos refugiados no abandonarían los campos daneses hasta comienzos de 1949. Para los contribuyentes daneses, la estancia de los refugiados había supuesto un gasto de 450 millones de coronas [101].

A ambos lados de la frontera germano-danesa se produjo un fuerte movimiento coyuntural, contrario por una parte a la minoría alemana en Dinarmarca (Schleswig septentrional) y favorable por otra parte a la secesión de la región de población mixta de la zona alemana (Schleswig meridional), en donde un número sorprendente de personas recordaron repentinamente sus orígenes daneses. El gobierno británico que, al menos en el trozo de Schleswig-Holstein incluido dentro de la frontera danesa, era quien tenía capacidad de decisión, instó al gobierno de Copenhague a reaccionar, bien con un intercambio de minorías, bien con una modificación de las fronteras a costa de Alemania. Éste, sin embargo, no se inmutó y en octubre de 1946 decidió que Dinamarca esperaría hasta comprobar si el activismo en Schleswig meridional era duradero antes de considerar las posibles consecuencias legales.

Entre las secuelas dejadas por el régimen alemán de ocupación se encontraba también un enorme excedente monetario que sería eliminado en 1945 y 1946 mediante diferentes medidas estatales (canje de billetes, registro de la situación patrimonial e imposición única). La primera ayuda para afrontar los problemas de abastecimiento y la escasez de materias primas y carbón que, debido a la falta de divisas, el país no podía resolver por sus propios medios, sería prestada por Suecia mediante suministros a crédito.

Un elemento de la reconstrucción sería también la cautelosa reforma de la Constitución danesa, iniciada en el primer año de posguerra y concluida en 1953. Los cambios introducidos en la Ley Fundamental danesa tenían como objetivo esencial la modernización de la existente, consistiendo, entre otros, en la introduc-

ción del unicameralismo, la rebaja de la edad para votar y la regulación de una nueva forma de sucesión en el trono. Desde 1924, los socialdemócratas serían el partido más fuerte de Dinamarca (el primer jefe de gobierno socialdemócrata fue Thorvald Stauning, que ejercería el cargo entre 1924 y 1926, y de 1929 a 1942), si bien nunca obtendrían la mayoría absoluta, ni siquiera en tiempo de posguerra. El hecho de que las primeras elecciones de la posguerra, en noviembre de 1945, ocasionaran pérdidas al Partido Socialdemócrata se debió sobre todo al amplio programa de socialización presentado por ellos frente a su tradición más bien revisionista. Dentro del sistema de partidos danés, que data de la primera guerra mundial, el partido más próximo a los socialdemócratas, con su programática social-liberal en política interior y neutral-antimilitarista en política exterior, sería durante largo tiempo el de los liberales radicales; los gobiernos de 1947 a 1950 y de 1953 a 1968, así como diversos gabinetes de la década de 1970, estuvieron dirigidos por los socialdemócratas y apoyados por los liberales radicales. (La coalición burguesa de 1968-1971, dirigida por el presidente del Partido Liberal Radical, Baunsgaard, sería la única excepción a la regla.)

El Partido Conservador Popular, orientado hacia la clase media, y el Partido Liberal que, como en los restantes Estados nórdicos es en su origen un partido agrario, constituyeron durante mucho tiempo la otra mitad del espectro de los partidos. En 1960 apareció el Partido Socialista del Pueblo como quinta fuerza política en el sistema, obteniendo de golpe 11 de los 179 escaños en el *Folketing* y revelándose más tarde también capaz de formar coalición. Las elecciones de 1973 fueron el fin del sistema de partidos tradicionales. Los cuatro partidos más antiguos tuvieron que compartir ahora los votos con seis nuevas formaciones que, en conjunto, les hicieron perder el 40% de los electores. Los nuevos partidos, entre ellos los demócratas centristas como disidentes por la derecha de la socialdemocracia y, sobre todo, el Partido del Progreso del abogado Glistrup, que se negaba a pagar impuestos, encarnarían con más o menos fuerza el nuevo tipo de partido de protesta que, con métodos poco convencionales, persigue objetivos imprevisibles y populistas, siendo el terror de los partidos establecidos en el Parlamento. Gobernar se hizo más difícil en Dinamarca. Las mayorías escasas y los gobiernos inestables no eran algo desconocido en Copenhague, pero en caso de crisis los cuatro partidos más antiguos en general se habían podido entender y poner directamente de acuerdo, como en 1946 respecto al problema de las minorías de Schleswig, en 1961 respecto a la

ley de defensa o en 1962 respecto a las medidas a tomar contra el déficit en la balanza de pagos.

Hasta el ingreso en la CEE, que se produjo tras una consulta popular en 1973 (las solicitudes de ingreso y las negociaciones con Bruselas de 1962 y 1967 habían sido vanas), la economía danesa había estado determinada por una crisis estructural permanente de la agricultura y por la expansión del sector industrial iniciada a mediados de la década de 1950. Las dificultades en la exportación y venta de los productos de la agricultura fueron combatidas con medidas nacionales de protección agraria. Los problemas derivados de la conjunción de dos factores —la incapacidad de mecanizarse de las empresas agrícolas, generalmente pequeñas, y la emigración de muchos trabajadores a la industria en expansión— no podían ser resueltos, sin embargo, de la misma manera. A mediados de la década de 1960, la exportación de productos industriales superó por vez primera a la de productos agrícolas. A partir de 1960 reinaría la prosperidad, con una inflación crónica.

De acuerdo con el modelo sueco, las tendencias hacia un Estado de bienestar también se reforzaron en Dinamarca[102], siendo sus rasgos externos la pensión nacional, que en 1956 reemplazaría a la pensión de vejez, y una sanidad pública muy organizada (en 1960, los seguros de enfermedad se hicieron accesibles a todos, con independencia de la edad y del estado de salud). El precio a pagar por el Estado de bienestar ha consistido en unas elevadas cargas fiscales y un fuerte crecimiento del sector de servicios públicos, que absorbe un gran número de personal, efectos ambos enojosos para muchos ciudadanos que, desde 1973, han venido manifestando su disgusto eligiendo a los partidos de protesta y desestabilizando así el sistema político parlamentario.

Islandia se independizó de Dinamarca en 1918, permaneciendo sin embargo vinculada a la Corona danesa mediante una unión personal. Asimismo, los asuntos de política exterior de esta isla tan lejana del Atlántico Norte serían también despachados en Copenhague. En mayo de 1940, el país fue ocupado por las tropas británicas, que en el verano de 1941 serían relevadas por el ejército americano. Durante la guerra, Islandia fue constantemente una importante base de operaciones americana al estar situada a medio camino entre Estados Unidos y los escenarios bélicos europeos. En 1944, los islandeses pusieron fin, por gran mayoría, a la unión con Dinamarca tras la celebración de una consulta popular; la antigua metrópoli reconocería la autonomía

de la República de Islandia en 1950. Al acabar la guerra, los Estados Unidos estaban interesados en tener una base militar permanente en Islandia, deseo que no provocó demasiado entusiasmo en la isla del Atlántico Norte, a pesar de que la economía islandesa había obtenido bastantes beneficios de la presencia americana. Finalmente se acordó que las tropas americanas abandonarían Islandia a partir de octubre de 1946, pero los Estados Unidos fueron autorizados —en principio por un período de seis años y medio— a seguir utilizando el aeropuerto de Keflavik. Como argumento se señaló el papel de Estados Unidos en cuanto potencia ocupante en Alemania. Los acuerdos con Washington provocaron durante años constantes controversias entre los partidos y crisis de gobierno en Islandia. Pero este pequeño país también tenía intereses económicos, participando desde 1948 en el Plan Marshall y convirtiéndose en 1949 en miembro de la OTAN. Islandia no mantiene un ejército propio; su contribución a la Alianza del Atlántico Norte es sobre todo de índole geográfica y consiste en la cesión de la importante base de Keflavik [103].

La situación extremadamente marginal de la isla —la distancia más corta de Noruega es de 1 000 kilómetros y de Escocia más de 700— implica el aislamiento y una cierta autosuficiencia política de los islandeses, existiendo diferencias características en la vida política frente a los restantes Estados nórdicos. Así, el partido socialdemócrata islandés es tradicionalmente mucho más débil que el de los restantes países escandinavos, siendo el partido más fuerte, con cerca del 40% de los votos desde la década de 1930 el Partido de la Independencia, conservador, que —más progresista y pragmático que las formaciones homólogas de los otros países nórdicos— no rehúye la formación de coaliciones con la Alianza Popular, comunista y relativamente fuerte (o con sus predecesores en los años 1944-47 y 1956-58), tal como ha sucedido en múltiples ocasiones en la década de 1970 y hasta el presente. La presencia militar americana provocaría turbulencias en la política interior, tendencia cada vez más fuerte desde finales de la década de 1950. A causa de la base, en 1951 se produjo una polémica entre el Partido de la Independencia y su compañero de coalición, el Partido Progresista, de carácter liberal y agrario, segunda fuerza política del país, cuya postura frente a la OTAN y sobre todo frente a la base americana era bastante escéptica. En 1953 apareció el Partido para la Protección de la Nación (más tarde: Unión de Liberales e Izquierdistas) como movimiento claramente neutralista, compuesto por izquierdistas, liberales y socialdemócratas, que lucha con escaso éxito contra la

pertenencia de Islandia a la OTAN y contra el estacionamiento de tropas en Keflavik.

En política exterior, Islandia se ha visto envuelta con cierta regularidad en «guerras pesqueras». La pesca y la industria pesquera son problemas de importancia vital para este país nórdico, con la tasa de inflación más elevada de toda Europa desde hace muchos años, que, a mediados de la década de 1970 superaba ya el 40% y a comienzos de 1983 se estimaba en más del 80%. A ello se añade una balanza de comercio exterior crónicamente deficitaria. Las reservas de pescado, en constante incremento gracias a los modernos métodos de pesca en el contorno de la plataforma continental islandesa, obligaron al gobierno de Reykiavik a ampliar en 1950 la zona pesquera a cuatro millas (cosa entonces desusada). En 1958, las aguas jurisdiciconales fueron ampliadas a doce millas marinas; en 1972, a cincuenta, y en 1975 a 200. (Noruega seguiría el ejemplo de Islandia en 1976.) En 1972, Gran Bretaña y la República Federal denunciaron a Islandia ante el Tribunal Internacional de La Haya, obteniendo dos años más tarde un fallo a su favor, pero la ampliación de las fronteras pesqueras de 1975 —explicada por Islandia con el argumento de que las exportaciones del país dependían en un 90% de la pesca— provocó la tercera «guerra del bacalao», en el curso de la cual las relaciones entre Reykiavik y Londres quedaron transitoriamente interrumpidas. Los barcos pesqueros británicos operaron durante un tiempo con una escolta de protección; un capitán alemán fue condenado en Islandia a una multa y los puertos de la República Federal fueron entonces cerrados a pesqueros islandeses.

La experiencia del fracaso de la política de neutralidad durante la segunda guerra mundial movió a los Estados nórdicos, con la excepción de Finlandia, a ingresar en la ONU nada más acabar la guerra. El ministro de Exteriores noruego Trygve Lie sería nombrado en enero de 1946 primer secretario general de la ONU, acontecimiento dentro de la tradición de la activa colaboración de Noruega, así como de los restantes Estados escandinavos, en la Sociedad de Naciones y aplicable también a la memoria del gran noruego Fridtjof Nansen. Pero después de la guerra los Estados nórdicos buscaron también la salvación en una estrecha colaboración que en algunos campos pronto daría fruto, como por ejemplo la constitución de las líneas aéreas SAS, promovida conjuntamente por Noruega, Dinamarca y Suecia. Otros ejemplos son la creación de un mercado de trabajo común en 1954 o la unifica-

ción de los pasaportes. Desde el punto de vista organizativo, el Consejo Nórdico, fundado en 1952 y en el que en 1955 se integraría también Finlandia, constituye el marco de la cooperación entre los Estados nórdicos y de la coordinación de la política social, cultural, de comunicaciones y de protección del medio ambiente. El Consejo Nórdico está compuesto por delegados de los diferentes Parlamentos y por representantes de los gobiernos, que se reúnen anualmente pero sin ninguna clase de poderes supranacionales. En otros campos —esenciales—, los intentos de cooperación de los países nórdicos tuvieron bastante menos éxito [104]. La Unión Económica y Aduanera (NORDEK) propuesta por Dinamarca en 1968 fracasó por el rechazo de Finlandia, y las conversaciones acerca de una política comercial y aduanera común que tuvieron lugar entre 1948 y 1954 resultaron tan vanas como las ulteriores conferencias en torno a un mercado común nórdico [105].

Los caminos de los escandinavos en política de defensa también se separaron en los primeros años de la posguerra. Preocupados por la propia seguridad y como respuesta a la invitación americana, cuya aceptación significaba el suministro inmediato y considerado urgente de armamento, Oslo y Copenhague optaron en la primavera de 1948 por convertirse en miembros de la OTAN. La decisión se vio facilitada por el fracaso de las conversaciones entre Suecia, Noruega y Dinamarca acerca de un sistema de seguridad escandinavo propio sobre la base del principio de neutralidad a comienzos de 1949. A continuación, Noruega y Dinamarca ingresaron en el Tratado del Atlántico Norte con las mínimas condiciones. Ambos Estados rechazan el estacionamiento de tropas extranjeras en tiempos de paz, así como las bases permanentes y el almacenamiento de armamento nuclear en territorio danés y noruego. Las reservas frente a la Alianza fueron también producto de una deferencia hacia la Unión Soviética, que ejerció la correspondiente presión en múltiples ocasiones; como gesto voluntario de distensión, Noruega mantiene a la región fronteriza con la Unión Soviética dentro del *status* de zona desmilitarizada.

El equilibrio cuidadosamente mantenido en el norte de Europa se basa en el efecto conjunto de la pertenencia a la OTAN de Noruega, Dinamarca e Islandia unido a la neutralidad de Finlandia, vinculada desde 1948 a la Unión Soviética por un tratado de amistad, y a la no alineación de Suecia. Este sistema de equilibrio, determinado por la situación geográfica al margen de los bloques, deja también a los cinco Estados nórdicos espacio suficiente para velar por sus asuntos comunes.

El nacimiento del Benelux tuvo lugar en 1943 en Londres, en donde los gobiernos en el exilio de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos acordaron la creación, al término de la guerra, de una unión económica duradera para poderse reafirmar frente a las grandes potencias. La idea no era nueva; en el período de entreguerras ya se habían realizado esfuerzos en pro de una cooperación económica más estrecha que en 1921 habían conducido ya a un primer resultado, la unión económica entre Bélgica y Luxemburgo. El preludio del exilio fue muy prometedor: el 21 de octubre de 1943, los tres gobiernos firmaron un acuerdo relativo a la creación de una unión monetaria y un año después suscribieron un tratado aduanero (5 de septiembre de 1944) considerado como el primer paso hacia una asociación económica «que asegure la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital dentro de los tres países» [106]. Pero poco después el proceso de integración quedó estancado, e incluso los planes de Londres fueron de momento archivados al ponerse de manifiesto que las tres economías nacionales no se complementaban tan bien después de la segunda guerra mundial como lo habían hecho en las décadas de 1920 y 1930. Los tres gobiernos en el exilio habían partido además del supuesto de que, al acabar la guerra, en los tres países se tendría que empezar más o menos de cero. La ocupación alemana de los Países Bajos había durado, sin embargo, ocho meses más que la de Bélgica, y en aquellos horribles meses la economía holandesa había quedado casi completamente destruida. Las economías de Bélgica y Luxemburgo, que no habían sufrido tanto durante la guerra, ya se encontraban en esa época en proceso de reconstrucción. La distinta situación de partida hizo que sobre todo los gobiernos de Bélgica y los Países Bajos recurriesen a diferentes recetas de política económica. La economía de posguerra de Bélgica estuvo totalmente determinada por la economía de libre mercado, en tanto que el gobierno holandés se vio obligado a recurrir en un principio a un amplio intervencionismo estatal. El abismo entre las dos economías nacionales se hizo con ello aún más profundo.

No fue pues de extrañar que Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos sólo alcanzasen lentamente su objetivo de unión económica. En 1948 entró en vigor el convenio aduanero, que eliminaba las fronteras aduaneras y determinaba una tarifa aduanera común para las exportaciones procedentes de terceros países. Un año más tarde se acordó, como paso previo a la comunidad económica, la llamada pre-unión, que preveía la creación de un mercado común

interior y la homologación de la política económica. Estos éxitos no habrían sido posibles sin la ayuda americana del Plan Marshall, que dio un nuevo impulso a la economía europea creando con ello el marco para una unión económica de los Estados del Benelux [107].

Aunque los procesos de la integración económica de los Estados del Benelux quedaron muy por detrás de las expectativas, los tres países tomaron la misma dirección en lo que a la política de alianzas se refiere, siendo su postura unánime en este sentido. Así, en 1945 se integraron en las Naciones Unidas y en 1949 en el Tratado del Atlántico Norte. Con ello, los tres países renunciaban a su tradicional postura de neutralidad. Los Estados del Benelux pertenecían, al mismo tiempo, al grupo de los partidarios más decididos de la Comunidad Económica Europea, de la cual consideraban precursora a su pequeña Unión. Al entrar en vigor en 1958 el Tratado de Roma acerca de la constitución de la CEE, los países del Benelux pudieron hacer también realidad el grado de cooperación con que habían soñado los padres de la idea en Londres: la «Union Économique Bénélux» [108]. Pero a pesar de la unanimidad existente en cuanto a la política de alianzas y a la cooperación económica, cada uno de estos tres países tenía también al final de la segunda guerra mundial sus propios problemas e intereses.

En Bélgica, después de 1945, volverían a aparecer los enfrentamientos lingüísticos entre flamencos y valones, alcanzando una virulencia desconocida hasta entonces. Los valones, de lengua francesa, habían tenido la supremacía desde la revolución belga de 1830, con el concurso de las capas rectoras francófonas de Flandes. Sólo quien hablaba francés tenía posibilidades de ascender socialmente. El neerlandés de los flamencos había sido el dialecto de los incultos. El movimiento flamenco de emancipación surgido con el cambio de siglo no consiguió la igualdad de derechos de las dos lenguas hasta la década de 1930; en cualquier caso el francés seguía siendo la lengua dominante. A estas viejas tensiones lingüístico-culturales se añadieron después de 1945 contradicciones más importantes, de carácter económico y político [109]. Flandes, fundamentalmente agrario, despertó al acabar la guerra de su sueño encantado dispuesto a sobrepujar económicamente a Valonia, que hasta ese momento había sido dominante. En la década de 1950, numerosas empresas extranjeras de ramas con futuro se asentaron en el cuadrilátero de Bruselas-Gante-Amberes-Hasselt; la desembocadura del Escalda en Amberes se convirtió en el punto preferido de ubicación de los consorcios del petróleo y la química [110]. La antigua industria

valona del carbón y del acero se sumiría, por el contrario, después de 1945 en una crisis permanente en detrimento paulatino de su posición de rama industrial más importante de Bélgica. Los éxitos económicos y el simultáneo desplazamiento demográfico en favor de los flamencos les animó a perseverar en su rechazo de la preponderancia francovalona en el ámbito de la lengua y de la cultura. Los nacionalistas flamencos exigieron la división de Bélgica en dos Estados autónomos escasamente unidos entre sí y con capital en Bruselas, provocando con ello parecidas reivindicaciones por parte de sus homólogos valones. Al agudizamiento del conflicto contribuiría finalmente también el hecho de que los dos grandes partidos del país tuviesen sus baluartes respectivos en sendas partes del país: el Partido Social-Cristiano (PSC) en el conservador y católico Flandes; el Partido Socialista (PSB) en la republicana y anticlerical Valonia con sus tradiciones francófilas [111].

La anacrónica controversia lingüística y cultural entre flamencos y valones, agudizada por las contradicciones económicas y políticas, adquiría aún mayor virulencia cuando se trataba de resolver problemas de interés nacional. Esto ya se puso de manifiesto en 1945, cuando los belgas hubieron de tomar una decisión acerca de la vuelta del rey Leopoldo III, que desde su entronización en 1934 había perdido gran parte de su prestigio. En Valonia se le reprochaba su rápida capitulación ante los alemanes en 1940. Su visita a Hitler en Berchtesgaden no había sido olvidada. Muchos le consideraban un colaboracionista y exigían su renuncia al trono. En Flandes, desde siempre mucho más afecto al rey, no se le perdonaba su matrimonio con una burguesa a la muerte de la reina Astrid, pero a pesar de todo la actitud preponderante era de fidelidad al rey. La «cuestión real» se convirtió así en el tema predominnate de la política interior de Bélgica y su consecuencia fue una auténtica división del país. Los diferentes gobiernos presididos por A. Van Acker (PSB), C. Huysmans (PSB) y Paul Henri Spaak (PSB) tratarían hasta 1949 de hallar en vano una solución. Sólo cuando el Partido Social-Cristiano, empeñado en el regreso de Leopoldo, alcanzó en junio de 1949, bajo la dirección de Gaston Eyskens, una impresionante victoria en las elecciones al Parlamento quedó libre el camino para la consulta popular pedida por el rey, que finalmente dio como resultado una postura mayoritaria del 57% en favor del regreso de Leopoldo. Como era de esperar, la mayoría de los flamencos votaron en favor del rey y la mayoría de los valones en contra. La consulta popular no sirvió para esclarecer la situación. Las crisis de gobierno se sucedieron y la población fue con-

vocada una y otra vez a las urnas. Los sindicatos y el Partido Socialista se opusieron al regreso de Leopoldo y convocaron una huelga general. Finalmente, la polémica en torno a la cuestión real se desplazó a la calle, que se convertiría en escenario de sangrientas refriegas entre leopoldistas y antileopoldistas. Los disturbios, semejantes a una guerra civil —«Estamos inmersos en una revolución», declararía el dirigente socialista Spaak—, indujeron a Leopoldo a abdicar en favor de su hijo Balduino, que entonces sólo tenía diecinueve años [112].

Después, Bélgica viviría por algún tiempo una época más tranquila. Pero las viejas heridas volverían a abrirse en 1954, en esta ocasión a causa de la cuestión escolar. El gobierno de coalición de socialistas y liberales presidido por Van Acker trató de imponer una ley educativa que perjudicaba económicamente a los colegios católicos. Fueron entonces las organizaciones eclesiásticas las que convocaron manifestaciones y actos de protesta, produciéndose de nuevo graves enfrentamientos. El *Süddeutsche Zeitung* hablaría en marzo de 1955 de un «pandemónium», refiriéndose a Bruselas: «En las calles hay un clima de guerra civil... Cuando aparecieron gendarmes a caballo con el sable desenvainado, patrullas policiales, unidades del ejército con la bayoneta calada y bomberos con tanques de agua, la columna que hasta entonces avanzaba en orden se convirtió en una furiosa tropa de combate» [113]. El conflicto terminaría en 1958, tras el llamamiento a la reconciliación de los obispos belgas. Pero el problema central de Bélgica siguió en pie: la división lingüístico-cultural en el Flandes de lengua neerlandesa, la Valonia francófona y la Bruselas bilingüe. Todos los intentos de resolverlo fracasaron, provocando hasta la década de 1970 constantes polémicas en el Parlamento.

Apenas atenuada la controversia de la cuestión escolar, ya se empezó a vislumbrar otro conflicto: la crisis del Congo. Hasta muy entrada la década de 1950, la tranquilidad había reinado en la colonia belga situada en el corazón de Africa. La política paternalista, que prometía satisfacer prudentemente las aspiraciones emancipatorias de la población de color, parecía dar buenos resultados. Pero las apariencias engañaban: es cierto que los belgas impulsaron la economía, que se hallaba en gran medida en sus manos (como la explotación de las ricas minas de cobre de la provincia de Katanga), pero apenas se preocuparon por los intereses sociales y culturales de los congoleños. En 1958-59 se desataron sangrientas revueltas que indujeron al gobierno belga —que ya en 1958 había iniciado una política de descolonización—

a conceder la independencia al Congo precipitadamente el 30 de junio de 1960[114].

A diferencia de estos años tan agitados en Bélgica, los Países Bajos, que después de la guerra habían restaurado su monarquía tradicional de cuño inglés, vivirían tiempos casi tranquilos. Ante todo había que poner en marcha la economía, que había sufrido un rudo golpe durante la dominación alemana. Los holandeses obtuvieron éxitos asombrosos en este sentido mediante amplios controles estatales y gracias al impulso recibido con el Plan Marshall, pudiéndose ya abordar a principios de la década de 1950 el segundo gran problema, la industrialización de un país que era eminentemente agrícola. A finales de esta década, también este problema se hallaba prácticamente resuelto: entre 1950 y 1960 se duplicó la producción industrial, que con ello se situaba casi tres veces por encima de la de 1936. En la desembocadura del Rin surgieron modernos altos hornos y acerías. Las zonas costeras al oeste de Amsterdam y Rotterdam se convirtieron en uno de los centros de la industria petroquímica más importantes del mundo. La industria holandesa se vio favorecida paralelamente por el milagro económico alemán de los años cincuenta, pues debido a ello se volvieron a abrir los lucrativos mercados alemanes. La República Federal se convirtió además en uno de los clientes más importantes de los puertos transatlánticos holandeses[115]. Nadie hubiese podido soñar al acabar la guerra con tal auge, que se vio acompañado de un aumento considerable del nivel de vida. Entonces se había llegado incluso a temer por la existencia misma de los Países Bajos en el caso de que el gran imperio colonial, que antes de la guerra había contribuido esencialmente al bienestar de la metrópoli, se viniese abajo, tal como lo preconizaban ya los disturbios de Indonesia. Todos los partidos se pronunciarían por ello después de la guerra en contra de la renuncia a las colonias. En las filas de los católicos y los calvinistas, el dominio holandés sobre Indonesia se consideraba incluso como un derecho divino que había que defender por la fuerza de las armas. La intervención militar de los Países Bajos en Indonesia tuvo que interrumpirse sin embargo en 1949, de acuerdo con la sentencia emitida por las Naciones Unidas. A finales de 1949, Indonesia se hizo independiente, aunque permaneció ligada a los Países Bajos hasta 1956 mediante un estatuto de unión[116]. Las tan temidas consecuencias de la descolonización para la economía holandesa no se produjeron, revelándose antes bien como positiva a largo plazo la renuncia a las colonias.

El hecho de que la forzada transformación del antiguo Estado agrario en un Estado industrial y la pérdida de las colonias no se viesen acompañadas de una grave conmoción en política interior se debió, ante todo, a la cooperación «romano-roja» entre católicos y socialistas, que, de 1945 a 1958, se convertirían en la espina dorsal de los gobiernos. La alianza gubernamental socialista-católica, cuya presidencia de 1948 a 1958 sería ostentada por el socialista Willem Drees, fue al mismo tiempo un signo de continuidad y de cambio. Llevó al poder al Partido Laborista, fundado contra el nacionalsocialismo dentro del espíritu de la resistencia, y relevó a la antigua coalición de los partidos católicos y protestantes, considerados obsoletos. Por otro lado, el más importante de los dos partidos confesionales, el Partido Popular Católico, mantuvo una posición clave dentro del gobierno. La «política de amplia base» sostenida por la coalición romano-roja, acompañada de una tregua entre empresarios y sindicatos, proporcionó una relación equilibrada entre el liberalismo económico y el intervencionismo estatal, creando con ello las condiciones necesarias para la realización de toda una serie de reformas sociales y económicas importantes durante la posguerra, la más importante de las cuales fue el amplio desarrollo de la Seguridad Social. Ahora bien, la coalición romano-roja no lograría sino poner los cimientos de un puente de unión entre los diferentes bloques sociales. El ciudadano medio holandés pertenecía tradicionalmente a una asociación católica, protestante, no confesional y liberal o socialista, que determinaba también en gran medida su forma de conducta política y social. Esta fuerte fragmentación de la población, el llamado *verzuilling* (enclaustramiento), seguiría siendo hasta la década de 1970 uno de los problemas principales de la sociedad neerlandesa. La generación joven, sobre todo, ya no se mostraría dispuesta a aceptar por más tiempo las estrictas fronteras existentes entre los bloques tradicionales [117].

El gran ducado de Luxemburgo, que de acuerdo con los planes de los dominadores nacionalsocialistas habría tenido que desaparecer completamente del mapa político de Europa para quedar integrado en el «Gran Imperio Alemán», se recuperó, al igual que Bélgica y los Países Bajos, con una rapidez asombrosa de los daños sufridos en la segunda guerra mundial. No se produjo ningún tipo de «polémica del trono», como en Bélgica, que desgarrase el país. La gran duquesa Carlota, que había subido al trono inmediatamente después de la primera guerra mundial, regresó del exilio en Londres en 1945. Las primeras elecciones de noviembre de 1945 dieron la mayoría al Partido Social-Cris-

tiano, cuyo dirigente Pierre Dupong formaría con socialistas, comunistas y liberales una coalición de Unión Nacional que, sin embargo, quedaría deshecha en 1947 cuando los dos partidos de izquierda se retiraron del gobierno. Dupong permaneció en el cargo hasta 1953, siendo sucedido por el hasta entonces ministro de Asuntos Exteriores Josef Bech, que, al igual que Dupong en sus dos últimos años de gobierno, se apoyaría en una gran coalición de socialcristianos y socialistas. El gobierno de la Unión Nacional, que siguió por lo demás un rumbo de extrema austeridad, impulsó primeramente el sector agrario, gravemente dañado. Tan sólo algunos años después del fin de la guerra, se pudo dar por concluida en lo esencial la reconstrucción de la economía luxemburguesa, que fue seguida por una fase de auge constante, aunque modesto en comparación con los Estados vecinos de Bélgica y Holanda. Las tasas de crecimiento, relativamente exiguas, se debieron en primer lugar al lento desarrollo de la rama de la industria más importante de la economía luxemburguesa, la de la producción de hierro y acero, que en la década de 1950 sufriría una crisis cada vez mayor. Cuando empezaron a vislumbrarse los problemas económicos de la industria del carbón y del acero, el gobierno de Luxemburgo se vio obligado a reconocer que había confiado con demasiada despreocupación y durante demasiado tiempo en la capacidad de la industria del hierro y del acero en vez de establecer la economía sobre una base más amplia. Los primeros intentos de reparar estas negligencias estructurales se emprenderían ya en la década de 1950, pero sólo el *Kaderwet* (ley básica) de 1962 establecería los puntales de una nueva política industrial centrada en la industria química y en la construcción de maquinaria. No obstante, la producción de hierro y de acero seguiría siendo también posteriormente la pieza fundamental de la economía luxemburguesa [118].

VII. ITALIA

Cuando los aliados desembarcaron en Sicilia el 10 de julio de 1943, la carrera de Benito Mussolini, que había conducido a su país en 1940 a una guerra impopular, estaba a punto de terminar. El rey Víctor Manuel III, que hasta ese momento había sido leal al régimen fascista, no se equivocó al pensar que, tras la derrota militar de las potencias del Eje y la caída del Duce, también el destino de la Corona estaría en peligro. El rey temía menos a los aliados que a las masas obreras «rojas» que, en las huelgas de marzo de las grandes ciudades del norte, habían anun-

ciado su decisión de derrocar al fascismo. Una vez que el Gran Consejo fascista hubo expresado al Duce su desconfianza, el rey se sometió a la presión de los adversarios de Mussolini en la Corte y de los dirigentes de la Resistencia. El 25 de julio de 1943, Víctor Manuel convocó al Duce y acto seguido ordenó su encarcelamiento. El frágil régimen fascista se desmoronó sin que nadie moviese un solo dedo en su defensa. Aquel mismo día, el rey encargó al mariscal Pietro Badoglio la formación de un nuevo gobierno de expertos y militares [119].

Badoglio, general fiel al rey que en 1940 había sido destituido por Mussolini de su cargo de jefe del Alto Estado Mayor, se encontró con una pesada herencia. Mientras mantenía cautelosamente conversaciones para concertar el armisticio con los aliados, que concluirían felizmente el 8 de septiembre, el país se vio progresivamente invadido por las tropas alemanas. Hitler había adivinado la táctica dilatoria de Badoglio y se dispuso a formar potentes divisiones para hacer frente a las fuerzas aliadas, que entre tanto habían desembarcado en la ciudad de Salerno, en el sur de Italia. El país, que había concertado el armisticio para retirarse de la guerra, se vio así cada vez más envuelto en ella. Más aún, Italia quedó dividida tras el armisticio en tres zonas, lo cual tendría efectos fatales al acabar la guerra. En el sur del país se estableció el gobierno Badoglio bajo el control del gobierno militar angloamericano. En el centro, en donde desde julio de 1943 hasta el fin de la guerra, en la primavera de 1945, se desarrollaría una guerra sangrienta entre las tropas alemanas y aliadas, el gobierno monárquico de Badoglio apenas podría imponer, en cambio, su autoridad. El poder estuvo sobre todo en manos de las tropas alemanas de ocupación a las que el 13 de octubre de 1943 Badoglio había declarado oficialmente la guerra. En el norte, ocupado por las tropas alemanas, Mussolini, que había sido liberado de su prisión en el Gran Sasso en una atrevida operación de los paracaidistas alemanes, protagonizó un triste retorno como jefe de un Estado republicano-fascista, la Repubblica Sociale Italiana (RSI) de Saló, cuyas fuerzas combatieron contra los aliados al lado del ejército alemán. Este gobierno títere, dependiente por completo de Hitler, halló muy poco eco en la población italiana, convirtiéndose finalmente en una «tropa de simples colaboracionistas» [120]. Tanto mayor sería, por lo mismo, el número de seguidores del Comité de Liberación Nacional (Comitato di liberazione nazionale, CLN), al cual pertenecían los partidos antifascistas más importantes: el partido comunista (Partito Comunista Italiano, PCI), el partido socialista (Partito Socialista Italiano di Unita Proletaria, PSIUP), el Partido de Acción,

liberal-socialista (Partito d'Azione), con objetivos democráticos-revolucionarios, el partido liberal (Partito Liberale Italiano, PLI), dentro de la tradición del Risorgimento, y el partido católico (Democrazia Cristiana, DC), fundado en 1943 y entroncado con el partido popular católico (Partito Popolare) de 1919. El Comité de Liberación Nacional, dentro del cual tendrían una especial importancia los cuatro activistas de la Resistencia de la izquierda, paralizó la economía con grandes huelgas, y sus grupos de partisanos controlarían ya en 1944 una parte importante del país. «En conjunto fueron liberadas por los partisanos más de cien ciudades antes de que nosotros llegásemos» se dice en un informe del ejército británico; «los ejércitos aliados sólo tuvieron que entrar en las ciudades ya liberadas para ayudar a los partisanos a someter a las últimas guarniciones aisladas...» [121].

Mientras en el centro y en el norte de Italia se seguía combatiendo duramente, las contradicciones entre el gobierno Badoglio y los partidos agrupados en el Comité de Liberación se hacían cada vez más patentes. Los partidos, debido a su lucha de resistencia, se consideraban el único gobierno legítimo de Italia y condenaron al «régimen neofascista de Víctor Manuel y Badoglio» [122], exigiendo la abdicación del rey y la formación de un gobierno democrático. Víctor Manuel, que en los políticos de partido sólo veía los «fantasmas del pasado», se opuso a estas exigencias, por lo que en el comité de partidos antifascistas poco a poco lograrían imponerse las fuerzas revolucionarias, decididas a derrocar por la fuerza a Víctor Manuel y Badoglio. En tan precaria situación, vino en ayuda del rey el dirigente comunista Palmiro Togliatti, el cual había regresado de su exilio en Moscú con el encargo de hacer que su partido se aviniese a una política de compromiso, amplia y libre de prejuicios, que acercase a los comunistas a su objetivo de participar en el poder. Togliatti renunció a hacer experimentos revolucionarios y en su lugar propuso a los partidos entrar en el gobierno de Badoglio y posponer hasta el fin de la guerra la decisión respecto al destino de la monarquía. Este cambio de rumbo fue facilitado en cierta medida a las fuerzas revolucionarias por el hecho de que simutáneamente Víctor Manuel, por presión de los americanos, se había comprometido a abdicar en favor de su hijo Humberto tras la liberación de Roma [123].

Liberada Roma en junio de 1944, Víctor Manuel se retiró a la vida privada; Badoglio, en cuyo gabinete participaban desde hacía poco representantes de todos los partidos antifascistas —siguiendo la propuesta de Togliatti—, dimitió, y el presidente del CLN, el antiguo socialista reformista Ivanoe Bonomi, asumió el puesto de

presidente del gobierno. Con ello, los partidos habían logrado un éxito que, sin embargo, quedaría enturbiado por el hecho de que la solidaridad creada por la resistencia entre los diversos grupos se convirtió progresivamente en una lucha por la configuración del Estado y de la sociedad y por la supremacía en la futura Italia. Los socialistas de Pietro Nenni y los miembros del Partido de Acción querían «imprimir al movimiento de resistencia un sello político revolucionario»[124] y hacer que la caída del fascismo fuera seguida de una completa renovación de la estructura social y política del país; no estaban dispuestos a contentarse, en modo alguno, con la vuelta al viejo tipo de Estado anterior al fascismo. El partido comunista, que había estado unido a los socialistas en el frente popular, se manifestó también favorable a estos amplios objetivos, pero consideró que las aspiraciones revolucionarias dentro de la esfera de influencia angloamericana tenían por el momento pocas perspectivas, limitándose por ello a establecer buenas relaciones con el partido burgués probablemente más poderoso, la Democracia Cristiana, a fin de asegurarse la mayor influencia posible en el gobierno. Para los liberales y para la DC, ambos dispuestos a transigir en lo relativo a algunas medidas de reforma, los planes de la izquierda iban demasiado lejos. Para ellos, el fascismo era una enfermedad que había atacado a un cuerpo en el fondo sano; una vez curada la enfermedad se podía volver a la estructura de la vieja Italia liberal de antes de 1922. La lucha entre las fuerzas socialistas-comunistas y moderadas de la DC y del PLI se desató en toda su amplitud durante el gobierno de Bonomi, prosiguiendo bajo el gobierno multipartidario de Ferruccio Parri (Partido de Acción), que en junio de 1945 sería elegido primer ministro. Parri, una de las grandes figuras de la Resistencia, encarnaba las aspiraciones de renovación democrática del Estado y de la sociedad. Su gobierno, en el que los partidos de izquierda ocuparían los cargos más decisivos, estaba dispuesto a llevar a cabo profundas reformas, tales como duros procesos de depuración, una política tributaria progresista para la gran industria y más derechos de cogestión para los sindicatos dentro de las empresas. Pero la ola antifascista había sobrepasado ya su apogeo. Parri no fue capaz de controlar las fuerzas encontradas y, finalmente, los socialistas y los comunistas, preocupados por el mantenimiento de la paz dentro de la coalición, prefirieron retirarle su apoyo en diciembre de 1945 para acordar con los partidos burgueses la elección como nuevo presidente del respetado dirigente democratacristiano Alcide de Gasperi. El gobierno De Gasperi seguiría estando formado —al igual que el de Parri— por todos los partidos de la

coalición antifascista, pero el peso de los partidos de izquierda disminuiría considerablemente. Esto ya se puso de manifiesto en la lista del gabinete: en tanto que los representantes de la izquierda hubieron de contentarse con ministerios poco importantes, el presidente de gobierno acaparó los de Exteriores, Interior y África Italiana. Con ello se ponía fin a la época de la Resistencia, paralizándose cada vez más la voluntad de renovación política que ésta tanto había impulsado[125].

La victoria de los moderados en torno a De Gasperi fue el resultado del proceso que tuvo lugar desde el derrocamiento de Mussolini en 1943. Las fuerzas restauradoras se vieron favorecidas por la indecisa actitud de la izquierda, enfrentada además en cuestiones tácticas, y sobre todo por la división de Italia en tres zonas. Los partidos de izquierda sólo eran apoyados por la mayoría de la población en las regiones del norte del país, esto es, allí donde la izquierda se había destacado especialmente en la lucha contra las tropas alemanas de ocupación y contra sus lacayos fascistas y en donde se había formado un verdadero gobierno clandestino. En el centro y en el sur, por el contrario, el rey y Badoglio habían restaurado —en la medida de lo posible— el antiguo orden estatal y social. Su población, eminentemente campesina y conservadora, prácticamente no había conocido ningún movimiento de resistencia, mostrándose por ello escéptica ante las recetas políticas propagadas por la izquierda. El «fresco viento del norte» anunciado por Pietro Nenni podría haber barrido, sin embargo, todas las resistencias aparecidas en el camino hacia una renovación fundamental si las fuerzas moderadas no hubiesen sido apoyadas desde un principio por los aliados, que políticamente desconfiaban de los comités de liberación —a pesar de la colaboración militar— y veían principalmente en ellos a hordas perturbadoras y semilleros de acciones revolucionarias. Por otra parte, a los aliados les interesaba proteger la continuidad del Estado en cuyo nombre Badoglio había firmado el documento de armisticio[126]. Por ello, sobre todo el gobierno británico presionó para contener a tiempo la influencia de los comités de liberación nacional y proteger a las fuerzas moderadas. Los hechos acontecidos en Grecia en diciembre de 1944, en donde el Ejército griego de Liberación Nacional (ELAS), dominado por los comunistas, trató de hacerse con el poder, parecieron confirmar los temores de ingleses y americanos. «La lección que aprendimos en Grecia», según palabras del comandante en jefe del Ejército de Tierra aliado en Italia, general Harold Alexander, pronunciadas en una conversación con el que más tarde habría de ser primer ministro británico, Harold Macmillan, en diciem-

bre de 1944, «consistió en que, desde el principio, teníamos que conseguir el control sobre estos movimientos. Suponiendo que la campaña acabase a comienzos del verano (1945), aquel era ya el momento de hacerse claramente cargo de la situación y de infiltrar entre los partisanos a oficiales británicos e italianos de confianza... Lo más importante de todo era hacerse con el control del movimiento de resistencia antes de que, como en Grecia, se convirtiese en un simple instrumento del comunismo» [127].

El nuevo presidente de gobierno, De Gasperi, que ya había desempeñado un papel rector en el partido popular católico, estaba plenamente convencido de que no sería posible una alianza duradera con los comunistas y los socialistas; no obstante trató de mantener, al menos durante un tiempo de transición, a sus oponentes Togliatti y Nenni mediante una política flexible de compromiso, lo cual no le resultó difícil, pues en las filas socialistas se produjeron en 1945-46 fuertes luchas de tendencias y los comunistas estaban dispuestos a hacer concesiones casi ilimitadas por obtener una cartera ministerial. De esta manera, a De Gasperi no le costaría demasiado manipular a los partidos de izquierda en todas las cuestiones importantes. Sin suscitar por ello grandes protestas, interrumpió la depuración política iniciada por Parri y sustituyó a los prefectos nombrados por los comités de liberación nacional, así como a los cuestores, por funcionarios de carrera de la época del fascismo. Al mismo tiempo, los partidos del frente popular tuvieron que conformarse con una política económica y financiera liberal, viéndose obligados también a renunciar a sus aspiraciones cuando en 1946 la «tregua en el contencioso sobre la forma de Estado», acerca de la cual se habían puesto de acuerdo todos los partidos en 1944, se dio por terminada y hubo que decidir entre monarquía o república. Los democratacristianos y los liberales impusieron su propuesta de que la decisión fuese tomada por el pueblo. La suerte de la monarquía, que en 1944-45 parecía prácticamente echada, se convirtió así de nuevo en una cuestión abierta, ya que en el centro y en el sur de Italia la Casa de Saboya podía contar con la fidelidad de sus partidarios. La esperanza puesta por los partidos burgueses en que la monarquía se pudiese salvar mejor por medio de una consulta popular que por medio de la votación de una comisión parlamentaria (como habían propuesto los partidos de izquierda) estuvo casi a punto de cumplirse: sólo el 54% de los italianos votaron en favor de la República [128].

De Gasperi no pudo evitar la caída de la dinastía de Saboya, que desde Cavour había simbolizado la unidad de la nación. Tam-

poco pudo evitar que el tratado de paz de París del 10 de febrero de 1947 pasara a la joven república la factura por la aventura de Mussolini en política exterior.

Y así, Italia tuvo que pagar cerca de 360 millones de dólares en reparaciones, renunciar a una gran parte de su flota y reducir sus fuerzas armadas a 300 000 hombres. Como era de esperar, las conquistas de la era de Mussolini hubieron de ser devueltas. Italia perdió además sus antiguas colonias africanas y el Dodecaneso, en Asia Menor, y tuvo que ceder a Francia algunos territorios fronterizos de poca extensión. Pero lo más doloroso fue la pérdida parcial de Venecia Julia en favor de Yugoslavia. Esta región había sido ocupada hacia el fin de la guerra por partisanos yugoslavos que, presionados por los aliados, habían tenido que retirarse de nuevo. En 1946, después de largas negociaciones, se acordó declarar a Trieste y a su territorio Estado libre neutral bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Pero esta solución, incluida también en el tratado de paz, no llegaría a materializarse. La cuestión de Trieste se convirtió en fuente permanente de conflictos hasta que por fin en 1954 se pudo regular de forma satisfactoria para ambos Estados, correspondiendo a Italia Trieste y su entorno próximo [129].

Los italianos quedaron sumamente descontentos con las disposiciones del tratado de paz, y más que nadie el presidente de gobierno De Gasperi, quien después de haberse ganado en la escena internacional un gran respeto para sí y su país, esperaba que Italia fuese reconocida como país amigo por los aliados y no que fuese tratada como país vencido. «Este tratado ha herido los sentimientos nacionales», hizo saber a los Estados Unidos, dejando entrever al mismo tiempo que emplearía todas sus fuerzas para lograr que se revisara el tratado [130]. Pero una vez que la primera agitación de la opinión pública italiana se hubo calmado, paulatinamente se fue tomando conciencia de que Italia podía darse por satisfecha con el tratado de paz. En definitiva había podido reafirmar la soberanía sobre su territorio nacional, ya que incluso el Tirol meridional, reclamado en 1945 por Austria, siguió perteneciendo a Italia, que por su parte tuvo que comprometerse a otorgar ciertos derechos especiales a la población de habla alemana [131].

Mientras el gobierno italiano se dedicaba en 1946-47 principalmente a tratar de influir en las negociaciones de paz que estaban teniendo lugar, en Roma se reunía la Asamblea Constituyente elegida el 2 de junio de 1946. El resultado de las elecciones, las primeras celebradas en la historia de Italia sobre la base de un verdadero sufragio universal (por primera vez ejercían también

las mujeres el derecho al voto), no haría sino confirmar lo que ya se había puesto de manifiesto desde 1945: el progresivo afianzamiento de las fuerzas moderadas y la polarización de la política de partidos en un campo moderado, católico y conservador, y en otro socialista y comunista. La DC se convirtió, con diferencia, en el partido más fuerte, disponiendo, con 207 representantes, de casi tantos escaños como los socialistas y los comunistas, que juntos obtendrían 219 representantes. Los liberales, partido del gobierno tradicional de la vieja Italia, se quedaron también, con sólo 41 escaños, al margen del acontecer político, al igual que la «vanguardia en el campo antifascista», el Partido de Acción, que sólo pudo enviar siete diputados a la Asamblea Constituyente. Inesperadamente fuerte sería, por el contrario, el Fronte dell'Uomo Qualunque (30 escaños), un movimiento radical de derechas «de todo el mundo» que —al igual que los poujadistas franceses y la Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung alemana del demagogo Alfred Loritz— se apoyaba sobre todo en la insegura clase media [132].

A pesar de la polarización de los partidos, en las sesiones de la Asamblea Constituyente vibró con no poca frecuencia algo así como el espíritu de la Resistencia, de manera que la nueva Constitución podría elaborarse dentro de un clima de concordia. Aún era posible tender un puente entre ambos bandos. La Constitución, aprobada el 22 de diciembre de 1947 por los diputados de los grandes partidos, respondía a todas las tradiciones más importantes de la historia italiana, tanto liberales, como cristianas y conservadores y socialistas. El único artículo verdaderamente polémico sería el 7, promulgado el 24 de marzo de 1947 y por el cual quedaban reguladas las relaciones Iglesia-Estado conforme a los Acuerdos de Letrán de 1929. Tras largas discusiones internas, los comunistas —a diferencia de sus aliados socialistas del frente popular, que permanecerían fieles a su tradición laica— votaron finalmente, junto con los democratacristianos, en favor de incluir en la Constitución estos acuerdos, estrechamente vinculados al fascismo [133].

Los comunistas no se vieron recompensados por sus amplias concesiones. Ya en septiembre de 1946, De Gasperi había hecho saber confidencialmente a los americanos que en aquel mismo momento estaba dispuesto a poner punto final a la colaboración con los comunistas. Pero en su opinión aún no era el momento oportuno, ya que era sumamente imprevisible cuál sería la reacción de la Unión Soviética en la conferencia de paz si se excluía del gobierno a los comunistas italianos. «Pero, una vez que se firme el tratado de paz... habría que poner claramente las cartas

sobre la mesa. A continuación se escenificaría una crisis general con el principal objeto de eliminar definitivamente a los comunistas» [134]. Y, en efecto, apenas hubieron pasado el tratado de paz y el artículo 7 de la Constitución la barrera parlamentaria, De Gasperi abandonó su política de tregua para avanzar abiertamente hacia la ruptura con los partidos de izquierda. Desde la irrupción de la guerra fría, la paz de la coalición sólo había podido ser preservada con grandes esfuerzos, pues mientras que la DC se había decidido claramente en favor de Occidente ante la urgente necesidad de una ayuda financiera americana, celebrando por ejemplo con entusiasmo la Doctrina Truman, a la que consideraba una garantía para la seguridad de Italia, los comunistas —plenamente en la línea de Moscú— condenaban la política de contención de los Estados Unidos propugnada por Truman, equiparándolos con el «imperialismo alemán» [135]. Los socialistas, tradicionalmente neutrales en política exterior, que en enero de 1947, en su congreso de Roma, habían sufrido la escisión de una pequeña ala socialdemócrata bajo la dirección de Giuseppe Saragat, permanecieron al lado de sus aliados del frente popular en aras de la unidad del movimiento obrero. Con ello, la ruptura se hizo inevitable. A finales de mayo de 1947, socialistas y comunistas salieron del gobierno.

Un año después, los electores tendrían que decidir acerca del rumbo tomado por De Gasperi, de adhesión a los Estados Unidos y fuerte oposición al frente popular. La campaña electoral tuvo lugar dentro de un clima de gran agitación, atizada por los acontecimientos políticos tanto internos como externos. En febrero-marzo de 1948, el Partido Comunista de Checoslovaquia había tomado el poder en Praga mediante un golpe de Estado apoyado por Moscú. Poco después, las potencias occidentales olvidarían la promesa popular de apoyar el pronto regreso de Trieste al ámbito de soberanía italiano y, al mismo tiempo, los Estados Unidos dejarían entrever que, en caso de que el frente popular ganase las elecciones, Italia ya no podría contar con su ayuda económica. «La espada del dólar de Marshall determina, sin ser vista, las elecciones italianas», escribía *Der Spiegel* el 20 de marzo de 1948. En una auténtica campaña propagandística contra los partidos de izquierda, también el Vaticano intervino intensamente en la lucha electoral. Con este telón de fondo, la consigna electoral del frente popular —«Profunda reforma estructural o reacción conservadora e incluso fascista»— no podría resultar tan atractiva como el eslogan democratacristiano: «Libertad democrática o dictadura comunista» [136].

La victoria de la DC en los comicios del 18 de abril de 1948 fue aplastante, obteniendo, con más del 48% de los votos, la mayoría absoluta de los escaños; los partidos del frente popular hubieron de contentarse con sólo el 31% de los votos. Pero, a pesar de la clara victoria de la DC, Italia no obtendría el reposo; la campaña electoral había producido heridas demasiado grandes a todos los partidos. Los partidos de izquierda se vieron expuestos a una campaña pública que habría de culminar en 1949 con la decisión del Papa de excomulgar a todos los fieles de orientación marxista. Por otra parte, los comunistas apenas pudieron ocultar su decepción por el resultado de las elecciones, haciendo valer toda su influencia para incitar a los sindicatos a convocar constantes huelgas. En este clima tan caldeado tendría lugar el atentado perpetrado el 14 de julio de 1948 contra el dirigente del partido comunista Palmiro Togliatti que amenazó con precipitar a Italia en una guerra civil, produciéndose violentos disturbios y convocándose una huelga general que, sin embargo, volvería a interrumpirse poco después ante el enorme despliegue de fuerza por parte del Estado.

Con ello la lucha entre los católicos conservadores y los socialistas y comunistas que se venía prolongando desde 1943 quedaba decidida, y además por mucho tiempo, pues la DC también lograría imponerse en las elecciones sucesivas con cerca del 40% de los votos, en tanto que los comunistas, tachados de cómplices de Moscú, y sus aliados socialistas no obtendrían por lo general sino cerca del 30-35%. El resultado de los comicios de 1948 cimentó al mismo tiempo la división de Italia en dos bandos, siendo la consecuencia de ello el inmovilismo político y la «superestabilización del sistema de partidos y coaliciones» (Karl-Dietrich Bracher) y apareciendo como algo imposible un cambio en la responsabilidad de gobierno, ya que ello hubiese significado la participación de los comunistas o sus aliados socialistas en el poder [137]. Tras su brillante victoria electoral, De Gasperi, que prefería apoyarse en una gran coalición de centro («centrismo») integrada por la DC, los republicanos, los liberales y los socialdemócratas antes que en un gobierno único de la DC, internamente desavenida, mantuvo con decisión su política de apoyo en los Estados Unidos y de integración en Europa occidental. En 1949, Italia sería uno de los miembros fundadores del Tratado del Atlántico Norte, y en 1951 entraría a formar parte de la CECA. Así, bajo la dirección de De Gasperi quedarían establecidas las bases para el ingreso de Italia en la Comunidad Económica Europea (1957).

Además de los éxitos logrados en política exterior, De Gasperi obtuvo también en un primer momento resultados satisfactorios en política económica y social. Al asumir la tarea de gobierno en diciembre de 1945, Italia se enfrentaba a grandes problemas económicos. Las proporciones de los efectos de la guerra se mantenían ciertamente dentro de ciertos límites, pero la industria sólo producía aproximadamente a una cuarta parte de su capacidad de antes de la guerra. La producción agraria ascendía a dos tercios del nivel de la preguerra y si Italia pudo sustraerse a una seria crisis de abastecimiento ello sólo se debió a las grandes cantidades de cereal suministrado por los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Italia sufriría una devaluación acelerada de su moneda, así como un fuerte desempleo (1947: más de 2 millones=10%) derivado de la reestructuración de la producción de la guerra para adaptarla a la de tiempos de paz y del gran crecimiento demográfico. El problema del desempleo, que en años anteriores había quedado mitigado en cierta medida por la elevada tasa de emigración, no pudo ser resuelto por el gobierno De Gasperi; la tasa de paro seguiría siendo en la década de 1950 de un 10% aproximadamente. Lo que sí logró en cambio el gobierno fue contener rápidamente la devaluación. El ministro de Hacienda, Luigi Einaudi, arquitecto de la política financiera de De Gasperi, se sirvió para ello de los «medios clásicos de la política deflacionaria dineraria y presupuestaria». Para proteger al pequeño ahorrador, renunció a la reforma monetaria, confiando en su lugar en un recorte drástico de los gastos estatales y en los créditos bancarios para la industria y el comercio. Cierto es que con ello el número de desempleados siguió aumentando a corto plazo, pero en definitiva se pudo contener eficazmente la inflación.

La «cura de caballo liberal» [138] dio sus frutos. En 1948, la producción industrial recuperaba ya el nivel de 1938 (=100); en 1951 alcanzó un índice de 136 y en 1953 incluso de 164. La producción agrícola iba ciertamente un tanto a la zaga, pero en 1951 también se alcanzaría en este sector el nivel de 1938. A este desarrollo progresivo contribuirían, además de la estabilidad de precios, las ayudas económicas de la UNRRA y del Plan Marshall (hasta 1952, cerca de 3 000 millones de dólares), empleados por Italia para la renovación de las instalaciones industriales y para la adquisición de materias primas. La productividad laboral también se pudo incrementar considerablemente, debido sobre todo a que la Italia democrática había heredado de la época del fascismo un gran número de empresas industriales y de bancos nacionalizados, así como algunas organizaciones es-

tatales para el fomento de la economía, que permitieron al gobierno dirigir eficazmente la economía. Así, el Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), fundado en 1933, desempeñaría por ejemplo un papel muy importante en la reconversión de la producción de guerra en producción de paz. El aumento de la capacidad productiva de la industria se debería también, y no en último término, al rápido descenso de la influencia de los sindicatos en las empresas tras la división del sindicato unitario en el año 1948. Ocupados principalmente en cuestiones de «alta política», los representantes de los trabajadores dejarían progresivamente la configuración de las condiciones laborales y del ritmo de trabajo, por ejemplo, en manos de los empresarios. Al igual que la República Federal de Alemania en la década de 1950, en Italia se produjo un «milagro económico». La tasa de crecimiento anual, entre 1949 y 1963, ascendió a un promedio del 6%, cuota alcanzada también por Japón y Alemania occidental, pero no por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. El mayor salto hacia delante lo daría el sector industrial: entre 1949 y 1963, la producción experimentó un aumento anual del 8%. La industria más beneficiada sería la petroquímica que, debido a la existencia de importantes yacimientos de gas natural en la llanura del Po, se habría de convertir en el sector económico con las tasas de crecimiento más elevadas. Ello no significa que Italia se hubiese convertido en una nación industrial; en la década de 1950, más del 40% de la población laboral seguía dedicada a la agricultura (en Alemania occidental sólo el 15%) y tan sólo cerca del 32% a la industria [139].

El vertiginoso crecimiento económico iniciado a finales de la década de 1940 permitió al gobierno De Gasperi afrontar el problema cardinal de la política estructural italiana: el desnivel económico y cultural existente entre el Norte y el Sur (véase el cuadro).

Síntomas del subdesarrollo de Italia meridional [140]:

	Italia meridional	Italia septentrional y central
Renta *per capita* (Italia=100) ...	58,2	126,1
Consumo de electricidad *per capita* (en Kg)	153,1	683,1
Consumo de carne *per capita* (en kilogramos)	7,6	17,1

	Italia meridional	Italia septentrional y central
Personas por vivienda	1,86	1,21
Ingresos medios por hectárea (en miles de liras)	230	290
Capital social de las sociedades anónimas industriales (en millones de liras)	242,5	30 636,5
Analfabetos por cada 100 habitantes en un período de seis años	24,3	5,7
Producto nacional neto (según precios de mercado)	1 958	6 877
Número de aparatos de radio ...	906 515	3 321 094
Plazas en medio de transporte motorizados (por cada 1 000 habitantes)	29	103

En el Sur, donde vivían cerca de 18 millones de italianos (=37% de la población total), cientos de miles de personas vivían en condiciones absolutamente primitivas, muchas estaban subalimentadas y faltaban las instalaciones higiénicas más elementales. El Sur de Italia apenas se vio afectado por la industrialización, pero incluso la agricultura era allí menos productiva que en el Norte. La economía latifundista semifeudal padecía la falta de una red completa de comunicaciones, así como un sistema comercial y crediticio retrasado. En 1947, el desempleo agrario ascendía hasta un 50%, en tanto que en las provincias del Norte se situaba tan sólo entre el 1 y el 9%. La mayoría de los trabajadores se encontraba ante la alternativa de trabajar a cambio de salarios miserables, y con frecuencia sólo de forma temporal, o emigrar al extranjero.

Una vez que las medidas tomadas en los primeros años de posguerra para mejorar la situación del Sur demostrasen ser insuficientes, el gobierno acordó en agosto de 1950 un plan decenal para la transformación y la modernización básicas de toda la estructura económica, para lo cual se creó la Cassa per il Mezzogiorno (Caja del Sur), a cuya disposición se pusieron considerables sumas de los presupuestos generales del Estado y de instituciones financieras extranjeras. Al mismo tiempo se obligó a las empresas de propiedad total o parcialmente estatal a invertir en el Sur. A los propietarios privados de capital se les con-

cedieron importantes ventajas fiscales y otras prerrogativas en el caso de que invirtiesen su dinero en el Sur. Pero no sólo se tomaron estas medidas; tras los graves disturbios que tuvieron lugar entre la población rural de Calabria en 1949-50, el gobierno se vio obligado, a pesar de la gran oposición existente dentro de sus propias filas, a llevar a cabo una reforma agraria, a consecuencia de la cual se expropiaron cerca de 700 000 hectáreas de tierra que fueron repartidas entre más de 100 000 familias, tres cuartas partes de las cuales eran del Sur. Con ello el gobierno no pretendía únicamente aplacar a los jornaleros y a los pequeños campesinos rebeldes, sino que al mismo tiempo perseguía el objetivo de crear una clase de pequeños propietarios agrícolas inmune a la propaganda de los comunistas[141].

Las expectativas del gobierno de reducir el desnivel existente entre el Norte industrializado y el Sur subdesarrollado mediante la creación de la Caja del Sur y la reforma agraria sólo se cumplieron parcialmente. Los proyectos financiados por la Caja del Sur dieron sin duda lugar a una mejora estructural patente en algunos ámbitos de la economía, contribuyendo esencialmente a la reducción del desempleo, pero muchas iniciativas resultaron vanas. Y así, importantes sumas afluyeron, por ejemplo, a empresas industriales que poco después tuvieron que ser abandonadas por falta de la mano de obra necesaria, ya que cientos de miles de personas emigraron en la década de 1950 al Norte, en donde, bajo el signo del incipiente milagro económico, se creaban constantemente nuevos puestos de trabajo. Debido a la emigración interior, la mayor desde la fundación del Estado nacional italiano en el siglo XIX, el Sur perdió una gran parte de su mano de obra productiva. Por otro lado, la reforma agraria sólo sería una gota en el mar, ya que únicamente sería disfrutada por una escasa minoría de los casi seis millones de trabajadores del campo.

A pesar de los indiscutibles éxitos económicos logrados y de los esfuerzos por resolver los urgentes problemas estructurales, el gobierno democratacristiano de De Gasperi quedaría cada vez más expuesto a comienzos de la década de 1950 al fuego cruzado de la crítica. Se reprochaba a la DC su división en innumerables alas, su desgaste en intrigas permanentes y su concesión al clero de una influencia cada vez mayor. Así, el historiador Gaetano Salvemini se burlaba por ejemplo de que Italia fuese una «República monárquica de sacerdotes»[142]. En las filas de la derecha conservadora y de los monárquicos, que todavía no

habían logrado superar la derrota sufrida en el referéndum de 1946, se oían quejas acerca de la amplia reforma del suelo y de la dependencia de Estados Unidos. Los partidos de izquierda no habían perdonado a De Gasperi su interrupción de la depuración política iniciada con Parri, por lo que el fascismo seguía vivo. Egidio Reale ya había escrito en 1945: «Por todas partes se pueden encontrar todavía huellas: en la Administración, en los ministerios, en todos los organismos oficiales, en el ejército..., en las Universidades...» [143]. Pero lo que más reprochaba la izquierda al gobierno era que hubiese dejado la política económica casi por completo en manos de los partidarios del liberalismo clásico. Los representantes de la escuela pura del *laissez-faire* llevaron a cabo después de 1945 una política económica que sin duda produciría un auge imponente, pero que al mismo tiempo otorgaba a las élites económicas de los tiempos de la vieja Italia considerables privilegios. Por otra parte, en torno al gran partido del gobierno se habían levantado con frecuencia rumores de corrupción y de nepotismo.

El malestar existente dentro de la población no pasó inadvertido a De Gasperi, el cual era consciente de que la coalición dirigida por él e internamente desavenida, difícilmente podría repetir su brillante victoria electoral de 1948. A fin de asegurar la supervivencia de su gobierno más allá de las próximas elecciones, insistiría por ello en la creación de una bonificación para la mayoría que, con un 50,1% de los votos, proporcionase a los partidos de la coalición los dos tercios de los escaños en el Parlamento. En la discusión pública en torno a la «legge truffa» (ley trampa), que hacía pensar fatalmente en la ley electoral fascista de 1923, De Gasperi caería cada vez más en el descrédito, derrumbándose finalmente tras los comicios del 8 de junio de 1953. La DC, a pesar de la sensible pérdida de más del ocho por ciento de los votos, seguiría siendo con todo el partido más fuerte (40%), pero, dado que sus compañeros de coalición también habían perdido votos, el antiguo gobierno ya no dispondría sino de una exigua mayoría, no pudiendo tampoco ponerse de acuerdo acerca de la elección de De Gasperi como presidente de gobierno. Los comunistas obtuvieron ligeras ganancias con el 22,6% de los votos, en tanto que los socialistas sólo conseguirían el 12,7% [144].

Don Luigi Sturzo, la «conciencia» de la Italia burguesa y conservadora, acertaría con su profecía al escribir después de las elecciones de 1953 lo siguiente: «Las previsiones de la meteorología política para después de las elecciones dirán: un gobierno débil y un parlamento borrascoso» [145]. Hasta el final de los cinco

años de legislatura, las crisis de gobierno se sucedieron ininterrumpidamente. Se formaron seis gobiernos —todos bajo la dirección de la DC—, ninguno de los cuales duraría más de veinte meses. El sucesor de De Gasperi, Giuseppe Pella, tendría que dimitir en enero de 1954. A continuación, Amintore Fanfani sólo permanecería catorce días en el cargo. La búsqueda de mayorías estables era un constante movimiento circular: siempre se volvía como jefes de gobierno a los mismos hombres, los cuales, a su vez, se servían también de las mismas recetas para formar gobierno, aspirando bien a la formación de un gobierno minoritario de la DT, bien a una nueva edición de la coalición cuatripartita según el modelo de De Gasperi. Pero de esta forma no era posible salir del callejón sin salida en el cual se encontraban los partidos italianos a consecuencia de la división existente entre un campo conservador-católico y otro comunista-socialista. Los gobiernos minoritarios de la DC dependían del apoyo parlamentario de los monárquicos y los neofascistas, ayuda que sin embargo ponía duramente a prueba el equilibrio interno de la DC, ya que el ala izquierda, cada vez más influyente, no podía mostrarse fácilmente conforme con aliados que según la Constitución estaban prohibidos. Las reediciones de la coalición cuatripartita tampoco contaban con menos enemigos dentro de la DC, pero los socialdemócratas y los republicanos también se resistían a resucitar una alianza gubernamental que en 1953 había sufrido un desaire tan evidente por parte de los electores. Por otra parte, a lo largo de la legislatura, los liberales cada vez se habían ido desplazando más hacia la derecha y habían caído casi por completo bajo la influencia de las asociaciones de empresarios, lo cual haría finalmente imposible la colaboración con los socialdemócratas y con los democratacristianos de orientación reformista. De esta manera, todas las tentativas de política reformista emprendidas bajo De Gasperi acabarían por frustrarse, e incluso iniciativas tan prometedoras como el plan decenal Vanoni —llamada así por el democratacristiano experto en economía del mismo nombre—, que había de crear cuatro millones de puestos de trabajo y contener por fin un desempleo casi crónico del 10%, terminarían convirtiéndose en víctimas de la inestabilidad política.

Mientras los gobiernos del segundo período legislativo cada vez se enredaban más en sus propias contradicciones, el panorama de los partidos se despejó poco a poco, multiplicándose los indicios de una superación del estancamiento político y de la división de Italia en dos bloques políticos contrarios. Fueron «años difíciles, pero en modo alguno estériles», tal como sub-

rayaría el democratacristiano Fanfani considerando estas profundas transformaciones [146].En las filas de la Democracia Cristiana y de los socialistas principalmente, a mediados de la década de 1950 se inició la búsqueda de nuevos aliados, convirtiéndose muy pronto en algo evidente para políticos de amplias miras como Nenni, Fanfani, Saragat y Gronchi que la nueva situación sólo podría salir adelante con la colaboración de democratacristianos y socialistas (PSI), con una *aperta a sinistra* (apertura a la izquierda). Dentro de la DC pedirían ahora la palabra toda una serie de políticos influyentes y comprometidos por igual con la doctrina social católica y con el espíritu de la Resistencia, conscientes de que la actitud meramente anticomunista no era la respuesta adecuada a los múltiples problemas de Italia y de que era urgentemente necesario salvar el abismo existente entre el Estado y la clase trabajadora, que desde 1948 había caído más y más en el área de influencia comunista. «Integración de las masas en el Estado» sería la divisa del ala izquierda de la DC, defensora de reformas sociales amplias (entre otras, la ampliación de la Seguridad Social, la descentralización de la Administración y la reforma de la legislación sobre créditos). En el Congreso de Nápoles (1954), las exigencias de la izquierda se convirtieron en el programa oficial del partido y su decidido portavoz, Amintore Fanfani, fue elegido secretario general. «Un nuevo partido ha sido plantado sobre el tronco de la vieja Democracia Cristiana», comentaría el 1 de julio de 1954 el *Frankfurter Allgemeine Zeitung* refiriéndose a los acontecimientos de Nápoles. Con ello, la DC renunciaba parcialmente a su antigua aspiración a ser un partido de centro, anunciando su voluntad «de sepultar a la vieja Italia y crear una nueva». Fanfani, a quien sus amigos daban el nombre de «Supercortomaggiore» (el Gran Superpequeño), lograría —si bien tras duras polémicas internas— arrastrar a su partido en esta nueva dirección. Entre sus oponentes más contumaces se contaba un grupo fuerte, apoyado por el Vaticano y por la gran industria, en torno a Giuseppe Pella y Giulio Andreotti, el cual se oponía a la «apertura a la izquierda» con el argumento de que la colaboración con los socialistas desembocaría «en el peor de los casos en el comunismo, y en el mejor de los casos en un neutralismo precario» [147].

El partido socialista ya se había visto obligado algo antes que la DC a considerar nuevas posibilidades de actuación política, ya que la política frentepopulista, según se había puesto de manifiesto en las elecciones de 1948 y 1953, sólo conducía a un callejón sin salida. El único camino era el de la renuncia a una alianza estrecha con los comunistas y la defensa de un rumbo

político propio («alternativa socialista»). Ahora bien, el ala autonomista de Pietro Nenni era de momento demasiado débil todavía para ser capaz de llevar a cabo un cambio de rumbo. La gran mayoría del partido aún seguía considerando a principios de la década de 1950 la «unidad proletaria» como un bien precioso de la Resistencia y deseaba mantener la alianza con los comunistas.

A pesar de la fuerte oposición contra la *aperta,* sus defensores pudieron apuntarse un primer gran éxito en 1955: Giovanni Gronchi —exponente del ala izquierda de la DC— fue elegido sucesor de Luigi Einaudi en la jefatura del Estado con los votos de los democratacristianos, los socialistas e incluso los comunistas. Dado que Gronchi se había pronunciado con más fuerza que ningún otro miembro de su partido por la unión de católicos y socialistas, era lógico que en la elección del «presidente de la izquierda» se viese una especie de indicio de coalición de la DC y los socialistas de Nenni. Pero los obstáculos eran aún demasiado grandes. Nenni necesitaría tiempo para acostumbrar a sus «jacobinos» al nuevo rumbo, viéndose obligado a explicar una y otra vez para aplacarlos que no tenía la intención de renunciar a la base de acción común y a la vinculación ideológica del PSI con los comunistas. La izquierda de la DC le reprocharía, a su vez, estas piruetas tácticas, ya que esperaban de Nenni la palabra aclaratoria con la que éste habría de anunciar la ruptura con Togliatti.

El cambio terminaría por producirse debido a acontecimientos en el ámbito de la política exterior. El deshielo de las relaciones Este-Oeste, la revelación por parte de Jruschov, en el XX Congreso del PCUS, de las prácticas de terror de Stalin y, sobre todo, la intervención soviética en Hungría en el otoño de 1956, fueron utilizados por Nenni para imponer en su partido la idea del socialismo democrático y del diálogo con la DC. En el Congreso de Venecia (febrero de 1957), la gran mayoría se pronunció por una renuncia definitiva a la política frentepopulista y a la comunidad de acción y de consulta con los comunistas [148]. Al mismo tiempo, los socialistas se declararon partidarios sin reservas de la democracia parlamentaria, asumiendo cautelosamente la postura del gobierno en política exterior. «El gran cambio y la transformación interna del socialismo italiano se han consumado»: con estas palabras celebrarían la mayoría de los delegados el resultado del congreso.

Después de Venecia, los grandes obstáculos ideológicos que se interponían hasta entonces en el camino de la colaboración entre el PSI y la DC quedaron eliminados. Pero en ambos partidos se-

guían existiendo fuertes grupos poco dispuestos a seguir también el nuevo camino: dentro del Partido Socialista, los «*carristi*» de Sandro Pertini, interesados en seguir cooperando con los comunistas y, dentro de la DC, el ala derecha y los llamados «notables», que intentaban mantener vivo el «centrismo». Pero la evolución se produjo inexorablemente en dirección a la «apertura a la izquierda», sobre todo después de que en el otoño de 1958 el cardenal Roncalli, partidario de la reforma, fuese elegido Papa (Juan XXIII). Con ello, el ala derecha de la DC quedó privada de su apoyo más importante, el Vaticano. No obstante, aún habrían de pasar cinco años hasta que pudiese formarse el primer gobierno de la *aperta a sinistra* con democratacristianos, socialdemócratas, republicanos y socialistas, presidido por Aldo Moro y con Saragat como ministro de Asuntos Exteriores. «Ha nacido con esfuerzos; con esfuerzos habrá de trabajar la coalición. Pero, para lograr el objetivo de esta alianza de hacer habitable el Estado, como estado suyo, para todos los italianos, merece la pena tan dura prueba», se podía leer en aquellos momentos en un periódico alemán [149].

VIII. LA PENINSULA IBERICA

España

De los hombres que estaban a la cabeza de regímenes de derecha en Europa al acabar la segunda guerra mundial sólo quedaba, junto al dictador portugués Salazar, el general Francisco Franco Bahamonde en España [150]. El Caudillo, cuya victoria en la guerra civil en 1939 se debió en gran parte a la ayuda armamentística de Alemania e Italia, había apoyado a las potencias del Eje en la primera mitad de la guerra en la medida de sus fuerzas y celebrado con entusiasmo sus victorias. No obstante, incluso en el momento culminante de los éxitos militares alemanes, había evitado hábilmente verse arrastrado totalmente al enfrentamiento militar por sus correligionarios Hitler y Mussolini. Hacia el fin de la guerra, Franco se había ido distanciando cada vez más de sus antiguos «camaradas del Eje», preocupado por el futuro de su régimen, y se había acercado progresivamente a los aliados. Estos intentos de acercamiento habían sido reforzados con una retórica liberal que parecía indicar su buena disposición a una renovación democrática de España y con algunos cambios, más bien de fachada, en su gabinete.

Franco no consiguió sin embargo impresionar con ello a las grandes potencias. La presión sobre su dictadura se hizo más fuerte y, por primera vez desde que tomase el poder en 1939, su régimen corrió un serio peligro. Moscú y París exigieron una intervención militar. Miles de españoles exiliados, tras la caída de Mussolini y el fin del dominio nazi en Alemania, ardían en deseos de liberar a España del yugo del fascismo. Y en todas las capitales del mundo era unánime la condena del régimen autoritario. España se había convertido en un «cuerpo extraño» (Wolfgang Wagner) en medio de las democracias antiguas o nuevas. Ello se puso de manifiesto en la negativa de las Naciones Unidas a aceptar la España de Franco como país miembro, así como en la declaración de los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, el 4 de marzo de 1946, en la que se decía que el pueblo español «mientras el general Franco ejerza el control sobre España, no podrá esperar una vinculación perfecta y cordial» con las potencias occidentales. No obstante, la puerta no había quedado completamente cerrada, ya que las potencias occidentales dieron a entender claramente que un gobierno de transición sin Franco, que se comprometiese a realizar una paulatina democratización de España, «obtendría el apoyo de todos los pueblos amantes de la libertad» [151]. Pero la formación de un gobierno de transición era de momento impensable, y así el aislamiento de España alcanzaría su punto culminante cuando el 12 de diciembre de 1946 las Naciones Unidas aconsejaron a sus Estados miembros retirar a sus embajadores y enviados de Madrid, recomendación que sería seguida por la mayoría de los países.

La «excomunión» [152] no duraría sin embargo mucho tiempo. Con el agudizamiento de las tensiones entre el Este y el Oeste, las potencias occidentales empezaron a interesarse por España como posible aliado militar. Los antiguos reparos al régimen ilegítimo de Franco pronto quedarían olvidados. Churchill, que ya en 1945 no había apoyado sino de mala gana el rumbo antiespañol tomado por la ONU, en 1948 haría la siguiente pregunta en la Cámara de los Comunes: «¿Por qué se ha de tratar a España como a un apestado?».

La reconciliación entre las potencias occidentales y España aún se habría hecho esperar de no haber sido por la guerra de Corea de 1950, debido a la cual, en un breve espacio de tiempo, el país volvería a ser aceptado en los salones internacionales. A finales de 1950, la ONU retiró su declaración de boicot contra el régimen de Franco. El 26 de septiembre de 1953, los Estados Unidos y España firmaron el Pacto de Madrid, por el cual

se permitía a los Estados Unidos la instalación de cuatro bases militares en suelo español. Como contrapartida, los españoles obtuvieron generosas ayudas militares y de armamento americanas. España, que en 1947 había sido excluida del Plan Marshall, también recibiría ahora su propio programa de ayuda. Pero 1953 no sería solamente el año más importante en política exterior para la dictadura de Franco por causa del tratado hispano-norteamericano; en aquel mismo año, el régimen podría apuntarse aún otro éxito con la firma de un Concordato con el Vaticano por el cual Franco reafirmaba su voluntad de fundamentar su dominio sobre los cimientos de la fe católica. La religión católica fue declarada así la religión oficial y la Iglesia, que durante la guerra civil se había puesto de parte de Franco, obtendría con ello mayores privilegios que de ningún otro gobierno del mundo. En 1955, el aislamiento en política exterior estaba superado por completo y España fue aceptada por la ONU, normalizándose también, como secuela del tratado hispanonorteamericano, las relaciones entre Madrid y los países de Europa occidental que después de la segunda guerra mundial con tanta frecuencia habían censurado al Estado policial español[153].

La economía española, que había tenido que sufrir el aislamiento internacional durante la segunda guerra mundial y los primeros años de posguerra, en un principio apenas sacó provecho de su integración en Occidente. Franco, que no se interesaba por cuestiones económicas, había confiado en que con el modelo español —una combinación de capitalismo de Estado y dirigismo económico— podría lograr con sus propias fuerzas la urgente transformación de España, que era un Estado agrario, en uno industrial. El resultado fue catastrófico; cierto es que la política autárquica y la concentración de todo el poder económico en el Estado falangista favorecerían a los industriales y terratenientes fieles a Franco, pero para la economía española en su conjunto éste sería un camino equivocado. A comienzos de la década de 1950, las arcas del Estado estaban vacías, la política financiera, inflacionista, había subido vertiginosamente los precios, en tanto que los salarios seguían siendo los mismos. En 1953, más de un tercio de los españoles capacitados laboralmente estaban desempleados. La producción agraria mostraría a partir de 1939 una tendencia a la baja. No se había abordado ninguno de los problemas más perentorios de España desde la toma del poder por Franco, que ni había tratado de equilibrar el enorme desnivel entre el norte industrial y el sur agrícola, ni tampoco había abordado la reforma del suelo. Los terratenientes del sur y del sudoeste, como por ejemplo los barones del jerez,

vivían como lo habían hecho durante siglos, en la mayor opulencia, en tanto que los trabajadores del campo apenas disponían de lo más necesario. Su nivel de vida descendió, entre 1939 y 1953, en un 10 y hasta un 30 por ciento.

La economía española no se recuperó a pesar de la generosa ayuda económica americana (entre 1953 y 1959, más de 1 000 millones de dólares). Una gran parte del dinero se gastó en proyectos puramente de prestigio, fue tragado por el ingente aparato militar y policial, o bien se filtró en la «corrupta economía como el agua a través de un cesto»[154]. Sobre todo, el Instituto Nacional de Industria (INI), *holding* gigante creado en 1941 para el fomento del desarrollo industrial y de las aspiraciones económicas autárquicas, se deslizó cada vez más hacia la bancarrota. El Instituto de Indusria realizó también con éxito proyectos de interés público, como la modernización de la agricultura, la construcción de instalaciones de riego artificial y la reforestación de amplias superficies baldías, pero a pesar de todo no se alcanzaba a ver un cambio fundamental para mejor. A mediados de los años 50, España se encontraba en una crisis más profunda que nunca. El *New York Times* describía por ejemplo la sombría situación en febrero de 1957 de la siguiente manera: «De acuerdo con las últimas cifras disponibles, el coste de vida en España aumentó, solamente en la segunda mitad de 1956, en más del ocho por ciento... En los mercados internacionales de divisas, la peseta ha caído en poco más de tres meses de 47,5 a 54,3 puntos frente al dólar...» Por otra parte, en las tres Bolsas del país se había iniciado una carrera general para vender acciones cuyo valor caía vertiginosamente. Al mismo tiempo, la circulación monetaria había aumentado en cerca del 20% en el espacio de un año, las reservas de divisas estaban completamente agotadas y las perspectivas en cuanto a la próxima cosecha eran muy malas[155].

Ante tan grave crisis, era urgente una corrección del rumbo de la economía. Franco dudó durante mucho tiempo entre continuar en la vieja línea de la política sindicalista y de aislamiento de otros países, como sus compañeros de la Falange exigían, o, por el contrario, seguir un camino liberal. Finalmente cambió a algunos ministros procedentes de la Falange y del ejército que se esforzaban en vano por consolidar la situación. Con los hombres y los métodos de capitalismo de Estado anteriores —al menos esto sí fue visto claramente por Franco en los años de la crisis— no se lograría ninguna mejora, por lo cual colocó en los ministerios clave algunos expertos en economía formados en el extranjero y pertenecientes a la orden laica católica del Opus

Dei. Estos hombres llevaron a cabo una política económica moderna y también, entre otras cosas, una reforma monetaria.

En tanto que el gobierno español establecía así las bases para una vuelta al orden económico capitalista, ante la inaudita subida de los precios los disturbios se generalizaron en todo el país. En las universidades de Madrid y Barcelona se produjeron graves enfrentamientos entre la guardia civil y los estudiantes. En Asturias, Cataluña y País Vasco, los trabajadores se declararon en huelga. Por otra parte, también se formaron numerosos grupos liberales de oposición e incluso dentro de la Iglesia, del ejército y de la Falange, por primera vez se empezaría a dudar abiertamente del rumbo tomado por España desde el fin de la guerra civil. El régimen de Franco tendría ahora, por primera vez, que dar realmente marcha atrás. Promulgó una ley concediendo una forma rudimentaria de autonomía a los convenios colectivos, con lo cual el régimen renunciaba a uno de sus más importantes principios fundamentales: la configuración de las relaciones entre empresarios y trabajadores por el Estado[156]. Estas medidas reformistas facilitaron a los países occidentales poner nuevamente a disposición de España créditos de cerca de 400 millones de dólares, que sin embargo iban acompañados de rigurosas exigencias. Así, el gobierno español tuvo que comprometerse a renunciar por completo a la política autárquica mantenida hasta entonces, a concertar su política económica con la de los países occidentales y a realizar toda una serie de reformas económicas. Al mismo tiempo, España ingresó en la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo[157]. La ayuda occidental condujo en efecto a un saneamiento notable de la economía española, y en la década de 1960 España experimentó un modesto milagro económico.

Los «años del hambre» habían pasado, pero España seguía estando bajo el dominio de Franco quien, apoyado en el ejército, la Falange y la Iglesia católica, determinaba en solitario la vida política. El Caudillo apenas había respondido a las exigencias de las potencias occidentales y de las Naciones Unidas de democratización y liberalización; simplemente había tratado de dar a su dictadura, surgida de la guerra civil, el «ropaje legal» más elemental a fin de no quedarse completamente aislado[158]. El 17 de julio de 1945 había promulgado el Fuero de los Españoles, una especie de Ley Fundamental de los derechos de los ciudadanos. Poco más tarde se crearían algunas instituciones aparentemente democráticas, como el Consejo de Regencia y el

Consejo del Reino, y el 26 de julio de 1947, en virtud de la ley de Sucesión a la jefatura del Estado, España era declarada monarquía, aunque sin monarca hasta la muerte de Franco, ya que el Caudillo seguiría siendo jefe de Estado de forma vitalicia.

La reinstauración de la monarquía, derrocada en 1931, no era sólo un gesto dirigido a las potencias occidentales, sino sobre todo un intento de Franco de asegurar tras su muerte la continuidad del orden político por él creado, aunque en ningún momento se debatió seriamente la posible vuelta a la democracia parlamentaria debido a su postura fundamentalmente negativa. Tampoco se cuestionó la prosecución del sistema autocrático, ya que ello hubiese requerido un sucesor con el mismo prestigio personal que el Caudillo. Así pues, no quedaba sino el camino tomado por Franco con la publicación de la Ley de Sucesión, consolidada por lo demás mediante un referéndum popular. Por ello, ya desde muy pronto, Franco se preocuparía de buscar el sucesor apropiado para el trono, encontrándolo en 1948 en la persona del príncipe Juan Carlos, hijo del jefe de la Casa de Borbón, que vivía exiliado en Portugal y era el heredero oficial de la Corona española, Juan de Borbón[159].

Pero España sólo sería una monarquía nominalmente. El nombramiento de Juan Carlos como sucesor de Franco y futuro rey de España no tendría lugar hasta 1969. En la década de 1950, Franco mantendría firmemente todos los hilos en sus manos. Podía nombrar y destituir a sus ministros a voluntad y sus decisiones tenían carácter de ley; determinaba la composición de las Cortes seudoparlamentarias y podía aceptar o rechazar sus proposiciones de ley. No estaba autorizado ningún partido que no fuese el suyo propio, la Falange, y toda actividad política al margen de ésta y de las instituciones legales estaba duramente penalizada. La huelga era considerada una perturbación del orden público y empresarios y trabajadores estarían juntos en los sindicatos controlados por la Falange hasta finales de la década de 1950. No existía libertad de opinión y de reunión. La prensa estaba sometida a una estricta censura y sin la autorización del ministerio del Interior no se podía publicar ningún libro. Las escuelas y las universidades se hallaban sometidas igualmente a presiones ideológicas[160]. Con especial dureza se reprimirían los movimientos regionales catalán y vasco, que a comienzos de la década de 1930 habían podido arrancar a la República ciertos derechos de autogestión y que bajo Franco serían despojados de toda posible autonomía lingüística y cultural[161].

Ahora bien, después de acabar la guerra mundial España había dejado de ser un Estado totalitario. Cierto es que en 1946 existían

«aún 137 campos de trabajo para prisioneros de guerra republicanos, tres campos de concentración y cerca de 30 000 presos políticos»[162], pero Franco pudo permitirse más tarde aflojar un tanto la garra de hierro. Muchos presos fueron puestos en libertad y las ejecuciones se hicieron menos frecuentes. El Caudillo siguió sin embargo procediendo con dureza contra sus adversarios políticos o formaciones contrarias al régimen que trataban de llamar la atención sobre sus abusos. En junio de 1960, 339 sacerdotes vascos escribieron una carta abierta a sus obispos en la que, entre otras cosas, se decía: «En los veinticuatro años de existencia del presente régimen se detiene a personas durante meses y años para, pasado algún tiempo, que depende por completo de la arbitrariedad de un gobernador, un director de seguridad o un ministro, ser llevados ante un tribunal especial que formulará la gravísima acusación de 'rebelión contra el Estado'. Y ello sólo porque aquellas personas han tenido el valor de no considerar a sus gobernantes intachables e infalibles.» A finales de la década de 1950, España seguía siendo un Estado policial «cuyos métodos para la represión de la oposición política eran una burla a los principios de un Estado de derecho»[163].

Portugal

Al igual que la dictadura de Franco, el «Estado corporativo autoritario» portugués instaurado por Antonio de Oliveira Salazar también habría de superar después de acabar la segunda guerra mundial los mayores escollos de su existencia[164]. Portugal estaba aislado —si bien no de una forma tan total como la vecina España— y los adversarios políticos de Salazar dentro del país confiaban en el apoyo de los aliados para derrocar muy pronto al régimen autoritario. Salazar, que durante la segunda guerra mundial había tomado felizmente el rumbo de la neutralidad, consiguió sin embargo dominar con sorprendente rapidez la difícil situación. En 1949, el aislamiento exterior ya había dejado de existir: el menor de los Estados ibéricos pertenecía ya al círculo de los Estados fundadores del Pacto Atlántico[165]. Salazar debió tal éxito a las relaciones tradicionalmente buenas entre Portugal y Gran Bretaña y, sobre todo, al agravamiento del conflicto Este-Oeste, a consecuencia del cual aumentó el interés de las grandes potencias por Portugal, que desde siempre había mantenido una postura anticomunista, y principalmente por las Azores, de gran importancia estratégica. El acuerdo con las potencias occidentales quedaría afianzado en 1951 con el

tratado militar lusoamericano. El ingreso de Portugal en las Naciones Unidas habría de demorarse, sin embargo, hasta 1955 a causa del veto soviético [166].

Salazar, que sólo ostentaba el cargo de jefe de Estado al haber cedido el más alto cargo del Estado a un presidente dependiente de él, no tardaría en dominar la situación también en el interior. Los adversarios internos de Salazar se encontraban en una posición muy débil por cuanto la población de Portugal aún tenía fresco el recuerdo de la inestable situación de la década de 1920, cuando el país se precipitaba de una crisis de Gobierno en otra, por lo que se mostraba muy escéptica ante los experimentos políticos. El «Estado Novo» de Salazar, dirigido contra el liberalismo, el comunismo y el parlamentarismo, había logrado lo que muchos deseaban: tranquilidad y estabilidad. Por otra parte, el antiguo catedrático de Derecho y Hacienda liberó al país de su crónica dependencia económica del extranjero mediante una estricta política presupuestaria, estableciendo así las bases para un ligero crecimiento económico.

Este rumbo halló el beneplácito del ejército portugués y de las familias más ricas del país, las cuales podían administrar en su provecho y sin ningún obstáculo la mayor parte de las sumas facilitadas por Salazar para el desarrollo del país. El mayor apoyo lo obtuvo el dictador de la Iglesia católica, que supo agradecerle muy bien la posibilidad brindada de recatolizar bajo su protección a un país anticlerical y completamente secularizado durante la República de inspiración masónica de 1910. Los grupos de la oposición fueron severamente perseguidos por la policía política (PIDE), apoyada en una red de confidentes e informadores extendida por todo el país. Las detenciones y la tortura nunca adquirirían sin embargo las proporciones de la vecina España [167].

La calma prescrita e impuesta sería en la década de 1950 el mayor problema de Portugal. El prepotente Salazar parecía aplastar literalmente a su país. Su política económica mercantilista se convertía cada vez más en un obstáculo para un desarrollo progresista de Portugal. El anacrónico sistema corporativo impedía la libre competencia, la economía impulsada por el Estado no sólo apenas se esforzaba por llevar a cabo una modernización y una racionalización, sino que trabajaba de una forma improductiva, pagando salarios miserables. Lo más evidente era el atraso agrícola de Portugal. La reforma agraria había quedado obsoleta desde hacía tiempo. Desde la segunda Edad Media apenas se había producido cambio alguno en la distribución de tierras: al norte del Tajo, diminutas parcelas cuya productividad

era insignificante; al sur, inmensos latifundios, mal explotados, con un ejército de jornaleros paupérrimos. La ayuda financiera del exterior —principalmente la procedente de Estados Unidos a través del Plan Marshall— fue rehusada por Salazar, que temía una excesiva dependencia de los Estados Unidos, así como las consecuencias de una rápida industrialización. En 1953 presentó su propio plan sexenal para el fomento de la economía, inspirado en una industrialización cautelosa. Se construyeron nuevas fábricas, se mejoró la infraestructura, el producto interior bruto aumentó anualmente un 5% y las exportaciones e importaciones se incrementaron considerablemente [168]. Pero globalmente Portugal se encontraba muy por detrás de los demás países europeos en cuanto a su desarrollo, perviviendo bajo Salazar un trozo de la vieja Europa desaparecida desde hacía tiempo. En amplias capas de la población, incluso dentro de las propias filas de los partidarios activos del régimen, fue creciendo el malestar ante el silencio sepulcral existente desde el punto de vista político y cultural y el aislamiento del extranjero, pues mientras Europa experimentaba una tremenda transformación social y cultural, el régimen portugués mantenía férreamente sus principios, incapaz de llevar a cabo ningún tipo de renovación.

Salazar no pareció tomarse en serio el creciente descontento existente en el país. Se sentía tan seguro de su actuación que incluso inició un intento de conceder algunas libertades al pueblo portugués. En 1958, con ocasión de la elección del nuevo presidente de la República, se presentó por vez primera un verdadero candidato contrario, el general Humberto da Silva Delgado, frente al candidato que fozaba el favor del Partido Unificado de Salazar, el almirante Américo Deus Tomás. Delgado, cuyo nombre apenas era conocido anteriormente, obtuvo a pesar de los numerosos obstáculos aparecidos durante la campaña electoral cerca de la cuarta parte de los votos emitidos. En algunas ciudades de la costa llegó incluso a alcanzar la mayoría. Los experimentos democráticos volvieron a ser rápidamente interrumpidos después de este voto de censura contra el régimen.

No obstante, las elecciones habían puesto claramente de manifiesto que, a finales de la década de 1950, Portugal se encontraba en situación alarmante. La inquietud existente en la metrópoli amenazaba también con extenderse a las colonias, que desde 1951 fueron consideradas «provincias de ultramar». Las corrientes nacionalistas y de oposición se intensificaron en todo el territorio del imperio portugués. Pero Portugal se resistiría tenazmente a este movimiento de descolonización. La política de Salazar era evidente: Portugal no podía renunciar al imperio colonial de

ultramar; era demasiado pobre como para poderse permitir la descolonización. Los disturbios que se produjeron en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau en 1961 fueron afrontados por Lisboa con una solución militar. Pero la guerra de Africa habría de prolongarse, convirtiéndose en una carga cada vez más pesada para las finanzas portuguesas. La solución de la cuestión colonial no tendría lugar hasta 1974, después de la revolución de la vida política del país [169].

IX. GRECIA Y EL MEDITERRANEO ORIENTAL

Cuando las tropas alemanas cruzaron el 6 de abril de 1941 la frontera greco-búlgara para apoderarse después de toda Grecia en una guerra relámpago que duraría sólo unas pocas semanas, el ataque se dirigió contra un Estado claramente abocado a una grave crisis política. El 4 de agosto de 1936, el general Metaxas, nombrado jefe de Gobierno pocos meses atrás por el rey Jorge II, había instaurado —protegido por el rey y aprovechando el estancamiento del sistema parlamentario provocado por el empate de las fuerzas republicanas y monárquicas— una dictadura que en principio había de servir fundamentalmente para asegurar la monarquía restaurada tras once años de república en noviembre de 1935, pero que pronto empezó sin embargo a seguir los ejemplos de la Italia fascista y de la Alemania nacionalsocialista, reprimiendo no sólo a los grupos republicanos del país, sino también todo tipo de tendencias socialistas o liberales, a la vez que trataba también de emanciparse de la Corte y de los conservadores monárquicos [170]. El 29 de enero de 1941 murió, sin embargo, el general Metaxas; la dictadura había perdido a su dictador y el futuro político del Estado griego era muy incierto.

No se trata de que existiese inseguridad acerca de la orientación internacional de Grecia. Durante la primera guerra mundial, la política exterior griega había dado lugar a grandes conflictos internos, pues en tanto que los militares, por motivos ideológicos y con la esperanza de adquirir territorios albaneses, búlgaros y turcos, habían exigido la entrada de Grecia en la guerra al lado de la Entente, el rey Constantino I, casado con una hermana del Káiser alemán y especulando con la victoria de las Potencias Centrales, se hallaba convencido de la necesidad de mantener una benevolente neutralidad frente a Alemania; apoyándose en el ejército, el rey había podido imponer durante algunos años su rumbo neutralista recurriendo cada vez más a prácticas políticas anticonstitucionales, hasta que los liberales, dirigidos por Eleutherios

Venizelos, le obligaron a abdicar en 1917 con ayuda de los aliados, integrando por completo a Grecia dentro de la Entente [171]. Un enfrentamiento igualmente grave surgiría después de que la tentativa de Grecia, espoleada en un principio por los aliados, de consolidarse en Anatolia acabase con una aplastante derrota en la guerra greco-turca de 1921-22; en la Paz de Lausana (24 de julio de 1923), Grecia tuvo incluso que aceptar un desplazamiento de la población que significó el fin de los asentamientos griegos en Asia Menor e impuso a la sociedad griega la dura tarea de integrar a no menos de 1,4 millones de expulsados (aproximadamente el 20% de la población total griega de aquel momento). En 1922, un grupo de oficiales republicanos liberales al mando del general Nikolaos Plastiras habían aprovechado la decepción provocada por la debacle de Asia Menor para instaurar una dictadura militar, que en nombre de la República y del liberalismo, tendrían en jaque al rey y a los monárquicos liberales y conservadores por la fuerza bruta —por ejemplo con la ejecución el 28 de noviembre de 1922 de penas de muerte seudolegales contra cinco miembros monárquicos del gabinete y contra el comandante en jefe del ejército griego en Esmirna— y que finalmente —volviendo sólo de forma paulatina a una situación constitucional— suprimirían de hecho la monarquía el 24 de marzo de 1924, con métodos sumamente dudosos [172].

Pero tras la superación del caos de la guerra y de la posguerra, la política exterior griega encontraría una línea aceptada por las formaciones políticas más importantes del país y con ello una continuidad. Los gobiernos griegos, tanto bajo la presidencia del liberal Venizelos (1928-1932) como bajo la del monárquico Panajotis Tsaldaris, del Partido Popular (1932-1935), habían obedecido siempre a la necesidad de cultivar una relación lo más estrecha posible con las potencias europeas occidentales, y en concreto con Gran Bretaña, y de consolidar la Sociedad de Naciones mediante la colaboración activa. Ambas actitudes eran el resutado del temor griego a las ambiciones de dos grandes potencias —Italia y la Unión Soviética— en la Europa sudoriental que, debido a su situación geográfica y a la debilidad militar de Grecia, sólo parecían poder ser contenidas con la protección de Gran Bretaña —que, con miras a salvaguardar sus propios intereses en el Oriente Próximo y Medio, no quería una mayor presencia italiana en el Mediterráneo oriental, ni por supuesto soviética— y tal vez dentro del marco de un sistema de seguridad colectiva; Grecia tendría también buenas experiencias con la Sociedad de Naciones en la medida en que, sin el apoyo político, económico y organizativo de Ginebra, no habría sido posible integrar con éxito

al 70 u 80% de los griegos expulsados de Asia Menor. La circunstancia de que Grecia se hubiese, pues, convertido en un Estado más interesado en el mantenimiento del *statu quo* que en el cambio fue también decisiva para las relaciones con los países vecinos. Si entre 1928 y 1932 Venizelos había iniciado la vía del entendimiento con Yugoslavia y Rumanía, así como del equilibrio con el tradicional enemigo turco, este rumbo fue seguido sin interrupciones por Tsaldaris, al cual se debió en gran medida la realización del Pacto de los Balcanes firmado el 4 de febrero de 1934 por Yugoslavia, Rumania, Grecia y Turquía, alianza creada tanto para la defensa del *statu quo* de la Europa sudoriental frente a las aspiraciones revisionistas de Bulgaria y Hungría como para el rechazo de las tendencias expansionistas de la URSS e Italia[173].

Bajo el general Metaxas —a cuyo régimen siempre fue ajeno el modelo alemán del antisemitismo, así como el expansionismo característico del nacionalsocialismo y del fascismo—, la política exterior griega también había mantenido la orientación esencialmente defensiva establecida por Venizelos y Tsaldaris. En un principio, incluso la continuidad sería mantenida por el dictador con su intento de reforzar el pacto de alianza balcánica con Yugoslavia, Rumania y Turquía el 2 de noviembre de 1934; el 31 de julio de 1938, con un pacto de no agresión entre la alianza balcánica y Bulgaria, también se iniciaría la reconciliación de Grecia con el último enemigo de los años de las guerras de los Balcanes y de la primera guerra mundial. Ahora bien, cuanto más claramente apuntase el imperialismo italiano tras la conquista de Abisinia hacia la Europa sudoriental, cuanto más se pusiera de relieve la tolerancia y tal vez incluso el apoyo de Alemania a las aspiraciones italianas y cuanto más reconocible se hiciera la escasa efectividad de la alianza balcánica ante tal situación, tanto más se jugaría Metaxas todo a la carta británica y a la preparación de su propio ejército. Metaxas había evitado cuidadosamente toda provocación por parte de Italia y Alemania, e incluso la exigencia de devolución del Dodecaneso, habitado por griegos y administrado por Italia desde 1912 y en manos de este país desde la Paz de Lausana, había sido traspapelada, pero después de que las tropas italianas ocupasen Albania en abril de 1939 Metaxas aceptó inmediatamente la garantía de las fronteras griegas ofrecida por lo británicos, iniciándose con ello el camino hacia una nueva alianza greco-británica. Las tropas de asalto italianas, que se habían concentrado en Albania, se pondrían efectivamente en marcha el 28 de octubre de 1940. Así, a lo largo de las semanas siguientes, mientras las tropas griegas brillantemente preparadas

y al mando del jefe del Estado Mayor de Metaxas Alexandros Papagos infligían una dura derrota a las divisiones italianas, haciéndoles retroceder a Albania, se haría realidad la alianza militar greco-británica con la aparición de las primeras unidades británicas —en su mayor parte de la *Air Force*— en Grecia [174].

Ninguna formación política importante del país querría ni podría plantearse el abandono de esta línea fundamental en política exterior, ni siquiera a la muerte de Metaxas. Al contrario, cuando en los primeros meses de 1941 se puso de manifiesto que la Alemania nacionalsocialista pensaba intervenir militarmente en los Balcanes a fin de impedir la permanencia británica en la Europa sudoriental con vistas a la inminente invasión de Rusia y a fin de ayudar a Mussolini a salir de un atolladero peligroso para su posición en Italia, Alexandros Korizis, nombrado por el rey Jorge II sucesor de Metaxas, aprobó también en marzo el envío a Grecia de fuerzas británicas de tierra. Cierto es que, ante el avance de unidades alemanas, fuertes y muy superiores cualitativamente por su moderno armamento, hacia Bulgaria, apenas nadie se hizo ilusiones en cuanto a que el ejército griego, con un refuerzo británico de cerca de 60 000 hombres, pudiese hacer frente al ataque alemán, pero los dos aliados consideraban su unión, demostrada en la lucha conjunta, como un cambio hacia el futuro, ya que si los griegos apostaban por la derrota final de las potencias del Eje a pesar de las campañas ganadas, convencidos de que los intereses griegos estarían mejor salvaguardados por la alianza con Gran Bretaña que por cualquier otra posible vinculación, el gobierno británico, partiendo de igual supuesto, contaba con que Gran Bretaña aún habría de necesitar de forma más urgente que en la época de entreguerras la amistad de Grecia tras la derrota de Italia y Alemania para la contención del avance soviético hacia los Balcanes y el Mediterráneo, claramente reconocible desde hacía algún tiempo.

De ahí que el éxito militar, de hecho inevitable, de la intervención alemana en la Europa sudoriental no pudiese tampoco afectar en absoluto a la alianza greco-británica. El rey y el gobierno siguieron a las tropas británicas evacuadas de Grecia, pasando por Creta, hasta Egipto, en donde formaron un ejército propio con unidades griegas menores que también habían huido. Tanto el rey, que residiría temporalmente en El Cairo y Londres, como el gobierno en el exilio permanecerían dentro del área de influencia británica y dependerían casi por completo del apoyo británico; las compañías griegas lucharían bajo el mando británico, aumentando también en consecuencia la influencia británica sobre los representantes del Estado y de la nación griega. La

alianza greco-británica se mantendría incluso en la propia Grecia, en donde ya en septiembre de 1941 habrían de surgir en los territorios ocupados por italianos y alemanes grupos de resistencia política y luego también militar que, fuera de las grandes ciudades, pronto habrían de tener bajo su control a una gran parte del país [175]. Los agentes británicos caídos en paracaídas entre los partisanos griegos y que ante todo habían de organizar los suministros y ejercer de asesores militares, pronto formarían una misión militar británica —y más tarde aliada— cuya función dentro de los grupos de resistencia, de orientación política muy diferente, finalmente no sería sólo la de una instancia de coordinación militar, sino también la de una instancia de cooperación política. Sin el apoyo técnico y la ayuda política de los británicos, tampoco se hubiese podido establecer el contacto y finalmente la cooperación entre el exilio y la Resistencia. Paradójicamente, la influencia británica directa sobre la política griega nunca fue mayor que durante los años de la ocupación germano-italiana de Grecia. Cuando en octubre de 1944 Winston Churchill negoció con Stalin en Moscú sobre la delimitación de las esferas de intereses de ambas partes en los Balcanes, logró incluso el reconocimiento soviético de este estado de cosas, acordándose así que Grecia sería durante la guerra y sobre todo después de ésta, territorio de influencia británica en un 90% [176].

A pesar de lo clara que estaba desde el punto de vista griego la orientación internacional del país, el futuro desarrollo de la política interior a la muerte de Metaxas parecía sin embargo algo incierto. El rey Jorge II, al nombrar presidente de gobierno primero a Korizis y, tras el suicidio de éste (16 de abril de 1941), a Emmanuil Tsuderos *motu proprio* y no anular de momento la prohibición de los partidos impuesta por Metaxas, transformó temporalmente el régimen de Metaxas en una dictadura monárquica similar a las surgidas también en otros países balcánicos en la época de entreguerras. Una clara mayoría de la población y de sus representantes políticos, tanto liberales como conservadores, deseaba sin embargo la vuelta al parlamentarismo. La democracia parlamentaria no había sido cuestionada fundamentalmente ni en los años anteriores ni en este momento. Aunque la dictadura se hubiese convertido en un fenómeno de regular aparición en la política griega, ello no se debía sino a las discrepancias fundamentales existentes dentro de la población y de los partidos acerca de la forma de gobierno y al hecho de que, tanto los republicanos como los monárquicos, en los momentos críticos habían sucumbido a la tentación de recurrir a la ayuda de grupos de oficiales simpatizantes para suprimir, defender o restaurar la

monarquía. Esta práctica había hecho del cuerpo de oficiales no sólo uno de los componentes más importantes de la élite política del país, sino, más aún, la conciencia de la nación y la última instancia decisoria en toda discusión política seria. Pero en la situación existente a la muerte de Metaxas, el movimiento en favor de la restauración de un sistema político parlamentario había de iniciar inevitablemente un nuevo asalto en la lucha por la forma de gobierno. Después de que el rey y el ejército hubieran hecho posible y tolerado el régimen de Metaxas, es decir, una dictadura no exenta de rasgos fascistas, los republicanos convencidos encontraron un amplio consenso a la hora de declarar definitivamente desacreditada a la monarquía y presentarla como un claro obstáculo para el libre desarrollo de la nación. Por ello precisamente el rey y el ejército, por entonces predominantemente monárquico, mostraron pocas inclinaciones a ceder a las presiones en favor de la liberalización y la democratización que tan fácilmente podían conducir al establecimiento de la república, sobre todo teniendo en cuenta que tras las victorias sobre los italianos —y más tarde también tras el valor demostrado en la lucha contra las tropas alemanas— consideraban compensado el descrédito por la complicidad con Metaxas y que de hecho muchos griegos veían ahora en ellos los símbolos de la unidad nacional y los garantes de la estabilidad política. Sin duda se producirían graves conflictos, con las acostumbradas consecuencias negativas para el sistema político. A diferencia de la década de 1920, la situación era incluso aún más compleja y peligrosa. La supresión periódica del Parlamento había dado lugar a que, tanto a la izquierda como a la derecha, apareciesen fuerzas extremistas, pues en tanto que en la extrema derecha se percibía la existencia de grupos fascistas, en la extrema izquierda el Partido Comunista Griego (PCG), decidido a llevar a cabo una transformación revolucionaria de la sociedad griega conforme al modelo soviético, había adquirido una fuerza considerable, así como una consolidación organizativa [177].

El ataque alemán y la inmediata ocupación italoalemana impidieron sin duda tomar prontas decisiones en los conflictos perfilados ya a comienzos de 1941, pero no el inicio de su resolución, esto es, la progresiva polarización de las formaciones políticas de Grecia que, justamente en el territorio ocupado, en el que las potencias ocupantes indudablemente sólo podían ejercer un control eficaz sobre las grandes ciudades, habría de conducir también al estallido de una guerra civil. Cierto es que las potencias ocupantes encontraron algunos hombres de paja que actuaron como jefes de un gobierno-títere griego, pero la gran mayoría de la

población mantuvo una actitud de resistencia pasiva de la que muy pronto surgiría la resistencia activa. Ahora bien, ni la Unión Nacional Democrática (EDES), fundada el 9 de septiembre de 1941 por el general Napoleon Zervas e integrada por fuerzas liberales y conservadoras, ni el Frente de Liberación Nacional (EAM), aparecido el 27 de septiembre como organización frentepopulista de los grupos de la izquierda dominada por el PCG y que el 10 de abril de 1942 creó un Ejército de Liberación Nacional (ELAS) sobre la base de un acuerdo del Comité Central del PCG, se limitaron a la lucha contra las potencias ocupantes[178]. Antes bien, pronto apareció entre ambos una fuerte rivalidad por la supremacía política dentro del país. En septiembre de 1943, el EAM-ELAS, que hasta entonces había obligado a numerosas organizaciones no comunistas menores de la resistencia a someterse y a fundirse por la fuerza bruta, o bien a desaparecer, se tomó en serio el intento de hacerse con el poder único y liquidar también a la EDES. El intento no se logró por completo, ya que Zervas pudo mantenerse en el noroeste de Grecia, y el 29 de febrero de 1944 el armisticio de Plaka puso de momento fin —con ayuda británica— a esta lucha sin cuartel. No obstante, la mayor parte del país había caído en manos del EAM-ELAS. Con ello Grecia no se encontraba todavía ciertamente bajo el dominio comunista, pues a pesar de que los comunistas mantenían las posiciones claves dentro del EAM-ELAS constituían, no obstante, tan sólo una fuerza junto a otros muchos grupos diferentes; ahora bien, el país se hallaba ahora bajo el control de una organización eminentemente republicana, hecho notificado el 4 de marzo de 1944 por el EAM-ELAS al rey y al gobierno en el exilio mediante la creación de un Comité Político de Liberación Nacional (PEEA) que, aunque no reivindicó inmediatamente el *status* de gobierno, sólo podía considerarse como un rival del monarca y de su gabinete. Por otra parte, la EDES era también de inspiración republicana.

En el exilio griego, las cosas habían tomado en cambio un rumbo muy distinto. Churchill apoyaba al rey por cuanto el gobierno británico, justamente bajo la impresión de los acontecimientos que tenían lugar en Grecia, consideraba a la monarquía cada vez más como la mejor protección contra una posible toma del poder por parte de los comunistas, que no parecía en modo alguno improbable por mucho tiempo, y contra la extensión a ella ligada de la esfera de influencia soviética. Cuando la fundación del PEEA provocó amotinamientos dentro del ejército griego en el exilio, predominantemente monárquico, en abril de 1944, con los cuales los oficiales republicanos pretendieron forzar el reconocimiento del Comité como gobierno, el rey pudo reaccionar

consecuentemente con dureza. Los amotinamientos fueron dominados con ayuda británica, siendo luego separados de las fuerzas armadas casi todos los republicanos. La polarización política entre la resistencia republicana y el exilio monárquico era perfecta. Los británicos, indudablemente, no deseaban una vuelta a la situación dictatorial, por lo cual instaron al rey a nombrar jefe del gobierno en el exilio, ya en abril, a Georgios Papandreu, un liberal dentro de la tradición de Venizelos, el cual, nada más llegar a Egipto procedente de Grecia, logró —con el apoyo reiterado de la tenaz mediación británica— formar en mayo de 1944 un gobierno de coalición en el cual estaban representados todas las fuerzas políticas del exilio y de la Resistencia; pero, al igual que en lo relativo al acuerdo entre la EDES y el EAM-ELAS, se trataba únicamente de una tregua, ya que cuando en septiembre y octubre de 1944 las tropas alemanas se retiraron de Grecia sin lucha porque el avance del Ejército Rojo amenazaba con cortar el camino a Alemania, la arena volvió a quedar despejada para el próximo combate. Indudablemente, la gran masa de la población deseaba, sobre todo, paz y la posibilidad de una reconstrucción pacífica tras los grandes sufrimientos padecidos por causa de la guerra, la ocupación y el primer asalto de la guerra civil. En la lucha contra Italia y Alemania habían caído 16 000 soldados, las represalias de las potencias ocupantes habían costado cerca de 40 000 víctimas, 60 000 judíos griegos habían sido aniquilados en los campos de exterminio nacionalsocialista y 750 000 personas habían perdido sus hogares. El hambre afectaba a 300 000 personas y Grecia, a pesar de poseer una estructura eminentemente agraria, no era capaz de cubrir por sí sola la demanda de alimentos; en este país tan montañoso, la superficie útil de cultivo es escasa; en la agricultura predominaban las pequeñas explotaciones y la superpoblación surgida en el campo, para la cual no existían apenas posibilidades de absorción debido al escaso desarrollo de la industria, seguía disminuyendo la rentabilidad de la agricultura; de esta manera, la interrupción de las importaciones a causa de la guerra, ante la que las potencias ocupantes se mostraron indiferentes, tendría consecuencias fatales. Tras la retirada de las tropas alemanas tampoco se podía contar con una rápida mejora de la situación, ya que nadie podía decir cómo se habrían de pagar las importaciones de alimentos que en ese momento volvían a ser posibles; Grecia había pagado sus importaciones con productos de exportación tales como tabaco, y en 1944-45 era de prever que el mercado más importante, Europa central y en ella principalmente Alemania, dejaría de ser durante varios años un socio comercial con poder adquisitivo. Lo

que sin duda estaba muy claro era que la penuria no se podría superar con las propias fuerzas, y esto era igualmente aplicable a los problemas estructurales del país: para ampliar y modernizar el sistema educativo, para impulsar la incipiente construcción de carreteras y vías ferroviarias, para aumentar la productividad de la agricultura y para financiar una industrialización adecuada, Grecia, incapaz de reunir por sí sola el capital necesario, necesitaba ayuda extranjera.

Que tal ayuda —ya fuese para subvenir a las necesidades más inmediatas, ya fuese para resolver las grandes tareas del desarrollo— sólo podría ser proporcionada por las potencias occidentales —Gran Bretaña y también Estados Unidos— era evidente para la mayor parte de la población griega [179]. Y así, la necesidad de tranquilidad y el reconocimiento de la dependencia con respecto a las potencias occidentales llegaron a crear incluso un estado de ánimo proclive a la regulación de las cuestiones políticas en la forma propugnada manifiestamente por los británicos y augurada por la formación del gabinete Papandreu: mantenimiento de la monarquía en el caso de que un plebiscito confirmase la existencia de una mayoría favorable, y restauración de la democracia parlamentaria. El hecho de que a la hora de realizar un plebiscito acerca de la forma de Estado se contase con una mayoría monárquica a pesar de la responsabilidad del rey en el régimen de Metaxas se debió también a que el peso de los comunistas en la dirección del EAM-ELAS se ponía cada vez más de manifiesto y a que el EAM-ELAS ejercía tal terror en los territorios por él ocupados que incluso muchos republicanos convencidos consideraron en un principio a la monarquía como un remedio necesario. Ahora bien, las posibilidades de lograr un cambio pacífico de tal estado de ánimo eran escasísimas. Después de la llegada a Atenas el 18 de octubre de 1944 del «gobierno de Unidad Nacional» de Papandreu, dos días después de la ocupación de la ciudad por tropas británicas, el conflicto no tardaría en volver a estallar. El motivo respondería también, de forma sintomática, a la tradición griega. Cierto es que los monárquicos y los liberales no pensaban en modo alguno reprimir a los comunistas, ni tampoco eliminar a todas las fuerzas representadas en el EAM, y que la EAM, o los comunistas en ella dominantes, tampoco pretendían por su parte llevar a cabo una revolución inmediata o incluso una oposición violenta contra la vuelta del rey, pero tras la instrumentalización en política interior de las fuerzas armadas, experimentada con demasiada frecuencia, ninguna de las partes se hallaba dispuesta, con vistas al futuro desarrollo de las cosas, a dejar al ejército en manos de su oponente. Si a los monárquicos

y a los liberales les parecía imposible aceptar a los partisanos del ELAS y a sus dirigentes como núcleo del ejército griego, el EAM-ELAS tampoco era proclive a tolerar la construcción de las fuerzas armadas en torno a la llamada Brigada Rímini y a otras unidades del ejército del exilio. Por ello Papandreu insistió en la disolución del ELAS, que respondió a la orden de desmovilización primeramente con la destrucción del «gobierno de Unidad Nacional» (1 de diciembre de 1944) y los días 4 y 5 de diciembre de 1945 con el levantamiento. Aunque las tropas británicas pudieron sofocar pronto la rebelión en Atenas y otras grandes ciudades mediante duros y sangrientos combates, el EAM-ELAS se apoderó en un principio de la mayor parte del país restante, y durante algunas semanas la situación recordó la época anterior a octubre de 1944, sólo que en vez de la ocupación alemana se daba la británica. Pero, a diferencia de los alemanes, los británicos disponían del respaldo de casi todas las fuerzas políticas griegas a la derecha de los comunistas y del apoyo de las tropas griegas. En el Tratado de Varkiza, firmado el 12 de febrero de 1945, los rebeldes tuvieron que reconocer su derrota y aceptar la disolución de sus unidades armadas. El gobierno renovó, por su parte, su promesa hecha ya en octubre de 1944 (el plebiscito acerca de la forma de gobierno y la pronta celebración de elecciones) y aseguró la revocación del estado de excepción [180].

Bajo la regencia del arzobispo de Atenas Damaskinos —el rey Jorge se había mostrado conforme con no regresar hasta después de haberse celebrado un plebiscito favorable a él—, con el tratado de Varkiza comenzó un período de calma relativa, que sin embargo sólo habría de ser, una vez más, una tregua temporal. Ninguna de las partes respetó el acuerdo. Ni los partisanos comunistas se desmovilizaron, ni el gobierno, que por otra parte toleraba el terror de las bandas de extrema derecha, renunció a seguir practicando detenciones en masa. Aún no se podía hablar de reconstrucción económica, pues la penuria era tan grande como antes. Finalmente, el 31 de marzo de 1946 pudieron celebrarse las primeras elecciones legislativas desde hacía diez años, y el 1 de septiembre de 1946 el plebiscito acerca de la monarquía. En ambos casos, los electores pusieron de manifiesto que los partidarios de los comunistas en modo alguno respondían a la impresión que su uso desconsiderado de las armas y del poder había despertado. Aunque los comunistas hicieron un llamamiento al boicot de las elecciones y pudieron conferir a su llamamiento, en amplias zonas del país, un carácter terrorista, sólo el 15 por ciento a lo sumo de las personas con derecho a voto permanecieron alejadas de las urnas, y el 60 por ciento de los electores se deci-

dieron por el Partido Popular monárquico[181]. Aún más claro sería el resultado del plebiscito: con una participación del 94% de los electores, el 69% votaría por el regreso del rey Jorge y, con ello, por el mantenimiento de la monarquía (Jorge II murió pocos meses después de su llegada a Atenas, el 1 de abril de 1947, siendo sucedido por su hermano Pablo).

Es probable que fuese precisamente la claridad de los resultados del plebiscito lo que impulsara a los comunistas a emplear nuevamente la violencia, pues la renuncia a un levantamiento armado parecía conducir a una pérdidad de importancia política[182]. Las perspectivas de éxito tampoco parecían malas. En el norte, Grecia limitaba con tres Estados controlados entre tanto por los comunistas —Yugoslavia, Rumania y Bulgaria—, y los comunistas griegos especulaban con la posibilidad de obtener apoyo material de estos Estados y ponerse a salvo al otro lado de la frontera en caso de producirse una presión demasiado fuerte por parte de las tropas gubernamentales. Es improbable que la Unión Soviética fuese la promotora, pero lo que es evidente es que de Moscú tampoco hizo amonestación alguna, sino que por el contrario mantuvo una actitud de aliento. En febrero de 1946, la Unión Soviética inició en las Naciones Unidas una virulenta campaña contra la presencia de tropas británicas en suelo griego, pero mientras que esto era interpretado por Londres y Washington como el fin del desinterés soviético expresado a Churchill en 1944 con respecto a los acontecimientos griegos y como la expresión de su esperanza de conseguir tal vez la anexión de Grecia al incipiente bloque soviético, los comunistas griegos consideraron la campaña como una señal de que, en caso de producirse una rebelión, podrían contar con el beneplácito de Moscú y al menos con un respaldo político.

Sea como fuere, entre la primavera de 1946 y la de 1947, las acciones aisladas de los partisanos griegos dieron lugar a un levantamiento global que, efectivamente, obtuvo el apoyo —difícilmente imaginable sin el beneplácito soviético— de los tres países comunistas vecinos. Y así, como ya había sucedido en 1944-45, los rebeldes pudieron apoderarse rápidamente de una gran parte del país, exceptuando las ciudades, o reconquistarlo tras los contraataques de las tropas gubernamentales y de las unidades británicas. En tal situación, Gran Bretaña hubo de reconocer a comienzos de 1947 que, después de los esfuerzos realizados en la segunda guerra mundial, estaba excesivamente debilitada desde el punto de vista económico, financiero y militar para seguir siendo la potencia protectora de una Grecia no comunista. El 3 de marzo de 1947, el gobierno griego dirigió por ello la vista

hacia los Estados Unidos y, dado que en Washington la importancia estratégica de Grecia no era juzgada de manera distinta que en Londres, los Estados Unidos relevaron a Gran Bretaña con el anuncio el 12 de marzo de 1947 de la Doctrina Truman, que ofrecía el apoyo americano a todos los Estados amenazados por el comunismo y en un principio ante todo a Grecia y a Turquía [183]. Al iniciarse la intensa ayuda financiera, económica y militar de los Estados Unidos, desaparecieron las posibilidades de los comunistas griegos, toda vez que el «Ejército Democrático de Grecia» (DSE) perdió el apoyo de la población a causa del terror nuevamente practicado, empezando muy pronto a sufrir deserciones en masa de sus soldados, reclutados obligatoriamente en un 90% [184]. Cuando el 24 de diciembre de 1947 el comandante en jefe del DSE, Markos Vafiadis, formó un contragobierno comunista, ni siquiera logró el reconocimiento del bloque soviético. En enero de 1949, el general Papagos, héroe de la guerra greco-italiana, asumió el mando de las tropas del gobierno ateniense, y en junio de 1949 Yugoslavia interrumpió su apoyo al DSE, ya que los comunistas griegos, en el conflicto entre Moscú y Belgrado, habían optado por una actitud contraria a Tito. Tras duras derrotas, las últimas en las montañas de Vitsi y junto al macizo de Grammos, las tropas restantes del DSE huyeron hacia Albania a finales de agosto de 1949. El 9 de octubre de 1949, el DSE anunció el fin de la resistencia armada y siete días después le sucedió una declaración análoga del contragobierno comunista.

Pero, aun después del fin militar de la guerra civil, el país seguía estando muy lejos de alcanzar la estabilidad política. El cambio frecuente de débiles gabinetes impedía, por otra parte, la reconstrucción económica y el empleo adecuado de la ayuda americana. Sólo después de que el mariscal de campo Papagos renunciase al mando supremo del ejército y fundase la Unión Helénica, amplia coalición de grupos conservadores según el modelo gaullista, con la cual obtendría en las elecciones del 16 de noviembre de 1952 —si bien, sólo en virtud de un cambio de la ley electoral favorable a los grandes partidos— 240 de los 300 escaños, habría de conseguir Grecia un gobierno estable. Papagos fue nombrado presidente de gobierno, pudiendo ahora acelerar la reconstrucción económica. Hasta finales de 1955, aunque el país siguiese dependiendo de la ayuda americana, se harían de hecho importantes progresos en la reparación de los estragos de la guerra y de la guerra civil. Papagos reanudó al mismo tiempo los lazos tradicionales de Grecia en política exterior. El tratado de paz de los aliados con Italia (10 de febrero de 1947)

había dado lugar a la fusión del Dodecaneso con Grecia, normalizándose a continuación las relaciones grecoitalianas. El 9 de agosto de 1949, Grecia había obtenido un escaño en el Consejo de Europa; en 1952 se produciría su ingreso en la OTAN. Papagos completó esta orientación occidentalista del país —hecho indiscutible, tanto bajo su gobierno como bajo sus sucesores—, que más tarde se habría de consolidar con la incorporación a la CEE, con la reanudación de unas relaciones más estrechas con Turquía y la reconciliación con Yugoslavia. El 28 de febrero de 1953, Grecia firmaba ya un tratado de amistad con ambos Estados y el 9 de agosto de 1954 se firmó en Bled una alianza militar greco-yugoslavo-turca [185]. La cooperación en sistemas multilaterales —así como también en la ONU— no sólo proporció al país seguridad frente a las ambiciones comunistas y soviéticas, sino que al mismo tiempo creó un contrapeso, hábilmente utilizado por los políticos griegos, frente a la influencia americana, por lo demás prepotente [186].

Papagos murió el 4 de octubre de 1955. Su sucesor, Konstantinos Karamanlis, que transformaría la Unión Helénica en la Unión Nacional Radical (ERE), prosiguió no obstante la política iniciada por el mariscal de campo y, al conseguir la mayoría en varias elecciones, pudo conducir a Grecia a un período de estabilidad política que se habría de prolongar hasta 1963, desconocido para los griegos desde el gobierno de Venizelos, esto es desde 1928-1932. Cierto es que la persistencia del temor a los comunistas, herencia de la guerra civil, daría lugar también a la prosecución de las prácticas del Estado policial empleadas ya bajo Papagos en la persecución de la izquierda radical, que conllevaban una amplia independización de los órganos ejecutivos que actuaban en este campo. Pero las cuestiones más importantes relativas a la política exterior, económica e interior siguieron siendo competencia del gobierno, un gobierno, por otra parte, de base parlamentaria. La postura propicia de Grecia al desarrollo de una democracia parlamentaria capaz de funcionar se puso también de manifiesto en el hecho de que, durante el período dominado por la figura de Karamanlis, surgió un partido de oposición, la Unión del Centro (EK), liberal y dirigida por Georgios Papandreu, que, cumpliendo con su papel y tras ganar la mayoría absoluta (16 de febrero de 1964), pudo reemplazar al ERE como partido del gobierno. La estabilidad política lograda por Karamanlis hizo posible también una política económica positiva por demás que, a su vez, contribuiría a apaciguar las relaciones políticas. En 1959, la dracma se convirtió en una moneda convertible; en 1960, el gobierno pudo adquirir la Compañía de Electri-

cidad de Atenas y del Pireo, de propiedad británica; el aumento del turismo mejoró la balanza de pagos y, tras unos primeros comienzos ya buenos entre 1953 y 1959, comenzó —con el plan quinquenal anunciado el 28 de abril de 1959— un impresionante desarrollo de la industria y de la agricultura.

El hecho de que el período de Karamanlis tampoco se viese libre de graves crispaciones no se debió tanto a la situación dentro de la propia Grecia cuanto al problema de Chipre, que, exceptuando al Epiro septentrional albanés, al que no se habría de renunciar hasta la época del «régimen de los coroneles», constituía el último objetivo territorial de la herencia del imperio turco al que debía aspirar el nacionalismo griego [187]. Esta isla del Mediterráneo oriental, habitada en un 80% por chipriotas de lengua y sentimientos griegos y en un 20% por turcos, y cuya Administración había pasado en 1878 a manos británicas, convirtiéndose en 1925 en colonia de la Corona británica, pasaría a ser ahora inevitablemente el punto de mira, después de que la política griega hubiese dado más importancia durante mucho tiempo a objetivos más próximos, el último de ellos el Dodecaneso. Particularmente, los grecochipriotas, que por vez primera en 1931 habían llamado la atención sobre sus deseos con disturbios, exigieron impetuosamente la *enosis* (unión) con la metrópoli. Ningún gobierno griego podía ignorar el llamamiento a la *enosis*. En mayo de 1954, Papagos ya había anunciado oficialmente la aspiración a la unificación y Karamanlis también presentaría insistentemente a las potencias occidentales esta reivindicación grecochipriota. Con ello llamó a la palestra a Turquía, que no estaba dispuesta a que los cerca de 130 000 turcochipriotas quedaran a merced de una discriminación más que probable bajo el dominio griego. Cierto es que Turquía no reivindicó la isla para sí, prefiriendo que ésta continuase en poder británico, pero el gobierno turco, presionado a su vez por los disturbios anti-griegos en las ciudades turcas, no dejó ninguna duda de que reaccionaría frente a la *enosis* con la fuerza de las armas y forzaría al menos la división de Chipre. El conflicto entre dos miembros estratégicamente importantes de la OTAN, que destruía por completo el pacto balcánico de Bled recién firmado, colocó por lo demás a las potencias occidentales un dilema muy desagradable. Gran Bretaña se opuso a la *enosis* durante algún tiempo, debido entre otras cosas a la importancia que su dominio sobre Chipre tenía para la posición británica en Oriente Próximo. Pero Gran Bretaña y los Estados Unidos no querían ni podían pasar por alto los intereses y los sentimientos turcos, dado que Turquía, como miembro de la OTAN, tenía por lo menos tanta importancia como

Grecia. Y así, ambas potencias occidentales mantuvieron durante años una política dilatoria que además de irritar constantemente al nacionalismo griego, provocó por primera vez una crítica a la orientación occidentalista de Grecia no limitada exclusivamente a la izquierda radical[188]. Como consecuencia de la identificación del partido conservador del gobierno con la vinculación occidental y de la tibia defensa por Karamanlis de la reivindicación de la *enosis* por consideración a la postura americana, el ERE y su líder cayeron progresivamente en desgracia, aunque finalmente Karamanlis demostró que era capaz de afrontar también esta dificultad. A él se debió en buena medida el que gracias al tratado de Londres del 19 de febrero de 1959 —firmado entre los gobiernos de Gran Bretaña, Grecia y Turquía, así como representantes de los grecochipriotas y los turcochipriotas—, el problema de Chipre pudiese ser desactivado durante largo tiempo: Chipre se convirtió, dentro del marco de la Commonwealth en una república independiente cuya Constitución garantizaba que el presidente de la nación, que ejercía al mismo tiempo el cargo de jefe de gobierno, fuese griego; los británicos conservaban sus bases militares y Turquía se contentaba con la concesión de amplios derechos a la minoría turca de la isla. Algunos años después, en 1964, el Tratado de Londres habría de servir también de modelo a la regulación análoga de la independencia de otra colonia británica, la de Malta.

El hecho de que el período de estabilidad acabase ya en 1963, a pesar de la solución positiva dada anteriormente a la cuestión de Chipre, se debió paradójicamente a los éxitos políticos y económicos resultantes del rumbo tomado por Karamanlis. El hecho de que estos éxitos fuesen capitalizados por un gobierno de base parlamentaria provocó un desplazamiento paulatino del poder en beneficio del Parlamento y en perjuicio del rey. Pablo I y los grupos más conservadores a él ligados no estaban dispuestos a aceptar sin resistencia este proceso, aun cuando fuese realizado por un movimiento conservador. Cuando el rey Pablo obligó a dimitir al presidente de gobierno en junio de 1963 por una simple diferencia de opinión, a pesar de que el ERE dirigido por Karamanlis contaba con una sólida mayoría en el Parlamento, se inició un nuevo asalto en el conflicto entre el rey y el gobierno, entre la Corona y el Parlamento, tan familiar a Grecia. El creciente agudizamiento de la polémica y su abierto planteamiento se hicieron inevitables cuando, tras la crisis de política interior provocada por el rey con la dimisión de Karamanlis, la Unión de Centro de Papandreu alcanzó la mayoría absoluta de votos y escaños en las elecciones del 16 de febrero de 1954. Ya

el hecho de que el partido hasta ese momento en la oposición hubiese relevado de forma normal al que hasta entonces había sido el partido del gobierno, demostrando con ello la capacidad de funcionamiento del sistema parlamentario, fue considerado por el rey como un debilitamiento de su posición que pronto habría de tratar de compensar. Pero lo que más le impulsó a actuar fue la circunstancia de que ahora el Parlamento y el gobierno estaban dominados por fuerzas interesadas en conducir el desarrollo de Grecia por caminos liberales: los liberales griegos ya habían proclamado la república en una ocasión. La excusa para la declaración real de guerra fue la cuestión —fenómeno también familiar— de a quién incumbía el control del ejército. Cuando en julio de 1965 Papandreu mostró serias intenciones de someter al ejército al control del Parlamento y, en consecuencia, de la mayoría liberal, el joven rey Constantino II, que había sucedido a su padre fallecido el 6 de marzo de 1964, obligó a Papandreu a dimitir y, sin tener en cuenta la posición mayoritaria de éste dentro del Parlamento, nombró un gobierno de su elección. Con su golpe de Estado, Constantino II, al igual que antes Constantino I y Jorge II, se enfrentó abiertamente a la mayoría de la nación y, al igual que en otros tiempos sus predecesores, destruyó con esta prolongación de la política iniciada por su padre una estabilidad que a Grecia le había costado duros esfuerzos conseguir.

X. ESTADOS NEUTRALES

Irlanda

Exceptuando las dos naciones de la Península ibérica favorecidas por su situación marginal (España participaría simbólicamente con su División Azul en la campaña de Hitler en Rusia y Portugal concedería bases en las Azores a Gran Bretaña y Estados Unidos), en la segunda guerra mundial sólo tres Estados podrían mantenerse neutrales: Irlanda, Suecia y Suiza.

La neutralidad irlandesa fue el resultado de la división del país en Irlanda del Norte (Ulster), perteneciente a la Corona británica, y el Estado Libre de Irlanda, autónomo desde 1921 con *status* de dominio, pero aún no separado por completo de Gran Bretaña debido a las estrechas relaciones económicas existentes y a su condición de miembro de la Commonwealth. La neutralidad de Dublín era, al mismo tiempo, parte de una política tendente a conseguir la independencia definitiva de Londres, por

un lado mediante la negativa a ayudar militarmente al Reino Unido mientras Irlanda del Norte siguiese formando parte de Gran Bretaña (y a causa de ello) y, por otro mediante la declaración del primer ministro De Valera en el sentido de que Irlanda nunca permitiría que su territorio se convirtiese en una base de partida de ataques contra Gran Bretaña.

El acuerdo angloirlandés de abril de 1938 trajo consigo, al tiempo que un acuerdo comercial que convertía al mercado británico prácticamente en territorio nacional para los exportadores irlandeses, el fin de todas las instalaciones militares británicas en el Estado Libre de Irlanda. Y, en efecto, el gobierno de Dublín logró mantener su política de neutralidad hasta el fin de la guerra a pesar de peligros y tentaciones como la derrota de Francia y la posibilidad que ello ofrecía a Alemania de invadir Inglaterra, y los deseos y exigencias de bases aliadas en territorio irlandés derivados de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Con el fin de eliminar la desconfianza británica, el ejército clandestino terrorista IRA tuvo que ser también mantenido a raya, pues prohibido estaba ya de todas formas. En tanto que la política de neutralidad tuvo un efecto más bien estabilizador en política interior, en lo que se refiere a la división de la isla puso aún más de manifiesto que antes las consecuencias de ésta: los lazos de Irlanda del Norte con Londres se habían reforzado durante la guerra y el desarrollo económico del Ulster se había visto favorecido en casi todos los campos por la guerra, mientras que en el Estado Libre de Irlanda el desempleo, el aumento de los precios y la escasez de materias primas determinaban la situación económica con las consecuencias de un hambre permanente y muy extendida y de una elevada tasa de emigración. Desde la división del movimiento nacionalista independentista Sinn Féin tras el tratado angloirlandés de 1921 en el Fianna Fail («Soldado del Destino»), predominantemente liberal conservador, y el Fine Gael («Estirpe Gaélica»), más bien democratacristiano, el sistema irlandés de partidos hasta mediados de la década de 1960 se compuso de dos formaciones burguesas muy parecidas entre sí, frente a las cuales el Partido Laborista irlandés sólo podía conseguir, en general, unos pocos partidarios y electores (en 1948, 8,7%; en 1951, 11,4%; en 1954, 12,1%; en 1957, 9,1%; en 1961, 11,6%). El Fianna Fail, partido fuerte y en consecuencia contrario a las coaliciones, con Eamon De Valera a la cabeza, gobernó en solitario de 1932 a 1948, así como con algunas interrupciones (1948-1951, 1954-1957 y 1973-1977), hasta finales de la década de 1970. El Fianna Fail se convirtió bajo De Valera, que en 1959 cambió el cargo de primer ministro por el

de jefe de Estado, en el partido del gobierno y soporte del Estado que, pese a su aspiración principal de unificar a toda Irlanda, seguiría estando interesado en mantener el equilibrio con Gran Bretaña..

El Fine Gael, generalmente más débil y dependiente siempre de compañeros de coalición (1948, 19,8%; 1951, 25,7%; 1954, 32,0%; 1957, 26,6%; 1961, 32,0% de los votos), aunque en el fondo no fuese más radical ni más nacionalista que su oponente, proclamó en 1948, siendo el primer ministro Costello y en alianza con el Partido Laborista y con otros tres aliados menores, la salida del Estado Libre de Irlanda de la Commonwealth. Dado el reconocimiento por Gran Bretaña de Irlanda como república independiente —que legalmente entraría en vigor el lunes de Pascua de 1949, aniversario del levantamiento de 1916—, la división de la isla quedó consolidada, y no en último término en virtud de la garantía que Londres concedió a Irlanda del Norte como parte del Reino Unido. El paso dado con el gobierno de coalición no produjo —o al menos no de forma rápida y sensible— el efecto esperado en política interior de la separación definitiva de Gran Bretaña: la desradicalización de la situación. En cambio mejoró la base contractual de las relaciones comerciales con los vecinos británicos y la República de Irlanda se convirtió, también en 1948, en miembro del Consejo de Europa y de la organización del Plan Marshall, la OECE. A pesar de su postura neutralista —Irlanda no se convertiría en miembro de la OTAN, siendo hoy día el único Estado de la CEE que no pertenece a la Alianza Atlántica—, la República fue superando paulatinamente el aislamiento exterior en que se encontraba debido a su curioso doble papel de miembro de la Commonwealth y país neutral en la segunda guerra mundial. La neutralidad de la República fue considerada, ante todo, como una «moneda de cambio» [189] para conseguir la restitución por parte de Gran Bretaña de los seis condados de Irlanda del Norte. Esta fórmula se desarrolló en 1949, cuando Irlanda fue invitada a ingresar en la OTAN. La no alineación irlandesa se diferencia con ello fundamentalmente de la política de neutralidad de Suiza, Suecia y Austria.

El ingreso en la ONU (1955) y la normalización de las relaciones con Irlanda del Norte mediante el reconocimiento *de facto* del gobierno de Belfast por parte de Dublín en 1965, con ocasión de un encuentro de los jefes de gobierno de la República de Irlanda y del Ulster, estabilizaron la situación política en la República irlandesa. El terrorismo del IRA, renacido a mediados de la década de 1950, fue combatido con éxito en el territorio de la República. En cambio, el panorama económico y social del país,

que en 1961 había solicitado por vez primera el ingreso en la CEE (si bien, no se convirtió en miembro de ésta hasta 1973) siguió siendo desolador. La inflación, el desempleo y la pobreza continuaron siendo hasta la década de 1960 —momento en que, gracias a las inversiones estatales, realizadas en un principio en la industria, se inició un auge moderado— los problemas principales y prácticamente insolubles de todos los gobiernos.

Finlandia

Finlandia sería la única nación neutral de Europa que renunciaría, hasta 1971, a establecer relaciones oficiales con la República Federal de Alemania y con la RDA en tanto la cuestión alemana continuase siendo un problema no resuelto entre los bloques de poder dirigidos por las grandes potencias. Finlandia reconoció a los dos Estados alemanes al mismo tiempo (en noviembre de 1972), estableciendo el mismo día, el 7 de enero, relaciones diplomáticas con Bonn y con Berlín Este. El hecho de que con anterioridad Finlandia nunca hubiese tomado oficialmente partido era expresión de la neutralidad tal como ésta era concebida en Helsinki; esta neutralidad, durante el tiempo que estuvo vigente la Doctrina Hallstein, e incluso por más tiempo, sería criticada por la República Federal como una consecuencia de la «finlandización» [190]. En 1974, el jefe del Estado finlandés aún habría de defenderse contra la opinión ventilada por la prensa de Alemania occidental de que Finlandia volvía paso a paso al *status* que poseía entre 1809 y 1917, época en la que había sido un gran principado ruso. El presidente Kekkonen justificaría la política exterior finlandesa en octubre de 1974, con motivo de una visita del jefe de Estado soviético Podgorny, definiéndola como «una contribución a la estabilización de la situación en materia de seguridad en el norte de Europa» y como una «prueba de las posibilidades y ventajas de la coexistencia pacífica»:

«Estamos plenamente de acuerdo en que se utilice la palabra 'finlandización' adecuadamente y sobre una base adecuada, y no de manera difamatoria, para referirse a la política exterior finlandesa. Partimos del hecho de que 'finlandización' significa concordia política con la Unión Soviética. Vista desde esta perspectiva, nuestra política exterior fue durante todo el período de posguerra una política de finlandización. Nosotros nos hemos ocupado de nuestros propios asuntos y estamos contentos con los resultados. Y tampoco hemos ocultado a nuestros amigos que

en los últimos años muchos grandes Estados de Occidente también han asumido una política de finlandización, lo que significa aspirar a una resolución pacífica de los problemas y a unas buenas relaciones con el país rector del socialismo. La reconciliación política con la Unión Soviética es una consecuencia de la distensión, de la cual se deriva también la finlandización» [191].

La prehistoria de la política finlandesa de neutralidad, que ha logrado grandes éxitos, la constituyen dos guerras mantenidas por el país con la Unión Soviética durante la segunda guerra mundial. La «guerra de invierno» fue iniciada el 30 de noviembre de 1939 por el Ejército Rojo, siendo excluida la Unión Soviética de la Sociedad de Naciones (última actuación también de la misma) a causa del ataque a Finlandia. Indudablemente, cuando el Kremlin exigió en el otoño de 1939 cesiones territoriales y una base militar por parte de Finlandia, al tiempo que obligaba a los Estados bálticos a conceder bases a la Unión Soviética, no contaba con la negativa y con la disposición de Finlandia a ofrecer resistencia armada. Los finlandeses, a su vez, no creían, a pesar de su desconfianza hostil frente al poderoso vecino, que Moscú fuese a imponer sus aspiraciones por la fuerza. Finalmente, existían muchas razones para creer que la URSS no sólo estaba interesada en conseguir algunas zonas estratégicamente importantes y en asegurarse el territorio hasta Leningrado (situado a sólo unos pocos kilómetros de la frontera finlandesa), sino en hacerse con toda Finlandia. ¿Para qué, si no, habría implantado Stalin un gobierno-títere formado por comunistas finlandeses (cuyo partido estaba prohibido desde 1930) bajo la dirección de Otto V. Kuusinen, que desde siempre había tachado de obsoleta la independencia de la república de Finlandia? El ejército finlandés, dirigido por el anciano comandante en jefe y héroe nacional reincorporado al servicio activo Mannerheim, opuso una resistencia tan eficaz e inesperada a las tropas soviéticas que hizo que las simpatías de las potencias occidentales Francia e Inglaterra se concretaran en un proyecto de formación de un cuerpo expedicionario aliado, más allá de la modesta ayuda prestada, pues el enemigo de Finlandia a principios de 1940 era también en definitiva el suyo propio, ya que Moscú y Berlín estaban ligados por el pacto establecido entre Hitler y Stalin. Este ejército franco-británico habría tenido que atravesar Noruega y Suecia para llegar al frente fino-soviético (lo cual habría brindado, paralelamente, la posibilidad de alejar a los alemanes del mineral sueco), pero Oslo y sobre todo Estocolmo, en donde era de temer una ocupación alemana de Suecia en caso de intervención de las fuerzas aliadas, no estaban dispuestos a prestar este tipo de

ayuda a Finlandia. En otras palabras, a Finlandia, completamente aislada, no le quedaría otro remedio que aceptar la oferta soviética de paz en febrero de 1940, máxime cuando Moscú permitió tácitamente la caída del seudogobierno comunista de Kuusinen y negoció con el gobierno del primer ministro Ryti.

La paz fue firmada en Moscú el 13 de marzo de 1940. En virtud del tratado de paz, Finlandia aceptaba importantes pérdidas de territorios, entre ellos, el istmo de Carelia y otros territorios al norte del lago Ladoga. Cerca de 600 000 carelios (más del 11% de la población total de Finlandia) abandonaron el territorio adjudicado a la Unión Soviética, obligando al gobierno de Helsinki a llevar a cabo un ingente proyecto de traslado de población por el cual los carelios hallarían un nuevo hogar en el sur y en el oeste de Finlandia, generalmente en federaciones de pueblos.

En el corto espacio de tiempo de la «entrepaz» surgió el proyecto de una confederación entre Suecia y Finlandia que permitiese salvaguardar la neutralidad y la independencia de ambos países, pero las conversaciones quedaron frustradas en sus inicios debido a la presión alemana y soviética. En la primavera y el verano de 1940, la situación estratégica de Finlandia cambió de forma dramática cuando Dinamarca y Noruega cayeron bajo el dominio alemán y los tres Estados bálticos fueron integrados dentro del territorio controlado por los soviétivos. En Helsinki, muchos interpretaron los acontecimientos de la costa opuesta como una premonición de la suerte que había de correr Finlandia. Risto Ryti, elegido en diciembre de 1940 presidente de la nación, y el barón Mannerheim buscaron la salvación de Finlandia en un acercamiento al Reich alemán; Berlín había alentado la cooperación militar y tres días después del comienzo de la campaña alemana en Rusia, en junio de 1941, Finlandia volvía a estar de nuevo en guerra con la Unión Soviética.

Posteriormente, los finlandeses quedarían agradecidos durante mucho tiempo al entonces enviado alemán en Helsinki por su opinión de que Finlandia se había visto envuelta en la guerra entre Alemania y la URSS «como un madero arrastrado por la corriente». Pero esta «teoría del madero» no sería mantenida eternamente: Finlandia había tomado partido de forma indiscutible, y en junio de 1944, después de una gran ofensiva del Ejército Rojo desastrosa para Finlandia, el presidente Ryti aún firmaría un acuerdo con Ribbentrop sobre el suministro de armamento a Finlandia por parte de Alemania en el que se comprometía personalmente a no firmar una paz por separado con Moscú.

Una vez que el frente se estabilizó en julio de 1944, Ryti dimitió para dejar el camino libre a las negociaciones con la Unión Soviética. Le sucedió el mariscal Mannerheim quien, como comandante en jefe de las tropas finlandesas, había evitado inteligentemente cruzar la frontera histórica entre Finlandia y Rusia. Tras la reconquista de Carelia, las fuerzas armadas finlandesas fueron acantonadas durante dos años y medio; Mannerheim consiguió evitar también participar en el ataque alemán a Leningrado, negándose además a cortar las líneas de comunicación entre las potencias occidentales y la Unión Soviética en el extremo norte, cerca de Murmansk.

Entre las condiciones soviéticas de paz se contaba la vuelta a la situación territorial de la Paz de Moscú de 1940; por otra parte, Finlandia debía ceder su único acceso al Océano Glacial Artico (región de Petsamo), pagar 300 millones de dólares en concepto de reparaciones y entregar a los soviéticos la península de Porkkala, situada frente a Helsinki, como base militar. Finlandia no tuvo alternativa, teniendo que aceptar las exigencias en septiembre de 1944. La tregua, que sería definitiva en virtud del Tratado de París de febrero de 1947, fue sucedida por combates con las tropas alemanas en Laponia, ya que Finlandia se había visto obligada también a comprometerse a expulsar a los alemanes. La declaración de guerra formal al Reich alemán no sería hecha por Finlandia hasta el 3 de marzo de 1945, si bien con efectos retroactivos desde el 19 de septiembre de 1944.

Después de la tregua se formó un nuevo gobierno, presidido por Juho Kusti Paasikivi, uno de los políticos más importantes del país. Paasikivi, de 74 años, que ya en 1918 había sido por un breve espacio de tiempo jefe de gobierno y había dirigido la delegación finlandesa en las conversaciones de paz de Dorpat en 1920, fue asimismo enviado en Estocolmo entre 1936 y 1939 y dirigió también la delegación que en 1939 negoció en Moscú las exigencias soviéticas, siendo nombrado finalmente delegado en Moscú tras la firma del tratado de paz de 1940. Durante la «guerra de continuación», Paasikivi se había retirado de la política. En 1944 se convirtió en el hombre del momento, teniendo que acometer la difícil normalización de la situación interior y exterior: el Partido Comunista, prohibido desde 1930, debía ser legalizado lo más pronto posible (convirtiéndose, como núcleo de la Liga Democrática del Pueblo Finlandés, en el segundo partido más poderoso en las elecciones legislativas de marzo de 1945, con 49 escaños) y había que celebrar procesos por «crímenes de guerra» contra los responsables de la guerra de continuación (denominada por los finlandeses «guerra de recuperación») por

presión soviética. Los principales afectados fueron los «culpables de la guerra», tales como el entonces presidente Ryti y también el ministro de Asuntos Exteriores durante la «guerra de invierno», el socialdemácrata Tanner, y otros políticos que en virtud de una ley con efectos retroactivos aprobada a regañadientes por el Parlamento en el otoño de 1945 fueron condenados a penas de prisión. Los políticos condenados no fueron discriminados en modo alguno por la opinión pública finlandesa. Ryti fue indultado en 1949 por motivos de salud, muriendo en 1956. En sus honras fúnebres, su sucesor, el presidente Kekonnen afirmó: «Todo lo que pudiera hacer, lo hizo por servir a su país» [192].

Carl Gustaf von Mannerheim dimitió del cargo de jefe de Estado en marzo de 1946, alegando razones de salud y de edad. Fue sucedido por Paasikivi. El sistema político de Finlandia se diferencia del de los otros Estados nórdicos por la fuerte posición del jefe del Estado. Debida a la combinación de parlamentarismo y sistema presidencialista, el presidente de la nación no se limita a cumplir funciones de representación, sino que, entre otras cosas, es también el jefe supremo de las fuerzas armadas y dispone del derecho de veto frente al poder legislativo. El presidente de Finlandia tiene también importantes competencias en materia de política exterior. El pragmático Paasikivi, de tendencia conservadora, se sirvió de su cargo y de su considerable autoridad personal, al igual que lo hiciera ya en su función de presidente de gobierno, para hacer de la línea Paasikivi, en los «años de peligro» [193] de 1945 a 1948, un programa de política exterior y un credo de neutralidad política, y llevarlos a la práctica.

Paasikivi se esforzó en primer lugar por ganarse la confianza de la Unión Soviética respecto a la nueva política finlandesa de buena voluntad y de paz hacia su vecino oriental y por convencerla de que de Finlandia no partiría ninguna amenaza a su frontera noroccidental. Los finlandeses tuvieron que ser convencidos también, a su vez, de que su independencia como Estado no se vería amenazada por la URSS. Pero debido a la existencia de una comisión de vigilancia, nominalmente aliada, aunque *de facto* soviética (aliada por cuanto Gran Bretaña había estado formalmente en guerra con Finlandia, por lo cual envió representantes), dirigida nada menos que por Zdánov, era difícil cuidar con desvelo la tierna planta de la confianza nacida en un suelo árido y abonado más por el temor que por la esperanza.

La actividad de la comisión de vigilancia soviética mermaría considerablemente durante años la soberanía finlandesa, pues los

300 millones de dólares de reparaciones a pagar en seis años tuvieron que extraerse de la producción industrial, cuyo volumen y cuyo carácter habían sido prescritos por Moscú y para cuya consecución se habían de realizar primero algunas inversiones básicas. El traslado definitivo de la población carelia, gran parte de la cual había regresado a su antigua tierra durante la «guerra de continuación», hizo necesarios importantes esfuerzos, tales como la reforma del suelo del 1 de mayo de 1945, ligada a una nivelación de las cargas. Dentro de la línea Paasikivi se incluía el pago completo de las reparaciones hasta 1952 con grandes esfuerzos por parte de la economía finlandesa (las estimaciones sobre lo que se produjo por encima de los 300 millones de dólares acordados oscilan entre 1,5 y 2 veces más, según la paridad de acuerdo con la cual se calculen los productos suministrados). Y, dado que Finlandia quería evitar también dar la impresión de lesionar los intereses soviéticos, en 1947 Helsinki rechazó ostentosamente la oferta del Plan Marshall (si bien, aunque bajo otros nombres, obtendría no obstante alguna ayuda americana).

Finlandia se vio sin embargo muy beneficiada por el hecho de que, al acabar la guerra, en el mercado mundial se produjo una fuerte demanda de productos de la economía finlandesa, principalmente madera y derivado de ésta. La demanda pudo ser satisfecha, ya que el volumen de producción no se había visto afectado durante la guerra, no tardándose en alcanzar una época de prosperidad que tuvo su apogeo a comienzos de la década de 1950. El desarrollo de la industria metalúrgica, impuesto por los suministros debidos en concepto de reparación, trajo consigo un alivio del mercado de trabajo. La salida de los productos fabricados (a precios del mercado mundial) en intercambio con productos soviéticos quedó garantizada gracias al tratado comercial a largo plazo firmado en 1950 con la Unión Soviética si bien, debido al aumento de las importaciones necesarias para realizar los suministros en concepto de reparación, surgirían importantes problemas en la balanza de pagos. El marco finlandés fue devaluado tres veces en 1945, dos veces en 1949 y una vez más en 1956.

Tanto los grandes esfuerzos realizados por los políticos finlandeses para comprender las necesidades soviéticas en materia de seguridad como su recién adquirido conocimiento de causa —por ejemplo Paasikivi, en febrero de 1947, declaró a un periódico americano que Finlandia tenía la intención de «combatir al atacante en caso de producirse un ataque contra la Unión Soviética a través del territorio finlandés» [194]— no impidieron que en Hel-

sinki se sufriera un sobresalto cuando Stalin propuso en una carta, en febrero de 1948, la firma de un pacto de amistad y ayuda mutua según el modelo de los tratados firmados con Hungría y Rumanía. Tanto mayor sería el escepticismo cuanto que simultáneamente —en febrero de 1948— Checoslovaquia, último de los Estados de Europa oriental y central en el camino hacia la Unión Soviética, se convirtió en satélite de Moscú en virtud del golpe de Estado de Praga.

En la primavera de 1948, corrieron por Finlandia rumores acerca de un inminente golpe de Estado comunista, siendo muchos los indicios que apuntaban a la transformación del país en una democracia popular. La situación inicial para que ello se produjese era por lo menos tan buena en Helsinki como lo había sido en su momento en Varsovia, Bucarest o Budapest: los comunistas ocupaban una cuarta parte de los escaños del Parlamento; en el gobierno del primer ministro Pekkala, de izquierda socialista, disponían de seis ministerios, entre ellos el de Interior; ejercían el control sobre la policía estatal; eran muy activos a lo largo y ancho del país; y celebraban amenazadoras manifestaciones en las cuales ponían como ejemplo los acontecimientos de Praga.

Con este telón de fondo se discutió la invitación de Stalin a firmar un tratado de amistad y ayuda mutua tanto en el Parlamento como en la vida pública. Cuatro fueron los principios formulados como objetivos finlandeses en las negociaciones, que lograron imponerse en lo esencial frente a los deseos mucho más ambiciosos de la Unión Soviética: Finlandia no renunciaría a su posición neutral entre los bloques, esto es, no se integraría en ninguna alianza militar y, en consecuencia, las cláusulas de ayuda mutua del tratado sólo tendrían validez en caso de guerra; en segundo lugar, la Unión Soviética sólo podría intervenir militarmente en suelo finlandés por deseo de Finlandia, que, en tercer lugar, conservaría su autonomía a la hora de tomar decisiones —el pacto no ofrecería la posibilidad de intervenir en el orden constitucional de Finlandia—; finalmente, Finlandia no se comprometería a realizar consultas de carácter político general con la Unón Soviética. La duración del tratado no debería ser superior a diez años, según instrucciones dadas a la delegación finlandesa antes de partir hacia Moscú.

El tratado, firmado el 9 de abril de 1948, no suponía pues alianza militar alguna entre Moscú y Helsinki, sino que era exclusivamente un acuerdo de carácter consultivo para tiempos de crisis y de ayuda mutua para el caso de una agresión demasiado poderosa contra el territorio finlandés. (Como único atacante potencial se citaba, en el primer artículo del tratado, a Alemania

u otro Estado aliado a este país.) El tratado, que habría de convertirse en el documento básico de la política finlandesa, no afectaba a los principios finlandesas de no alineación, aun cuando la garantía de neutralidad sólo apareciese en el preámbulo con la siguiente fórmula mínima: «respetando el deseo finlandés de permanecer al margen de los conflictos de intereses de las grandes potencias» [195].

Pocas semanas después de la firma del tratado, el ministro de Interior, el comunista Yrjö Leine, cayó a consecuencia de la moción de censura presentada por el partido conservador, siendo destituido de su cargo el 22 de mayo por el presidente de la nación, a pesar de las amenazas de sus compañeros de partido, suceso que sería prácticamente la puesta a prueba en política interior de la amistad soviético-finlandesa. Con ello terminaba, en opinión finlandesa, la fase más peligrosa de su política después de la guerra.

En las elecciones de 1948, los comunistas sufrieron tales pérdidas que se deshizo el campo de fuerzas de los tres grandes partidos (la socialdemocracia, la democracia popular, de influencia comunista, y el partido agrario) que había determinado la política de posguerra. En adelante, la política interior de Finlandia estaría dirigida por los socialdemócratas y el partido agrario, que se relevarían formando numerosos gobiernos de corta duración.

El espectro de partidos responde en principio al de los demás Estados nórdicos pero, además de los socialdemócratas y el bloque de izquierda de socialistas y comunistas, y de las tres tendencias burguesas articuladas en la Unión Nacional (conservadora), el Partido Popular (liberal) y el partido agrario (Partido del Centro), existe también el Partido Popular Sueco (igualmente burgués), representante de los intereses del grupo popular de lengua sueca, estando también representado en el Parlamento desde comienzos de la década de 1970 la Unión Cristiana, defensora del mantenimiento de los valores morales cristianos y detractora del consumo de alcohol.

Aunque el cambio constante de gobierno es algo característico de la política interior de Finlandia, la política exterior se desarrolló por vías apacibles tras el tratado con la URSS. Cierto es que en 1954 el Kremlin se mostró contrariado por la declinación de Finlandia —al igual que todas las naciones de Occidente— de la invitación a tomar parte en la Conferencia de Seguridad de Moscú (de la que, en 1955, surgiría finalmente el Pacto de Varsovia). Pero al año siguiente Moscú pagó la política general finlandesa con la sorprendente devolución de la base de Porkkala. Simultáneamente, y también antes de tiempo, se

prorrogó por primera vez el tratado fino-soviético de amistad y ayuda mutua por veinte años. (En 1970 se produciría la segunda prórroga por el mismo período de tiempo.) El jefe del Estado, Paasikivi, hacía en septiembre de 1955 un balance provisional con ocasión de la devolución de Porkkala: «El tratado de amistad de abril de 1948 ha estado vigente durante casi ocho años. En este tiempo, el mundo ha estado dominado durante muchos años por la rigurosa 'guerra fría'. A pesar de todo, el tratado no nos ha producido ningún perjuicio ni disgusto... Nuestras relaciones con la Unión Soviética, el problema más importante de nuestra política exterior, han mejorado de año en año durante el período de vigencia del tratado de amistad» [196].

De forma más dramática empeorarían sin embargo las relaciones en el otoño de 1958, cuando el embajador soviético en Helsinki, tras el éxito electoral de los comunistas (habían conquistado la cuarta parte de los escaños del Parlamento, con 50 representantes), presentó una lista de exigencias con respecto a la formación del gobierno finlandés, según la cual una coalición desde los comunistas hasta los conservadores, incluyendo a los disidentes de izquierda socialdemácratas, debería gobernar frente a los socialdemócratas. Las propuestas soviéticas no fueron sin embargo aprobadas: el nuevo gobierno estuvo formado por todos los partidos, bajo la presidencia del socialdemócrata Fagerholm y frente a los comunistas y sus aliados. El país padecería entonces grandes «heladas nocturnas»; la Unión Soviética demostró su disgusto, que fue desde la interrupción de las negociaciones económicas en curso hasta la suspensión de las relaciones diplomáticas. La música de fondo sería toda una serie de comentarios poco amables aparecidos en la prensa soviética.

Tras una visita del presidente Kekkonen que, como pago por adelantado, había contribuido al derrocamiento del gobierno Fagerholm, a partir de enero de 1959 empezarían a descongelarse nuevamente las relaciones soviético-finlandesas; ahora bien, uno de los objetivos de la presión sobre Helsinki se había conseguido: el desplazamiento por muchos años de los odiados socialdemócratas de la tarea de gobierno.

Urho Kekkonen, que había sido jefe de gobierno por un total de cinco veces, de 1950 a 1953 y de 1954 a 1956, fue elegido sucesor de Paasikivi en la jefatura del Estado en 1956 por una escasa ventaja sobre su oponente, el socialdemácrata Fagerholm, que había sido asimismo presidente de gobierno varias veces entre 1948 y 1958. Kekkonen permanecería en el cargo un cuarto de siglo, hasta su retirada, por razones de edad y de salud, en octubre de 1981. Sólo su primera reelección en 1962 había sido

polémica, decidiéndose en su favor por influencia soviética. Al contrario que su predecesor, Kekkonen realizó una activa política de partido y, contrariamente a la tradición finlandesa, según la cual el presidente de la nación debe ejercer su cargo de forma neutral y por encima de los intereses de partido, participó activamente en la maquinaria de la política interior encabezando su partido, la Unión Agraria. En el verano de 1961 se formó frente a su renovada candidatura una alianza dirigida por los socialdemócratas a la cual pertenecían varias partidos burgueses.

Las posibilidades de Kekkonen no serían demasiado buenas hasta la intervención de la Unión Soviética en el otoño de 1961. El 30 de octubre se recibió una nota soviética en la cual se utilizaba la crisis de Berlín como pretexto para llamar la atención sobre el amenazador «avance de los militaristas y los revanchistas de Alemania occidental hacia el norte de Europa y el área del Báltico», así como sobre su «deseo de utilizar este territorio como trampolín para su próxima aventura militar»[197]. Helsinki fue llamada a consulta (invocando el tratado de amistad de 1948) en razón de esta amenaza para la seguridad soviética y finlandesa. En las conversaciones entre los ministros de Asuntos Exteriores y entre Jruschov y Kekkonen, celebradas en Novosibirsk en noviembre de 1961, se pusieron claramente de manifiesto los auténticos puntos de vista de los políticos soviéticos. A los finlandeses se les explicó que si Kekkonen era derrotado en las elecciones, ello sería considerado por Moscú como un acto no amistoso. La ulterior disolución de la alianza contra Kekkonen y la retirada del único candidato oponente serio harían olvidar por completo las consultas relativas a la supuesta agresión de Alemania occidental.

La injerencia de la Unión Soviética en asuntos internos de Finlandia en el otoño de 1961 fue más directa, amenazadora y decisiva que la del otoño de 1958. En Occidente, los círculos interesados llegarían incluso a temer lo peor. Ahora bien, el fin de la crisis de las notas por las concesiones hechas en política interior había ahorrado a Finlandia las molestas consultas con Moscú, y en el Kremlin estas concesiones fueron consideradas como una señal de la voluntad de Finlandia de llevar adelante como fuese la política de paz y amistad frente a su gran vecino; por otra parte, el interés de los finlandeses por mantener su independencia y su neutralidad era lo suficientemente grande como para hacer concesiones. Y, en efecto, en las relaciones entre ambos países ya no se produciría ninguna crisis comparable; la asociación del país a la EFTA y posteriormente a la Comunidad Europea no provocó problema alguno, viéndose incluso incre-

mentada la autoridad del presidente finlandés tanto en el interior como en el exterior. Kekkonen se convertiría, más aún que su predecesor, en el símbolo de la política exterior de Finlandia y, durante algún tiempo, a la hora de definir las premisas de la política exterior finlandesa —cooperación correcta con Moscú manteniendo la vinculación con Occidente—, se requiría hablando de la «línea Paasikivi-Kekkonen», si bien los éxitos de esta política acabarían por ser considerados elementos integrantes de la biografía de Kekkonen, uno de cuyos momentos culminantes fue la apertura de la Conferencia de Seguridad y Cooperación (CSCE) de Helsinki el 3 de julio de 1973. En su discurso de salutación, Kekkonen declaró que el pueblo finlandés consideraba la elección del lugar para la celebración de la conferencia «como un reconocimiento práctico de su política de neutralidad activa y amante de la paz»[196]. En efecto, Helsinki había sido la única ciudad tenida en cuenta para la celebración de las negociaciones, pues aunque también hubiesen rivalizado con ella al final Estocolmo y Viena como capitales de países neutrales de otro signo, Helsinki era aquella sobre la que mejor podían ponerse de acuerdo el Este y el Oeste.

Suecia, Suiza, Austria: tres formas de neutralidad

El que el tratado de amistad que Finlandia hubo de firmar con la Unión Soviética no se convirtiese en una primera etapa para la sovietización del país, el que Moscú renunciase a hacer del pequeño país vecino del norte de Europa una república soviética y el que se contentase con unas posibilidades de influencia comparativamente inofensivas fueron hechos que los finlandeses debieron en buena medida a su vecindad con Suecia, pues este país báltico, rico e independiente y estratégicamente importante, en el caso de una anexión de Finlandia a la Unión Soviética habría abandonado su neutralidad, practicada desde las guerras napoleónicas, para integrarse con toda probabilidad en la OTAN.

La política de neutralidad de Suecia se basa en la fórmula pragmática: «No alineación en la paz con el fin de mantener la neutralidad en la guerra». Suecia se considera, por un lado, como un parachoques entre el Este y el Oeste y, por otro, como el elemento estabilizador de la balanza del equilibrio nórdico entre los Estados de la OTAN, Noruega y Dinamarca, y el país neutral y amigo de los soviéticos, Finlandia. La neutralidad de Suecia

no se halla garantizada por ningún tratado ni declaración de otro Estado, grupo de Estados u organización internacional; los suecos confían en sí mismos o, mejor dicho, en la combinación de unas fuerzas armadas fuertes y sumamente independientes del extranjero en el aspecto técnico, gracias a la industria armamentística sueca, con circunstancias naturales —situación, naturaleza del país y poca densidad de población— que por una parte resultan poco atractivas para atacar Suecia, y por otra hacen que la defensa se vea favorecida por estos mismos factores. Los suecos se hallan mejor dotados que ningún otro país de la Tierra en caso de defensa: dos tercios de la población pueden protegerse en refugios subterráneos; las fortificaciones y los depósitos de provisiones son también subterráneos, están descentralizados y son difícilmente expugnables; toda la economía nacional sueca es programable a corto plazo para responder defensivamente con objetivos autárquicos. La política sueca de no alineación se orienta hacia el único objetivo de impedir que el país se vea envuelto en los enfrentamientos bélicos de las grandes potencias. La neutralidad sueca, descrita también como «neutralidad activa», es una política elástica en cuanto a sus medios con el fin de adaptarse a las realidades de cada momento. Los suecos pueden también renunciar en cualquier momento a su *status* neutral sin que por ello surjan dificultades de orden constitucional o estatal. La neutralidad sueca no contiene ningún tipo de componente ideológico; antes bien, puede ser considerada como un vestigio de la filosofía política del Estado nacional del siglo XIX, que sin duda funciona sobre todo gracias a una situación geoestratégica favorable. Los suecos podrían integrar también en cualquier momento su importante potencial militar y económico en un sistema de alianzas; ya en varias ocasiones Estocolmo, en los años posteriores a la segunda guerra mundial, pensó no sólo en una alianza defensiva nórdica con Noruega y Dinamarca (1948), sino incluso en la entrada en la OTAN.

La forma de entender la neutralidad activa de Suecia incluye su fuerte participación en el Consejo de Europa y en las Naciones Unidas. No es casual que en la época en que tuvo como secretario general a Dag Hammarskjöld (1953-1961), de origen sueco, la ONU impulsara vigorosamente el proceso de descolonización; las simpatías de los suecos por los movimientos independentistas de Africa, Latinoamérica y Asia fueron y son muy acusadas, encontrando su expresión, por otra parte, en la prestación de ayuda material, es decir de armamento. El Estado de bienestar que es Suecia fue considerado hasta la década de 1960 como un modelo deseable, debido a su crecimiento económico, a su

estabilidad interior —los socialdemócratas fueron ininterrumpidamente el partido de gobierno entre 1932 y 1976— y, sobre todo, a su elevado nivel de vida. El principio de la solidaridad, cuya materialización la constituye la política social sueca en lo relativo, entre otras cosas, a las «pensiones populares», que habrían de convertirse en modelo para los Estados vecinos, fue considerado también como una obligación frente a los países del Tercer Mundo y puesto en práctica mediante elevadas prestaciones de ayuda al desarrollo. El compromiso con las naciones oprimidas y pobres está implícito en la forma sueca de entender la «neutralidad activa». Tal como dijo el presidente del gobierno sueco Olof Palme en una visita oficial a Viena en mayo de 1975, la neutralidad no significa «dar la espalda al mundo; la neutralidad es, antes bien, la obligación de alzar la voz cuando las grandes potencias pisotean los derechos de los Estados más pequeños» [199].

El país con la tradición más antigua e ininterrumpida de neutralidad de Europa, Suiza, practica una política de neutralidad, al igual que Suecia, de extremado rigor y purismo. La neutralidad suiza se basa en acuerdos internacionales que se remontan al Congreso de Viena de 1815. La neutralidad «permanente» de Suiza quedó constituida y garantizada por la declaración de las que en aquel momento eran las grandes potencias y por la firma formal de una declaración de neutralidad, siendo sancionada nuevamente como elemento del Derecho internacional europeo por el Tratado de Versalles de 1919. Suiza ingresó con vacilaciones en la Sociedad de Naciones una vez que fue eximida de la obligación de participar en todo tipo de sanciones reglamentarias. La pertenencia a la ONU se considera en Berna incompatible con el *status* suizo, dado que el Consejo de Seguridad puede disponer la aplicación de medidas coercitivas contra Estados particulares, a las cuales están obligados los miembros de la ONU.

Los primeros años de posguerra fueron doblemente difíciles para Suiza debido al completo aislamiento de este pequeño país frente a un sistema internacional en vías de transformación. Los estrechos e involuntarios vínculos económicos de Suiza con las potencias del Eje, Alemania e Italia, resultaron ser, al final de la segunda guerra mundial, una gravosa hipoteca para la política exterior suiza. Los suizos tuvieron que soportar el reproche de haber practicado «una marginación tachada de oportunista», lo cual les llevó a reforzar aún más su tendencia aislacionista [200]. Aun persistiendo en su rígida actitud en política exterior, Suiza trataría al mismo tiempo de afianzarse en lo relativo al comercio

exterior, de vital importancia, mediante nuevos mercados y nuevos socios. El aislamiento sólo sería superado paulatinamente y en buena medida por la participación de Suiza en la conferencia del Plan Marshall en París en julio de 1947.

La idea rectora de la política exterior suiza, desarrollada a finales de la década de 1940 por Max Petitpierre, jefe durante muchos años del Departamento Político, es la fórmula «neutralidad y solidaridad», pero ya en los primeros años de posguerra Suiza prestaría una generosa ayuda material incluso a Alemania.

En mayo de 1941, Suiza se había visto forzada por la presión americana a firmar un tratado cuyo objetivo era la obligación de entregar en concepto de reparaciones a terceros países la mitad de los valores alemanes. El Tratado de Washington se hallaba en fuerte contradicción con la manera de pensar suiza, razón por la que sería llevado a la práctica con vacilaciones, y en 1952, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Berna y Bonn, se encontrarían otras soluciones al problema de los valores, toleradas por los aliados. Suiza concedió a la República Federal, entre otras cosas, un crédito bancario de más de 100 millones de francos, con el que Bonn pudo satisfacer las reclamaciones de reparaciones. A cambio se desbloquearon los valores alemanes en Suiza. La República Federal asumió a su vez las deudas del Reich en Suiza (más de 1 000 millones de francos).

Los años de posguerra trajeron consigo un largo período de prosperidad para los suizos en el terreno económico. El desarrollo del sistema social (principalmente las pensiones de vejez y viudedad) se mantuvo dentro de la tendencia general a construir un Estado de bienestar, al mismo tiempo que los valores tradicionales que determinaban la conciencia política suiza y que constituían el elemento más original de ésta —federalismo, democracia directa y neutralidad— permanecían intactos.

Es la República de Austria la que cuenta con la tradición más breve de «neutralidad permanente», estrechamente relacionada con el resurgimiento del país en 1945 y con la recuperación de la soberanía en 1955. Los aliados de la segunda guerra mundial ya estaban de acuerdo mucho antes del fin de la guerra, en que Austria debía «ser liberada del dominio alemán como primer país libre víctima de la típica política agresiva de Hitler». El «Anschluss» de 1938 no tenía ninguna validez para los aliados —y desde hacía tiempo tampoco para los austríacos—, pero por otra parte también había que recordar a Austria (es decir, invitarla a pagar reparaciones) que «tiene una parte de responsabilidad por su participación en la guerra al lado de Hitler que no

puede eludir», palabras decisivas y no obstante un tanto contradictorias de la declaración relativa a Austria de la Conferencia de Moscú de octubre de 1943[201].

Cierto es que en la primavera de 1945 Austria fue dividida en cuatro zonas de ocupación (y Viena en cuatro sectores), pero, a diferencia de Alemania, a finales de abril de 1945 ya podía formar un gobierno provisional que haría entrar nuevamente en vigor la Constitución de 1920, constituyéndose así Austria nuevamente en Estado independiente. En la Conferencia de Potsdam, las grandes potencias acordaron no exigir ningún tipo de reparación a Austria (si bien plantearon reivindicaciones sobre las propiedades alemanas en Austria, creando con ello, lo mismo que en Suiza, un difícil problema para la posterior República Federal), y en noviembre de 1945 se celebraron las primeras elecciones de posguerra para el Consejo Nacional y los Parlamentos regionales. En diciembre de 1945, Karl Renner, del SPÖ (Sozialistische Partei Österreichs, Partido Socialista de Austria), fue elegido presidente federal; Leopold Figl, del ÖVP (Österreichische Volkspartei, Partido Popular Austríaco), fue elegido canciller federal, a la cabeza de un gabinete del que formaban parte todos los partidos representados en el Consejo Nacional: el Partido Popular (85 escaños), el Partido socialista (76 escaños) y el KPÖ (Kommunistische Partei Österreichs, Partido Comunista de Austria) (4 escaños). Cuando a mediados de 1947 los comunistas abandonaron el gobierno debido a la reforma monetaria y sobre todo a la aceptación de la oferta del Plan Marshall, se desarrollaron el sistema proporcional específico de Austria hasta 1966 y las grandes coaliciones basadas en ésta, en las que el Partido Popular nombraba al canciller y el Partido Socialista al vicecanciller.

Los primeros cuatro gobiernos de la segunda República de Austria se rigieron sin embargo todavía por un tratado de control que reservaba la soberanía formal al Consejo Aliado de las cuatro potencias de ocupación. La anulación de este Estatuto de Ocupación estuvo en el orden del día de las conferencias de ministros aliados de Asuntos Exteriores desde diciembre de 1946, pero debido a problemas de detalle y a cuestiones de procedimiento (como, por ejemplo, las propiedades alemanas, los intereses soviéticos en la producción petrolífera de Austria, y problemas de fronteras y minorías con Yugoslavia), y debido también a que la cuestión austríaca estaba sometida a las reglas del juego de la guerra fría, las negociaciones de los ministros de Exteriores en funciones de las cuatro potencias se prolongaron a lo largo de cientos de sesiones sin dar fruto, paralizándose

luego por completo y no experimentando tampoco ningún avance después de reiniciarse a comienzos de la década de 1950. Esta anulación sólo se produjo cuando el primer ministro de la India, Nehru, sirvió de mediador en Moscú, a instancias del ministro austríaco de Asuntos Exteriores, sobre la base de las ideas de neutralidad que se venían barajando en Austria desde el fin de la guerra. Después de nuevas y duras negociaciones y de la visita de una delegación austríaca a Moscú en abril de 1955, el 15 de mayo de 1955 el Tratado de Austria pudo ser firmado en Viena por los ministros de Asuntos Exteriores de las cuatro potencias, por una parte, y por su colega vienés, por la otra.

La neutralidad de la República alpina, que había recuperado así la soberanía, no se mencionaba para nada en el tratado, pero no obstante era su condición previa y también el presupuesto para la retirada de las tropas ocupantes. La neutralidad se proclamó en documentos legales propios, a saber, primeramente en una resolución unánime del Consejo Nacional del 7 de junio de 1955, y luego, el 26 de octubre de 1955, en la ley constitucional federal sobre la neutralidad, en la que Austria declaraba «su neutralidad permanente y voluntaria». Una vez en vigor, la ley fue notificada a todos los Estados con los que Austria mantenía relaciones diplomáticas. La mayoría de las naciones reconocieron acto seguido formalmente la neutralidad austríaca. El ejemplo se había tomado, lógicamente, de Suiza, cuya situación geográfica era similar a la de Austria. Pero había algunas diferencias esenciales tanto en el *status* legal como en la forma de entender políticamente la respectiva neutralidad. La forma suiza está garantizada internacionalmente y se basa además en una práctica de siglos; la austríaca sólo está reconocida. Hasta qué punto esto representa realmente una diferencia cualitativa de hecho es algo sin duda discutible. Ahora bien, los suizos podrían establecer alianzas si lo deseasen [202], en tanto que los austríacos han descartado expresamente tal posibilidad, es decir la renuncia voluntaria a la neutralidad. Por otra parte, en Austria se da gran importancia a la posibilidad de interpretar la proclamación de neutralidad como algo totalmente voluntario y no impuesto (o, si se quiere, derivado de la presión soviética). En Austria se aceptó en efecto con sorprendente rapidez el *status* de neutalidad, considerado como elemento esencial de la cultura política. En la consulta sobre la ley de neutralidad, el canciller federal Raab declaró en el Consejo Nacional que la «libertad intelectual y política del individuo, y especialmente la libertad de prensa y expresión», no se verían afectadas, así como tampoco se «establecía obligación alguna de neutralidad ideológica» [203]. Pero los po-

líticos austríacos entendieron también desde un principio la neutralidad como un mandato de prestación de servicios dentro de la vida internacional, de compromiso dentro de la Organización de las Naciones Unidas y de actividades mediadoras de la más diversa índole, lo que a los ojos de los suizos, quienes tenían una concepción más purista de la neutralidad, aparecía como «celo apostólico neutralista» [204]. Austria, a diferencia de Suiza (y a diferencia, naturalmente, de Suecia), descuida más bien el principio de la neutralidad armada, o al menos no realiza grandes esfuerzos en el campo militar. Viena confía más en los medios diplomáticos que en los militares, cosa por otra parte también tradicional en Austria.

3. Europa oriental, bajo el dominio de Stalin

I. LA UNION SOVIETICA DESPUES DE 1945

a. *Reconstrucción económica*

La terrible tensión a la que se había visto sometida la población soviética durante la segunda guerra mundial no cedió esencialmente con la capitulación de Alemania y Japón. Junto al objetivo de asegurar los territorios conquistados, que finalmente habría de conducir al país a la llamada «guerra fría», Stalin impuso al país otras metas elevadas, como la reconstrucción de los territorios destruidos [1]. La devastación producida por la guerra era inmensa, estimándose en cerca de 70 000 el número de pueblos que fueron completamente aniquilados y siendo innumerables las ciudades víctimas de daños graves e irreparables. Casi un tercio de la población del terreno de operaciones —más de 25 millones de personas— se quedó sin hogar y aproximadamente uno de cada diez habitantes cayó en la guerra, fue asesinado o murió a causa de enfermedades ocasionadas por la guerra o de hambre. Las instalaciones industriales del terreno de operaciones que no se contaban entre las 2 500 empresas que habían podido ser trasladadas a los Urales, Siberia occidental, Kazakistán o Asia central en el verano y el otoño de 1941 y sustraídas a los alemanes, fueron destruidas en su mayoría durante los combates o la retirada alemana, y 6 000 empresas tuvieron que ser reconstruidas. A ello se sumaba el agravante de las inmensas pérdidas sufridas también por los transportes, cuya infraestructura había quedado, en su conjunto, gravemente dañada. No menores eran las pérdidas de la agricultura y en especial de la ganadería: las cabezas de ganado de 1945 se situaban en un 40% por debajo del nivel de 1940. Cierto es que inmediatamente después de la reconquista ya se había empezado a reconstrutir los territorios liberados con medios locales y regionales, pero los recursos no bastaban en modo alguno y, dado que la concentración de todas las fuerzas en el esfuerzo bélico siguió siendo hasta mayo de 1945 el postulado de todas las medidas políticas y económicas, antes del fin de la guerra era im-

pensable una verdadera reconstrucción. Sólo después de la derrota de Japón el 19 de agosto de 1945, Stalin ordenaría la introducción del IV Plan Quinquenal, autorizado en marzo de 1946 por el Soviet Supremo de la URSS. Sin tener en cuenta la destrucción de las zonas industriales occidentales y ucranianas, cuya producción fue en 1945 aproximadamente un tercio de la de 1940, algunos de los objetivos del plan para 1950 se situaban muy por encima de los resultados obtenidos en el último año de paz. Así, la renta nacional debía aumentar en un 38%, la producción industrial en un 48% y la agraria en un 27%, de acuerdo con el objetivo expresado de «reconstruir las zonas del país afectadas por la guerra y recuperar el nivel de antes de la guerra en la industria y en la agricultura para luego superarlo en medida considerable»[2]. Sin tener en cuenta la penuria de la población, cuyo abastecimiento de bienes de consumo había tenido que ser reducido ya a un mínimo durante la guerra, Stalin perseveró en el fomento prioritario de la industria de bienes de equipo. Esto ya se había vislumbrado en su discurso del 9 de febrero de 1946, pronunciado en su distrito electoral moscovita, al declarar Stalin que el abastecimiento de armas y municiones a la tropa durante la guerra sólo había sido posible gracias al rápido y desproporcionadamente fuerte desarrollo de la industria pesada, indicando al mismo tiempo que sin duda se había vencido «al fascismo», pero que el enfrentamiento entre el socialismo y el capitalismo persistía. La ley del IV Plan Quinquenal consideraría también luego «el sucesivo incremento del poder defensivo de la URSS y el equipamiento de sus fuerzas armadas con el armamento más moderno» como uno de los objetivos más importantes del plan[3], que en consecuencia destinó el 87,9% de las inversiones industriales a la industria de bienes de equipo y sólo el 12,1% a la de bienes de consumo. El principio fundamental de la política económica soviética de los años treinta se mantuvo pues intacto, exigiéndose nuevos sacrificios de la población sin tener en cuenta la enorme demanda acumulada. Cierto es que se anunció un aumento de la producción de bienes de consumo y una elevación del nivel de vida de los «trabajadores» mediante una reducción de todos los precios de artículos de consumo masivo, pero en principio nada cambió para la población.

El año de 1946 sería incluso uno de los años de paz más difíciles de la Unión Soviética. La mala cosecha de aquel año —sólo 40 millones escasos de toneladas de cereales frente a los 47,3 millones de 1940, a pesar de la ampliación de la superficie de cultivo— obligó a mantener las bajas raciones de alimentos

de los últimos tiempos de la guerra, convirtiéndose en una pesada carga. Las condiciones de trabajo eran con frecuencia extremadamente duras, especialmente en lo que se refiere a la reconstrucción de los pozos de carbón inundados por las tropas alemanas en su retirada y de la industria metalúrgica destruida en Ucrania. A ello se añadía el hecho de que las autoridades del plan y los directores de las empresas se veían enfrentados a problemas completamente desconocidos, derivados de esta situación de excepción. Por otra parte, tras el gigantesco esfuerzo realizado en los años de la guerra, era inevitable una postración general. La reinserción de los soldados desmovilizados, cuyo número ascendía en 1946 a cerca de tres millones, produjo un sinnúmero de dificultades, desde la reunión de las familias y la consecución de alojamiento hasta la adaptación a las condiciones laborales de la industria, que habían cambiado durante la guerra con la ayuda de los asesores norteamericanos, bien mediante la racionalización del proceso de producción, bien mediante la introducción de la estandarización (introducción del sistema de normas GOST) o de nuevas tecnologías. La baja de muchos jubilados que habían vuelto a trabajar o habían seguido trabajando durante la guerra provocó problemas adicionales a las empresas, que con ellos perdían una mano de obra con experiencia. En tales circunstancias es casi natural que la producción del primer año de paz se quedase muy por detrás de los objetivos propuestos por el plan.

La reorganización de la dirección de la economía tuvo también un efecto perturbador. Los comisarios del pueblo especiales creados durante la guerra para ciertas ramas de la industria de armamento —como por ejemplo la de la construcción de tanques— fueron disueltos, estableciéndose otros nuevos para ciertos campos esenciales de la economía de paz, tales como la maquinaria agrícola, la construcción, etc. Con esta división de competencias el planificador y economista más importante de la Unión Soviética en aquellos años, Voznesenski, trataba de afrontar la especialización y la diferenciación crecientes de la economía. El número de ministerios en aquel momento —desde el cambio de denominación de los antiguos comisariados del pueblo el 15 de marzo de 1946— encargados de la industria y de la construcción aumentó en los años 1946-1947 a 33 (frente a los 21 de 1939). Al mismo tiempo, la dirección de estos ministerios de ramo pasó a manos de expertos, a quienes se consideraba más avezados en los problemas de su competencia que a sus predecesores, procedentes de las filas del partido. A fin de contrarrestar los egoísmos de ramo, quedaron subordinados a secretarios

especiales del Comité Central del PCUS con una función de control y guía. Ahora bien, con ello sólo se logró posponer los problemas, ya que la coordinación de los diferentes ministerios resultó a todas luces ser tanto más difícil cuanto más compleja se hacía la estructura económica del país con la introducción de nuevas producciones y cuanto más fuerte era el crecimiento de la industria. La lentitud y torpeza del sistema de planificación y su escasa flexibilidad frente a derroteros nuevos o inesperados, claramente manifiestas justamente en la fase de reconstrucción, aconsejaban la reestructuración de la dirección central de la economía, el Gosplan. Al ponerse de manifiesto que la producción tampoco había alcanzado en 1947 las metas propuestas, el Gosplan se transformó en diciembre de 1947 en un simple órgano de planificación con el rango de comité estatal, y el abastecimiento y la competencia en cuanto a innovaciones técnicas fueran confiados a dos comités de nueva creación, el Gosnab y el Gostechnika.

Cuando en agosto de 1948 también fue separada del conjunto y supeditada directamente al Consejo de Ministros la Oficina de Estadística, la en otros tiempos todopoderosa autoridad económica se vio relegada a un modesto lugar; el relevo de Voznesenski, su director, ya sólo tendría una importancia marginal.

Para paliar rápidamente los daños de la guerra, la Unión Soviética necesitaba ayuda extranjera, ayuda que se esperaba sobre todo de los aliados. De ahí la extraordinaria dureza con que afectó al país la brusca interrupción de los suministros americanos después del Acuerdo de Préstamo y Arriendo de agosto de 1945, ya que, al igual que en Gran Bretaña, la balanza de pagos de la Unión Soviética registraba como consecuencia de la guerra un desequilibrio catastrófico: frente a las exportaciones, que ascendían a 1 400 millones de rublos, las importaciones del año 1945 ascendían a 14 800 millones (incluyendo los suministros en préstamo y arriendo). La URSS dependía pues en gran medida del apoyo exterior. La ayuda proporcionada por el UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) para las regiones asoladas y los créditos británicos y suecos no sirvieron sino para superar las crisis más graves. Finalmente, con el rechazo del Plan Marshall por motivos políticos en el verano de 1947, al cual se adhirieron también bajo la presión masiva de Moscú los Estados de Europa oriental situados dentro del ámbito hegemónico soviético, la Unión Soviética ya sólo contaría con sus propias fuerzas, las del área controlada por ella.

Los países del Este, principalmente los antiguos Estados enemigos, inmediatamente después de acabar la guerra habían sido

llamados a colaborar en gran medida en la reconstrucción soviética, bien mediante las llamadas «sociedades mixtas», con un 50% de participación soviética [4], bien mediante reparaciones en forma de suministro de mercancías (sobre todo en el campo de la construcción de máquinas, de la industria óptica y de la electricidad; y también de petróleo, azúcar, grasas y otras materias primas y productos alimenticios), o mediante el desmontaje de instalaciones de producción. Esto último afectó de forma especial a la zona alemana de ocupación soviética (*Sowjetische Besatzungszone*, SBZ), aunque también a Hungría y Rumanía, llegándose incluso a desmontar empresas en la Manchuria ocupada. La Unión Soviética estimó sus exigencias de reparaciones frente a Alemania en 10 000 millones de dólares, para cuya satisfacción, tras la polémica en torno a la política de desmontaje entre los antiguos aliados de Moscú, ésta siguió dependiendo de la SBZ. Este desmontaje, a pesar de la forma diletante en que con frecuencia se llevó a cabo, amplió notablemente las posibilidades de producción de la URSS, como por ejemplo las de la industria óptica, con el traslado de la fábrica Zeiss de Jena junto con una gran parte de sus empleados, que dio lugar a un enorme incremento de la capacidad de producción y del nivel tecnológico; lo mismo se puede decir de las industrias química y gráfica. En el sector armamentista, la integración del centro experimental de cohetes de Peenemünde en la industria soviética de armamento fue el punto de partida del desarrollo de los cohetes de largo alcance, creando las bases para la fabricación de armas estratégicas soviéticas. Además de las numerosas patentes de las que se apoderó, la Unión Soviética se aseguró también la mano de obra de expertos alemanes mediante contratos obligatorios. Sólo en la gran acción de mayo-junio de 1947 serían conducidas a la URSS más de 100 000 personas, y junto con la mano de obra cualificada se produciría una enorme afluencia de tecnologías muy avanazadas. De las empresas restantes, las más importantes para la economía soviética, al igual que en Hungría y Rumania, fueron convertidas por la orden núm. 167 del 5 de junio de 1946 de la SMAD (*Sowjetische Militäradministration in Deutschland*, Administración Militar Soviética en Alemania) en sociedades anónimas soviéticas (*Sowjetische Aktiengesellschaften*, SAG). La orden lleva el significativo título de «Sobre el paso de las empresas alemanas a propiedad de la URSS en virtud de las exigencias de reparación de la URSS». Las 25 SAG, con 213 empresas individuales —la más importante era la llamada «Wismut-AG» con su explotación de uranio exclusivamente destinado a la URSS—, producían en general sólo para la Unión Soviética, siendo

por ello también prioritario su abastecimiento por la economía de la SBZ. Hasta la fundación de la RDA no serían devueltas al gobierno de Berlín oriental, las últimas de ellas en 1954. En conjunto, se puede decir que la Unión Soviética obtuvo realmente el total de las reparaciones evaluadas, aun cuando la relación oficial de la zona oriental, que subestima considerablemente muchas prestaciones y ni siquiera incluye algunas, sólo registre suministros por valor de 4 300 millones de dólares [5].

Con independencia de todo ello, el peso principal de la reconstrucción recayó en la población soviética; las reparaciones no fueron sino una simple ayuda. Ante el atraso de plan en 1946-1947, los trabajadores fueron exhortados, sobre todo desde 1948, a multiplicar sus esfuerzos [6]. Finalmente los turnos especiales en días festivos, la difusión masiva de la «competencia socialista» para el aumento de la productividad y de los diversos «movimientos innovadores» al estilo del movimiento estajanovista de antes de la guerra, y la rígida aplicación de las disposiciones laborales legales hicieron que no sólo se alcanzasen los altos objetivos del plan para el año 1950 en el ámbito de la industria de bienes de equipo, sino que incluso fuesen superados, una de las condiciones para el apoyo masivo de la Unión Soviética al régimen de Corea del Norte durante la guerra de Corea.

Especialmente digno de tener en cuenta fue el enorme incremento de la producción de energía eléctrica. Las tres gigantescas centrales eléctricas de alta potencia, las centrales hidroeléctricas situadas a orillas del Volga, cerca de Stalingrado y Kuibishev, y a orillas del Dniéper, cerca de Kajetovka, llamadas «construcciones estalinianas (más tarde: grandes construcciones) del comunismo», elevaron, tras su puesta en funcionamiento, la producción de energía eléctrica en 22 500 millones de kv/h, más de un quinto de la producción total, que de 48 300 millones de kilovatios/h (1940) pasó a 91 200 en 1950 (el plan preveía 82 000 millones de kv/h. En cambio, en la producción de bienes de consumo se siguieron consignando atrasos —al igual que en la época de antes de la guerra—, muy graves en algunos ámbitos; la producción de tejido de algodón se situó en cerca de un 20%, y la de calzado en cerca de un 15% por debajo de los objetivos del plan, siendo también completamente insuficiente el abastecimiento de artículos domésticos. La población podía sin embargo sentirse orgullosa de sus logros, a los cuales contribuyó también sin duda la reforma monetaria de diciembre de 1947, que eliminó en gran medida el excedente de poder adquisitivo surgido durante la guerra. Iba dirigida, ante todo, contra los altos beneficios conseguidos y acumulados. El dinero

se cambió solamente hasta una suma determinada en la proporción 1:10; las cuentas de ahorro de hasta 3 000 rublos en la proporción 1:1, y las sumas más elevadas por cantidades progresivamente inferiores. Con ello se creó un nuevo estímulo para participar en el reparto de primas mediante el aumento del rendimiento, toda vez que la supresión de los racionamientos tras la excelente cosecha de 1947 ofrecía un incentivo adicional para la compra.

La cenicienta del desarrollo siguió siendo la agricultura. Cierto es que el suministro de tractores y cosechadoras aumentó extraordinariamente —la cifra del plan, de 112 000 tractores, fue superada en un 125% en 1950, con 242 500 tractores—; ahora bien, los resultados de la cosecha en el quinto año del plan no fueron esencialmente superiores a los de antes de la guerra. Las restricciones a los campesinos de los koljoses, a quienes durante la guerra se les habían permitido ciertas cosas, los experimentos en técnicas agrícolas, tales como la introducción de pastos en el sistema de rotación de los cultivos, la influencia de un charlatán como Lysenko, a cuyos puntos de vista debió acomodarse la agricultura, y las graves cargas financieras de los koljosianos desembocaron en este estancamiento. Algunas decisiones equivocadas, de consecuencias fatales, de la dirección central moscovita, tales como la creación de franjas para la protección del bosque en las regiones del sur de Rusia ordenada por el propio Stalin, cuyos costes debían ser sufragados por los koljoses, y la imposición de planes de cultivo, decretados sin tener en cuenta la situación concreta de cada región, no sólo dilapidaron un valioso capital, sino también la confianza y la buena disposición a la cooperación.

Al igual que en la década de 1930, los campesinos de los koljoses hubieron de soportar una enorme carga. La reconstrucción de las casas y de los establos destruidos tuvo que ser realizadas con los propios medios —los koljoses estaban excluidos de los suministros estatales de material de construcción y electricidad—, teniendo que soportar también desde 1948 considerables cargas tributarias. Los precios estatales para la compra de los productos agrícolas permanecieron fijos, pero los costes de producción, principalmente los de transporte, aumentaron al mismo tiempo de forma considerable. En tanto que las explotaciones estatales (sovjoses), que además disfrutaban de diversos privilegios, obtenían en 1952, 62 rublos como prima para cubrir los gastos, los koljoses eran bonificados con 8,25 rublos por el mismo concepto. Los ingresos de los campesinos eran igualmente bajos, aunque también aquí existían diferencias, y así los

koljoses de Asia central productores de algodón se beneficiaron del aumento de los precios del algodón y los koljoses próximos a las grandes ciudades estaban mejor situados que los apartados, especialmente los especializados en ganadería y fabricación de piensos. La economía privada de los campesinos de los koljoses dentro de sus tierras privadas (cerca de 0,5% hectáreas por familia), tampoco se libró de la represión estatal, que convirtió a los koljosianos en ciudadanos de segunda clase. Un aumento de los impuestos sobre los ingresos obtenidos de venta en el mercado de los productos de sus tierras provocó una recesión drástica de la producción de la agricultura privada, que tanta importancia tenía para el abastecimiento a la población de carne, verduras y fruta. Y así, hasta 1952 la cabaña privada de cerdos descendió en cerca de un 50% en comparación con 1940; la de ovejas y cabras en un 40% y la de vacas en un 16%. La dureza de Stalin hacia la población de los koljoses fue sin duda también una reacción ante la relativa mejora alcanzada por este grupo de la población durante los años 1941-1947, que significativamente se produjo poco después de la reforma monetaria, pero fue también la expresión de un menosprecio de raíz ideológica hacia los campesinos que, a despecho de la frecuente definición de la Unión Soviética como «poder de los obreros y campesinos», dividía a la población en dos grupos estrictamente diferenciados. No ha de asombrar pues que, sobre todo los jóvenes, tratasen de escapar a la miseria del koljós y que el éxodo rural constituyera uno de los mayores problemas de las autoridades agrícolas soviéticas —y también de los propios koljoses— que ha persistido hasta el día de hoy, si bien exento ya de la gravedad de otros tiempos.

b. *Redisciplinamiento ideológico*

La larga guerra no sólo había causado daños económicos: los acontecimientos bélicos habían obligado también a la dirección del partido a alejarse de su intransigencia ideológica. Este cambio táctico, cuya expresión más visible había sido la disolución de la Internacional Comunista (Komintern) y la reposición del patriarca ortodoxo de Moscú, no había pretendido únicamente tranquilizar a la opinión pública de los países anglosajones, en la cual persistía el temor al comunismo revolucionario mundial y que estaba marcada por un rechazo profundo y fundamental de toda clase de dictaduras, incluida la estalinista. La situación interna soviética había permitido también tal revisión. Se había

hecho evidente —por ejemplo, en la conducta de la población, especialmente la campesina, frente a las tropas alemanas en el verano y el otoño de 1941— que ni siquiera el adoctrinamiento más intenso había podido sofocar de forma duradera las tensiones y conflictos derivados de la industrialización y de la reestructuración social impuestas, y que el intento de Stalin de reprimir los problemas que surgían mediante la fuerza sólo había agrandado la distancia entre los afectados y el régimen. La consolidación del sistema gracias a una defensa eficaz del país había obligado a la dirección del partido a hacer concesiones, ya que sólo un consenso lo más amplio posible entre los gobernados y el gobierno podía movilizar a todas las fuerzas para la defensa. El alejamiento de la táctica socialista del «frente único», con su primacía de la lucha de clases, y la vuelta a la política nacional del «frente popular», proclamada por el movimiento comunista internacional en la segunda mitad de 1942 e implantada en 1943 respondieron también a la situación política interna de la Unión Soviética. Los múltiples contactos, surgidos de las exigencias de la guerra, con asesores británicos y americanos, se reflejaron en este ambiente distendido, dejando sus huellas sobre todo en el pensamiento de la élite intelectual, de la misma manera que el encuentro de millones de soldados soviéticos con las formas de vida de los países de Europa oriental y Alemania por ellos conquistados. La erradicación de estas influencias «burguesas» sería acometida por el partido poco después del fin de la guerra. La «reeducación» a ella ligada, una reideologización que marcó al conjunto de la vida intelectual y cultural de la Unión Soviética, estuvo estrechamente unida al nombre de Andrei Alexandrovich Zdánov. Este, considerado presunto sucesor de Stalin y su más estrecho colaborador, fue el representante del endurecimiento ideológico conocido por el nombre de «era de Zdánov» *(Zdanovscina).*

Zdánov (1896-1948) había entrado ya en contacto con los bolcheviques durante la primera guerra mundial, destacándose durante la guerra civil en la región de los Urales. Desde 1924 dirigió el trabajo del partido en Nizhni Novgorod, ganándose el aprecio de Stalin con su apoyo incondicional en el enfrentamiento de éste con Zinóviev y la posteriormente conocida como «oposición de derecha». En 1934, Stalin le nombró secretario del partido de la región de Leningrado, como sucesor del asesinado Kírov, confiándole así uno de los puestos más influyentes dentro de la jerarquía del partido. En 1939 lo llamó finalmente a formar parte del Politburó, la instancia decisoria suprema del partido. La elección de este hombre nunca tuvo que ser lamen-

tada por Stalin; Zdánov desempeñó también un papel excelente en la defensa de Leningrado. Ya en los años 1934-1938 había influido decisivamente en la política cultural soviética y había tomado también parte en el desarrollo del «patriotismo soviético», recurriendo a la tradición nacional de la Gran Rusia. De esta manera, al acabar la guerra recayó en él la dirección de la nueva campaña de disciplinamiento ideológico que habría de reconducir a la sociedad soviética marxista cerrada de antes de la guerra. La vuelta atrás era una prolongación, no sólo de método sino también de contenido, de la política cultural de los últimos años de anteguerra. Stalin, que desde siempre había dado la mayor importancia al adoctrinamiento político y para quien la literatura, el arte y la música tenían primordialmente la función de instrumentos para la manipulación de la conciencia —tal como se pone de manifiesto en su calificación del escritor como «ingeniero del alma» en su discurso electoral, ya citado, del 9 de febrero de 1946— anunció el cambio de rumbo al declarar que, a pesar de la victoria sobre Alemania y Japón, el antagonismo entre el capitalismo y el socialismo seguía existiendo y que, ante esta amenaza, la Unión Soviética necesitaba la misma decisión y unión a las que debía la victoria sobre Hitler. La nueva línea sería precisada después en el discurso de Zdánov ante el Comité Central del partido en septiembre. Esta era una franca declaración de guerra contra toda influencia extranjera: había que poner fin al «servilismo» frente a la decadente cultura burguesa de Occidente, que se había convertido ya en podredumbre; los escritores soviéticos debían producir literatura progresista y auténticamente socialista, teniendo siempre presente la superioridad del sistema socialista, en vez de imitar las chapucerías del sistema capitalista. Y pocos días después, el 21 de septiembre de 1946, decía a los escritores de Leningrado que la cultura soviética no debía tomar como guía la burguesa: su tarea era luchar a la ofensiva por el progreso y por una nueva moral socialista y verdaderamente humana. Como suele ocurrir, pronto se tomaron las primeras medidas para dar a estas exigencias el énfasis necesario. El Instituto Jurídico de la Academia de Ciencias de la URSS fue acusado de objetivismo, es decir, de desatención de la parcialidad, y de actitud cosmopolita. La poeta Anna Ajmátova, con prestigio también en el extranjero, y el igualmente renombrado Mijail Sotchenko fueron acusados de haber falseado en sus obras la realidad soviética. También a los filósofos se les aconsejó una «parcialidad combativa» consecuente y los compositores —entre ellos Dimitri Shostakovich, censurado ya públicamente en 1935— fueron exhorta-

dos a componer sus obras dentro del espíritu del «realismo socialista» y a mantenerse alejados del «formalismo antipopular y subversivo» y del «formalismo apátrida». Toda la campaña estaba impregnada de una hostilidad extrema contra Occidente y su cultura; aquel que simplemente daba la impresión de no adherirse con toda decisión a la condena obligada era considerado al menos sospechoso, cosa lo suficientemente peligrosa. Los historiadores soviéticos también tuvieron que esforzarse por observar la parcialidad exigida: siempre que fuese posible, debían evitar hacer mención de las influencias extranjeras en el desarrollo de Rusia, honrando en cambio debidamente a los héroes de la historia rusa. Con este telón de fondo surgió entre otras cosas la búsqueda, un tanto grotesca, de inventores rusos, que debía probar cuán grande había sido desde siempre la «fuerza creadora del pueblo ruso» y cuán progresistas los rusos. En la literatura volvía a predominar el «héroe positivo», recibiendo las más altas distinciones los autores de bodrios tales como «El caballero de la estrella dorada» y «Luz sobre la tierra» de Babaievski. Igulamente grave fue la reglamentación de las ciencias naturales. Así por ejemplo, las obras de Einstein estuvieron proscritas durante mucho tiempo, hasta que el Congreso de Física de Kiev del año 1959 las rehabilitó. El rechazo fundamental de Occidente fue con frecuencia acompañado de una preocupación de los ideólogos porque los modernos conocimientos de las ciencias naturales pudiesen cuestionar la doctrina del materialismo dialéctico, columna fundamental del marxismo.

Esta aplicación a la praxis política de la máxima del *Palmström* del poeta alemán Morgenstern —según la cual no puede ser lo que no debe ser— perjudicó sobre todo a la investigación científica y al desarrollo técnico de la Unión Soviética, perjuicio que no se manifestaría en toda su magnitud hasta la década de 1950. El punto de partida del aislamiento fue la decepción provocada por el escaso apoyo a la reconstrucción soviética por parte de los aliados occidentales, que en gran medida abandonaron al país a sus propias fuerzas. El enfrentamiento creciente con los antiguos aliados se interpretó finalmente como una confirmación de la teoría de la lucha de clases y la contradicción irreconciliable entre el sistema capitalista y el socialista. Ahora bien, la ideología así justificada disponía también de un recurso para movilizar a la población por sus objetivos políticos: la teoría de la superioridad de la sociedad socialista progresista. Stalin había expresado reiteradamente su convicción de que la ciencia soviética demostraría ser superior a la de Occidente. Si la Historia enseñaba —según demostraban los historiadores fieles a la línea del Partido— que

el «gran pueblo ruso» había producido ya en el pasado mucho inventores e investigadores innovadores, ello probaba que en el presente esto también tenía que ser posible. Ahora bien, de aquí se derivaba no sólo una cierta confianza en las propias fuerzas, sino también una estrechez de miras dogmáticas con la que se negó la historia del resto del mundo, lo que llevó, dada la pérdida de todo tipo de criterio comparativo, a una autoafirmación monomaníaca que supervaloraba en exceso las posibilidades propias y, por el contrario, subestimaba las de Occidente. Sintomático de las consecuencias derivadas de ello fue el caso del economista nacional más importante, Eugen Varga, quien en un estudio del desarrollo de la economía capitalista de posguerra dudó de que los Estados Unidos se encontrasen ante una profunda crisis inminente, tal como opinaba el Partido. En una discusión «científica» montada con todo el aparato escénico se falló el veredicto sobre su obra, y con ello también sobre él mismo. Dos años después era rehabilitado; la realidad había confirmado sus puntos de vista y corregido los de Stalin.

Los límites entre la propangada y la autosupervaloración son difíciles de precisar en lo que respecta a estas manifestaciones, pero el resultado —una conciencia misionera mesiánica que adquirió en parte rasgos chovinistas con el falseamiento parcial de la realidad— es evidente. El afán de superioridad de la Unión Soviética que de ello se derivó afectó también, indudablemente, a las nuevas «democracias populares», que tuvieron que supeditarse a la hegemonía soviética. El hecho de que este afán fuese unido al nacionalismo de la Gran Rusia radicaba en la función atribuida a la Historia por el materialismo histórico: de su legalidad se deducía la legitimación del sistema, aportando las pruebas de la «veracidad» de la doctrina, así como de la política del Partido. La remodelación revolucionaria de la vieja Rusia era, sin embargo, el resultado de su historia, de la historia del pueblo ruso, cuyo papel rector había quedado demostrado por el hecho de haber sido el primero en abrir, con la Revolución de Octubre, la puerta hacia la etapa final del comunismo en la historia de la humanidad, por lo que sus experiencias tenían también validez ejemplar —y obligatoria— para todos los demás pueblos que le sucedieran. Esta situación preferente fue también cimentada en las *Cartas de lingüística* de Stalin, publicadas en el verano de 1950, en donde entre otras cosas constataba que la lengua rusa —la lengua del pueblo ruso— siempre había salido victoriosa del encuentro con otras lenguas, adjudicando así de hecho a la lengua rusa el papel de lengua dominante, y no sólo frente a las demás nacionalidades de la Unión Soviética.

a. *Teoría de los «dos mundos» de Zdánov*

Este disciplinamiento ideológico no se circunscribió a la Unión Soviética; también se sometieron a él los partidos comunistas del extranjero. Para los países del ámbito hegemónico soviético, ello tuvo como consecuencia un cambio fundamental del sistema de dominio y del orden conjunto de la economía y de la sociedad derivado de éste. La decisión de los dirigentes soviéticos de erradicar la limitada autonomía de los otros partidos comunistas y «las vías nacionales hacia el socialismo», con su atención a los aspectos políticos y socioeconómicos específicos de los países de Europa oriental, y de convertirlos en meros Estados satélites fue provocada claramente por el anuncio del Plan Marshall y por la aceptación entusiástica con que fue acogido sobre todo en Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Esta decisión resultó tanto más fácil de tomar por cuanto la firma de los tratados de paz con los antiguos «Estados enemigos» hacía innecesario el esfuerzo por lograr un mayor consenso con los antiguos aliados en lo relativo a cuestiones de Europa oriental. El viraje soviético hacia el enfrentamiento abierto no fue sin embargo provocado únicamente por la nueva política de los Estados Unidos; contribuyó también a éste, de forma especial, la decepción por la falta de ayuda de Occidente para la reconstrucción, reforzada aún más por su actitud en las cuestiones relativas a las reparaciones y al desmontaje, y el creciente rechazo del socialismo de cuño soviético por parte de la opinión pública de Europa occidental. Esta tendencia era considerada por Moscú tanto más sospechosa cuanto era compartida y determinada en lo esencial por las élites europeas occidentales, entre cuyos objetivos políticos durante los primeros años de posguerra predominaba el ideario socialista (que influyó incluso en los programas de los partidos conservadores, como por ejemplo el programa de Ahlen de la CDU), no pudiendo ser evitada ni siquiera por los partidos comunistas de Italia y de Francia, numéricamente fuertes.

A finales de septiembre de 1947, los dirigentes de los partidos comunistas de Europa oriental, así como del PCF y del PCI, se reunieron en Schreiberhau (Sklarska Poreba), en los montes de Silesia. Malenkov y Zdánov representaban al PCUS, y el último pronunció el discurso fundamental[7], cuyas conclusiones para el movimiento comunista internacional fueron extraídas por él del discurso electoral de Stalin del 9 de febrero de 1946: dado que el mundo se hallaba dividido en dos campos y que los Estados

Unidos trataban de agrupar a los países capitalistas en una organización contra la Unión Soviética, todos los comunistas estaban obligados a enfrentarse decididamente a esto en interés también de su supervivencia. Para la coordinación de su política, los participantes en la conferencia acordaron crear una Oficina Comunista de Información (Kominform), cuya sede fue establecida, por deseo de Stalin, en Belgrado (tras la exclusión de Yugoslavia se trasladaría a Bucarest). Esto pareció ser un gesto de reconocimiento al partido yugoslavo, que debido a los éxitos obtenidos se arrogaba una posición especial (junto al PCUS), pero al mismo tiempo era también una obligación y una forma de control de los dirigentes yugoslavos cuya autonomía era observada por Stalin con desconfianza creciente. El propio Kominform, en el que, desde el ingreso de Albania el 27 de octubre de 1947, estaban representados diez partidos europeos, no funcionaria en el período ulterior sino como simple órgano de aclamación de las decisiones soviéticas; no había sido concebido como la institución sucesora de la Internacional Comunista, disuelta en 1943, sino simplemente para otorgar mayor peso con su aprobación a las disposiciones adoptadas por Moscú. La misma asignación al Kominform de funcionarios de segunda categoría revelaba su debilidad política. Stalin se cuidó muy bien de permitir que surgiera una institución que —como la Komintern— hubiese podido convertirse, en virtud del prestigio y de la potencia política de sus colaboradores, en rival de la central comunista de Moscú. La dirección de la revolución mundial debía seguir en Moscú, y con ello en sus manos. (Stalin procuró también, movido por la desconfianza, que todos los tratados entre Estados comunistas sólo fuesen firmados bilateralmente, pues únicamente así se podía en su opinión, evitar el nacimiento de agrupaciones especiales y salvaguardar la hegemonía de Moscú.)

La importancia de la Conferencia de Schreiberhau se debió, más que a la fundación del Kominform —al que Jruschov dejaría morir sin pena ni gloria en 1956, después de haber agonizado lentamente durante años—, a la vuelta aquí acordada a la lucha de clases, suspendida bajo el signo de la lucha contra Hitler pero convertida ahora de nuevo en máxima política de las acciones comunistas por la teoría de los «dos mundos». Las consecuencias de este acuerdo no sólo se dejaron sentir en Francia e Italia —en donde el PCF y el PCI (duramente atacados por la conferencia, ya que el representantes yugoslavo Djilas y el primer secretario del PPR [Polska Partia Robotnicza, Partido Obrero Polaco] Vladislav Gomulka les acusaron de oportunistas por haber perdido, al acabar la guerra, la ocasión de hacerse con el poder) trataron

de sabotear el Plan Marshall mediante huelgas y con ello la reconstrucción económica de sus países, a fin de provocar una crisis revolucionaria que propiciase la toma del poder por los comunistas—, sino que también los partidos comunistas de Europa oriental dejaron de tener las consideraciones con las otras fuerzas políticas de sus países mostradas hasta entonces por temor a que la reacción de Occidente hiciera peligrar las relaciones económicas y las medidas de ayuda y pusieron fin a la fase de cooperación, independentemente de la forma que ésta hubiese adoptado en cada caso particular, con los partidos no comunistas. La conferencia marcó pues la transición de la fase de la «política de bloque antifascista-democrática» a la «democracia popular», que se tenía por una «segunda vía hacia el socialismo» (junto a la «dictadura del proletariado» practicada en la Unión Soviética por el PCUS). En el tiempo que siguió, los partidos no comunistas —siempre y cuando se considerase oportuna su superviviencia, como por ejemplo en la RDA— sólo sirvieron de camuflaje al monopolio comunista del poder, procurándose que su dirección estuviese en manos de fieles vasallos del régimen comunista. Como fuerzas políticas autónomas, ya en la época anterior se habían visto limitados sistemáticamente en sus posibilidades de actuación, viéndose progresivamente excluidos de la configuración de su país; sus dirigentes políticos fueron apartados a finales de 1947 y acusados de alta traición y ejecutados, como les sucedió al socialdemócrata Nikola Petkov en Bulgaria y al dirigente del Partido Agrario rumano Maniu, cuando no huyeron a tiempo al extranjero, como los dirigentes de la oposición el polaco Stanislav Mikoliczyk y el húngaro Zoltan Pfeiffer (el dirigente del Partido de los Pequeños Propietarios húngaro, Ferenc Nagy, prefirió inteligentemente no regresar siquiera de sus vacaciones veraniegas en Suiza). Finalmente, el 30 de diciembre de 1947, el rey Miguel de Rumania, suficientemente aislado entre tanto, abdicó, después de una entrevista con el enviado especial soviético Vichinski, con lo que desaparecía todo obstáculo en el camino del Partido Comunista Rumano hacia el poder. El último que logró triunfar fue el Partido Comunista de Checoslovaquia. Las relaciones de este país con Occidente y su expuesta proximidad fronteriza habían inducido a Klemens Gottwald y a los comunistas checoslovacos a observar una reserva especial, a pesar de que el partido contaba con un número muy elevado de afiliados. Tras una curiosa preparación, en febrero de 1948 se realizó bajo la dirección del secretario soviético de Asuntos Exteriores, Valentin Sorin, en cuyas manos se hallaban todos los hilos de la embajada de la Unión Soviética en Praga, el golpe de Estado a consecuencia

del cual moriría el hijo del fundador de la República Checoslovaca, Jan Masaryk. El presidente Benes no pudo sino reconocer el fin de la democracia parlamentaria en Checoslovaquia, resignado ante la presión comunista. De cara al exterior, la unión de los Estados comunistas fue documentada mediante una red de tratados bilaterales que completaban los tratados de amistad y ayuda mutua firmados ya anteriormente entre los Estados de la coalición antihitleriana mediante la inclusión de los antiguos Estados enemigos. Con la firma del tratado húngaro-checoslovaco en abril de 1949 se erigía un sistema de alianzas que comprendía todo el conjunto de Europa oriental, con la salvaguardia formal de la soberanía de cada Estado en particular. Sin embargo no había ninguna duda de que el auténtico centro de poder era Moscú. La renuncia a instituciones supranacionales, posibilitada por los tratados bilaterales, aseguraba precisamente la indiscutible supremacía de la Unión Soviética; la existencia de instituciones comunes superiores habría implicado el peligro de que los Estados comunistas menores hubiesen podido defender con más fuerza sus intereses frente a los deseos de la URSS.

b. *La expulsión de Yugoslavia*

La condición previa para una unión institucional de tal índole era, desde el punto de vista de Moscú, la completa unificación de los partidos comunistas, su sumisión absoluta a la política de Moscú. Los dirigentes soviéticos seguían ya desde hacía tiempo con desconfianza los planes para la creación de una federación balcánica, apoyada sobre todo por Tito y por el dirigente del partido búlgaro Dimitrov, que retomaban ideas de las cuales se había hablado ya en los años de anteguerra para superar más fácilmente en la Europa sudoriental las dificultades políticas y económicas derivadas de la desaparición de los Estados multinacionales de Turquía y Austria-Hungría. Las primeras conversaciones acerca de una confederación yugoslavo-búlgara, de las que Stalin estaba informado, tuvieron que ser interrumpidas a finales de enero de 1945 ante la enérgica protesta del gobierno británico, pero Tito y Dimitrov siguieron con su plan en el verano de 1947 en su encuentro de Bled, en el que una vez más se puso de manifiesto la existencia de profundas discrepancias entre ambos gobiernos en cuanto a la concepción del reparto de poder, pues en tanto que Dimitrov perseguía una federación de dos Estados, Tito sólo quería otorgar a los búlgaros el mismo rango que a los diferentes pueblos agrupados dentro de la federación yugoslava, cosa

que, teniendo en cuenta las grandes ambiciones de Tito, hubiese tenido como consecuencia la hegemonía de los yugoslavos. Por ello se consideró la ampliación de la federación, con la inclusión de Rumania, Albania y Hungría, a fin de contrarestar el excesivo peso yugoslavo, lo cual lógicamente habría significado una concentración de poder en el flanco meridional de la Unión Soviética que Stalin no estaba dispuesto a aceptar. No obstante, hasta finales de 1947 confió en que Tito, al igual que en otras ocasiones conflictivas con Moscú, acabaría por cambiar de actitud y por renunciar a sus ambiciones. Los problemas con este yugoslavo tan seguro de sí mismo que se ufanaba de haber llevado al partido comunista al poder en su país sin el apoyo directo de Moscú ya habían sido múltiples, pero justamente en la controversia en torno a las sociedades mixtas yugoslavo-soviéticas, que había empeorado considerablemente las relaciones, se había llegado a un acuerdo del agrado de Stalin. Ahora bien, los planes federativos tenían mayor peso político. El ingreso del PC de Albania en el Kominform (27 de octubre de 1947), que significó una notable revalorización de este pequeño país, fue interpretado como una primera advertencia, ya que hasta ese momento Albania había sido de hecho, con la aceptación de Moscú, un satélite de Yugoslavia, y los dirigentes del partido fieles seguidores de Tito, siendo considerados hasta tal punto vasallos de Belgrado que el PC albanés ni siquiera había sido invitado a la Conferencia de Schreiberhau. Tito, sin embargo, no estaba dispuesto a someterse dócilmente a Stalin. El triunfal recibimiento que se le dispensó en sus visitas a Budapest y Bucarest con motivo de la firma de los tratados de amistad con Hungría y Rumania no pareció sino una confirmación de sus ambiciosos planes. Con ello no logró, empero, otra cosa que alarmar a Moscú, y así, cuando el 17 de enero de 1948 Dimitrov anunció con la firma del pacto rumano-búlgaro que esto sólo era un paso previo a una unión más amplia, declarando cuatro días después en una conferencia de prensa que la confederación prevista incluiría también a Polonia y Checoslovaquia, Stalin intervino; el órgano oficial del Partido, *Pravda*, publicó un artículo en el que se exponía sin lugar a dudas la actitud soviética. Las democracias populares debían impulsar el desarrollo de sus países como Estados soberanos conforme a lo acordado en la Conferencia de Schreiberhau en lugar de discutir acerca de una «federación o confederación, o unión aduanera problemática y artificial». En las entrevistas celebradas a continuación con los dirigentes búlgaro y yugoslavos llamados a Moscú —Tito envió en su representación a Kardelj y Bakaric, en tanto que Dimitrov se atrevió a entrar personalmente en la guarida

del león— Stalin fue aún más claro. «Las relaciones entre 'democracias populares' por encima de los intereses de la Unión Soviética y sin contar con su aprobación», resume Djilas como participante en las conversaciones, «eran improcedentes»[8]. Particularmente escandalizado se mostró también Stalin por los preparativos para el estacionamiento de tropas yugoslavas en Albania, acordado entre Belgrado y Tirana sin consultar con Moscú ante el levantamiento comunista en Grecia. A fin de obligar a la sumisión a los voluntariosos yugoslavos, los días 18 y 19 de marzo Stalin llamó a la Unión Soviética a los asesores militares y económicos soviéticos. Este paso afectó duramente al país. La industrialización, recién iniciada, difícilmente podía proseguirse sin la ayuda de la Unión Soviética; la ruptura precipitó a Yugoslavia en una profunda crisis económica con todos sus efectos negativos en el ámbito social y político. La dirección del partido yugoslavo trató entonces de inducir a Stalin, a lo largo de un dilatado intercambio epistolar, a poner fin al conflicto, sin renunciar no obstante a su insistencia fundamental en la soberanía ilimitada del país. Pero ni el celo demostrado en la observación de prácticas estalinistas en su política interior ni el encarecimiento verbal de su adhesión inquebrantable a la causa comunista dieron ningún fruto; las respuestas de Moscú fueron cada vez más tajantes. Tito y sus colaboradores habían dado ciertamente a Stalin motivo para ello. En abril se llevaron a cabo en el país «depuraciones» con las cuales fueron eliminados los partidarios de la Unión Soviética; evidentemente, los dirigentes del PC de Yugoslavia temían un golpe de Estado apoyado por los soviéticos. Finalmente, Stalin invitó el 20 de junio de 1948 a la celebración de una conferencia en Bucarest a los partidos del Kominform en la que los dirigentes yugoslavos tenían que rendir cuentas. Ahora bien, dado que éstos no se hallaban dispuestos a abandonar sus puntos de vista y que sabían muy bien que su condena por parte de la conferencia era cosa hecha —el órgano del Kominform publicó el 15 de junio un duro artículo contra aquellos comunistas que «no reconocen sus errores», sobre cuyo destinatario no podía existir ninguna duda—, prefirieron permanecer ausentes de la conferencia, asegurando sin embargo en una declaración dirigida al Kominform que estaban dispuestos a negociar directamente con la Unión Soviética, pero en Yugoslavia. El 28 de junio, la conferencia acordó una resolución «Sobre la situación en el Partido Comunista de Yugoslavia» en la que se exponía una larga lista de faltas, reprochándosele, entre otras cosas, su alejamiento del marxismo-leninismo, su nacionalismo pequeñoburgués, su política agraria equivocada, su tolerancia hacia los vestigios capitalis-

tas, su falta de autocrítica y su «actitud poco satisfactoria» frente a la Unión Soviética, con lo que el PC yugoslavo se había alejado por sí solo de las filas de los partidos comunistas, lo que prácticamente significaba la exclusión del «campo socialista» con todas sus consecuencias.

Haciendo caso omiso de ello, Tito siguió buscando caminos para llegar a un entendimiento, a pesar de que la resolución del Kominform había exhortado a «las fuerzas sanas» del partido yugoslavo «a obligar a sus dirigentes actuales a confesar abierta y sinceramente sus errores o... a derrocarlos». El 2 de julio de 1948 Tito dirigió un telegrama a Stalin con el ruego de retirar las acusaciones contra el partido y el Estado de Yugoslavia, expresándole una vez más su adhesión al movimiento comunista. En el V Congreso del PC yugoslavo, a finales de julio, él y sus partidarios se esforzaron sinceramente por presentar su política como estrictamente comunista y apelar a la comprensión de Stalin. En un período posterior, Tito también demostró que Yugoslavia seguía fielmente los principios del marxismo-leninismo.

Stalin se mostró sin embargo decidido a dar una lección con Yugoslavia. La situación en Alemania se había agravado peligrosamente con las medidas tomadas en el caso de Berlín, y en estas condiciones era todavía menos proclive a aceptar atentados contra el «centralismo democrático». Los peligros a los que estaba expuesto su poder sólo se podían afrontar mediante una dirección firme y unificadora de todas las fuerzas, análogas a la ya experimentada en la segunda guerra mundial; no había lugar para intereses nacionales particulares. Pero al parecer no había contado seriamente con que Yugoslavia se mostraría inflexible y con que perdería a este país tan importante desde el punto de vista estratégico y político. Cuando se puso de manifiesto que el derrocamiento de Tito era algo impensable y que el PC de Yugoslavia le respaldaba, los Estados del Kominform se contentaron en un principio con el endurecimiento de su propaganda difamatoria contra la dirección del país, al ser imposible una intervención militar, dada la situación existente en Europa central, y al no descartarse tampoco la posibilidad de que las potencias occidentales atendiesen una petición de ayuda de Tito. Una vez que, hacia finales de 1948, se puso de manifiesto que Tito no renunciaba a su independencia, comenzó una guerra económica contra el país, que aún se resentía gravemente de las secuelas de la guerra. Esta guerra parecía prometer buenos resultados por cuanto la economía yugoslava dependía por completo en su comercio exterior de los países del Kominform, y principalmente de la Unión Soviética. Las primeras medidas fueron una elevación —de

hasta un 40%— de los precios de suministros ya acordados y el incumplimiento de los contratos de suministro firmados. En el verano de 1949, siguiendo las órdenes de Moscú, se interrumpió la práctica totalidad del comercio de los países del Kominform con Yugoslavia (en 1946 dos tercios de sus importaciones procedían de ellos); la disolución de las sociedades mixtas yugoslavo-soviéticas de tráfico aéreo (JUSTA) y de navegación fluvial (JUSPAD) acabaría poniendo punto final a las últimas relaciones comerciales [9]. Con ello se hacía prácticamente imposible la realización del I Plan Quinquenal yugoslavo, iniciado en 1947, cuyos ambiciosos objetivos, que pretendían convertir al país en la primera potencia industrial de Europa sudoriental, tuvieron que ser revisados en profundidad en 1950.

La guerra económica no pudo obligar a Tito a capitular ante Stalin, pero con todo los dirigentes de Moscú consiguieron que Tito se encontrase en una difícil situación desde el punto de vista ideológico, ya que el país se vio obligado a reorientar su comercio exterior. Junto a Gran Bretaña y a los Estados centroeuropeos (Suiza, Austria, Italia y Alemania) con los que Yugoslavia había mantenido tradicionalmente buenas relaciones económicas, también los Estados Unidos, justamente la primera potencia del campo occidental, el enemigo número uno declarado de los comunistas, se convirtió en el socio comercial más importante. Esto era material suficiente para la propaganda antiyugoslava del Kominform, que ahora podía acusar a Tito de traición manifiesta y de complicidad con los «imperialistas». Este cambio de sentido no fue fácil para los dirigentes yugoslavos; ahora bien, sólo los Estados Unidos, fuerte en capital, se encontraban en situación de apoyar el desarrollo yugoslavo mediante los créditos urgentemente necesitados; sin su ayuda tampoco hubiese sido posible hacer frente a la crisis que amenazaba a causa de la catastrófica cosecha de 1950. Tito, sin embargo, rechazó de forma consecuente responder al apoyo económico con concesiones políticas. Así se inició el período de la «política de no alineación» de Belgrado que le uniría en la década de 1950 a Nehru y Nasser y le convertiría en portavoz del «Tercer Mundo», lo que obligaría finalmente a los dirigentes soviéticos a revisar el veredicto del Kominform del 28 de junio de 1948. El alejamiento de Moscú tuvo, no obstante, consecuencias políticas: Yugoslavia interrumpió su apoyo a los comunistas griegos, pudiéndose resolver también el contencioso con Austria; se inició un acercamiento entre Yugoslavia y Grecia, en el que también se incluyó a Turquía y que luego condujo a la firma del llamado «Pacto de los Balcanes» entre estos tres Estados el 28 de febrero de 1953. La

política de Moscú contribuyó en gran medida a impulsar esta alianza defensiva: además de la escalada de una pequeña guerra diplomática, que comenzó con la ruptura de los tratados de ayuda mutua firmados —curiosamente, el primer paso lo dio precisamente Albania el 1 de julio de 1948, país totalmente orientado hasta entonces hacia Belgrado— y que finalmente desembocó en la retirada de embajadores y enviados y en la interrupción *de facto* de las relaciones diplomáticas por parte de la mayoría de los pasíes del Kominform, también las acciones militares se convirtieron en parte integrante de la guerra de nervios dirigida contra Yugoslavia. El rearme iniciado bajo el signo de la guerra fría por las democracias populares cobró para Belgrado, con el telón de fondo de la intensa propaganda antiyugoslava, un carácter amenazador. Las concentraciones de tropas y los incidentes fronterizos provocaron una inquietud permanente, reforzando aún más la tensión nerviosa de los dirigentes yugoslavos. Cuando a finales de 1949 la concentración de fuerzas armadas en la proximidad de la frontera confirió una importancia aún más especial a las amenazas de Molotov, el embajador americano en Belgrado declaró que los Estados Unidos intervendrían en caso de ataque. Esta decidida toma de partido calmó la situación, pero Stalin decidió mantener la presión sobre Belgrado aun después del comienzo de la ayuda occidental de armamento a Yugoslavia en abril de 1951 y del convenio americano-yugoslavo sobre suministro de armas del 14 de noviembre de 1951. Con ello no se recupera el terreno perdido; por otra parte, Albania quedó incomunicada por vía terrestre de los países del Kominform, cosa que finalmente —aunque, por otro lado, también en circunstancias completamente distintas— favorecería un decenio más tarde su alejamiento de Moscú. Pero en Yugoslavia la amenaza del Este produjo una mayor identificación de la población con la dirección del Partido y del Estado que ayudó a encubrir algunos de los problemas de este Estado sudeslavo multiétnico. Por otro lado, la cautelosa política reformista iniciada en 1950 con la introducción de la autogestión obrera y con las reformas constitucionales de 1952-53, cuyo objetivo era una mayor corresponsabilidad de la población mediante la delegación de competencias decisivas de los órganos centrales a las instituciones regionales, locales y empresariales, fomentó esta solidaridad de la misma manera que la reforma de la política agraria (1951-1953). El prestigio internacional conseguido por Yugoslavia con su enfrentamiento al estalinismo benefició en el interior a la dirección del partido; el modelo yugoslavo de sociedad socialista se ganó, sobre todo dentro del movimiento

socialista internacional, un gran respeto y admiración como polo opuesto del sistema estalinista. La fascinación producida no se detuvo siquiera en las fronteras de los países del Kominform.

Teniendo en cuenta la personalidad de Stalin y la práctica seguida por él en casos similares, era de esperar que el desafío yugoslavo a la política soviética tuviese consecuencias personales dentro de la dirección de Moscú. El hecho de que en un principio esto no se advirtiese demasiado se debió a que Zdánov, principal responsable después de Stalin, murió repentinamente el 31 de agosto de 1948. El ataque al corazón que sufrió cuando sólo contaba cincuenta y dos años debió de ser la consecuencia de los duros ataques contra la línea agresiva defendida por él en cuestiones ideológicas y de política exterior dentro del Politburó, que había conducido a la crisis de Berlín y al conflicto del Kominform. Estos fueron provocados por su propuesta de emplear medios militares, al menos para resolver el problema yugoslavo, cosa que —según se filtró— fue rechazada por Stalin y por la mayoría del Politburó. Al radicalismo de izquierdas de Zdánov, apoyado sólo por Voznesenski, se enfrentaron decididamente, por razones de política exterior e interior sobre todo, Molotov, Beria y Jruschov. Es posible que estos enfrentamientos abriesen los ojos a Stalin sobre las posibles consecuencias de una política que aumentaba el riesgo y agravaba los conflictos, ya que en marzo de 1949 mandó «depurar», a través de los servicios de seguridad del Estado, en la organización del partido de la región de Leningrado dirigida por Zdánov a los partidarios de éste, que fueron acusados, con sutil ironía, de complicidad con Yugoslavia. El motivo para una cierta moderación, que se hizo patente a comienzos de 1949, vino dado en especial por la buena disposición, creciente desde el verano de 1948 —debido a la política soviética de enfrentamiento—, de los Estados de Europa occidental a escuchar las propuestas americanas para la creación de una organización de defensa común; la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fundada el 4 de abril de 1949, y el *Mutual Defence Assistance Program* del 6 de octubre del mismo año, colocarían a la Unión Soviética y a sus Estados satélites ante un cambio de la situación política mundial. Cierto es que Moscú había tratado de boicotear las conversaciones de las potencias occidentales, ya en sus comienzos, mediante el llamado «Movimiento por la Paz Mundial», creado en agosto de 1948, y de actuar contra los planes americanos, pero habida cuenta de la discrepancia existente entre la política de sus padres espirituales y sus llamamientos morales este movimiento estaba condenado al fracaso. Otra razón de la revisión de la política

soviética respecto a Europa fue el hecho de que las limitaciones a la exportación en el comercio Este-Oeste impuestas por las potencias occidentales como respuesta al bloqueo de Berlín (a partir del 4 de agosto de 1948) se reflejaron en la economía de los Estados comunistas, principalmente en la de las democracias populares: la industrialización forzada requería todos los recursos económicos (disminuidos ya por las colectivizaciones forzosas en curso), sin dejar reservas para suplir ulteriormente las mermas sufridas por las restricciones.

III. LA SOVIETIZACION DE LA SOCIEDAD EN LAS DEMOCRACIAS POPULARES

a. *Las depuraciones dentro del partido*

La apostasía de Yugoslavia dio motivo a Stalin para acelerar el proceso de integración de los Estados europeos orientales en el ámbito de poder soviético, que hasta entonces había sido impulsada más bien con discreción. Ya en 1946, la desconsiderada explotación de los países bajo control soviético, principalmente de los antiguos Estados enemigos, había sido reemplazada por una política tendente al aprovechamiento duradero de los recursos existentes en ellos por parte de la Unión Soviética, para lo que ésta se sirvió tanto de la liquidación de la oposición «burguesa» como de la progresiva vinculación de las economías nacionales a la soviética. Ahora bien, dada la limitada capacidad de la Unión Soviética, así como la deficiencia de estructuras políticas, sociales y económicas de estos territorios tan heterogéneos, a los defensores del comunismo se les había dejado al principio un cierto margen de maniobra que les permitía tener en cuenta las «peculiaridades nacionales» de su país en la «vía hacia el socialismo». Esta política, tendente a lograr la máxima solidaridad de la gran mayoría de la población con el Partido Comunista de su país, entrañaba sin embargo, según pusieron de manifiesto los acontecimientos de Yugoslavia, peligros para la armonía exigida por Stalin en el ámbito de poder soviético. Estos peligros se acrecentaron aún más con la fusión de los partidos socialdemócratas y comunistas efectuada a lo largo de 1948 —Rumania la inició el 23 de febrero, seguida por Checoslovaquia el 27 de junio, Hungría el 4 de julio, Bulgaria el 11 de agosto y Polonia el 15 de diciembre (precedidas solamente por la antigua SBZ con la fundación del SED en abril de 1946)—, que sometía al conjunto de los trabajadores al control comunista, ya que los

antiguos socialdemócratas se sentían más inclinados por los comunistas «nacionales», dispuestos a tratar ante todo de salvaguardar los intereses de su país, que por los partidarios de Stalin. Así, el conflicto del Kominform se tomó como pretexto para una gran depuración en los partidos comunistas tanto de los «desviacionistas de izquierda» como de los «de derecha» que no se detuvo ni siquiera ante el PCUS.

La campaña contra el «desviacionismo de izquierda» afectó a los seguidores de Zdánov, cuya línea revolucionaria radical no sólo había encontrado partidarios en la Unión Soviética; pero mayor aún fue el número de víctimas acusadas de desviacionismo de derecha, sobre todo en los países del Kominform, donde las acusaciones presentadas contra ellos fueron desde la de «cosmopolitismo» y «sionismo» hasta la de «nacionalismo». La ola de depuraciones, que se extendió al conjunto del ámbito de poder soviético, no se diferenciaba en nada de las grandes depuraciones de 1934-1938 en la Unión Soviética; bastaba con la simple sospecha de no ser absolutamente fiel a Stalin para ser arrastrado por el remolino. Ni siquiera la existencia de servicios, del tipo que fueran, a la causa comunista ofrecía ninguna garantía de ser respetado. Como siempre ocurre en el caso de tales excesos, en que pierden su sentido el derecho y la justicia, florecieron los denunciantes, entró en juego el desconsiderado afán de hacer carrera, y la demostración de eficacia aportada en este sentido por la policía secreta, que era una prueba de su «celo», tuvo también su parte en el gran número de inculpados: lo que había servido como justificación de sus medidas a los iniciadores, reveló la magnitud del «peligro». Las víctimas, condenadas en procesos secretos o públicos, o por la vía administrativa, fueron ejecutadas o enviadas a campos de trabajo forzoso.

Las acusaciones públicas simplistas, que reducían a dos acusaciones estándar hechos muy complejos —«nacionalismo» y «cosmopolitismo», aunque este último tendría en 1951, junto con el «sionismo», sus propias reglas del juego—, tenían una función meramente propagandística. Al aparecer en los procesos de todos los países del Kominform, debían dar consistencia al bulo de una conjuración amplia en contra de los intereses «del pueblo» y del socialismo de cuño soviético. Las auténticas «desviaciones», existentes de hecho en determinados grupos, eran sin embargo de muy distinta naturaleza. Sea como fuere, se puede decir que en general los «nacionalistas» pensaban que la adopción forzada del modelo soviético se producía de forma precipitada, ocasionando muchos perjuicios a su país y a su partido, en tanto que los «cosmopolitas» veían graves daños en el aislamiento espiri-

tual de los países del Kominform con respecto al desarrollo del resto del mundo.

El país en el que Yugoslavia tenía muchos amigos verdaderos era Albania, en donde el joven Koci Xoxe había mantenido estrechos contactos con los yugoslavos ya durante la guerra partisana, habiendo fomentado luego, como viceprimer ministro y ministro de Interior, los estrechos vínculos con Belgrado. Cientos de comunistas albaneses habían recibido en Yugoslavia su formación, muchos expertos yugoslavos habían trabajado en Albania; Belgrado pagaba más de la mitad de la ayuda económica a Albania. No obstante, el poco escrupuloso Enver Hoxha, jefe del Partido, logró poner al país al lado de Moscú en el conflicto del Kominform con apoyo soviético. En septiembre de 1948, Xoxe era destituido de sus cargos bajo la acusación de «titoísmo», siendo expulsado del Partido. En mayo del siguiente año se celebró un gran simulacro de proceso contra él, siendo ejecutado poco después en la horca. Con ello quedaba asegurado el poder único de Hoxha, que muy pronto habría de igualar al de su protector Stalin.

En Bulgaria, Traitscho Kostov, justamente el hombre que más decididamente se había opuesto a la política impulsada por Dimitrov de una cooperación más estrecha con Yugoslavia, se convirtió en figura simbólica del desviacionismo. Su perdición fue haber impulsado, como contramedida, una política económica acentuadamente búlgara, y que el gran prestigio adquirido por él en el Partido y entre la población durante la Resistencia y como miembro del gobierno le hacía aparecer como un serio rival de Vulko Chervenkov, que tenía puesta la mirada en la sucesión, como líder del Partido, de su anciano suegro Dimitrov. Fue Dimitrov quien acusó a Kostov de nacionalismo; en marzo de 1949 perdió sus cargos en el Partido y en el Estado, en diciembre fue acusado, en un simulacro de proceso, de incitación al nacionalismo, sabotaje, espionaje, titoísmo y trotskismo. Su retractación de la confesión obtenida bajo amenaza no le libró de la ejecución, pero, al igual que la grotesca acumulación de acusaciones, provocó la indignación mundial. El caso Kostov muestra de forma ejemplar hasta qué punto las rivalidades personales y de grupo en la lucha por el poder determinaban estas depuraciones. En definitiva, la lucha se decidía en favor de aquel a quien Stalin consideraba más sumiso. En Bulgaria fue Chervenkov, el cual, como refugiado en Moscú, había demostrado su fidelidad y gozaba del favor de Stalin. En Hungría, la víctima fue László Rajk, que desde la guerra de España mantenía estrechas relaciones con los comunistas yugoslavos y cuyas declaraciones proporcionaron un material muy oportuno para la campaña propangandística contra

Tito. En Polonia, el primer secretario del Partido, Vladislav Gomulka, osó manifestar reservas frente a la colectivización forzosa ordenada. El mero discurso pronunciado por él en la sesión del Comité Central del PPR del 3 de junio de 1948, «Sobre las tradiciones históricas del movimiento obrero polaco», fue considerado como un acto de rebeldía más allá de lo tolerable, siendo destituido de su cargo de secretario del Partido. Sin embargo no se aplicó ninguna otra clase de medidas contra él y su grupo hasta que no se hubo producido la fusión del PPR y el PPS en el PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Partido Obrero Unificado de Polonia, POUP) en diciembre de 1948, ya que la «gente del Oka», tal como se denominaba en Moscú a los emigrantes adoctrinados y probados en torno al presidente Boleslav Bierut, no querían poner en peligro la unificación con una dura actuación contra el respetado Gomulka. Pero después éste perdió sus cargos en el gobierno, siendo expulsado del CC del POUP y de todos los cargos del Partido «para siempre» en noviembre de 1949, en compañía de los nacionalcomunistas Marian Spychalski, antiguo ministro de Defensa, y Zenon Kliszko. Este grupo sería detenido el mes de diciembre de 1951, aunque no tuvieron lugar los simulacros de proceso habituales en tales casos en el bloque oriental, lo cual puso de manifiesto «en igual medida la debilidad de las acusaciones hechas y el gran sentido de la justicia de la nación» [10].

En la SBZ, la especial situación alemana obligó al SED a observar una cierta moderación. Ahora bien, la resolución de la presidencia del Partido del 16 de septiembre de 1948 en contra del «desviacionismo nacional» sería aprovechada por Ulrich para eliminar a Anton Ackermann, posible rival en el poder que en 1946, por encargo del CC de aquel momento del KPD, había formulado la tesis de una vía alemana específica hacia el socialismo y que ahora se vería obligado a ejercer la «autocrítica»: «Desde el principio fue absolutamente erróneo hablar de una vía alemana específica...» [11]. Con ello Ackermann quedaba desautorizado, aun cuando conservase sus funciones. El núcleo directivo interno del SED no se vería afectado hasta 1950. Paul Merker, Leo Bauer, Wolfgang Langhoff, etc., fueron acusados en agosto de 1950 de falta de celo y de estar relacionados con un agente americano. El proceso se apoyó en las declaraciones del dudoso Noel H. Field en el proceso de Budapest contra László Rajd de septiembre de 1949, en el que Field había testificado la existencia de una gran «conjura titoísta-americana» contra las democracias populares y la Unión Soviética. Dado que Field, director durante la guerra de una organización de ayuda americana en Suiza, poseía numerosos

contactos con los emigrantes comunistas occidentales, sus «revelaciones» se utilizarían también contra aquellos de sus antiguos conocidos que, entre tanto, habían conseguido influencias dentro del SED y del Partido Comunista de Checoslovaquia. No obstante, Merker no fue condenado hasta 1952 por «defensa de los intereses de los capitalistas monopolizadores sionistas». En mayo de 1953, Franz Dahlem perdió sus cargos dentro del Partido por causa de acusaciones igualmente manidas. El Partido Comunista Rumano se vio en principio libre de tales sacudidas, si se exceptúa la detención del ministro del Interior Lukretiu Patrascanu, que tuvo lugar ya en febrero de 1948, por «desviacionismo nacional». Su situación era demasiado difícil, habida cuenta de la extendida rusofobia y sovietofobia existente (la población no hacía aquí diferencia alguna), pero por ello mismo el Partido dependía también demasiado del apoyo soviético como para que existiese la posibilidad de que se perfilara un comunismo de orientación nacional. Sólo en 1951 estallaron las luchas por el poder, decidiéndose en 1952 una amplia depuración que, junto con Vasile Luka (László Lukács), húngaro de Transilvania, hizo caer a Ana Pauker, que hasta entonces había dirigido el ministerio de Asuntos Exteriores. El jefe del Partido, Gheorghiu-Dej, pudo aprovecharse en su enfrentamiento con Ana Pauker, que durante mucho tiempo había sido considerada como una eminencia gris y que desde su exilio en la Unión Soviética contaba con la confianza de Stalin, de la campaña que tenía lugar en la Unión Soviética contra el «sionismo», dado que Pauker era de origen judío. Con ello logró paradójicamente eliminar a una gran parte de los «moscovitas»; una ola de depuraciones posterior alejaría en 1954 a los restantes de todos los puestos claves del poder. En Checoslovaquia, las depuraciones no se iniciarían sino después del proceso a Raj en Budapest; en este país apenas había ningún titoísta conocido, tan sólo algunos funcionarios de segunda fila. Existía, en cambio, una divergencia de opiniones entre los comunistas eslovacos y los checos acerca del grado de autonomía de Eslovaquia, punto respecto al cual los checos insistían en la solución centralista. En 1950, el grupo de Praga en torno a Klemens Gottwald, jefe del Estado, y Rudolf Slánsky, secretario general del Partido, consiguió imponerse frente a los eslovacos, que fueron acusados de «nacionalismo burgués»; el más conocido de ellos, Vladimir Clementis, ministro de Asuntos Exteriores de Checoslovaquia hasta mayo de 1950, fue detenido y ejecutado en febrero de 1951.

El enfrentamiento por el poder no quedó sin embargo resuelto con ello. Dentro de la fracción checa vencedora existían dos

grupos contrarios, unidos sólo por la común enemistad hacia los eslovacos. Los representantes de ambos, tanto Gottwald como Slánsky, eran «moscovitas», pero Slánsky había sido protegido por Zdánov y era de origen judío. Esto último parece haber sido decisivo, pues su caída —perdió su cargo dentro del Partido en septiembre de 1951 y fue condenado a muerte, después de más de un año de prisión preventiva, en diciembre de 1952— arrastró a la perdición a más de 1 500 de los llamados partidarios de Slánsky, casi exclusivamente intelectuales judíos.

Estas depuraciones, que no sólo afectaron a quienes habían gozado hasta entonces del poder, sino también a muchos miles de personas que, en el mejor de los casos, eran simples seguidores, provocaron una gran expectación en la opinión pública mundial. Fueron condenadas por la Asamblea General de Naciones Unidas el 5 de octubre y el 3 de noviembre de 1950 y desencadenaron numerosas protestas. Este «período de represalias injustificadas», como lo llama el escritor soviético Konstantin Simonov [12], no fue sin embargo en modo alguno un simple accidente imputable a la arbitrariedad del todopoderoso Stalin. Antes bien, esta forma de resolver las rivalidades y los conflictos de grupo era algo inmanente al sistema estalinista. La dirección de los partidos comunistas de los países del Kominform se había constituido una vez acabada la guerra, a partir de los comunistas emigrados a Moscú y los que habían permanecido en el país, cuyo número se había visto engrosado por unos cuantos socialistas cuidadosamente seleccionados cuando tuvo lugar la «unificación de los partidos de los trabajadores». Conforme a la idea de sí mismo del PCUS estalinista, que desde 1948 sería el modelo obligado de los demás partidos del Kominform, todos los factores que no se ajustaran perfectamente debían ser eliminados (liquidados), en interés de la unidad y homogeneidad del Partido, y la última decisión, y con ello el poder total, debían estar en manos de un solo hombre. Por ello, las depuraciones fueron parte de un proceso de integración que —de acuerdo con el modelo ideal— tuvo como objetivo un partido comunista estrechamente cohesionado. Las democracias populares del momento cubrieron en los años de 1948-1952 (y en parte hasta 1954) simplemente una fase de desarrollo concluida ya en la Unión Soviética en 1939.

b. *El modelo social*

Las depuraciones, entrelazadas con las luchas por el poder, tuvieron lugar con el telón de fondo de una remodelación profunda

de toda la estructura política, social y económica de los países del Este a la que se puede aplicar correctamente la denominación de «sovietización», ya que este proceso de transformación, cuya necesidad se explicó con la tesis formulada en la Conferencia de Schreiberhau de la «lucha de clases agudizada», tenía como objetivo la total orientación hacia la dirección central de Moscú mediante el transplante del modelo soviético a los diferentes países. Los preparativos, al menos en cuanto a la formación de cuadros, ya se habían realizado en 1947 [13], y a lo largo de 1948 —con escasas diferencias de tiempo— fueron puestas en práctica las directrices obligatorias para todos los países del Kominform. La medida más urgente era la reestructuración de los partidos comunistas en partidos de cuadros de acuerdo con el modelo del PCUS. Su reconstrucción se había efectuado en la fase inicial bajo el lema del «bloque antifascista-democrático», en rivalidad con los partidos democráticos. Habían surgido partidos de masas cuyos militantes no habían sido reclutados únicamente entre los comunistas convencidos; la eliminación de los adversarios en política interior dejó el camino expedito para librarse de los oportunistas infiltrados en las propias filas y de los seguidores inseguros, y para formar aquel partido de cuadros disciplinado y jerarquizado que, como instrumento obediente, conforme al modelo del PCUS, había de ayudar a hacer realidad las consignas de la dirección del Partido. Junto a las depuraciones de los grupos de la oposición, cuyo objetivo era el logro de una línea de Partido y una estructura de dirección unitarias, se llevó a cabo también una labor de supervisión general de los miembros a través de las comisiones de control del Partido que eliminó a todos aquellos que o bien no participaban activamente en el trabajo de partido en la medida exigida, o bien fueron clasificados, como «burgueses», dentro de los «elementos extraños de clase», y excluyó también a aquellos cuya conducta social provocaba escándalo. Aun no disponiendo de cifras definitivas, se calcula que, en los Estados satélites, durante el período 1948-1951 fue excluido del Partido, aproximadamente, un militante de cada cuatro. Dado que la pertenencia al Partido se consideraba al mismo tiempo un privilegio, estos controles y exclusiones tuvieron también un valor educativo, haciendo tomar conciencia a cada militante de que se exigía de él un compromiso y una «parcialidad» permanentes. Por otra parte, en este «partido de nuevo tipo», como se denominaban los partidos comunistas de cuadros, al ingreso de militantes se le aplicó, conforme al modelo soviético, un período de prueba, una candidatura de entre uno y dos años que ofrecía la oportunidad de examinar a fondo a los aspirantes. La parti-

cipación regular en la formación de partido se hizo obligatoria para todos los miembros, así como la lectura de la *Historia del Partido Comunista de la Unión Soviética (Bolchevique). Breve tratado*, escrito, según se decía, por Stalin. Se exigió «conciencia proletaria» y una observancia estricta de la «disciplina de partido», es decir una aplicación meticulosa de los acuerdos de las instituciones del Partido, pues, a despecho del «centralismo democrático» establecido como principio organizativo, el Partido estaba profundamente jerarquizado; la ventaja informativa de los funcionarios superiores servía para garantizarlo mediante una información matizada. La dependencia total del modelo soviético tenía una explicación plausible: dado que el PCUS era no sólo el primer partido comunista sino también el único (con mucho tacto se silenciaba a Yugoslavia) que había realizado con sus propias fuerzas la revolución socialista —en las democracias populares, ésta sólo se había logrado gracias a la ayuda soviética—, y el único también que disponía de una larga práctica de poder, era necesario nutrirse de sus experiencias y aprender de él. Le correspondía además el «papel rector en la lucha por la victoria del socialismo». Reconocerlo formaba parte de los requisitos fundamentales, como la sumisión a las aspiraciones rectoras —derivadas de ello— de Moscú formaba parte de la disciplina de partido. Pero no era sólo por la energía con la que Moscú insistía en el reconocimiento de su hegemonía por lo que los países del Kominform actuaban conforme a esta posición subordinada, sino también por la situación existente en los Estados satélites. La nueva autoconciencia con la que los partidos comunistas practicaban ahora su monopolio del poder provocó nuevas tensiones y conflictos no sólo dentro de cada partido, sino también con ciertos grupos y capas de la población de sus países, que hacían de vital importancia el respaldo de la Unión Soviética. Así, la liquidación del comunismo nacional, más centrado en las exigencias del propio país que en los intereses de Moscú, fortaleció al mismo tiempo la dependencia de Stalin de los dirigentes afectos a Moscú.

El papel de modelo de la Unión Soviética no se limitó ciertamente a la estructura de los partidos comunistas. La aspiración al poder manifestada por ellos y anunciada *ex officio* influyó en todos los ámbitos de la vida pública. Todos los puestos claves dentro del aparato del Estado y de la economía, así como en las organizaciones de masas —sindicatos, asociaciones femeninas, juveniles y deportivas, sociedad de amistad con la Unión Soviética y organizaciones culturales— fueron ocupados por miembros del Partido como instrumentos de transmisión de las decisiones de éste, con lo que también aquí quedó asegurada la aplicación

sin problemas de las directrices políticas. En el espacio de breve tiempo, los Estados europeos orientales, que ahora se denominaban «democracias populares», se dieron nuevas constituciones que, sobre todo en lo relativo a los órganos del Estado y de la justicia, seguían en gran medida la Constitución de Stalin de la URSS de 1936. Después de Yugoslavia, cuyo punto de partida fue sin embargo distinto, seguida de Albania (1946), Polonia fue la primera en empezar en 1947 (esta Constitución se transformaría en una aún más estalinista en 1952); Hungría y la República Democrática Alemana, constituida el 7 de octubre de 1949, concluyeron este proceso de unificación constitucional. A partir de la intervención de Dimitrov en el V Congreso del Partido Comunista Búlgaro el 19 de diciembre de 1948, la «dictadura del proletariado», creada gracias al apoyo soviético como etapa de transición hacia el socialismo, sería algo constitutivo del concepto de «democracia popular». El papel rector del partido comunista sólo estaba fijado en la Constitución húngara, pero la disposición general según la cual el poder reside en los obreros y en los campesinos era, de hecho, un sinónimo de ello. Al igual que su modelo, las constituciones de las democracias populares eran auténticas colecciones de principios democráticos completados con principios socialistas: libertad de la personalidad, derecho a la libre expresión de la opinión, libertad de conciencia y de religión, todo ello quedaba garantizado en ellas, así como el derecho al trabajo y a la educación, la igualdad de derechos de la mujer y —esto era una importante mejora frente a las constituciones vigentes durante el tiempo de entreguerras— la protección a las minorías étnicas. Ahora bien, al igual que en la Unión Soviética, entre la Constitución escrita y la realidad se abría un profundo abismo, y así los órganos constitucionales y electos para el control del Ejecutivo, que ahora se llamaban Consejos, sólo tendrían una función aclamatoria; las elecciones libres y secretas se convirtieron en una farsa debido a las listas únicas, ya que privaban al elector de toda posible influencia sobre la composición de estos órganos, incluso el voto secreto fue suprimido por presiones psicológicas. Las claras violaciones a la Constitución fueron sancionadas con el postulado de la dictadura del proletariado, que justificaba cualquier arbitrariedad. Sería en la aplicación del nuevo Derecho Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde más claramente se pondría esto de manifiesto; el Derecho se convirtió en instrumento declarado de la justicia de clase, con el abandono del viejo principio legal «sin acepción de personas». Por otra parte, este Derecho aparentemente tan progresista estaba sujeto, conforme al modelo soviético, a una justicia administra-

tiva que enviaba a campos de trabajo forzoso a las personas sospechosas o poco gratas en juicios a puerta cerrada, prescindiendo de todos los derechos del acusado en un Estado de derecho.

La reforma del conjunto del sistema de enseñanza y formación también se efectuó conforme al modelo soviético, que en muchos Estados europeos orientales logró importantes progresos, erradicando el analfabetismo muy extendido —en Polonia, Yugoslavia, Bulgaria y Rumania oscilaba en la época anterior a la guerra entre el 23 y el 45%, y en Albania ascendía a cerca del 60%—, y con ello un requisito esencial para el nacimiento de una sociedad industrial moderna. Esta reforma fue unida desde 1948 a una profunda transformación de la estructura social de los alumnos de enseñanza superior y universitaria. Las democracias populares necesitaban para la construcción de la nueva sociedad cuadros rectores de confianza, con lo cual aumentó aún más la demanda, dado que la antigua capa intelectual había desaparecido a consecuencia del éxodo o el desclasamiento profesional. Inmediatamente después de 1945 se crearon gran número de escuelas nuevas en las zonas agrarias, antes abandonadas, de los Estados de Europa oriental, así como nuevas universidades y escuelas técnicas, al tiempo que los trabajadores eran exhortados a cualificarse participando en los cursos nocturnos de las «Facultades de Obreros y Campesinos». A partir de 1948, el origen proletario se convirtió cada vez más en condición necesaria de admisión para la realización de estudios universitarios, ya que ésta era la garantía para una auténtica conciencia de clase. La nueva élite debía llevar, por así decirlo, en la sangre la adhesión al comunismo, que habría de ser afianzada mediante el estudio obligatorio del marxismo por parte de todos los estudiantes de las escuelas superiores y técnicas. Las enormes inversiones en el campo de la enseñanza —que ocupaban el segundo puesto detrás de las inversiones industriales— se vieron sin embargo recompensadas, pues aun cuando más tarde se pusieron de manifiesto las deficiencias del sistema, basado en la simple transmisión de conocimientos, la reforma proporcionó suficientes cuadros dirigentes medios y altos para la fase inicial de la industrialización.

Entre las medidas educativas populares se encontraba también el acercamiento a las capas de la población antes menos privilegiadas de los bienes culturales y la vida cultural del país, consiguiéndose importantes logros en este sentido. La vida teatral y musical se abrió a nuevos círculos de espectadores. Las actuaciones de las compañías más importantes en provincias y la fundación de nuevos teatros y orquestas contribuyeron a desarrollar

un amplio movimiento laico, y las exposiciones itinerantes dieron también a conocer la pintura y las artes plásticas en los centros de categoría inferior. Bajo el lema de «Apropiación de la herencia cultural nacional», grandes tiradas no sólo de obras de la literatura partidista del momento, sino también de las obras clásicas de la literatura nacional y extranjera (predominantemente de los países socialistas), fueron puestas a disposición de la población.

Los medios de comunicación, prensa y radio, que ya al acabar la guerra estaban controlados por los comunistas, fueron puestos claramente por el Partido al servicio de su política; la información también debía ser partidista, estando sometida a la estrecha vigilancia de la censura. La reorganización tampoco se detuvo en el campo editorial. Al igual que en la Unión Soviética, en las democracias populares el «realismo socialista» resucitado por Zdánov se convirtió también en doctrina de toda creación artística. No sólo se prescribieron a escritores, pintores y músicos los temas, sino que el Partido Comunista estableció también las normas estéticas para la «producción» artística «planificada» por los organismos rectores competentes. La resistencia inicial a este tutelaje, tal como lo puso de manifiesto, por ejemplo, en 1949 el internacionalmente prestigioso György Lukács en Hungría, muy pronto fue sofocada: los artistas obstinados no obtuvieron ni apoyo ni compradores para sus obras. Una rehabilitación, al menos parcial, exigía la «autocrítica» abierta, una forma denigrante de sumisión. Sólo unos pocos pudieron librarse de la intervención igualadora mediante una retirada resignada de la vida pública; la mayoría se adaptó a las exigencias. Indudablemente sería un error tratar de atribuir los motivos de esta supeditación a las directrices del Partido exclusivamente a la preocupación por la pérdida de los privilegios concedidos a la élite intelectual. Justamente aquellos idealistas que, tras el caos de la guerra, se habían unido a la causa comunista con la voluntad de construir un mundo mejor fueron quienes con frecuencia se mostraron más inclinados a deponer sus propias reservas en aras del bien común. El resultado se puso, sin embargo, muy pronto de manifiesto: la homogeneidad de la producción cultural soviética de la «era Zdánov», tan alejada de la realidad, se extendió también a las democracias populares, agostando la vida artística que tan activa y fascinante había sido en los primeros años de posguerra. Imperaba el héroe positivo, y la actitud optimista exigida obligaba a disimular las dificultades y problemas derivados necesariamente de un proceso tan fuerte y violento de transformación con el que los partidos comunistas habían impulsado a los países de Europa oriental, fundamentalmente agrarios, hasta convertirlos en Es-

tados industriales. Esta evolución fue acompañada de una glorificación poco menos que servil de la Unión Soviética y de sus «logros» y de una idolatría a Stalin, el «gran caudillo», que servía para consolidar la hegemonía soviética también en el terreno cultural. El culto a Stalin se extendió igualmente a los dirigentes comunistas de las democracias populares, que con ello se sustraían a toda crítica posible. Estas medidas estabilizadoras del poder surtieron efecto en la fase de consolidación de las democracias populares, pero con la aparente armonización provocaron daños duraderos. Fue necesario que pasaran algunos decenios hasta que los ideólogos llegaran a comprender a su pesar que los daños excedían el ámbito intelectual para extenderse a todos los ámbitos públicos y privados de la vida.

La vida científica se vio igualmente afectada por la lucha importada de la Unión Soviética en contra el «objetivismo» y el «cosmopolitismo» y en favor de la «parcialidad»; por su propia naturaleza, fueron especialmente las Humanidades las ciencias que experimentaron una profunda reorientación. La intensificación de la investigación en historia social e historia de la economía propiciada por el marxismo produjo entre 1946 y 1949 un gran número de obras en este campo hasta entonces descuidado —por ejemplo, sobre la historia de las sublevaciones campesinas y de la revolución de 1848—, algunas de las cuales sin duda significaron un enriquecimiento de la investigación histórica. Ahora bien, la funcionalización de la historiografía del momento, obligada a presentar el conjunto de la historia de un pueblo sólo como una preparación para el socialismo de las democracias populares, devaluó la ciencia. Ésta, por otra parte, pasó a depender de las cambiantes preferencias del Partido, pues si Müntzer, Dózsa, los husitas, Horia, o Rasin y Pugachov en la Unión Soviética, fueron al principio símbolos de la voluntad de libertad del pueblo contra la opresión estatal, con la progresiva justificación del Estado iniciada por Stalin con sus *Cartas de lingüística* los historiadores tuvieron que afrontar difíciles problemas que sólo podían resolverse mediante una dialéctica sutil, apoyada en el arsenal de citas de Lenin y Stalin. La glorificación obligada, también aquí, de la Unión Soviética junto con el pasado de Rusia no sólo planteó, sobre todo en Polonia, Hungría y Rumania, la difícil cuestión de la valoración de las anexiones e intervenciones zaristas, sino que reforzó en estos países el sentimiento latente de rusofobia, y ello tanto más cuanto más marcadamente se glorificaba la tradición nacional de la Gran Rusia en la URSS. La estrecha colaboración acordada a nivel estatal entre las diferentes democracias populares y la Unión Soviética, cimentada por las conferencias

científicas bilaterales y por las estancias de estudio en la URSS, aseguraba también en el campo científico el predominio de la investigación soviética y de sus resultados. Para las ciencias naturales y la ingeniería en las democracias populares de la Europa sudoriental fue favorable el intercambio científico y la posibilidad de enviar estudiantes universitarios y futuros científicos a la Unión Soviética para formarse y perfeccionar conocimientos, habida cuenta de la insuficiente capacidad de sus escuelas superiores y del nivel relativamente bajo existente, en tanto que perjudicó a los países más desarrollados y con una tradición científica, como Polonia, Checoslovaquia, la RDA y Hungría, al ir acompañado de la pérdida de las antiguas relaciones con el desarrollo occidental.

c. *La lucha religiosa*

Mucho más largo y difícil que el proceso de sometimiento de los intelectuales no organizados de la oposición fue el enfrentamiento con las Iglesias. La aspiración a la validez exclusiva y legitimadora del poder del materialismo dialéctico e histórico encerraba en sí el enfrentamiento con las comunidades religiosas. Durante el período de la táctica frentepopulista de 1945-1947, las tensiones y enfrentamientos ocasionales todavía no habían tenido un carácter fundamental; el ateísmo del socialismo científico coexistía con la fe revelada. La consecución de la primacía política de los partidos comunistas fue sin embargo también ligada a la primacía ideológica que habría de conducir al conflicto abierto con las Iglesias. Este enfrentamiento se produjo en las diferentes democracias populares con desigual encarnizamiento y distintos resultados. Ello no se debió únicamente al diferente grado de secularización en cada país de su sociedad respectiva. En ambos bandos se habían dado antecedentes políticos, como por ejemplo en Eslovaquia en la persona de Tito, y en Croacia en la del arzobispo Stepinac. La negativa a aceptar al acabar la guerra la separación Iglesia-Estado y la instauración del matrimonio civil provocó muy pronto en Yugoslavia serias diferencias. Tito se sirvió de la postura tomada por el episcopado croata el 20 de septiembre de 1945 al acusar al gobierno de perseguir sistemáticamente a la Iglesia como pretexto para solicitar del Vaticano la destitución de Stepinac, sobre el que pesaba su conducta durante la guerra. Pero la Curia no estaba dispuesta a ceder a las exigencias del poder mundano y Tito puso fin al progresivo enfrentamiento de ambas partes con la detención y la condena

del primado croata como criminal de guerra, paso que repercutiría gravemente en las relaciones Iglesia-Estado aun después del acercamiento de Yugoslavia a Occidente que en 1951 llevó a la puesta en libertad condicionada del arzobispo tras la exigencia vaticana de la plena rehabilitación de Stepinac. Ahora bien, exceptuando tales casos particulares, hasta 1948 los partidos comunistas trataron de encontrar un *modus vivendi* con las Iglesias.

El conflicto estalló luego por dos cuestiones: la de la propiedad eclesiástica de tierras y la del juramento que los sacerdotes habían de prestar a la Constitución. Cierto es que en diferentes países —por ejemplo, la Zona de Ocupación Soviética alemana— ya se había llevado a cabo la desamortización de las tierras de la Iglesia con las reformas agrarias de 1945-1947, pero las propiedades eclesiásticos no se vieron afectadas en toda su amplitud sino con las expropiaciones llevadas a cabo bajo el signo de la nueva política económica que, entre otras cosas, preveía también la completa «socialización de los medios de producción». Por el lado estatal se argumentó que las Iglesias no podían constituir una excepción y en compensación se les ofreció la remuneración de los sacerdotes a cargo del Estado, lo cual no podía ocultar que con ello la Iglesia perdía su independencia económica y el Estado obtenía un instrumento de disciplina del clero poco grato e incluso de la propia Iglesia. El juramento de fidelidad vinculaba asimismo al clero con el Estado y, teniendo en cuenta la extensa interpretación del concepto de lealtad por parte de los dirigentes comunistas, ello significaba la subordinación fáctica de la Iglesia. En las Iglesias protestantes y ortodoxas se continuaba así una tradición ya existente, pero para el episcopado católico ello suponía un conflicto con la aspiración de poder de la Santa Sede. Esta, por su parte, también tomó una postura muy clara con el decreto de excomunión de los comunistas del 1 de julio de 1949. Así, las luchas religiosas iniciadas en 1948 adoptaron formas muy virulentas, especialmente en los países católicos.

En los territorios griegos ortodoxos, el Estado pudo, por el contrario, imponerse más fácilmente. Además de la diferente concepción de la Iglesia y de la falta de vínculos institucionales y espirituales con Occidente, también puede haber desempeñado en ello un papel el hecho de que a la Iglesia ortodoxa en la Unión Soviética se le hubiese concedido un espacio vital —aunque, sin duda, muy limitado— a causa de sus relaciones con los patriarcados del Este. En Yugoslavia, el patriarca Gabriel, deportado a Alemania en 1941, consiguió llegar a un acuerdo con la dirección del Estado que habría de mantener también su sucesor, a pesar de alguna perturbación temporal. De forma similar

se configuró la relación con el clero islámico de Bosnia, Herzegovina y el territorio de Kosovo. En Bulgaria, el metropolitano de Sofía, Stefan, dimitió de su cargo en 1948 ya que no estaba dispuesto a aceptar la regulación estatal de las relaciones Iglesia-Estado. Su sucesor aprobó el tratado que subordinaba la Iglesia del país al Estado de forma similar a como ya hubiese sucedido en la Unión Soviética. En Rumania, el acuerdo entre el Estado y la Iglesia se vio favorecido por el hecho de que en 1948 el gobierno impulsó notablemente la reunificación de la Iglesia Uniata con la Ortodoxa, a fin de eliminar la influencia del Vaticano. El reconocimiento de las leyes eclesiásticas de agosto de 1948 por los metropolitanos ortodoxos sería también premiado en diciembre de este año con la unión de ambas Iglesias, es decir, con la vuelta de los griegos católicos a la ortodoxia. El precio pagado por el metropolitano fue alto: la ley preveía que los puestos eclesiásticos vacantes fuesen ocupados conforme a la recomendación del gobierno. Al igual que en otras Iglesias ortodoxas, los obispos estaban obligados a prestar juramento de fidelidad a la Constitución.

Más duramente se vieron afectadas las Iglesias protestantes, que fuera de la SBZ habían celebrado al final de la guerra la separación Iglesia-Estado, la primera medida decisiva en política eclesiástica. Con ello se eliminaba el régimen eclesiástico estatal institucionalizado y las Iglesias protestantes obtenían igualdad de derechos. El año 1948 marca aquí un punto de inflexión en las relaciones con el Estado. Especialmente en Hungría, Checoslovaquia y Transilvania tuvieron lugar detenciones y persecuciones al negarse los superiores eclesiásticos a firmar los acuerdos previstos para mantener la independencia del clero. El conflicto entre los gobiernos comunistas y la Iglesia católica estalló en toda su virulencia cuando en el verano de 1948 el Vaticano rechazó las leyes eclesiásticas. En Checoslovaquia, el arzobispo de Praga, Beran, ya se había manifestado claramente en febrero de 1948 contra el golpe de Estado; la votación acerca de la segunda reforma agraria en mayo, que afectó también a las propiedades eclesiásticas, dio lugar a nuevas diferencias que se agrandaron aún más tras la nacionalización de los centros eclesiásticos de enseñanza. Al producirse más tarde, en el verano del año siguiente, disturbios anticomunistas en Eslovaquia, el gobierno los usó como pretexto para detener al obstinado primado de Praga. En octubre la oposición del episcopado al tratado fue superada y aceptado el juramento de fidelidad exigido de los sacerdotes. Pero la discrepancia fundamental persistió y en 1950-1951 condujo a una oleada de detenciones, a la clausura estatal de establecimientos

religiosos y a otras represalias. En Hungría, el conflicto se debió a la eliminación de los centros de enseñanza religiosa. El primado, cardenal Mindszenty, fue detenido a finales de 1948 y condenado a prisión perpetua en enero de 1949. La oposición a la subordinación al Estado, que ni siquiera pudo ser quebrantada por las represalias contra las órdenes religiosas, no finalizó hasta 1951, tras el simulacro de proceso contra el arzobispo Grösz: el clero prestó el juramento de fidelidad exigido. También en la RDA comenzaron las represalias contra las Iglesias tras la fundación del Estado, después de que Grotewohl hubiese atacado especialmente a los dirigentes de la Iglesia evangélica en el III Congreso del SED. Las restricciones estatales a las editoriales eclesiásticas, a la enseñanza de la religión en los centros escolares, etc., darían lugar, sin embargo, a una inesperada solidaridad de los grupos de la oposición con las comunidades religiosas. Sobre todo la Junge Gemeinde se convirtió en un semillero de jóvenes disconformes, principalmente alumnos de enseñanza superior y universitaria. A lo largo de 1952 y comienzos de 1953 sufrió una intensa presión hasta que, finalmente, sus jóvenes miembros fueron expulsados de los centros de enseñanza superior y universitaria por orden expresa del Partido. La lucha por el poder aún proseguía cuando los acontecimientos del 17 de junio de 1953 colocaron repentinamente al régimen ante una situación fundamentalmente distinta, obligándole a un cambio de rumbo temporal.

En los países hasta ahora citados, la existencia de una estructura multiconfesional facilitó a los dirigentes comunistas la consecución de sus objetivos. Pero en Polonia, tras el transvase de población de los años 1945-1947, el Partido se vio enfrentado a una Iglesia nacional (casi) unitaria que por otra parte, en épocas de peligro y sobre todo después de las particiones de Polonia, se había convertido en el símbolo de la autoafirmación nacional, papel en el que también se había distinguido en la Resistencia contra el poder de ocupación alemán. En la integración de los territorios alemanes orientales, la Iglesia se puso igualmente al servicio de la política nacional: no sólo se montó rápidamente una organización eclesiástica en los territorios anexionados, sino que el episcopado solicitó muy pronto del Vaticano la integración desde el punto de vista del Derecho canónico de los «territorios occidentales recuperados». La dirección del Partido trató por ello de evitar desafiarla. Atacó desde el lado opuesto, concretamente desde el exterior, con el decreto vaticano del 1 de julio de 1949, por el que la Curia intervenía en las luchas religiosas en Hungría y Checoslovaquia excomulgando a los comunistas. El gobierno respondió con la nacionalización de Cáritas y de su patrimonio,

expropiando también en marzo de 1950 las propiedades rústicas de la Iglesia. Esto dio lugar en Polonia a un cambio de rumbo de la jerarquía. Ahora bien, el intento de desplazar por completo a la Iglesia de la vida pública chocó con una oposición creciente que no pudo ser siquiera vencida por las numerosas detenciones de clérigos y laicos. Los mismos simulacros de proceso de 1953 no lograron tampoco quebrar la firme actitud de la Iglesia y de los fieles, como tampoco lo lograría el encarcelamiento del primado de Polonia, el cardenal Wyszynski, en septiembre de 1953. El hecho de que el episcopado prestase el juramento de fidelidad exigido en diciembre de aquel año no supuso cambio alguno, así como tampoco fructificó el intento de quebrantar a la Iglesia desde dentro con la creación, conforme al ejemplo checoslovaco, de un grupo de «sacerdotes patrióticos». Cuanto más duras eran las represalias —a finales de 1953, además de numerosos laicos, cerca de una cuarta parte del clero estaba en prisión—, más se solidarizaba la población con la Iglesia. La simpatía de los grupos de la oposición, motivada en un principio por razones políticas, y también de algunos miembros del Partido, reforzó sin embargo a la Iglesia, y no sólo desde el punto de vista numérico. La pérdida de su arrogancia de Iglesia estatal la hizo mostrarse abierta a la realidad y la condujo en la discusión con grupos aliados —en parte agnósticos y en parte incluso anticlericales— a una nueva forma de entender su misión espiritual. Este proceso no se limitó únicamente a la Iglesia católica polaca, sino que, excediendo los límites de Europa oriental, se extendió a todo el conjunto de las Iglesias cristianas con una influencia revitalizadora. Hasta finales de 1952, la oposición política y espiritual había sido silenciada en general en las democracias populares. Los partidos comunistas, gracias al servicio de seguridad del Estado construido con ayuda soviética, que cubría el país con un amplio sistema de confidentes, controlaba el conjunto de la vida pública e interfería también en la esfera privada de los ciudadanos, estaban en condiciones de sofocar la oposición ya en su mismo nacimiento y de eliminar a sus oponentes. Dado que la represión se aplicó preventivamente conforme al modelo soviético y que el falsamente inculpado no tenía de hecho posibilidad alguna de demostrar su inocencia, el régimen de terror difundió un clima paralizador de miedo e inseguridad. Ahora bien, teniendo en cuenta que los conflictos y las tensiones sólo eran reprimidos, y no abordados, ello dio lugar a una acumulación de potencial conflictivo. Los dirigentes comunistas no lo ignoraban, pero contaban con el factor tiempo, con el efecto a largo plazo, que trabajaba en su favor, del adoctrinamiento ideológico

de los más jóvenes y con la desaparición natural de los ancianos resistentes. El servicio de seguridad del Estado, la policía y las fuerzas armadas reconstruidas —también en la SBZ comenzó a mediados de 1948 la remilitarización con la creación de la denominada *Kasernierte Volkspolizei*-KVP Policía Popular Acuartelada)—, cuyos miembros eran sometidos a estrictos criterios de fiabilidad, se consideró suficiente en esta etapa de transición para afrontar cualquier peligro potencial.

IV. LA SOVIETIZACION DE LA ECONOMIA EN LAS DEMOCRACIAS POPULARES

a. *La industrialización forzada*

La dura aplicación del «terror revolucionario» como medio de represión y de intimidación pareció tanto más necesaria cuanto la industrialización a marchas forzadas provocó un sinnúmero de tensiones sociales que, si bien son inmanentes a cualquier proceso similar de transformación, aquí fueron reforzadas por la forma acelerada en que se llevó a cabo. Al final de la guerra, todos los grupos, y no sólo los marxistas, estaban de acuerdo en la necesidad de una industrialización de los países agrarios atrasados —con la excepción de Checoslovaquia y la SBZ— de Europa oriental. Existían, sin embargo, diferentes puntos de vista en cuanto a los medios y a las prioridades sectoriales, así como en cuanto al papel que el Estado debería desempeñar. Era evidente que le correspondería, al menos en la fase de reconstrucción, un papel importante en la dirección del desarrollo económico, tanto por la limitación del capital disponible como por la falta de medios de producción y de materias primas; por otra parte, dentro de los grupos socialistas y liberales de izquierda —y ello no sólo en Europa oriental— reinaba un consenso general en cuanto a la nacionalización de las industrias básicas (siderúrgicas y mineras, entre otras) y de los bancos que, debido a su política de concesión de créditos, tenían una función esencial en la economía. También la reforma agraria —repartición de los latifundios— halló un amplio apoyo. A que existiese este consenso básico en esta cuestión decisiva de la política económica contribuyó en gran medida la amarga experiencia extraída de la gran crisis de la economía mundial en el período de entreguerras, que en los Estados agrarios de Europa oriental, débiles en capital, tuvo un efecto más duradero que en los países de Europa occidental y central y les hizo ser dolorosamente conscientes de su depen-

dencia económica del exterior. El «desarrollo de una economía nacional multifacética», esto es, con un alto grado de autarquía económica (a pesar de lo problemática que esto pudiera ser en un proceso económico cada vez más complejo y diferenciado), fue aplaudido también por los conservadores, al recoger un argumento de la discusión de los años treinta.

De la industrialización se esperaba, al mismo tiempo, la solución del grave problema de la superpoblación agraria y del subempleo derivado de ella, responsable entre otras cosas del bajo nivel de vida de la población. El éxodo de la mano de obra excedente al sector de la industria y los servicios era condición indispensable para una producción mayor *per capita* de la población dedicada a la agricultura y con ello para el aumento de sus ingresos. Por su parte los comunistas iban aún más lejos: la creciente demanda de alimentos de la población urbana, que lógicamente aún habría de aumentar con el progresivo crecimiento industrial, no podía ser garantizada por el número menor de trabajadores rurales con los métodos tradicionales de producción de los campesinos. Pero la mecanización y la racionalización intensa inherentes a la colectivización de las explotaciones campesinas privadas no sólo eliminaban el tipo de economía campesina caracterizada por Marx como la «empresa más rutinaria e irracional» [14] y el «idiotismo de la vida del campo» [15] constatado ya en el *Manifiesto comunista,* no sólo convertirían al campesino en un trabajador de campo, contribuyendo a la eliminación de la contradicción obrero-campesino, sino que además habían de revolucionar la mentalidad «reaccionaria» tradicional centrada en la propiedad de la tierra y la estructura social de la aldea con la introducción de formas de producción industriales y, con ello, de formas de vida de carácter industrial. Pero, además de esta meta lejana, la mecanización tenía otra ventaja a corto plazo, la de reforzar considerablemente el control del Partido en el ámbito rural.

La política económica de los dos primeros años de posguerra registró profundas diferencias específicas de cada país bajo el signo de la «política de bloques antifascistas», pero no obstante siguió siendo prioritaria la utilización de las posibilidades existentes y la superación de los daños de la guerra. Sin embargo, ya entonces se crearon instituciones que preparaban la posterior transición a la economía planificada. También las primeras nacionalizaciones corresponden a esta fase. En los antiguos Estados enemigos —Hungría, Rumania y la SBZ— éstas afectaron a la propiedad de los llamados «criminales de guerra» y de aquellos a los que se acusó de haberles apoyado, definición que se podía

interpretar de muy diversas maneras. En Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia fue la propiedad de los alemanes y húngaros forzosamente desplazados la que cayó en manos del Estado. Otro paso hacia la introducción de una economía nacional planificada de forma centralizada conforme al modelo soviético fue dado en 1947-48 con la entrada en vigor de los «planes de reconstrucción», concebidos en su mayor parte por expertos soviéticos en economía y planificación, que pronto dieron las primeras señales de una reorientación económica exterior que se vería luego acelerada por las restricciones americanas. Estos planes se siguieron centrando en gran medida en las circunstancias económicas de los diferentes países y así aconsejaron a Rumania, Bulgaria y Yugoslavia dar prioridad a la modernización de su agricultura y evitar una industrialización forzada (lo que en Yugoslavia provocó una contradicción, siendo una de las causas que originaron el conflicto del Kominform). La duración de los planes también fue variable. Checoslovaquia, Bulgaria y la SBZ los fijaron para un plazo de dos años, y Polonia y Hungría de tres, en tanto que Rumania decretaba en 1948 un plan anual para el año 1949.

La realización de los planes, que correspondió a la fase de establecimiento del poder comunista único, fue acompañada de una segunda oleada de nacionalizaciones que puso casi por completo la industria y el artesanado en manos del Estado, así como la banca y el comercio. Con ello era total el control estatal sobre el conjunto de la economía, lo que había de facilitar la consecución sin problemas de los ambiciosos objetivos del plan: las cifras de producción del último año de preguerra debían ser superadas en una media del 10%. Esto se vio sin embargo dificultado por la política comercial cada vez más restrictiva de los Estados Unidos frente a los países del ámbito de poder soviético tras el bloqueo de Berlín. Las exportaciones de los Estados Unidos a Europa oriental, que en 1948 ascendían a 132 millones de dólares, en 1949 cayeron a 82 millones, descendiendo tras la entrada en vigor del Export Control Act de este año a una cantidad insignificante en época posterior. El retroceso de las importaciones de Europa oriental procedentes de Gran Bretaña y Alemania Occidental fue sin embargo en gran medida —exceptuando las secuelas de la guerra— una consecuencia del cambio de estructura de los productos de importación de las democracias populares. Hasta la segunda guerra mundial, Europa oriental había importado principalmente bienes de consumo y ahora, bajo el signo de la nueva política económica, importaba casi exclusivamente maquinaria, bienes de equipo y materias primas. También se redujeron las posibilidades de exportación. Debido a las conse-

cuencias de la colectivización de la agricultura las exportaciones tradicionales de cereal y productos alimenticios se interrumpieron y hubo incluso que importar cereal tras la mala cosecha de 1950. Si los Estados Unidos habían confiado en poder influir en el desarrollo de Europa oriental con su política de restricciones, se tendrían que conformar con un simple éxito a corto plazo, ya que no lograron otra cosa que una demora. A largo plazo, la política de la Casa Blanca no condujo solamente a un desplazamiento de las corrientes del comercio exterior en este ámbito, esto es, a una intensificación del comercio interno del bloque oriental, sino que también fomentó la dependencia económica de las democracias populares con respecto a la Unión Soviética.

La exclusión fáctica del mercado de capital americano, con el que los bancos británicos y escandinavos no podían compararse en modo alguno, afectó sobre todo a Polonia, Checoslovaquia y Hungría, que habían esperado amplios créditos occidentales para su desarrollo. La compensación mediante préstamos soviéticos sólo era posible en cantidades muy restringidas, debido a la elevada demanda en la propia Unión Soviética. Sólo quedaba, en definitiva, el aprovechamiento máximo de los recursos, mano de obra, medias de producción y materias primas propios. Más difícil fue conseguir sustitutos, tanto de artículos como de materias primas, para los suministros occidentales, ya que la Unión Soviética no estaba sino parcialmente en condiciones de proporcionarlos, debido al desarrollo unilateral de su industria; junto a materias primas, sobre todo mineral de hierro, las democracias populares obtenían de ella principalmente suministros para la creación y el desarrollo de la industria de bienes de equipo. La primacía soviética de la industria pesada se aplicó también a las democracias populares. A ello contribuyeron tanto el deseo de una autarquía nacional de los diferentes Estados como el ejemplo soviético y las posibilidades específicas de suministro de la URSS. A pesar de que Hungría, Rumania y la SBZ/RDA carecían de las materias básicas para ello, también estos países levantaron grandes complejos siderúrgicos en el marco de la planificación a largo plazo. En esta decisión intervinieron también puntos de vista relacionados con la industria armamentista, ya que el aumento de las capacidades nacionales aligeraba la carga que pesaba sobre la producción soviética de hierro y de acero, sometida a un considerable esfuerzo por el rearme iniciado en 1948 y, más tarde, por la guerra de Corea. Cerca de la mitad de las inversiones totales del Estado fueron para la industria de bienes de equipo, concediéndose también prioridad al transporte y a las comunicaciones frente a la industria de bienes de consumo. Los planes

a largo plazo —en Checoslovaquia y Bulgaria entró en vigor en 1949, en Hungría en 1950 y en Rumania y en la RDA en 1951 un plan quinquenal, y en Polonia en 1950 un plan sexenal— continuaron esta política que imponía a la población un alto grado de renuncia al consumo. Las cifras incluidas en los informes sobre el cumplimiento de los planes económicos decían, sin duda, poco o nada con respecto a la posición de las diferentes economías dentro de la economía mundial, pues sólo mencionaban las tasas de crecimiento relativas, pero el orgullo por los progresos logrados estaba justificado; por otra parte demostraban a la población que los sacrificios y privaciones exigidos de ella no eran inútiles.

Las dificultades que esta política económica unilateral trajo consigo fueron no obstante enormes, asemejándose en muchos aspectos a aquellos problemas a los que se había visto enfrentada la economía soviética después del acuerdo de industrialización del XV Congreso del PCUS en diciembre de 1929. Con todo, las democracias populares podían recurrir a la experiencia entonces acumulada y transmitida por los asesores y a través del intercambio de especialistas y obreros especializados. No podían resolver, sin embargo, los problemas de adaptación cultural derivados de la acomodación de una mano de obra anteriormente agrícola a las condiciones del mundo laboral industrial. También aquí se siguió el ejemplo soviético, decidiéndose por el sistema del taylorismo, que se conformaba con un mínimo de conocimientos y habilidades técnicas; sólo Checoslovaquia y la SBZ/RDA, que disponían ya de una cultura técnica muy arraigada y de un número suficiente de obreros especializados con experiencia, constituyeron una excepción. Pero dado que faltaba el estímulo natural al rendimiento a consecuencia de la carencia de bienes de consumo, el rendimiento planificado tuvo que ser impuesto, sirviendo en este sentido de ayuda la aplicación de la estricta legislación laboral soviética con sus rigurosas medidas para el mantenimiento de la disciplina laboral y de su eliminación de la libre elección de profesión y del puesto de trabajo, entre otras cosas. Los sindicatos, controlados por el Partido, sólo tendrían en este sistema la función de auxiliares para la consecución de la política económica del Estado y no la de representantes de los trabajadores y defensores de sus reivindicaciones y derechos; la conciencia y el fomento de los intereses del Estado se correspondían, según se explicaba, con los «verdaderos» intereses de los trabajadores. Así, la lógica interna de la política de industrialización forzosa, que hacía necesaria una reglamentación y un control tan firmes del proceso de trabajo, complementaba a la perfección

las intenciones de los dirigentes comunistas: poner las posibilidades personales al servicio de la consecución de las metas comunistas. También en el ámbito del trabajo se produjo una orientación hacia el Partido, que se había definido a sí mismo como centro único del Estado y de la sociedad.

b. *La colectivización de la agricultura*

En íntima relación con el proceso de industrialización, tuvo lugar una agrupación de las explotaciones rurales en cooperativas colectivas conforme al modelo de los koljoses soviéticos que desde 1949 y bajo el lema de «colectivización de la agricultura» determinó la política agraria de las democracias populares. La reforma del sector agrario era indispensable si se quería asegurar el suministro de productos alimenticios a la población urbana en crecimiento. En los antiguos países agrícolas —Polonia, Hungría, Rumania y Bulgaria—, un gran número de explotaciones rurales pequeñas e insignificantes llevaban una existencia por debajo del nivel de subsistencia como consecuencia de las relaciones de propiedad heredadas; en Polonia, el número de explotaciones rústicas con una superficie útil inferior a las 5 hectáreas era de 1 570 000 (de un total de 2 700 000, esto es cerca del 57%); en los demás países, la situación sólo era escasamente mejor. Las llamadas reformas del suelo de 1945-1948 sólo habían servido, por otra parte, para aumentar el fraccionamiento de la propiedad rústica. Las pequeñas explotaciones de nueva creación a partir de latifundio expropiado, con una superficie media útil de 5 a 10 hectáreas, apenas bastaban para asegurar algo más que las propias necesidades. Si esta repartición del suelo había parecido adecuada en la fase de la preindustrialización para erradicar el desempleo y el subempleo e integrar a los emigrados o desplazados en la economía nacional, ahora aparecía como un obstáculo, toda vez que la demanda de mano de obra de la industria resolvía también el problema del paro. El hecho de que el necesario cambio estructural tomase la forma de colectivización se derivaba, como ya se ha mencionado, de la doctrina política. Su inicio fue la lucha comenzada en 1948 contra los grandes terratenientes, comparable a la «deskualakización» de principios de la década de 1930 en la Unión Soviética. De los grandes terratenientes se esperaba una tenaz resistencia a que sus tierras y su ganado pasasen a ser de propiedad colectiva. En la medida en que no cedieron voluntariamente a las exigencias del Partido, tuvieron que someterse a una escalada de represalias estatales: primeramente se aumen-

taron fuertemente sus impuestos y luego las tasas de entregas obligatorias de su producción, de manera que vieron rebasados los límites de su capacidad, y se les prohibió emplear mano de obra no perteneciente a la familia; la intensa presión psicológica ejercida mediante las visitas de funcionarios de las cooperativas y del Partido y, finalmente, la difamación dentro de la comunidad aldeana y la detención o la simple expropiación del conjunto de la propiedad fueron otros de los medios por los cuales se obligó a los grandes y medianos propietarios a ingresar en las colectividades, a las que los pequeños campesinos, si bien no sin ayuda más o menos fuerte, se habían unido más bien por propia voluntad ante la mejora de su situación económica que ello suponía. Como solución transitoria fueron propuestas diversas formas de cooperación, pero la colectivización plena de los medios de producción —ganado y tierras— siguió siendo la meta propuesta.

Aunque se desistiera de llevar a cabo una colectivización tan rigurosa como la practicada en 1930-31 en la Unión Soviética, ésta tuvo las mismas consecuencias: el rendimiento económico bajó rápidamente, los campesinos mataron todas sus reservas de ganado y destruyeron la simiente y los miembros de las cooperativas se dedicaron más al cultivo de las fincas que les habían quedado que a la propiedad colectiva. Si el descenso de la producción agraria en 1950 aún se pudo achacar a la pérdida de la cosecha debida a la gran sequía de aquel año, los resultados de la cosecha de 1951 pusieron en cambio de manifiesto la resistencia pasiva de los campesinos. Hacia finales de año, en todas las democracias populares la autogestión cooperativa fue reemplazada por un nuevo sistema de dirección de las colectividades que aumentaba considerablemente las competencias de los directores y reforzaba sus poderes, al tiempo que les concedía el derecho a tomar medidas disciplinarias. Para apoyarles en su cometido se aumentaron las funciones de control de las autoridades locales y de la organización del Partido; por otra parte, la introducción del sistema soviético de brigadas y un nuevo modo de distribución de los beneficios en base a las unidades de trabajo rendido iba encaminada a elevar la disciplina de trabajo, de la misma manera que los estímulos al rendimiento, tales como las primas y las distinciones al mejor trabajador, debían intensificar el trabajo. El parque estatal de maquinaria agrícola creció en cantidad y calidad de tractores y cosechadoras. Estas medidas era tanto más perentorias cuanto el descenso de la producción pesaba gravemente sobre la economía nacional, ya que obligaba a realizar cuantiosas importaciones de productos agrícolas «que

en casi todas partes [en las democracias populares] constituían más del 10% del volumen total de las importaciones»[16]. Dado que la Unión Soviética no podía cubrir la demanda, era necesario sacrificar valiosas divisas para las importaciones de Occidente, perjudicando a su vez al sector industrial.

La intensidad con que se impulsó la colectivización en los diferentes países revelaba diferencias basadas tanto en la actitud de los dirigentes del Partido como en la situación de cada país en particular. Especial dureza y rigor caracterizaría al proceso que tuvo lugar en Bulgaria, donde Chervenkov, sucesor de Dimitrov, puso un celo especial. También aquí fueron sacrificados algunos funcionarios de segunda categoría como responsables de los excesos para apaciguar a los campesinos pero, exceptuando cortos períodos de moderación, la dirección del Partido puso toda su ambición en una colectivización lo más rápida y completa posible. También en la RDA la colectivización fue impulsada recurriendo a la aplicación masiva de medios estatales; ni siquiera el éxodo a la República Federal de un gran número de campesinos consiguió que Ulbricht cambiara de rumbo para adoptar una línea más moderada. En Polonia, sin embargo, fue necesario proceder con cautela. La sobrecarga de la simultánea lucha religiosa obligó a tener ciertas consideraciones, pues justamente la población rural constituía un fuerte respaldo para la Iglesia. En tanto que en los demás países de Europa occidental —exceptuando al caso especial de Yugoslavia, expulsada del bloque del Kominform, que desde 1951 revisaría su política agraria— se implantó definitivamente a lo largo de la década de 1950 la colectividad como nueva forma de economía agraria, en Polonia las propiedades privadas de los campesinos se mantuvieron en gran parte gracias a la especial situación del país, disolviéndose incluso en parte las colectividades a consecuencia del desarrollo político que tuvo lugar a la muerte de Stalin.

c. *La coordinación económica y el Consejo de Asistencia Económica Mutua*

Las dificultades derivadas de los objetivos nacionales del desarrollo económico de los países europeos orientales no tardaron en obligar a considerar la forma de superarlas a través de una cooperación mayor e institucionalizada entre los países; además de la Federación Balcánica se estudió también la creación de otra polaco-checoslovaca, y en las Naciones Unidas se habló de la posibilidad de una cooperación económica suprarregional. Ésta era una exigencia de la época, así como, en buena medida,

una lección extraída de las experiencias realizadas hasta 1945 que sería puesta en práctica por el secretario de Estado Marshall con su European Recovery Program (ERP), si bien dentro de un marco más limitado que el que se pretendía. Los dirigentes soviéticos, que en 1947 aún seguían viendo en ello una injerencia en la soberanía nacional, pronto se dieron cuenta sin embargo de que también las relaciones económicas dentro de su ámbito de influencia presentaban problemas de coordinación con los acuerdos bilaterales practicados hasta 1948, que se hacían tanto mayores cuanto más dependían las democracias populares del apoyo económica de la Unión Soviética. Las graves deficiencias que constantemente aparecían en los diferentes países y que sólo eran difícilmente superables con ayudas *ad hoc* por parte soviética, eran especialmente gravosas para la economía de la URSS, cuestionando toda su planificación. Junto a estas razones económicas, consideraciones de política hegemónica hablaban también en favor de una mayor coordinación económica dentro del ámbito de poder soviético. Su institucionalización no sólo suavizaría el malestar latente existente en los países excluidos del Plan Marshall, sino que también pondría en manos de los dirigentes de Moscú un nuevo instrumento adicional de poder que complementaría eficazmente los medios ideológicos, políticos y militares. La apostasía de Yugoslavia confirió una urgencia inesperada a la discusión mantenida desde mediados de 1947 sobre una mayor congruencia entre los planes económicos de las diferentes democracias populares y el plan soviético (pero que no fue más allá de la resolución de lograr un mayor ajuste entre los tratados de comercio exterior a los objetivos económicos de los respectivos países firmantes). En la segunda mitad de 1948 tuvieron lugar en Moscú y Sochi, entre otras ciudades, intensas conversaciones al más alto nivel con los representantes de los diferentes países. Finalmente, el 5 de enero de 1949 se reunieron en Moscú los directores de los centros oficiales de planificación estatal de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria con sus colegas soviéticos en el marco de una conferencia en la que se acordó la fundación de una organización común, el Consejo de Asistencia Económica Mutua. La conferencia fue presidida por el que más tarde sería el ideólogo-jefe del PCUS, Mijail Suslov, clara muestra de que la nueva institución y sus competencias se hallaban cuidadosamente ensambladas dentro del marco de los objetivos ideológicos y políticos de la Unión Soviética. El acta de la conferencia, que finalizó el 8

de enero, fue firmada diez días después por los gobiernos [17], informándose a través de un comunicado a la opinión pública el 25 de enero.

Frente a las discusiones internas soviéticas de 1947-48, el acta atribuía al Consejo de Asistencia Económica Mutua, abreviado como CAEM o denominado según la forma anglosajona Comecon, una función integradora más fuerte: no sólo había de acomodar la planificación de las diferentes democracias populares a la soviética, sino también coordinarlas entre sí, para lo cual había que preparar un plan económico general; debía coordinar el desarrollo de la industria y de los recursos de los diferentes países con el objetivo de desarrollar un espacio económico cerrado en el que las economías nacionales se complementasen entre sí y se pudiesen evitar desarrollos en competencia. Por otra parte, debía fomentar la cooperación de los países asociados en grandes proyectos industriales y en la explotación de materias primas mediante la participación común en forma de sociedades mixtas, así como el intercambio de experiencias y la estandarización de la producción [18]. La instancia suprema del Comecon era el Consejo, formado por representantes de todos los países miembros, que debía reunirse por lo menos una vez al año en uno de estos países. Los asuntos corrientes pasaban a una oficina (el acta preveía una secretaría general) con sede en Moscú, que fue dotada de un fondo de reserva de 100 millones de rublos, 50 de los cuales habían sido aportados por la Unión Soviética y 10 por cada uno de los restantes Estados signatarios. A partir de 1950, los países se comprometían a orientar sus planes económicos de acuerdo con las indicaciones del Consejo. Naturalmente, las decisiones del Consejo sólo podían tomarse con el beneplácito del país en cuestión, al igual que se evitó cuidadosamente todo lo que pudiese hacer suponer que los derechos soberanos de los Estados miembros se pudieran ver afectados por el Comecon. Pero a pesar del hincapié expreso en la igualdad de derechos de todos los países asociados, el papel dominante en esta organización recaía sobre la Unión Soviética en razón de su superior poder económico y del hecho de que las democracias populares dependían de los suministros soviéticos de materias primas y otros. Las democracias populares necesitaban también económicamente de la Unión Soviética, que era sin duda consciente de su independencia.

La sesión constituyente del Consejo se celebró en Moscú del 26 al 28 de abril; entre los participantes estaba también Albania, que se había integrado en febrero en el Comecon. Contraria-

mente a los acuerdos tomados en la conferencia de enero, contenidos en el acta, la actividad de la oficina se limitó a la preparación de las sesiones del Consejo. Estaba formada por representantes de los países miembros y por el secretario del Comecon y contaba con seis departamentos encargados de los diferentes ámbitos. Si esta primera conferencia se ocupó primordialmente de cuestiones organizativas y de procedimiento, la segunda, celebrada en Sofía del 25 al 27 de agosto de 1949, tomó acuerdos importantes, consecuencia de los cuales fue no sólo la guerra económica de los Estados del Comecon con Yugoslavia (que el 1 de febrero de 1949 se había esforzado en vano por ingresar en el Consejo), sino también la previsión de un intercambio gratuito de documentos técnicos entre los países miembros. Por otra parte, se acordó completar los tratados comerciales anuales con tratados a largo plazo. La tercera reunión del Consejo tuvo lugar nuevamente en Moscú (del 24 al 25 de noviembre de 1950) con la participación de la RDA, acogida el 29 de septiembre de 1950. Al lado de cuestiones relativas a la ayuda mutua para la consecución de los planes económicos, el primer plano estuvo ocupado por el problema de la unidad de compensación para el comercio interior dentro del Comecon. Teniendo presentes las relaciones políticas y económicas de poder, era evidente que sólo podía serlo el rublo. El llamado «rublo transferible» se convirtió en la moneda de cuenta para el comercio dentro del Comecon. Con ello, la Unión Soviética, que determinaba las paridades monetarias y el cambio, obtuvo un medio más para fortalecer su poder, que utilizó en su propio beneficio. Stalin y sus consejeros no pensaban en modo alguno en una verdadera «ayuda fraternal», como la que presuntamente rige las relaciones entre los Estados comunistas. La práctica de la fijación de precios para el comercio exterior con las democracias populares puso de manifiesto que la Unión Soviética se esforzaba con éxito en rebajar los precios de los artículos de importación y en encarecer sus propias exportaciones. A ello se añadía el aumento constante de las exigencias de calidad, que no podía reflejarse en los precios de suministro de las democracias populares. Las protestas eran rechazadas en Moscú con el argumento de que las democracias populares estaban obligadas a apoyar a la Unión Soviética en su «lucha contra el imperialismo». Finalmente, la guerra de Corea gravó indudablemente la economía soviética, si bien no le había sido impuesta tampoco a la URSS. En lo que se refiere a los aumentos de precios soviéticos en el comercio con las democracias populares hay que tener también en cuenta que

la explotación de nuevas fuentes de materias primas exigía una elevada inversión de capital, aunque esto no justificaba ni con mucho esta práctica. Oponerse a ello era sin embargo inútil. La orientación del comercio hacia la Unión Soviética se hallaba ya demasiado avanzada: el volumen del comercio de Bulgaria con la URSS, en 1950, era el 67%; el de Rumania, el 55%; el de la RDA, el 40% y el de Checoslovaquia, Hungría y Polonia, el 27% de su comercio exterior total [19].

Durante la era de Stalin, el Comecon no tuvo una auténtica función integradora; todo lo que se logró en materia de la cooperación no excedió el nivel de lo que es habitual a nivel internacional, e incluso quedó muy por detrás de las posibilidades en comparación con los resultados de la integración de Europa occidental. Los planes originarios de una división del trabajo entre los países del Comecon no siguieron adelante; la construcción de industrias metalúrgicas nacionales en Plovdiv (Bulgaria, Galati (Rumania), Sztálinváros (actualmente Dunaújváros, Hungría) y Stalinstadt (actualmente Eisenhüttenstadt, RDA), cuya producción dependía en parte o por completo de la importación de mineral y carbón, contradecía por completo esta intención. Se consiguió no obstante eliminar en cierta medida el resentimiento nacional, como en el caso de la RDA, eliminación que fue estrechamente unida al correspondiente adoctrinamiento ideológico masivo, aunque en definitiva estuvo determinada por su evidente conveniencia. En el campo económico, Stalin también rechazó constantemente la verdadera igualdad de derechos de las democracias populares: ni la permanente desconfianza ni el afán de superioridad del «gran caudillo» le permitían reconocerla. Mientras él vivió, el Consejo no tuvo nunca más que una función puramente instrumental dentro del marco de la política soviética de poder. El Consejo no recibió otras competencias que hubiesen podido menoscabar los intereses de la Unión Soviética desde el punto de vista de Stalin. Los mismos tratados comerciales sólo podían ser firmados, como ya se ha dicho, bilateralmente, dado que en este sentido la URSS podía poner en juego su mayor peso económico en su favor sin correr el peligro de verse vencida por la mayoría (algo sin duda impensable en las circunstancias reinantes). Sólo después de la muerte de Stalin el Consejo, bajo sus sucesores, pudo responder en mayor medida a su finalidad primitiva de coordinar y fomentar el desarrollo económico de los países del Comecon de acuerdo con los intereses de éstos.

a. *Los problemas de Extremo Oriente y Alemania*

La evidente actuación dilatoria del Consejo de Asistencia Económica Mutua y el desinterés de los dirigentes soviéticos por la realización de sus planes de integración, tan fuertemente impulsados al principio, se debieron menos a las reservas con las que éstos tropezaron en los dirigentes comunistas de las democracias populares que a un desplazamiento del centro de gravedad de los intereses soviéticos. Los requisitos para ello se habían dado a finales de 1948: el territorio europeo oriental se encontraba firmemente en manos de Moscú, asegurado por un sinnúmero de vínculos contractuales, institucionales y personales; los eventuales factores de riesgo —el «desviacionismo nacional», por ejemplo—, ya no cuestionaban seriamente la hegemonía soviética, siendo eliminados sin esfuerzo en la época posterior. En Asia oriental, en cambio, se perfilaba desde 1948 una evolución que ocupaba en gran medida la atención de los dirigentes soviéticos: el conflicto entre los comunistas y el gobierno del Kuomintang en China tomaba un rumbo no previsto por Moscú.

Los dirigentes soviéticos habían animado al PC de China, bajo Mao Zedong, a cooperar lealmente con al Kuomintang no sólo durante la segunda guerra mundial, cuando ello parecía obligado en atención a los aliados occidentales, sino también en 1945 y 1946; y habían tratado al gobierno de Jiang Jieshi (Chiang Kai-Chek), hasta su caída, como legítimo representante estatal del pueblo chino. Stalin, que debido al apoyo que le prestaban los Estados Unidos, consideraba al Kuomintang como la fuerza política y militar más importante de China, tenía además buenas razones para preferir el inestable dominio del Kuomintang que, en caso de necesidad, podía ser doblegado mediante acciones de los comunistas chinos; en cambio, la construcción de un Estado comunista, a largo plazo, haría crecer en el sensible flanco oriental de la Unión Soviética un poder que, por su propio peso, podía afectar al menos al predominio de los intereses soviéticos. Por otra parte, la relación de los dirigentes soviéticos con Mao Zedong en el pasado tampoco había estado libre de conflictos. Tras el desastre de los comunistas chinos en 1927, Mao —contrariando el parecer de la dirección del Komintern— había apostado por la fuerza revolucionaria de los campesinos, haciendo asimismo caso omiso de la recomendación de participar después de la guerra en el gobierno del Kuomintang. Cuando en el verano de 1948 se hizo pública la pésima situación del régimen de

Jiang Jieshi y el ejército comunista inició su rápido avance, creció la preocupación en el Kremlin que la experiencia con Yugoslavia había confirmado, ya que también allí la toma del poder se había apoyado principalmente en los campesinos y los intelectuales. La preocupación estaba justificada: a lo largo del otoño, el ejército de Mao conquistó Manchuria, el 31 de enero de 1949 Pekín capituló y, cuando aún estaban siendo expulsados los últimos restos de las tropas del Kuomintang del sur del país, el 1 de octubre de 1949 Mao proclamó la «República Popular China».

Tras esta decisión, los dirigentes soviéticos se apresuraron a tener en cuenta los hechos. Pocos días después de la proclamación del nuevo Estado, éste fue reconocido por el gobierno de la URSS, y en diciembre Mao viajó a Moscú para negociar. Las conversaciones fueron duras y difíciles, no pudiéndose firmar el tratado de amistad, alianza y ayuda mutua para un período de treinta años hasta el 14 de febrero de 1950. En tratados posteriores, la Unión Soviética renunció a sus privilegios en el ferrocarril de China oriental (Changchun), que habría de devolver tras la firma de un tratado de paz con Japón, como muy tarde a finales de 1952; el mismo plazo se aplicó a la devolución de los puertos de Port Arthur y Dairen (en virtud del acuerdo del 25 de septiembre de 1952, la devolución se efectuó a finales de ese año). Mao tuvo que conceder a cambio a la Unión Soviética ciertos derechos en Xinjiang y Mongolia Interior, que Stalin consideraba dentro de la esfera de intereses soviética, y reconocer también la soberanía de la República Popular de Mongolia. Las esperanzas chinas de obtener mayores créditos soviéticos se vieron frustradas; el gobierno soviético sólo concedió a China la suma, relativamente modesta, de 300 millones de dólares (el año anterior había concedido 450 millones a Polonia), lo cual provocó en los chinos un cierto malestar. Stalin respondió sin embargo de otra manera. Envió a la nueva China un gran número de asesores y expertos soviéticos para prestar su apoyo en la construcción del nuevo orden en todos los campos, lo que, por otra parte, le permitía no sólo tener una visión muy amplia de los asuntos chinos, siguiendo el modelo practicado en los países de Europa oriental, sino al mismo tiempo un instrumento para reconducir al menos las acciones o los rumbos no deseados. El desarrollo económico estuvo también aquí controlado en gran medida por las sociedades mixtas chino-soviéticas. La admiración de muchos comunistas chinos por la Unión Soviética, el primer país socialista, y sus éxitos en política tanto interior como exterior preparó el terreno para el movimiento de «amistad» que propagaba la idea de la Unión Soviética como ejemplo

y guía, y fomentaba el mismo culto a Stalin, habitual ya en las democracias populares.

La victoria del PC chino tuvo sin embargo mayor transcendencia, pues puso de manifiesto la inestabilidad del orden de posguerra en Asia oriental. Ni siquiera la intervención activa de los Estados Unidos había sido capaz de detener una ofensiva comunista revolucionaria. El discurso de Malenkov del 6 de noviembre de 1949 hizo patente lo que la Unión Soviética esperaba de Asia. El régimen comunista de Corea del Norte, que se había establecido durante la ocupación soviética de la región y que desde marzo de 1949 estaba ligado a la URSS mediante un tratado de cooperación económica y cultural, se sintió animado por el ejemplo chino y por el apoyo de Moscú a realizar acciones revolucionarias; sus tropas invadieron la zona sur del país y la guerra de Corea, con todas sus complicaciones, envolvió también en el conflicto a la Unión Soviética, sin tener en cuenta su neutralidad. Los dirigentes soviéticos seguían también con atención el curso de los acontecimientos en otras zonas de Asia. El derrumbamiento del predominio europeo y la disolución de los grandes imperios coloniales dejaron en Asia y Africa zonas enrarecidas desde el punto de vista de la política hegemónica, en las cuales se esforzaba por penetrar la Unión Soviética, ya fuese a nivel estatal por medios diplomáticos, ya fuese en el ámbito ideológico valiéndose de la propaganda. Los puntos de partida para ello eran sobre todo los movimientos de liberación nacional, en los que la infiltración parecía fácil. Aunque estas actividades fracasaron frecuentemente, provocando reacciones, estas maniobras de distracción —pues dada la debilidad de las fuerzas comunistas implicadas y su actuación, caracterizada con frecuencia por la confusión ideológica, apenas pueden ser llamadas de otra forma— atrajeron la atención del mundo occidental, requirieron fuerzas y recursos, sobre todo de los Estados Unidos, y proporcionaron a la Unión Soviética en Europa el alivio necesario.

Aquí, las potencias occidentales habían proseguido entre tanto consecuentemente sus esfuerzos en favor de la integración de los Estados no comunistas. Tras la firma del Tratado del Atlántico Norte y la unión de las tres zonas occidentales de ocupación de Alemania en abril de 1949, en septiembre de aquel mismo año se constituyó la República Federal de Alemania, a lo cual respondió la Unión Soviética con la fundación de la República Democrática Alemana (RDA), proclamada el 7 de octubre de 1949 como contraposición al «Estado alemán occidental del capital monopolista». La división del mundo en dos «campos», consta-

tada por Zdánov en la Conferencia de Schreiberhau, ahora se ponía también de manifiesto en suelo alemán con dos Estados rivales y aspirantes los dos a ser los representantes de los intereses de todos los alemanes.

La propaganda comunista presentó este paso como una reacción necesaria frente a la fundación de la República Federal, pero en realidad el acto de la fundación no hacía sino formalizar la práctica ejercida ya desde 1945 en la SBZ de crear instituciones estatales propias. El primer paso se había dado con la creación de las once Administraciones Centrales Alemanas por la orden número 17 de la *Sowjetische Militär-Administration Deutschlands* (SMAD, Administración Militar Soviética de Alemania) del 27 de julio de 1945, algunas de las cuales pasaron a formar parte de la Comisión Económica Alemana, creada el 14 de junio de 1947 como polo opuesto del Consejo Económico de la Bizona de Alemania Occidental y que a partir de febrero de 1948 tendría la facultad de tomar decisiones obligatorias para todo el territorio de la SBZ. Con el Volkskongress-Bewegung (Movimiento del Congreso del Pueblo) iniciado a finales de 1947 se creó luego una especie de Preparlamento que, finalmente, en su tercer congreso, constituyó un *Volksrat* (Consejo del Pueblo) que el 19 de marzo de 1949 concluyó la elaboración de una Constitución aceptada por el Congreso el 30 de marzo. El *Volksrat* actuó también el 7 de octubre como *Provisorische Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik* (Cámara Popular Provisional de la República Democrática Alemana). No hacía falta más que cambiar la denominación de los órganos administrativos centrales ya existentes y crear adicionalmente los ministerios de Seguridad del Estado y Asuntos Exteriores para disponer de un aparato de gobierno capaz de funcionar.

Independientemente de todos los adornos democráticos que aparecían en el texto de la Constitución, la práctica del reparto y del ejercicio del poder garantizaba la supremacía del SED, sin que se viese afectada en modo alguno por el hecho de que toda una serie de cargos estatales estuviesen ocupados por miembros de los llamados «partidos del bloque», pues estos partidos habían sido unificados entre tanto. Esta concesión a las «fuerzas burguesas» iba dirigida solamente a la opinión pública de la República Federal de Alemania y del mundo occidental.

Los dirigentes del SED se siguieron esforzando por influir en la población alemana occidental. El nuevo Estado, que se presentaba con la aspiración consagrada por la Constitución de ser la «verdadera» Alemania y como el presunto representante de los intereses de los «trabajadores», trató también en la época

posterior de activar en la República Federal la esperanza en la reunificación de Alemania —conforme a los puntos de vista soviéticos— mediante el «Frente Nacional» creado en octubre de 1949, sirviéndose para ello del llamamiento a los sentimientos patrióticos y a los intereses nacionales y estimulando el resentimiento antiparlamentario, antioccidental y anticapitalista que, como vestigio del pasado, todavía era virulento aunque no fuese políticamente decisivo. El 15 de febrero de 1950, el Consejo Nacional, órgano rector del Frente Nacional creado poco antes, elaboró un programa que postulaba, entre otras cosas, la «creación de una Alemania unida, democrática, amante de la paz e independiente, y el restablecimiento de la unidad política y económica de Berlín como capital de Alemania»[20]. Teniendo en cuenta la realidad del «primer Estado alemán de obreros y campesinos», como el SED denominaba a su creación, los inspiradores del Frente Nacional no podían contar seriamente con tener éxito en sus esfuerzos reunificadores en las condiciones impuestas por ellos, toda vez que la población de Alemania Occidental no cesaba de verse aumentada por la creciente riada de fugitivos procedentes del dominio del SED a causa de la situación allí existente. El «movimiento» había sido concebido, por otra parte, ante todo como un instrumento de la «propaganda occidental» para perturbar en lo posible la integración de la República Federal en el sistema de alianzas y pactos de Europa occidental y encubrir la vinculación de la RDA al ámbito de poder soviético. Por otra parte, también servía para impedir que la esperanza de reunificación acariciada por la propia población no la llevase a una identificación nacional con la República Federal.

Los dirigentes soviéticos habían renunciado hasta entonces a la integración de la SBZ en el sistema de países del Comecon; dado que tal paso hubiese equivalido a una decisión previa sobre la cuestión alemana, no se podía hacer pasar, como el establecimiento de autoridades administrativas centrales, por una medida preparatoria para llegar a una solución global para Alemania. Cierto es que, desde 1947, la Unión Soviética había ido ligando cada vez más fuertemente a sí a la SBZ, pero la regulación de todas las cuestiones interestatales se reservaba para un gobierno de toda Alemania. Todo lo relativo a las relaciones económicas de la SBZ con los países del Comecon se desarrollaba en el marco de un comercio bilateral normal y se cimentaba en acuerdos a corto plazo. Hasta la fundación de la República Federal, los dirigentes moscovitas mantuvieron siempre abierta la opción de la reunificación alemana, aunque sin dejar en ningún momento lugar a dudas en cuanto a que la posible solución

alemana global debería responder a las expectativas soviéticas. Como condición previa para la unificación de las diferentes zonas de ocupación, en Alemania Occidental tendrían que haberse producido, al menos, transformaciones similares —si no iguales— en el campo social y económico a las que habían tenido lugar en la zona de ocupación soviética entre 1945 y 1947. Cierto es que, desde mediados de 1947, los dirigentes soviéticos habían dado prioridad como solución mínima a la creación de un Estado alemán parcial comunista, pero no obstante no se descartaba la posibilidad de llegar a una solución máxima en la que lógicamente la solución final a que se aspiraba era la integración de toda Alemania en el ámbito hegemónico soviético, aunque ésta tuviese que pasar por una finlandización provisional. Las sutilezas comunistas en el tema de una Asamblea Constituyente de toda Alemania o en el del procedimiento electoral, entre otras muchas cosas, tendían exclusivamente a crear las condiciones previas óptimas para el SED y sus objetivos políticos. La política alemana global de los comunistas se movía en este sentido en la línea de la táctica frentepopulista, incluso después de que fuese reemplazada en la propia SBZ por la clara supremacía del SED; el «Frente Nacional» continuó con esta política tendente a lograr la formación de un amplio «bloque de partidos antifascistas y democráticos» como paso previo a la toma del poder por los comunistas en toda Alemania. Habida cuenta del curso de los acontecimientos en la parte democrática de Alemania, esto parecía ilusorio, pero tenía más sentido que una actitud meramente defensiva, como respuesta a la exigencia de reunificación de la República Federal: en caso de un agudizamiento crítico de la situación socioeconómica en la República Federal, que necesariamente tendría que producirse conforme al dogma marxista, existía aquí un punto de partida para una política comunista de reunificación ofensiva.

La fundación de la República Federal libró a los dirigentes soviéticos, en lo que se refiere a la relación de la RDA con los países del Comecon, de toda preocupación por una hipotética regulación de toda Alemania. Los dirigentes del SED podían dedicarse a asegurar los vínculos ya existentes del nuevo Estado con la Unión Soviética y ampliarlos mediante los correspondientes acuerdos con los demás países comunistas según el Derecho internacional. Stalin había expresado elocuentemente el cambio de situación en su telegrama de felicitación a los dirigentes de la RDA del 13 de octubre de 1949: «La experiencia de la última guerra ha mostrado que los pueblos alemán y soviético... poseen la mayor capacidad en Europa para llevar a cabo grandes accio-

nes de importancia mundial»[21]. El ejemplo del establecimiento de relaciones estatales con el intercambio de representantes diplomáticos entre Moscú y Berlín Este el 15 de octubre de 1949 fue seguido poco después por los demás Estados del Comecon, regulándose también en aquel momento la cuestión central de las relaciones germano-polacas. La decisión tomada provisionalmente en 1945, de acuerdo con los aliados, hasta que se llegase a una regulación de paz, por la que los territorios alemanes orientales quedaban sometidos a la administración polaca, tenía para Polonia una importancia política vital. La anexión de los «territorios occidentales recuperados» —conforme a la definición polaca— se entendió como una compensación por los territorios de Polonia oriental anexionados por la Unión Soviética, declarada poco menos que cuestión vital para la nación; la exigencia de una integración en el Estado polaco sancionada por el Derecho internacional no sólo unía a todas las fuerzas políticas de Polonia, sino que también era aceptada por la mayoría de los emigrados polacos y creaba un amplio consenso nacional con el gobierno de Varsovia. Los dirigentes soviéticos no tardaron en apoyar las aspiraciones polacas, pues en tanto los alemanes no renunciasen definitivamente a aquellos territorios, Polonia seguiría dependiendo de la ayuda y del respaldo soviético en esta cuestión tan importante de política interior. Es sintomático que la decisión fuese tomada finalmente por los dirigentes de los partidos comunistas de los dos países implicados. Una entrevista celebrada entre Ulbricht que, como fiel defensor de Stalin, era la figura clave de la dirección del SED, y los dirigentes del POUP en Varsovia finalizó el 6 de junio de 1950 con la firma de una declaración en la que Ulbricht reconocía como «inviolable» y como «frontera de paz y de amistad» la frontera Oder-Neisse. El acuerdo estatal tuvo lugar un mes después: el 6 de julio, los ministros de Asuntos Exteriores firmaron en Görlitz el correspondiente tratado de fronteras. Con este tratado se eliminaban las últimas reservas frente a la integración de la RDA como socio de pleno derecho de las democracias populares en el sistema del Comecon; el 29 de septiembre de 1950 tuvo lugar su ingreso en el Consejo.

En política interior, los dirigentes del SED también se sintieron dispensados de toda consideración hacia los sentimientos acerca de la reunificación alemana. Con toda la energía y empleando todos los medios disponibles se impulsó la «socialización de los medios de producción»; las pequeñas empresas de la industria y del comercio que todavía no se habían visto afectadas fueron nacionalizadas o controladas mediante una «participación» esta-

tal; los artesanos y campesinos fueron integrados en cooperativas colectivas; y se inició con gran virulencia la lucha contra las Iglesias. También en otros ámbitos se esforzó la dirección del SED por igualarse lo más pronto posible a los demás países del Comecón. En el III Congreso del SED (del 20 al 24 de julio de 1950), Ulbricht se convirtió en secretario general del Partido, los delegados aprobaron el plan quinquenal para 1951-1955, y se aceptaron unos nuevos estatutos del Partido que reforzaban aún más la práctica ejercida ya hasta entonces, la de un Partido estalinista «monolítico» de cuadros. El desarrollo de las llamadas *Kasernierte Bereitschaften* (Reservas Acuarteladas) (julio de 1948), que cambiaron de denominación en octubre de 1952 para pasar a llamarse *Kasernierte Volkspolizei* (Policía Popular Acuartelada), hasta convertirse en unidades militares, progresó rápidamente; a partir de 1951 las fuerzas aéreas y navales fueron ampliadas y un año después disponían de siete divisiones con cerca de 100 000 hombres. También se centralizó la organización estatal mediante una reforma administrativa (23 de julio de 1952) que suprimía los antiguos *Länder* y los últimos vestigios federalistas. Al mismo tiempo se tomó el ingreso de la República Federal en la CED como pretexto para cerrar herméticamente la frontera interalemana. Así, la II Conferencia del SED (del 9 al 12 de julio de 1952) pudo aprobar la propuesta de Ulbricht de la siguiente manera: «Las condiciones políticas y económicas, así como la conciencia de la clase obrera y de la mayoría de los trabajadores, se han desarrollado hasta tal punto que la construcción del socialismo se ha convertido en la tarea fundamental de la República Democrática Alemana»[22]. Con ello, la RDA se igualaba también oficialmente a las democracias populares, alcanzando la misma etapa en el desarrollo programado de los Estados socialistas.

La integración de la RDA como miembro de pleno derecho, que también determinó la posición del SED en la organización del Kominform, pudo parecer no obstante amenazada a corto plazo en la primavera de 1952. La nota de Stalin relativa a la cuestión alemana del 10 de marzo[23] parecía anunciar inesperadamente una buena disposición soviética hacia las concesiones. En ella, Stalin ofrecía la firma de un tratado de paz con Alemania sobre la base del Tratado de Potsdam y ofrecía a Alemania el *status* de «neutralidad armada». La oferta bien pudo ser parte de una ofensiva soviética resultante de la inquietud producida por la progresiva integración de Europa occidental y por la ampliación de la alianza defensiva occidental con el ingreso de Grecia y Turquía en la OTAN. A los debates en torno al fortaleci-

miento del potencial defensivo occidental en Europa, la Unión Soviética opuso desde finales de 1951 la idea de crear un cinturón de Estados neutrales desde Escandinavia hasta Italia, quedando Yugoslavia al este de la zona de separación de los bloques. Alemania podía formar ahora, así se podía entender la nota, la parte central de este cordón de seguridad. El ofrecimiento soviético llegó justamente en el momento en que estaba a punto de firmarse el tratado de integración de la República Federal en el sistema occidental de alianzas política y militar, por lo que fue interpretado sobre todo como una mera maniobra de distracción, toda vez que existían dudas fundadas, debido a las experiencias conocidas hasta entonces, sobre si los dirigentes soviéticos se alejarían en este caso de su acostumbrada práctica de presentar constantemente nuevas y más amplias exigencias en el curso de las negociaciones, e interrumpir las conversaciones en caso de no ser aceptadas, y sobre si Stalin no haría sino jugar, por tanto, a ganar tiempo con su oferta. Pero el rechazo tuvo razones más profundas. Al tomar como base el Tratado de Potsdam, Stalin no sólo habría establecido definitivamente la frontera Oder-Neisse, sino que también habría proporcionado de nuevo a la Unión Soviética perspectivas de participación en el control del Ruhr y libertad de maniobra suficiente para influir directamente en el desarrollo de los acontecimientos en toda Alemania. Por otra parte, mediante la neutralización de Alemania se habría debilitado decisivamente la posición de Occidente en Europa, provocando una inestabilidad política y militar en esta región que, teniendo en cuenta la meta claramente expansionista de la política soviética —tal como se había puesto de manifiesto precisamente en la guerra de Corea—, podía conducir a largo plazo bajo la esfera de influencia soviética, y finalmente bajo el dominio soviético, no sólo a la Alemania reunificada, sino también a toda Europa.

Tras la división de Alemania, con la integración de los dos Estados alemanes en sistemas sociales rivales en el aspecto político, militar y económico, aún quedaban en Europa dos cuestiones abiertas, herencia de la segunda guerra mundial. Considerando tan sólo la firme actitud mostrada por los sindicatos y los trabajadores en 1948, en Austria no era factible la realización de un golpe de Estado comunista; en Berlín, los comunistas habían podido ciertamente —gracias a la ayuda de la potencia soviética de ocupación—, usurpar el poder sobre la parte oriental de la ciudad que luego sería declarada capital de la RDA, pero no sobre los tres sectores occidentales. Pero ambas cuestiones habían ofrecido a los dirigentes soviéticos garantías que les per-

mitían reanudar el diálogo con Occidente en el momento oportuno y, dado el caso, incluso forzarlo.

b. *El sistema del estalinismo*

Aun después de que estuviese asegurado en los Estados del Comecon el poder único de los partidos comunistas y de que se hubiesen revolucionado además las estructuras económicas y sociales conforme a la doctrina, el dominio de Moscú dentro del llamado bloque oriental permaneció invariable hasta la muerte de Stalin y los métodos aplicados para el mantenimiento del poder cambiaron igualmente poco. La realidad estaba muy alejada del modelo propagado, que adjudicaba a la Unión Soviética el papel de *primus inter pares*. Stalin no dejó de concentrar en sus manos todo el poder ni siquiera después de 1949, dejando a los dirigentes de los diferentes países comunistas únicamente el papel de centros políticos secundarios cuyas competencias decisorias se hallaban fuertemente limitadas por las estrictas líneas-marco de la central de Moscú. Resulta poco significativo que dirigentes comunistas como Gheorghiu-Dej y Gottwald, entre otros, apareciesen en sus países como «caudillos», de la misma manera que en la Unión Soviética el propio Stalin, al que sin embargo le estaba reservado en exclusiva el epíteto de «sabio». El culto al líder en las democracias populares no era más que una pequeña compensación por la posición subalterna de los jefes de los partidos comunistas, que respondía además a la práctica soviética y debía conferir un mayor prestigio en su propio país a los dirigentes de los partidos comunistas. El rígido centralismo era tanto más necesario, en opinión de la dirección soviética, cuanto que, a pesar de los éxitos obtenidos y de las medidas de seguridad, la posición de los partidos comunistas en los países del Comecon no estaba en modo alguno tan afianzada como para permitirles hacerse los dueños de la situación sin apoyo soviético en una de las crisis propiciadas desde el exterior. La Unión Soviética era pues quien en definitiva garantizaba con su poder la construcción del socialismo. De acuerdo con ello el fortalecimiento de este poder era absolutamente prioritario y a él debían supeditarse todos los intereses nacionales. Cuando en el verano de 1952 los Estados Unidos parecieron pasar de la política del *containment* a la del *roll back* frente al movimiento comunista, tratando realmente de apoyar políticamente a las fuerzas anticomunistas en los países del Comecon, Stalin pudo considerar justificada su tesis de la amenaza

del campo socialista. Por otra parte, la creciente presión ejercida desde 1949-50 obligó a los dirigentes de los países del Comecon no sólo a eliminar lo más rápidamente posible, en aras del mantenimiento del poder, a todos los posibles adversarios (cosa que, a su vez, contribuía a agravar la situación interna), sino también a someterse ellos mismos sin protestar al centralismo soviético. El sometimiento estricto parecía necesario a los dirigentes soviéticos, entre otras cosas, porque entre los diferentes países, independientemente de la adopción del instrumental institucional y metodológico de dominio estalinista, seguían existiendo diferencias, bien como vestigios de las tradiciones o las estructuras económicas heredadas, bien por las peculiaridades personales de sus representantes y de sus órganos rectores. Stalin desistió, sin embargo, de incorporar las democracias populares a la URSS como repúblicas soviéticas, posibilidad que fue considerada al menos en 1948-1950 y que habría facilitado a los dirigentes soviéticos la coordinación de los potenciales políticos, militares y económicos del ámbito del Comecon; el sistema de controles directos e indirectos extendido por la Unión Soviética sobre los países de su ámbito de poder aseguraba perfectamente su dominio.

No sólo es inherente al estalinismo el hecho de que esta forma de dominio sea autocrática y vaya unida a la persona del que detenta el poder, presentando con ello rasgos de cesarismo, sino también el hecho de que, mediante un sistema de mecanismos múltiples y superpuestos de control, aísle al individuo, convirtiendo al dominador en punto exclusivo de referencia de su lealtad para evitar actos de solidaridad incontrolada y una debilitación potencial del poder. La profesión permanente de adhesión —más de hecho que de palabra— se convierte en requisito de toda forma posible de participación en el poder y decide la suerte del individuo. Dado que el autócrata es quien juzga el grado adecuado de lealtad, el individuo se halla permanentemente en un estado de incertidumbre y, dado que los méritos pasados no cuentan, se encuentra sometido a una presión ininterrumpida que le obliga a justificarse. El clima calculado de inseguridad y desconfianza hacia todos, patente en el postulado del Partido que se refiere a la «vigilancia proletaria», también se enseñoreó de las democracias populares. A este instrumento tan eficaz de dominio estaban sometidos también —al igual que los propios colaboradores de Stalin— los dirigentes de los diferentes países del Comecon. En lo que a las relaciones entre las democracias populares se refiere, la consecuencia de todo esto fue la reducción cada vez mayor de los contactos a nivel de Partido y de

gobierno, contactos que habían sido muy intensos hasta la apostasía de Yugoslavia; también sufrió un retroceso el intercambio tecnológico y científico, reduciéndose incluso el tráfico entre las fronteras. Aumentó, en cambio, el número de visitantes de Moscú. Todo el intercambio de información de los países del Comecon tenía lugar a través de la central de Moscú, que de esta manera estaba siempre al corriente de los acontecimientos y disponía del monopolio de la información, pues también en este punto los dirigentes soviéticos procuraban que las conversaciones fuesen siempre bilaterales, es decir, que se celebrasen con los organismos soviéticos competentes, en manos de los cuales estaba la decisión de transmitir también a otros países del Comecon los conocimientos y experiencias adquiridas en un país concreto, o bien retenerlos en aras de la supremacía soviética. Las deliberaciones conjuntas habrían permitido un cierto control de la toma de decisiones, pero el bilateralismo de todas las negociaciones permitía servirse de unos países y de sus representantes en contra de otros de forma incontrolada. Esto no sólo contribuyó a que aumentara la complacencia hacia los dirigentes soviéticos, sino que agrandó al mismo tiempo la aureola del todopoderoso Stalin, cuya persona y cuyos méritos en favor de la Unión Soviética lo convirtieron en un ser mítico: era simultáneamente el general victorioso de la segunda guerra mundial, el arquitecto del socialismo, el prudente hombre de Estado y el padre bondadoso de los pueblos de la Unión Soviética y de las democracias populares. Se comprenderá así por qué los dirigentes comunistas de los diferentes países pugnaban por llegar a Moscú: su propio prestigio se acrecentaba con el favor de Stalin y averiguaban cómo se consideraba en Moscú la situación militar y económica, de manera que podían prever a tiempo los cambios en la «línea del Partido», como eran denominadas las directrices procedentes de Moscú. Esto era para ellos tanto más necesario cuanto más afianzado se encontraba en sus respectivos países el dominio comunista, y en la misma medida se consideraban los dirigentes soviéticos dispensados de toda consideración hacia las «peculiaridades nacionales». La personalización de la relación de poder entre la Unión Soviética y las democracias populares, resultante de la estructura del Partido y de la aspiración rectora de Stalin, fue acompañada de otra medida desestatalizadora: el desplazamiento de las relaciones internas del Comecon del plano diplomático al del Partido. La «Sección para las relaciones con los partidos comunistas y obreros de los países socialistas», creada en el CC del PCUS, funcionaba, por así decirlo, como central y dirección de las relaciones dentro del Comecon, muestra de la subordi-

nación de los intereses nacionales de cada Estado en particular a los del Partido y su ideología.

La observancia de las directrices e instrucciones dadas por Moscú completaba con un amplio abanico de mecanismos de seguridad. El más evidente era la función de control de los embajadores soviéticos, los cuales, como representantes de Stalin y defensores de los intereses soviéticos, no sólo tenían conocimiento de todo lo que acaecía dentro del Partido y del Estado, sino que además recababan informaciones adicionales a través de una red de información propia extendida por las democracias populares. Por otra parte, reivindicaban cada vez mayores competencias decisorias, que convertían en una farsa la soberanía de las democracias populares garantizada contractualmente y tantas veces citada, pues en realidad no eran sino simples Estados satélites de la Unión Soviética. Otros garantes del dominio soviético eran la policía secreta y las fuerzas armadas de las democracias populares. En los antiguos Estados enemigos, a la hora de reconstruir los ejércitos —bajo la dirección y la supervisión de los militares soviéticos—, los puestos de oficial sólo fueron confiados a comunistas; los grados altos se concedieron a emigrantes que durante la segunda guerra mundial habían luchado al lado de la Unión Soviética. Más difícil era la situación en Checoslovaquia y en Polonia, pero los oficiales de antes de la guerra, que a menudo habían recibido su formación en Francia, fueron reemplazados aquí también por comunistas de confianza. En Polonia fueron apartados también paulatinamente los miembros del ejército clandestino (Armia Kraiowa) y de las unidades occidentales (Ejército de Anders); el núcleo de las nuevas fuerzas armadas estaba formado por aquellas unidades que habían luchado bajo el alto mando soviético, de cuyas filas salieron también los puestos de mando. Dado que Polonia tenía una especial importancia por ser vecina de la RDA, si bien era considerada relativamente inestable, en 1950 Stalin puso al mariscal de la Unión Soviética Rokosovski comandante en jefe de este país. Su procedencia polaco-ucraniana, que debía servir para legitimar este golpe de mano, no ocultaba sino a duras penas el voto de censura contra los comunistas polacos. Otra medida de seguridad fue la inserción de oficiales soviéticos en los ejércitos nacionales, cuyo número se estima que alcanzó en Polonia los 17 000 [24]. Con la institución del comisario político *(Politruk)* se situó también junto a los jefes militares, conforme al modelo soviético, un supervisor del Partido con la misión de vigilar su fiabilidad y con un *status* especial como representante del Partido. El Servicio Secreto, llamado también Servicio de Seguridad del Estado —el instru-

mento más importante para asegurar el poder—, había sido montado por lo soviets pensando sobre todo su propio interés, especialmente en lo relativo a la elección de sus colaboradores; estaba estrechamente unido a la central de Moscú y plagado de agentes soviéticos. Las depuraciones de 1949 a 1952 en las democracias populares dieron un resultado parecido al que se produjo en la Unión Soviética en la década de 1930: dado que se dirigieron sobre todo contra los miembros del Partido, los servicios secretos, ejecutores de las depuraciones, se convirtieron en instituciones casi libres del control del Partido, y con ello también del Estado, que de hecho estaban subordinadas al jefe de los servicios secretos soviéticos. Pero la Unión Soviética también disponía de informantes de confianza en todas las demás organizaciones e instituciones. Dado que sólo el hecho de haber cursado estudios en las escuelas superiores del Partido, del Ejército y de la Administración soviéticas otorgaba la cualificación necesaria para ocupar puestos de dirección en las democracias populares, los candidatos a tales puestos residían en la Unión Soviética durante sus años de estudios, pudiendo ser examinados y adoctrinados allí a conciencia por sus mentores soviéticos. De esta manera surgía también en un segundo plano aquella personalización de las relaciones que existía entre Stalin y los dirigentes de los partidos de los otros países y no podía desarrollarse una defensa solidaria del interés nacional frente a los intereses de la Unión Soviética. Pero, por otra parte, en este sistema jerárquico se formaron también grupos que rivalizaban por participar del poder; los grupos surgidos en los países no soviéticos estaban unidos mediante relaciones personales a personas soviéticas, y con ello ligados al destino de éstas. Cuando las correlaciones de fuerzas cambiaban en Moscú por diferencias de intereses y de pareceres, también se veían implicadas las élites nacionales, especialmente los dirigentes del Partido de los Estados satélites, los cuales debían procurar que sus contactos con Moscú fuesen lo más estrechos posible, pues sólo una información correcta y bien utilizada los libraba de ser víctimas del cambio, ligado a una reorientación política.

A partir de 1950, en la Unión Soviética tuvo lugar de hecho un nuevo cambio de orientación política. En las *Cartas de lingüística,* Stalin todavía había destacado el papel del Estado en la construcción de un orden social socialista, definiéndolo como «el principal instrumento para la construcción del comunismo». En septiembre de 1952, en el órgano teórico del Partido, *Bolchevik,* apareció un nuevo artículo firmado por él[25] con el título de «Problemas económicos del socialismo en la Unión Soviética» que

contenía un rechazo del poder absoluto del Estado y una vuelta a las bases del marxismo: «Las leyes de la economía política en el socialismo son leyes objetivas», constataba Stalin; el Estado no las puede «modificar con su planificación... arbitrariamente» [26]. Con ello, Stalin anticipaba consecuencias que poco después se habrían de hacer patentes en el informe presentado por Malenkov en el XIX Congreso del PCUS (del 5 al 14 de octubre de 1952) con su dura crítica al mal estado de cosas existentes dentro de la economía soviética. Esto significaba nada menos que una limitación del principio voluntarista en política vigente desde los años treinta y, simultáneamente, un freno para la política exterior: la propaganda revolucionaria debía basarse en la realidad socioeconómica y dejar de perseguir la revolución a cualquier precio. Evidentemente se trataba al mismo tiempo de una reacción a la política americana: la Unión Soviética abandonaba la forzada expansión de su imperio y daba prioridad a asegurar lo ya conseguido. Con aquella publicación se intervenía sin embargo claramente en la polémica entre los seguidores del fallecido Zdánov, que abogaban por una política exterior agresiva en pro de la revolución mundial, y el grupo en torno a Malenkov y Beria, que defendía una táctica más cautelosa y tendente al desarrollo y a la consolidación interna del ámbito hegemónico soviético apoyada en sus flancos por el movimiento comunista internacional y por sus organizaciones de apoyo. La pérdida de fuerzas de Stalin, ya envejecido, que desde hacía tiempo sufría una arterioesclerosis cerebral, fue la causa de que prosiguiese la discordia entre ambos grupos como lucha interna por el poder. La incertidumbre en cuanto a su resultado trajo consigo una profunda inseguridad que fue más allá del círculo de los interesados y sus seguidores inmediatos, reforzada aún más por el silencio del dictador. Cierto es que el XIX Congreso del Partido había presentado a Malenkov ante la opinión pública como la persona designada para suceder a Stalin en la dirección del Partido —él había elaborado el informe—, pero sus adversarios, aunque debilitados sistemáticamente, aún tenían gran influencia y no estaban dispuestos a abandonar el campo sin presentar batalla, tal como lo demostró el proceso de los médicos de Moscú, de cuya apertura informaba el 13 de enero de 1953 el periódico del gobierno *Pravda*. Justamente lo absurdo de las acusaciones contra los nueve acreditados médicos inculpados de conspiración criminal contra los más altos representantes del país desató el temor a que la lucha por el poder dentro de la cúspide del Partido pudiese desembocar en una depuración semejante a las de la década de 1930, padecida por toda la población. El empeoramiento cre-

ciente del estado de salud de Stalin, unido a los problemas en política exterior —agravados aún más por la investidura de Eisenhower como presidente de los Estados Unidos— y a la situación interna del país, psicológicamente tensa, obligaron sin embargo al grupo dirigente a mantener su cohesión. A la muerte de Stalin, que tuvo lugar en la tarde del 5 de marzo de 1953 a consecuencia de un ataque de apoplejía sufrido pocos días antes, con motivo de los funerales celebrados el 9 de marzo fue presentado en la Plaza Roja de Moscú un triunvirato como órgano dirigente supremo. A esta troika pertenecía, además de Malenkov y Beria, Molotov, que desde 1949 se había mantenido en un segundo plano y era un hombre que —aunque moderado— representaba más bien la línea política de Zdánov. Las diferencias de opinión política y las rivalidades personales debían al parecer pasar a un segundo plano ante la tarea de consolidación del poder. Con Stalin había salido de la escena política la institución central del ámbito de poder soviético. El mito de competencia universal, infalibilidad y omnisciencia tejido en torno a él dejó a su muerte un vacío: el máximo mandamiento del mantenimiento imperial del poder fue llenarlo con un nuevo contenido.

Notas

CAP. 1: EUROPA DESPUÉS DE 1945: LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES

[1] Los datos siguientes están tomados de la compilación de Walter Laqueur, *Europa aus der Asche, Geschichte seit 1945,* Munich, Zurich y Viena, 1970, pp. 12-16, y Walter Lipgens, *Die Anfänge der europäischen Einigungspolitik 1945-1950,* primera parte, *1945-1947,* Stuttgart, 1977, pp. 6-11 y 474 ss.

[2] Rudolf von Albertini, *Dekolonisation. Die Diskussion über Verwaltung und Zukunft der Kolonien, 1919-1960,* Colonia y Opladen, 1966; Franz Ansprenger, *Auflösung der Kolonialreiche,* Munich, 1966; Xavier Yacono, *Les étapes de la décolonisation française,* París, 1971.

[3] Véase sobre este particular Warren L. Hickman, *Genesis of the European recovery program. A study of the trend of American economic policies,* tesis doctoral, Ginebra, 1949; Joyce y Gabriel Kolko, *The limits of power. The world and United States policy 1945-1954,* Nueva York, 1972; Wilfried Loth, «Frankeichs Kommunisten und der beginn des Kalten Krieges», *Viertelsjahrshefte f. Zeitgeschichte,* 26 (1978), pp. 7-65.

[4] Anton W. Deporte, *De Gaulle's foreign policy 1944-1946,* Cambridge (Mass.), 1968; Walter Lipgens, «Bedingungen und Etappen der Aussenpolitik de Gaulles 1944-1946», *Vierteljahrshefte f. Zeitgeschichte,* 21 (1973), pp. 52.102.

[5] Cf. Lipgens (nota 1).

[6] Las causas de esta evolución hacia la «guerra fría» han sido muy controvertidas en la investigación histórica contemporánea. Cf. como ejemplo de la interpretación «tradicional», que hace responsable del conflicto al afán expansionista soviético, Herbert Feis, *From trust to terror. The onset of the Cold War, 1945-1950,* Nueva York, 1970; como ilustración de la interpretación «revisionista», que ve en el enfrentamiento una consecuencia del imperialismo de los Estados Unidos, véase Kolko (nota 3), y como intento de una síntesis que supere la controversia, véase Wilfried Loth, *Die Teilung der Welt. Geschichte des Kalten Krieges 1941-1955,* Munich, 1980, 3.ª ed. 1982.

[7] Sobre esto y lo que viene a continuación, véanse las panorámicas generales de Andreas Hillgruber, *Sowjetische Aussenpolitik im Zwiten Weltkrieg* Königstein, 1979, y Jörg K. Hoensch, *Sowjetische Osteuropapolitik 1945-1975,* Kronberg, 1977; sobre la flexibilidad de la política soviética con respecto a Europa oriental, véase Wofgang Diepenthal, *Drei Volksdemokratien. Ein Konzept der kommunistischen Machtstabilisierung und seine Verwirklichung in Polen, der Tschechoslowakei und der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1944-1948,* Colonia, 1974, así como Vojtech Mastny, *Moskaus Weg zum Kalten Krieg. Von der Kriegsallianz zur sowjetischen Vormachtstellung in Osteuropa,* Munich y Viena, 1980.

[8] Cf. Geir Lundestad, *The American non-policy towards Eastern Europe 1943-1947,* Tromsö y Nueva York, 1975; para aspectos concretos, véante Walter Ullmann, *The United States in Prague 1945-1948,* Nueva York, 1978; Richard C. Lukas, *The strange allies: the United States and Poland, 1941-1945,* Knoxville (Tennessee), 1978, y Paul D. Quinlan, *Clash over Romania: British and American policies towards Romania, 1938-1947,* Oakland (California), 1977.

[9] Sobre esto y lo que viene a continuación, véanse Loth, *Frankreichs Kommunisten* (nota 3); Severino Galante, *La fine di un compromesso storico. PCI e DC nella crisi dell 1947,* Milán, 1980.

[10] Sobre lo que viene a continuación, véase John L. Snell, *Wartime origins of the East-West dilemma over Germany,* Nueva Orleans, 1959; Alexander Fischer, *Sowjetische Deutschlandpolitik im Zweiten Weltkrieg 1941-1945,* Stuttgart, 1975; Warren F. Kimball, comp., *Swords or plaughshares? The Morgenthau Plan for defeated Nazi Germany, 1943-1946,* Filadelfia, 1976; John H. Backer, *Die Entscheidung zur Teilung Deutschlands. Die amerikanische Deutschlandpolitik 1943-1948,* Munich, 1980.

[11] Sobre esto, véase también Tony Sharp, *The wartime alliance and the zonal division of Germany,* Oxford, 1975; Diana S. Clemens, *Jalta,* Stuttgart, 1972; Ernst Deuerlein, *Deklamation oder Ersatzfrieden? Die Konferenz von Potsdam 1945,* Stuttgart, 1970; Charles L. Mee, *Die Teilung der Beute. Die Potsdamer Konferenz 1945,* Viena, 1977.

[12] Véase Ernst Deuerlein, «Frankreichs Obstruktion deutscher Zentralverwal- *Sozialismus in einem halben Land. Zur Problematik und Politik der KPD/SED in der Phase der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung in der DDR,* Berlín, 1976, pp. 84-154; John Gimbel, *The origins of the Marshall Plan,* Stanford, 1976, pp. 67-126; Loth, *Teilung* (nota 6), pp. 138-44, 155 ss. La interpretación de que la política «global alemana» de los dirigentes soviéticos tendía a la incorporación de todo el Reich alemán al campo comunista, expuesta por Walrab von Buttlar, *Ziele und Zielkonflikte der sowjetischen Deutschlandpolitik 1945-1947,* Stuttgart, 1980, resulta poco convincente.

[13] Cf. Wilfried Loth, *Sozialismus und Internationalismus. Die französischen Sozialisten und die Nachkriegsordnung Europas 1940-1950,* Stuttgart, 1977, pp. 52-71, 79-97, 113-27, y Lipgens (nota 1), pp. 156-223, 313-19, 435-38.

[14] Richard M. Freeland, *The Truman doctrine and the origins of Mccarthysm. Foreign policy, domestic politics and internal security 1946-1948,* Nueva York, 1972; Gimbel (nota 12); Loth, *Teilung* (nota 6, polemizando con Gimbel), pp. 150-71, sobre lo que viene a continuación, pp. 172-78.

[15] Citado por Curt Gasteyger, comp., *Einigung und Spaltung Europas 1942-1965,* Francfort, 1965; cf. Lilly Marcou, *Le Kominform,* París, 1977, pp.39-58 [*La Kominform,* Madrid, Villalar, 1978]; William O. Mccagg, Jr., *Stalin embattled 1943-1948,* Detroit, 1978, pp. 261-84.

[16] François Fejtö, *Le coup de Prague 1948,* París, 1966; sobre los antecedentes, desde diferentes puntos de vista, véanse Friedrich Prinz y Nikolaus Lobkowicz, comps., *Schicksalsjahre der Tschechoslowakei 1945-1948,* Munich, 1981; Karel Kaplan, *Der kurze Marsch. Kommunistische Machtübernahme in der Tschechoslowakei: 1945-1948,* Munich y Viena, 1981; Martin Myant, *Socialism and democracy in Czechoslovakia, 1945-48,* Nueva York, 1981.

[17] Cf. la panorámica de Hoensch (nota 7), pp. 44-72.

[18] Adam B. Ulam, *Titoism and the Cominform,* Cambridge (Mass.), 1952; B. Farrell, *Yugoslavia and the Soviet Union 1948-1956,* Hamden (Conn.), 1956; Marcou (nota 15), pp. 98-237.

[19] Para detalles con respecto a las transformaciones en política interior desde 1947, véase Dominique Desanti, *L'année où le monde a tremblé: 1947,* París, 1977.

[20] Cf. Kolko (nota 3), pp. 428-52; Horst Lademacher, «Die britische Sozialisierungspolitik im Rhein-Ruhr-Raum 1945-1948», en Claus Schorf y Hans-Jürgen Schröder, comps., *Die Deutschlandpolitik Grossbritanniens und die britische Zone 1945-1949,* Wiesbaden, 1979, pp. 51-92; Theo Pirker, *Die verordnete Demokratie. Grundlagen und Entscheidungen der «Restauration»,* Berlín, 1977; Gerold Ambrosius, *Die Durchsetzung der sozialen Marktwirtschaft*

in West-Deutschland 1945-1949, Stuttgart, 1977; Loth, *Teilung* (nota 6), pp. 204-11.

[21] Wilfried Loth, «The West European governments and the impulse given by the Marshall Plan», en *A history of European integration*, de Walter Lipgens *et al.*, vol. I, Oxford, 1982, pp. 488-507; Alan S. Milward, «The Committee on European Economic Co-operation (CEEC) and the advent of the customs union», en *ibid.*, pp. 507-71; Loth, *Sozialismus* (nota 13), pp. 167-277; así como Geoffrey Warner, «Die britische Labour-Regierung und die Einheit Westeuropas 1949-1951», *Vierteljahrshefte f. Zeitgeschichte*, 28 (1980), pp. 310-30 (con una valoración positiva de lo política laborista).

[22] *Foreign relations of the United States 1947*, vol. 2, Washington D.C., 1972, pp. 815-17; incluye una conversación de Bevin con Marshall.

[23] Sobre esto y lo que viene a continuación, véanse Daniel Yergin, *Der zerbrochene Frieden. Der Ursprung des Kalten Krieges und die Teilung Europas*, Francfort, 1979, pp. 336-76; Loth, *Teilung* (nota 6), pp. 211-32, y Thimothy P. Ireland, *Creating the entangling alliance. The origins of the North Atlantic Treaty Organization*, Londres, 1981.

[24] Sobre esto, véa en especial Staritz (nota 12), pp. 155-74.

[25] Robert Mcgeehan, *The German rearmament question. American diplomacy and European defense after World War II*, Urbana (Ill.), 1971; Gunter Mai, *Westliche Sicherheitspolitik im Kalten Krieg. Der Korea-Krieg und die deutsche Wiederbewaffnung 1950*, Boppard, 1977; Gerhart Wettig, *Entmilitarisierung und Wiederbewaffnung in Deutschland 1943-1955*, Munich, 1967, pp. 289-487; Arnulf Baring, *Aussenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie. Bonns Beitrag zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft*, Munich, 1969; *Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik 1945-1956*, editado por Militärgeschichtlichen Forchungsamt, vol. II: *Von der Kapitulation bis zum Pleven-Plan*, Munich y Viena, 1982.

[26] Sin duda no será posible llegar a una total certeza sobre las intenciones soviéticas con respecto a esta iniciativa mientras no sean accesibles los archivos soviéticos. Para una fundamentación más sólida de la interpretación aquí esbozada, véase Loth, *Teilung* (nota 6), pp. 282-308; entre los autores que defienden otras tesis, véanse Hermann Graml, «Nationalstaat oder westdeutscher Teilstaat. Die sowjetischen Noten vom Jahre 1952 und die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik Deutschland», *Vierteljahrshefte f. Zeitgeschichte*, 25 (1977), pp. 821-64, así como, del mismo, «Die Legende von der verpassten Gelegenheit. Zur sowjetischen Notenkampagne des Jahres 1952», *ibid.*, 29 (1981), pp. 307-41 (donde se defiende la tesis de que los dirigentes soviéticos sólo pretendían achacar al bando occidental la responsabilidad de la división definitiva de Alemania); para lo que viene a continuación, véanse también Arnulf Baring, *Des 17. Juni 1953*, Colonia y Berlín, 1965; Hans Wassmund, *Kontinuität im Wandel, Bestimmungsfaktoren sowjetischer Deutschlandpolitik in der Nach-Stalin-Zeit*, Colonia y Viena, 1974; Knud Dittmann, *Adenauer und die deutsche Wiedervereinigung. Die politische Diskussion des Jahres 1952*, Düsseldorf, 1981; Ilse Spittmann y Karl Wilhelm Fricke, comps., *17. Juni 1953. Arbeiteraufstand in der DDR*, Colonia, 1982.

[27] Martin Geiling, *Aussenpolitik und Nuklearstrategie. Eine Analyse des konzeptionellen Wandels der amerikanischen Sicherheitspolitik gegenüber der Sowjetunion (1945-1963)*, Colonia y Viena, 1975; Alferd Grosser, *Das Bündnis. Die westeuropäischen Länder und die USA seit dem Krieg*, Munich, 1978, pp. 141-252.

[28] Las cifras están tomadas de Grosser (nota 27), p. 119; Georges von Csernatory, *Le Plan Marshall et le redressement économique de l'Allemagne*, tesis doctoral, Lausana, 1973, p. 159; Werner Abelshauser, *Wirtschaft in Westdeutschland 1945-1948. Rekonstruktion und Wachstumsbedingungen in der amerikanischen und britischen Zone*, Stuttgart, 1975.

[29] Sobre esto y lo que viene a continuación, véanse Raymond Aron y Daniel Lerner, comps. *La querelle de la C.E.D.*, París, 1956; Wettig (nota 25), pp. 523-619; Paul Noack, *Das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Enscheidungsprozesse vor und nach dem 30. August 1954*, Düsseldorf, 1977; Edward Fursdon, *The European Defense Community. A history*, Londres. 1980.

[30] Wassmund (nota 26), pp. 67-97; Hoensch (nota 7), pp. 88-100.

CAP. 3: EUROPA OCCIDENTAL HASTA EL TRATADO DE ROMA. RECONSTRUCCIÓN E INTEGRACIÓN

[1] Exceptuando la obra clásica de Lipgens, *Die Anfänge der europäischen Einigungspolitik*, cuyo primer volumen, único publicado hasta ahora, sólo llega hasta 1947, el proceso de la unión europea ha sido poco estudiado en la bibliografía científica. Cierto es que recientemente han aparecido tres trabajos innovadores sobre el Tratado de Roma de 1957 (R. J. Küsters, *Die Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft;* P. Weilemann, *Die Anfänge der europäischen Atomgemeinschaft;* H. von der Groeben, *Aufbaujahre der europäischen Gemeinschaft*), pero los años comprendidos entre 1947 y 1955 siguen siendo un campo sin cultivar. Un primer paso, aunque necesariamente limitado todavía, ha sido dado sobre todo por los trabajos que se citan a continuación acerca de la política europea de la República Federal, Gran Bretaña e Italia, aparecidos en los *Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte* de octubre de 1979 a octubre de 1980, así como los estudios pertenecientes a la misma serie de Odrian Manning, «Die Niederlande und Europa von 1945 bis zum Beginn der fünfziger Jahre» (*Vfz*, 29 [1981], pp. 1-20), y Pierre Guillon, «Frankreich und der europäische Wiederaufschwung. Vom Scheiter der EVG zur Ratifizierung der Verträge von Rom» (*Vfz*, 28 [1980], pp. 1-19).

[2] Ennio di Nolfo, «Das Problem der europäischen Einigung als ein Aspekt der italienischen Aussenpolitik 1945-1955», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 28 (1980), pp. 145-67, aquí p. 156.

[3] Hans-Peter Schwarz, «Adenauer und Europa», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 27 (1979), pp. 471-523, aquí pp. 475 ss.

[4] Cf. Hermann Graml, «Die aussenpolitischen Vorstellungen des deutschen Widerstands», en Walter Schmitthenner y Hans Buchheim, comps., *Der deutsche Widerstand gegen Hitler*, Colonia, 1966.

[5] Walter Wehe, *Das Werden Europas. Zeittafel der europäischen Einigungsbestrebungen 1946-1955*, Francfort, 1955, p. 9.

[6] *Ibid.*, p. 16.

[7] Geoffrey Warner, «Die britische Labour-Regierung und die Einheit Westeuropas 1948-1951», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 28 (1980), pp. 310-30, aquí pp. 310 ss.

[8] Donald C. Watt, «Grossbritannien und Europa. Die Jahre konservativer Regierung», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 28 (1980), pp. 389-409.

[9] Peter Weilemann, *Die Anfänge der europäischen Atomgemeinschaft. Zur Gründungsgeschichte von EURATOM (1955-1957)*, Baden-Baden, 1983.

[10] Hanns Jürgen Küster, *Die Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, Baden-Baden, 1982.

[11] Hans von der Groeben, *Aufbaujahre der europäischen Gemeinschaft. Das Ringen um den Gemeinsamen Markt und die Politische Union (1958-1966)*, Baden-Baden, 1982.

[12] Arthur Marwick, *War and social change in the twentieth century*, Londres, 1974, pp. 151-65; del mismo autor, «L'impact de la deuxième guerre

mondiale sur les Britanniques», *Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale,* 90 (abril de 1973), pp. 53-69; Henry Pelling, *Britain and the Second World War,* Londres, 1970.

[13] Citado por Christopher John Bartlett, *A history of postwar Britain, 1945-1974,* Nueva York, 1977, p. 3.

[14] Clement Richard Attlee, *As it happened,* Londres, 1954; Francis Williams, *A Prime Minister remembers,* Londres. 1961.

[15] Peter Calvocoressi, *The British experience 1945-1975,* Londres, 1978, p. 20.

[16] Exposiciones generales de la historia de Gran Bretaña a partir de 1945: Alan Sked y Chris Cook, *Post-war Britain,* Londres, 1980; L. A. Monk, *Britain 1945-1970,* Londres, 1976; W. N. Medlicott, *Contemporary England 1914-1964,* Londres, 1967, pp. 469-558; Wolfgang Wagner, *Europa zwischen Aufbruch und Restauration,* Munich, 1968, pp. 44-74. Resúmenes sucintos: Paul Kluke, «Grossbritannien und das Commonwealth in der Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit», en Theodor Schieder, comp., *Handbuch der europäischen Geschichte,* vol. 7/1, Stuttgart, 1979, pp. 384-436; Karl Dietrich Bracher, *Die Krise Europas 1917-1975,* Francfort, Berlín y Viena, 1976, pp. 296-301.

[17] Donald Cameron Watt, «American aid to Britain and the problem of socialism», *The American Review,* 1963, II, 4, pp. 46-70.

[18] Citado por Sked y Cook, *op. cit.,* p. 59.

[19] David Steel, «Nationalisation and public ownership», en Chris Cook y John Ramsden, comps., *Trends in British politics since 1945,* Londres, 1978, pp. 109-31; Arnold A. Rogow, *The Labour Government and British industry, 1945-1951,* Oxford, 1955; Sir Norman Chester, *The nationalisation of British industry, 1945-1951,* Londres, 1977.

[20] Citado por Sked y Cook, *op. cit.,* p. 41; cf. también Arthur Marwick, «The Labour Party and the Welfare State in Britain 1900-1948», *The American Historical Review,* LXXIII (1967-68), 2, pp. 380-403; Jürgen C. Hess, «Die Sozialpolitik der Regierung Attlee», en Wolfgang J. Mommsen, comp., *Die Entstehung des Wohlfahrtsstaates in Grossbritannien und Deutschland 1850-1950,* Stuttgart, 1982, pp. 306-24; Pauline Gregg, *The Welfare State from 1945 to the present day,* Londres, 1967.

[21] A. J. Youngson, «Grossbritannien 1920-1970», en Carlos M. Cipolla y Knut Borchardt, comps., *Europäische Wirtschaftsgeschichte,* vol. 5: *Die europäischen Volkswirtschaften im zwanzingsten Jahrhundert,* Stuttgart y Nueva York, 1980, pp. 139-73; W. M. Scammell, «British economic recovery 1945-1951», *The American Review,* 1963, II, 4, pp. 71-99; cf. también Andrew Shonfield, *British economic policy since the War,* Londres, 1958; S. Pollard, *The development of the British economy, 1914-1967,* Londres, 1969; desde el punto de vista comparativo: Sima Lieberman, *The growth of European mixed economies 1945-1970,* Cambridge (Mass.), 1977.

[22] David Marquand, «Sir Stafford Cripps», en Michael Sissons y Philip French, comps., *The age of austerity,* Londres, 1963, pp. 167-87; C. Cooke, *The life of Richard Stafford Cripps,* Londres, 1957.

[23] Citado por Monk, *op. cit.,* p. 31.

[24] Werner Abelshauser, «Westeuropas Wiederaufbau vor dem Marshall-Plan», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 29 (1981), p. 554.

[25] Youngson, *op. cit.,* p. 159.

[26] Alan Sked, «Die weltpolitische Lage Grossbritanniens nach dem Zweiten Weltkrieg», en Oswald Hauser, comp., *Weltpolitik III 1945-1953,* Gotinga, 1978, pp. 154-69; Elizabeth Barker, *Britain and a divided Europe 1945-1970,* Londres, 1972; Joseph Frankel, *British foreign policy 1945-1973,* Londres, 1975; F. S. Northedge, *Descent from power: British foreign policy 1945-1972,* Londres, 1974.

[27] *Foreing Relations of the United States,* 1947, vol. V, p. 32.

Grossbritanniens und die britische Zone 1945-1949, Wiesbaden, 1979; Donald

[28] Claus Schart y Hans-Jürgen Schröder, comps., *Die Deutschlandpolitik* Cameron Watt, *England blickt auf Deutschland. Deutschland in Politik und öffentlicher Meinung Englands seit 1945,* Tubinga, 1965; Rolf Steininger, «Die britische Deutschlandpolitik in den Jahren 1945/46», en *Aus Politik und Zeitgeschichte,* suplemento del semanario *Das Parlament,* n.º 1-2, 9 de enero de 1982, pp. 28-47. Cf. también Falk Pingel, «Die Russen am Rhein? Zur Wende der britischen Besatzungspolitik im Frühjahr 1946», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 30 (1982), pp. 98-116.

[29] Citado por Franz Ansprenger, *Auflösung der Kolonialreiche,* Munich, 1966, p. 164; D. Goldsworthy, *Colonial issues in British politics, 1945-1961,* Oxford, 1971.

[30] Ansprenger, *op. cit.,* p. 170.

[31] Patrick Gordon-Walker, *The Commonwealth,* Londres 1965; Nicholas Mansergh, *The Commonwealth experience,* Londres, 1969.

[32] Citado por Geoffrey Warner, «Die britische Labour-Regierung und die Einheit Westeuropas 1949-1951», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 28 (1980), pp. 310.

[33] *Ibid.,* p. 324.

[34] Christopher John Bartlett, *The long retreat. A short history of British defence policy, 1945-1970,* Londres, 1972.

[35] Thomas F. Lindsay y Michael Harrington, *The Conservative Party, 1918-1979,* Londres, 1979; J. D. Hoffman, *The Conservative Party in opposition, 1945-1951,* Londres, 1964.

[36] Henry Pelling, *Winston Churchill,* Londres, 1974.

[37] V. Bodganor y R. Skidelsky, *The age of affluence, 1951-1964,* Londres, 1970; Arthur Marwick, *Britain in the century of total war,* Londres, 1968, especialmente pp. 257-428.

[38] Medlicott, *op. cit.,* p. 527.

[39] M. M. Gowing, *Independence and deterrence: Britain and atomic energy, 1945-1952,* Londres, 1974; Leon D. Epstein, «Britain and the H-bomb, 1955-1958», *Review of Politics,* 21 (1959), pp. 511-29.

[40] *Der Spiegel,* año 9, n.º 16 (13 de abril de 1955), p. 43.

[41] David Carlton, *Anthony Eden,* Londres, 1981; Lord Avon, *The memoirs of Sir Anthony Eden,* Full Circle, Londres, 1960.

[42] Martin Harrison, *Trade unions and the Labour Party since 1945,* Londres, 1960; Carl F. Brand, *The British Labour Party,* Stanford, 1974; Henry Pelling, *A short history of the Labour Party,* Londres, 1978.

[43] Harold Macmillan, *Memoirs,* vol. 3: *Tides of fortune, 1945-1955,* Londres, 1969, así como vol. 4: *Riding the storm, 1956-1959,* Londres, 1971.

[44] Leon D. Epstein, *British politics in the Suez crisis,* Londres, 1964. Pero además Geoffrey Warner, «'Collusion' and the Suez crisis of 1956», *International Affairs,* 55 (1979), pp. 226-39, así como Anthony Nutting, *Die Suezverschwörung 1956,* Viena, 1967.

[45] Donald Cameron Watt, «Grossbritannien und Europa 1951-1959», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 28 (1980), pp. 389-409; Uwe Kitzinger, *Diplomacy and persuasion: how Britain joined the Common Market,* Londres, 1973; Karl Kaiser, *EWG und Freihandelszone. England und der Kontinent in der europäischen Integration,* Leiden, 1963.

[46] Kaiser, *op. cit.,* p. 233.

[47] Jean-Pierre Rioux, *La France de la Quatrième République,* vol. 1: *L'ardeur et la nécessité, 1944-1952,* París, 1980, pp. 12-67.

[48] Claude Fohlen, «Frankreich 1920-1970», en Carlo M. Cipolla y Knut Borchardt, comps., *Europäische Wirtschaftsgeschichte,* vol. 5: *Die europäischen Volkswirtschaften im zwanzigsten Jahrhundert,* Stuttgart y Nueva York, 1980, pp. 115-17; Maurice Parodi, *L'économie et la société française de 1945 à*

1970, París, 1971, pp. 41-51; Pierre Sorlin, *La société française,* vol. 2: *1914-1968,* París, 1971.

[49] Walter Lipgens, «Bedingungen und Etappen der Aussenpolitik de Gaulles 1944-1946», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 21 (1973), p. 78; Guy de Carmoy, *Les politiques étrangères de la France, 1944-1966,* París, 1967; Alfred Grosser, *La IVe République et la politiqué extérieure,* París, 3.ª ed. 1972.

[50] Jacques Julliard, *La Quatrième République (1947-1958),* París, 1980, p. 38; Henry Michel y Boris Mirkine-Guetzevitch, *Les idées politiques et sociales de la Résistance,* París, 1954.

[51] Philip Williams, *La vie politique sous la 4e République,* París, 1971 (ed. inglesa, 1964), p. 29. Otras exposiciones de la historia política de la IV República: Paul-Marie de la Gorce, *Naissance de la France moderne,* vol. 1: *L'après-guerre (1944-1952),* París, 1978, y vol. 2: *Apogée et mort de la IVe République (1952-1958),* París, 1979; Jacques Fauvet, *Von de Gaulle bis de Gaulle. Frankreichs Vierte Republik,* Tubinga, 1961; André Siegfried, *Frankreichs Vierte Republik,* Stuttgart, 1959. Otros resúmenes sucintos: Rudolf von Albertini, «Frankreich vom Frieden von Versailles bis zum Ende der Vierten Republik 1919-1958», en Theodor Schieder, comp., *Handbuch der europäischen Geschichte,* vol. 7/1, Stuttgart, 1979, pp. 465-80; Karl Dietrich Bracher, *Die Krise Europas 1917-1975,* Francfort, Berlín y Viena, 1976, pp. 286-90.

[52] Wilfried Loth, «Frankreichs Kommunisten und der Beginn des Kalten Krieges. Die Entlassung der kommunistischen Minister im Mai 1947», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 26 (1978), pp. 9-65.

[53] Claus Scharf y Hans-Jürgen Schröder, comp., *Die Deutschlandpolitik Frankreichs und die Französiche Zone 1945-1949,* Wiesbaden, 1983.

[54] Charles Kindleberger, «La renaissance de l'économie française après la guerre», en Stanley Hoffmann, comp., *A la recherche de la France,* París, 1963, pp. 141-85; Lotte Müller-Ohlsen, *Strukturwandlungen und Nachkriegsprobleme der Wirtschaft Frankreichs,* Kiel, 1952. Sobre sectores concretos: Fernand Braudel y Ernest Labrousse, comps., *Histoire économique et sociale de la France,* 3.ª parte, *L'ère industrielle et la société d'aujourd-hui (siècle 1880-1980),* vol. 2: *Le temps des guerres mondiales et de la grande crise (1914-1950),* París, 1980; ahora también vol. 3: *Années 1950 à nos jours,* París, 1982.

[55] Fohlen, *op. cit.,* p. 101.

[56] Lotte Müller-Ohlsen, *Wirtschaftsplanung und Wirtschaftswachstum in Frankreich,* Tubinga, 1967; Stephen S. Cohen, *Modern capitalist planning. The French model,* Berkeley, 1977; Claude Gruson, *Origines et espoirs de la planification française,* París, 1968.

[57] *Histoire économique et sociale de la France,* 4.ª parte, vol. 2, *op. cit.,* p. 805.

[58] Sobre la ayuda financiera: Jean-Baptiste Duroselle, «The United States and France's revival after 1944», *The American Review,* 1963, II, n.º 4, pp. 100-23. Sobre el desarrollo demográfico: André Armengaud, *La population française au XXe siècle,* París, 1969. Sobre la inflación: Parodi, *op. cit.,* pp. 66-78.

[59] Fohlen, *op. cit.,* p. 105.

[60] Siegfried, *op. cit.,* p. 143.

[61] Wolfgang Wagner, *Europa zwischen Aufbruch und Restauration,* Munich, 1698, p. 103.

[62] Fauvet, *op. cit.,* p. 237.

[63] Williams, *op. cit.,* p. 70.

[64] Pierre Rouanet, *Mendès-France au pouvoir,* París, 1965; Jean Lacouture, *Pierre Mendès-France,* París, 1981; cf. también Alain Ruscio, «Le mendésisme

et l'Indochine», *Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine,* 29 (1982), pp. 324-42.

[65] Sobre la descolonización de Indochina, el norte de Africa y el Africa negra: Hans Walter Berg, «Indochina im Wandel der Machtkonstellationen», Erdmute Heller, «Die arabisch-islamische Welt im Aufbruch», Franz Ansprenger, «Afrika: Befreiungsbewegungen und Behauptungsversuche weisser Herrschaft», todos ellos en *Fischer-Weltgeschichte,* vol. 36, Francfort, 1981, pp. 213-19, 147-52, 334-93 [«Indochina en pleno cambio de las constelaciones de poder», «El mundo árabe-islámico en marcha», «Africa: movimientos de liberación e intentos de imposición del dominio blanco», en *Historia Universal Siglo XXI,* vol. 36, Madrid, 1982, pp. 188-247, 88-144, 300-58]; Franz Ansprenger, *Auflösung der Kolonialreiche,* Munich, 1966, pp. 209-54.

[66] Julliard, *op. cit.,* p. 153. Sobre el fracaso de la CED: Gilbert Ziebura, *Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945,* Pfullingen, 1970, pp. 65-81; De la Gorce (1979), *op. cit.,* pp. 91-159; Paul Noack, *Das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft,* Düsseldorf, 1977.

[67] Hans-Peter Schwarz, *Die Ära Adenauer, 1949-1957,* Stuttgart, 1981, p. 229.

[68] Yves Courrière, *La guerre d'Algérie,* 4 vols., París, 1968-72; Pierre Laffont, *Histoire de la France en Algérie,* París, 1980; Bernard Droz y Evelyne Lever, *Histoire de la guerre d'Algérie (1954-1962),* París, 1982. Resúmenes sucintos: Ernst Weisenfeld, *Frankreichs Geschichte seit dem Krieg,* Munich, 1980, pp. 109-54; Paul Isoart, «La guerre d'Algérie», en *La Quatrième République. Actes du Colloque de Nice, les 20, 21 et 22 Janvier 1977,* París, 1978, pp. 417-52.

[69] Stanley Hoffmann, *Le mouvement Poujade,* París, 1956.

[70] Pierre Guillen, «Frankreich und der europäische Wiederaufschwung. Vom Schitern der EVG zur Ratifizierung der Verträge von Rom», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 28 (1980), pp. 1-19.

[71] Grosser, *op. cit.,* p. 380.

[72] Raoul Girardet, *La crise militaire française 1945-1962,* París, 1964; Pierre Naville, *L'Armée et l'Etat en France,* París, 1961; Jean Planchais, *Le malaise de l'armée,* París, 1958.

[73] Williams, *op. cit.,* p. 87.

[74] Sobre la crisis estatal de mayo de 1958: Merry y Serge Bromberger, *Les 13 complots du 13 mai,* París, 1959; Roger Trinquier, *Le coup d'État du 13 mai,* París, 1962; cf. también el breve resumen de Philip Williams («The Fourth Republic: murder or suicide?») en su libro *Wars, plots and scandals in post-war France,* Nueva York, 1970, pp. 129-66, así como el de Jacques Julliard («L'euthanasie»), *op. cit.,* pp. 186-200.

[75] Sobre el problema alemán bajo la ocupación aliada, cf. Hermann Graml, «Die Alliierten in Deutschland», en *Westdeutschlands Weg zur Bundesrepublik 1945-1949,* Munich, 1976; Hans-Peter Schwarz, *Vom Reich zur Bundesrepublik,* Stuttgart, 2.ª ed. 1980; John Gimbel, *Amerikanische Besatzungspolitik in Deutschland 1945-1949,* Francfort, 1968; F. Roy Willis, *The French in Germany 1945-1949,* Stanford, 1962; Claus Scharf y Hans-Jürgen Schröder, comps., *Die Deutschlandpolitik Grossbritanniens und die britische Zone 1945-1949,* Wiesbaden, 1979; Rolf Steininger, «Die britische Deutschlandpolitik in den Jahren 1945/46», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 32 (1982), vols. 1-2, pp. 28-47; Falk Pingel, «Die Russen am Rhein? Zur Wende der britischen Besatzungspolitik im Frühjahr 1946», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 30 (1982), pp. 98-116; Alexander Fischer, *Sowjetische Deutschlandpolitik im Zweiten Weltkrieg 1941-1945,* Stuttgart, 1975; Walrab von Buttlar, *Ziele und Zielkonflikte in der sowjetischen Deutschlandpolitik 1945-1947,* Stuttgart, 1980.

[76] Cf. Lucius D. Clay, *Entscheidung in Deutschland,* Francfort, 1950, pp. 90 ss.

[77] Cf. además John Gimbel, «Byrnes' Stuttgarter Rede und die amerikanische Nachkriegspolitik in Deutschland», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 20 (1972), pp. 39 ss.; del mismo autor, «Byrnes und die Bizone - Eine amerikanische Entscheidung zur Teilung Deutschlands?», en W. Benz y H. Graml, comps., *Aspekte deutscher Aussenpolitik im 20. Jahrhundert,* Stuttgart, 1976, pp. 193-210; Hans-Dieter Kreikamp, «Die amerikanische Deutschlandpolitik im Herbst 1946 und die Byrnes-Rede in Stuttgart», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 29 (1981), pp. 269-85.

[78] *Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949, hrsg. vom Bundesarchiv und Institut für Zeitgeschichte,* 5 vols., Munich, 1976-1983; Tilman Pünder, *Das bizonale Interregnum. Die Geschichte des Vereiningten Wirtschaftgebiets 1946-1949,* Rastatt, 1966.

[79] Cf. *Europa-Archiv,* 1 (1946-47), pp. 538-41; cf. también Klaus-Dietmar Henke, «Politik der Widersprüche. Zur Charakteristik der französischen Militärregierung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 30 (1982), pp. 500-37.

[80] John Gimbel, *The origins of the Marshall Plan,* Stanford (Cal.), 1976; Werner Link, «Der Marshall-Plan und Deutschland», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 30 (1980), vol. 50, pp. 3-18.

[81] Todos los textos importantes, como el comunicado final de Londres, los documentos de Francfort, las actas de las conferencias de presidentes de gobierno y los apuntes de las negociaciones con los gobernadores militares están recogidos en *Der Parlamentarische Rat 1948-1949. Akten und Protokolle hrsg. vom Deutschen Bundestag und vom Bundesarchiv,* vol. 1: *Vorgeschichte* (transcripción de Johannes Volker Wagner), Boppard, 1975.

[82] Todos los textos están recogidos en *Der Parlamentarische Rat 1948-1949,* vol. 2: *Des Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee* (transcripción de Peter Bucher), Boppard, 1981.

[83] Obras básicas sobre el Consejo Parlamentario y la Ley Fundamental: Friedrich Karl Fromme, *Von der Weimarer Verfassung zum Bonner Grundgesetz,* Tubinga, 1960; Volker Otto, *Dar Staatsverständnis der Parlamentarischen Rates,* Düsseldorf, 1971; Karlheinz Niclauss, *Demokratiegründung in Westdeutschland,* Munich, 1974; Hans-Jürgen Grabbe, «Die deutsch-alliierte Kontroverse um den Grundgesetzenwurf im Frühjahr 1949», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 26 (1978), pp. 393-418; Werner Sörgel, *Konsensus und Interessen,* Stutttgart, 1969; Hans-Hermann Hartwich, *Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher Status quo,* Colonia, 1970; Klaus Stern, *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland,* vol. 1, Munich, 1977; Bonner Kommentar, *Kommentar zum Bonner Grundgesetz* (hojas sueltas), Hamburgo, 1950.

[84] Ossip K. Flechtheim, comp., *Dokumente zur parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit 1945,* 9 vols., Berlín, 1962-71; Heino Kaack, *Geschichte und Struktur des deutschen Parteiensystems,* Opladen, 1971.

[85] Cf. Marie Elise Foelz-Schroeter, *Föderalistische Politik und nationale Repräsentation 1945-1947. Westdeutsche Länderregierungen, zonale Bürokratien und politische Parteien im Widerstreit,* Stuttgart, 1974.

[86] Kurt Klotzbach, *Der Weg zur Staatspartei. Programmatik, praktische Politik und Organisation der deutschen Sozialdemokratie 1945 bis 1965,* Bonn, 1982; Susanne Miller, «Die SPD vor und nach Godesberg», en Susanne Miller y Heinrich Potthoff, *Kleine Geschichte der SPD,* Bonn, 1981.

[87] Günter Plum, «Versuche gesellschaftspolitischer Neuordnund - Ihr Scheitern im Kräftefeld deutscher und alliierter Politik», en *Westdeutschlands Weg zur Bundesrepublik 1945-1949,* Munich, 1976, p. 108.

[88] Franz Focke, *Sozialismus aus christlicher Verantwortung. Die Idee eines christlichen Sozialismus in der katholisch-sozialen Bewegung und in der CDU,* Wuppertal, 1978; A. R. L. Gurland, *Die CDU/CSU. Ursprünge und Ent-*

wicklung bis 1953, comp. por Dieter Emig, Francfort, 1980; Alf Mintzel, *Geschichte der CSU. Ein überblick*, Opladen, 1977.

[89] Michael Jörg Gutscher, *Die Entwicklung der FDP von ihren Anfängen bis 1961*, Meisenheim a. Gl., 1967; Heino Kaack, *Zur Geschichte und Programmatik der Freien Demokratischen Partei. Grundriss und Materielien*, Meisenheim a. Gl., 1976.

[90] Hermann Meyn, *Die Deutsche Partei, Entwicklung und Problematik einer nationalkonservativen Rechtspartei nach 1945*, Düsseldorf, 1965; Ilse Unger, *Die Bayernpartei. Geschichte und Struktur 1945-1957*, Stuttgart, 1979; Hans Woller, *Die Loritz-Partei. Geschichte, Struktur und Politik der Wirtschaftlichen Aufbau-Vereinigung (WAV) 1945-1955*, Stuttgart, 1982; Franz Neumann, *Der Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten 1950-1960. Ein Beitrag zur Geschichte und Struktur einer politischen Interessenpartei*, Meisenheim a. Gl., 1968; Hans Kluth, *Die KPD in der Bundesrepublik. Ihre politische Tätigkeit und Organisation 1945-1956*, Colonia, 1959.

[91] Cf. Wolfgang Benz, Günter Plum y Werner Röder, *Einheit der Nation. Diskussionen und Konceptionen zur Deutschlandpolitik der grossen Parteien seit 1945*, Stuttgart, 1978.

[92] Paul Sethe, «Man muss für alles bezahlen», *Frankfurter Allgemeine*, 14 de julio de 1950; cf. Klaus von Schubert, *Wiederbewaffnung und Westintegration. Die innere Auseinandersetzung um die militärische und aussenpolitische Orientierung der Bundesrepublik 1950-1952*, Stuttgart, 2.ª ed., 1972; Arnulf Baring, *Aussenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie, Bonns Beitrag zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft*, Munich, 1969; Gerhard Wettig, *Entmilitarisierung und Wiederbewaffnung in Deutschland 1943-1955. Internationale Auseinandersetzung um die Rolle der Deutschen in Europa*, Munich, 1967.

[93] Hermann Graml, «Nationalstaat oder westdeutscher Teilstaat. Die sowjetischen Noten vom Jahre 1952 und die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik Deutschland», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 25 (1977), pp. 821-64; del mismo autor, «Die Legende von der verpassten Gelegenheit. Zur sowjetischen Notenkampagne des Jahres 1952», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 29 (1981), pp. 307-41.

[94] Obras básicas sobre el desarrollo y el ordenamiento económico: Werner Abelshauser, *Wirtschaft in Westdeutschland 1945-1948, Rekonstruktion und Wachstumsbedingungen in der amerikanischen und britischen Zone*, Stuttgart, 1976; Gerald Ambrosius, *Die Durchsetzung der sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945-1949*, Stuttgart, 1978; Friedrich Jerchow, *Deutschland in der Weltwirtschaft 1944-1947. Alliierte Deutschland- und Reparationspolitik und die Anfänge der westdeutschen Aussenwirtschaft*, Düsseldorf, 1978.

[95] Horst Thum, *Mitbestimmung in der Montanindustrie. Der Mythos vom Sieg der Gewerkschaften*, Stuttgart, 1982.

[96] Hans Günter Hockerts, *Sozialpolitische Entscheidungen im Nachkriegsdeutschland. Alliierte und deutsche Sozialversicherungspolitik 19445 bis 1957*, Stuttgart, 1980; Detlev Zöllner, *Ein Jahrhundert Sozialversicherung in Deutschland*, Berlín, 1981.

[97] Walther Hubatsch, «*Weserübung*». *Die deutsche Besetzung von Dänemark und Norwegen 1940*, Gotinga, 1960.

[98] Geir Lundestad, *America, Scandinavia, and the Cold War 1945-1949*, Nueva York, 1980.

[99] Erich Thomsen, *Deutsche Besatzungspolitik in Dänemark 1940-1945*, Düsseldorf, 1971; Raul Hilberg, *Die Vernichtung der europäischen Juden. Die Gesamtgeschichte des Holocaust*, Berlín, 1982, pp. 390 ss.

[100] «Grönland auf dem Weg zur Unabhängigkeit», *Neue Zürcher Zeitung*, 20-21 de marzo de 1982, pp. 5-6.

[101] Knud Langberg, *Flüchtlingsleben in Dänemark*, Stuttgart, 1951.

[102] Cf. Francis G. Castles, *The social democratic image of society. A study of the achievements and origins of Scandinavian social democracy in comparative perspective*, Londres, 1978.

[103] Cf. Axel Schützsack, «Neutralität und Machtbalance in Nordeuropa», *Aussenpolitik*, 22 (1971), pp. 553-62.

[104] Nils Andrén, «Desintegration in Skandinavien?», *Europa-Archiv*, 30 (1975), pp. 547-54.

[105] Niels Jørgen Haagerup, «Politische Aspekte des Projekts einer Nordischen Wirtschaftsunion (NORDEK)», *Europa-Archiv*, 24 (1969), pp. 600-8.

[106] Johan de Vries, «Die Benelux-Länder 1920-1970», en Carlo M. Cipolla y Knut Borchardt, comps., *Europäische Wirtschaftsgeschichte*, vol. 5: *Die europäischen Volkswirtschaften im zwanzigsten Jahrhundert*, Stuttgart y Nueva York, 1980, p. 39.

[107] Cf. S. I. P. van Campen, *The quest for security. Some aspects of Netherlands foreign policy 1945-1950*, La Haya, 1958, pp. 158-62; Gunther Eyck, «Benelux in the balance», *Political Science Quarterly*, 69 (1954), pp. 65-91; *The Economist*, Londres, 31 de mayo de 1947, y *Neue Zürcher Zeitung*, 4 de julio de 1948.

[108] Cf. el resumen del texto del tratado del 17 de septiembre de 1957 en *Archiv der Gegenwart*, XXVII (1957), 26 de noviembre de 1957, pp. 6766 ss.

[109] Cf. Heinz Stranner, «Flamen und Wallonen. Ist der belgische Einheitsstaat am Ende?», *Der Monat*, 15 (1963), cuaderno 179, pp. 46-53.

[110] Cf. Franz Petri, «Belgien, Niederlande, Luxemburg vom Ende des 1. Weltkriegs bis zur Politik der europäischen Integration 1918-1970», en Theodor Schieder, comp., *Handbuch der europäischen Geschichte*, vol. 7/2, Stuttgart, 1979, p. 723.

[111] Cf. Willem Verkade, *Democratic parties in the Low Countries and Germany*, Leiden, 1965.

[112] *Süddeutsche Zeitung*, 31 de julio de 1950; E. Ramón Arango, *Leopold III. and the Belgian royal question*, Baltimore, 1961.

[113] *Süddeutsche Zeitung*, 28 de marzo de 1955, y John Bartier *et al.*, *Histoire de la Belgique contemporaine 1914-1970*, Bruselas, 1975; Vernon Mallinson, *Belgium*, Londres, 1970.

[114] Cf. Wofgang Wagner, *Europa zwischen Aufbruch und Restauration. Die europäische Staatenwelt seit 1945*, Munich, 1968, pp. 215-17; Franz Ansprenger, *Auflösung der Kolonialreiche*, Munich, 1966, pp. 259-67.

[115] Cf. de Vries, *op. cit.*, p. 30; Wagner, *op. cit.*, p. 193.

[116] Cf. Ansprenger, *op. cit.*, pp. 255-59.

[117] Sobre el problema del enclaustramiento, cf. Georg Geismann, *Politische Struktur und Regierungssystem in den Niederlanden*, Francfort y Bonn, 1964; Nobert Lepszy, *Parteien und Gewerkschaften in den Niederlanden. Entwicklung und Strukturen*, Düsseldorf, 1979; Servatius Willem Couwenberg, «Christentum und moderner Sozialismus in den Niederlanden», en Albrecht Langner, comp., *Katholizismus und freiheitlicher Sozialismus in Europa*, Colonia, 1965, pp. 135-82.

[118] Cf. De Vries, *op. cit.*, pp. 31-38; Wagner, *op. cit.*, pp. 220 ss.; Jean Kill, *1000 jähriges Luxemburg. Woher? Wohin?*, Luxemburgo, 1963.

[119] Cf. Giorgio Vaccarino, «Die Wiederherstellung der Demokratie in Italien (1943-1948)», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 21 (1973), pp. 285-324; Theodor Schieder, Italien vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg (1915-1945), en Michael Seidlmayer, *Geschichte Italiens. Vom Zusammenbruch des Römischen Reiches bis zum Ersten Weltkrieg*, Stuttgart, 1962, pp. 447-98; Charles F. Delzell, *Mussolini's enemies. The Italian anti-Fascist Resistance*, Princeton, 1961.

[120] Ernst Nolte, «Italien vom Ende des I. Weltkriegs bis zum ersten Jahrzehnt der Republik 1918-1960», en Theodor Schieder, comp., *Handbuch*

der europäischen Geschichte, vol. 7/1, Stuttgart, 1979. Cf. también Erich Kuby, *Verrat auf deutsch. Wie das Dritte Reich Italien ruinierte,* Hamburgo, 1982, pp. 315-444.

[121] «Report on No. 1 special force activities during april 1945», citado por Vaccarino, *op. cit.*, p. 299; cf. también Federico Chabod, *Die Entstehung des neuen Italien. Von der Diktatur zur Republik,* Reinbek, 1965, pp. 71-104.

[122] En opinión de los círculos liberales en torno a Benedetto Croce; citado por Vaccarino, *op. cit.*, p. 295; F. Catalano, «The rebirth of the party system, 1944-1948», en J. Woolf, comp., *The rebirth of Italy 1943-1950,* Londres, 1972, pp. 57-94; Muriel Grindrod, *The rebuilding of Italy. Politics and economics 1945-1955,* Londres y Nueva York, 1955, pp. 8-28; Edgar R. Rosen, «Viktor Emanuel III, und die Innenpolitik des ersten Kabinetts Badoglio im Sommer 1943», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 12 (1964), pp. 44-85.

[123] Cf. Robert Murphy, *Diplomat unter Kriegern. Zwei Jahrzehnte Weltpolitik in besonderer Mission,* Berlín (1965), pp. 229-52.

[124] Chabod, *op. cit.*, pp. 95 ss.

[125] Cf. Vaccarino, *op. cit.*, p. 305; Leo Valiani, «Vom Widerstand zur Republik. Von der Befreiung Roms bis zur ersten Regierung de Gasperi», en *Von der Diktatur zur Demokratie. Deutschland und Italien in der Epoche nach 1943. Referate der 9. deutsch-italienischen Historikertagung in Salerno 15.-17. Juni 1971,* Braunschweig, 1973, pp. 55-63; sobre Gasperi, cf. Ruggero Moscati, «Die Ära de Gasperi», en *ibid.*, pp. 82-101; Giulio Andreotti, *De Gasperi. Ein Kapitel italienischer Geschichte,* Bonn, 1967.

[126] Cf. Karl Dietrich Bracher, *Die Krise Europas 1917-1975,* Francfort, Berlín y Viena, 1976, pp. 291-94; Chabod, *op. cit.*, pp. 94-104; Valiani, *op. cit.*; Norman Kogan, *Italy and the Allies,* Cambridge (Mass.), 1956.

[127] Harold Macmillan, *The blast of war 1939-1945,* Londres, Melbourne y Toronto, 1967, p. 670; Murphy, *op. cit.*; G. Warner, «Italy and the Powers, 1943-49», en *The rebirth of Italy 1943-50, op. cit.*, pp. 30-56.

[128] Cf. Giuseppe Mammarella, *Italy after Fascism. A political history 1943-1963,* Montreal, 1964, pp. 112-19; Chabod, *op. cit.*, pp. 109-15.

[129] Cf. Mammarella, *op. cit.*, pp. 162 ss.; Walter Hildebrandt, *Der Triest-Konflikt und die italienisch-Jugoslawische Frage,* Gotinga y Tubinga, 1953; Wolfgang Wagner, *Europa zwischen Aufbruch und Restauration, Die europäische Staatenwelt seit 1945,* Munich, 1968, pp. 156, 172 ss.

[130] Nota de protesta del gobierno italiano, reproducida en Harry L. Coles y Albert K. Weinberg, *Civil affairs: soldiers become governors,* Washington, D.C., 1964, p. 645.

[131] Sobre el problema del Tirol meridional, cf. Wagner, *op. cit.*, pp. 180 ss.

[132] Cf. Vaccarino, *op. cit.*, pp. 310-11; Chabod., *op. cit.*, pp. 109 ss.

[133] Cf. Carmine Chiellino, *Italien,* vol. 1: *Geschichte, Staat und Verwaltung,* Munich, 1981, pp. 111-15; Klaus von Beyme, *Das politische System Italiens,* Stuttgart, Berlín, Colonia y Maguncia, 1970; P. Vercellone, «The Italian Constitution of 1947-48», en *The rebirth of Italy 1943-50, op. cit.*, pp. 121-34.

[134] David McKey (encargado de negocios) al secretario de Estado, 15 de septiembre de 1946, en Frus, 1946, v, p. 935.

[135] Mammarella, *op. cit.*, p. 145.

[136] Nolte, *op. cit.*, p. 645; cf. también Warner, *op. cit.*, p. 53; Paolo Pombeni, «Zur Rolle des Katholizismus in der italienischen Nachkriegspolitik», en Armin Boyens, Martin Greschat, Rudolf von Thadden y Paolo Pombeni, *Kirchen in der Nachkriegspolitik. Vier zeitgeschichtliche Beiträge,* Gotinga, 1979, pp. 139-57.

[137] Cf. Bracher, *op. cit.*; Ferdinand A. Hermes, «Demokratie ohne Sicherheitsventil. Zur Nachkriegsgeschichte Italiens», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 3 (1955), pp. 158-76.

[138] Werner Abelshauser, «Westeuropas Wiederaufbau vor dem Marshall-Plan», en *ibid.*, 29 (1981), p. 570.

[139] Sobre la economía italiana, cf. Shepard B. Clough, *The economic history of modern Italy,* Nueva York y Londres, 1964, pp. 288-366; George H. Hildebrand, *Growth and structure in the economy of modern Italy,* Cambridge (Mass.), 1965; Sergio Ricossa, *Italien 1920-1970,* en Carlo M. Cipolla y Knut Borchardt, comps., *Europäische Wirtschaftsgeschichte,* vol. 5: *Die europäischen Volkswirtschaften im zwanzigsten Jahrhundert,* Stuttgart y Nueva York, 1980, pp. 175-212; Sima Lieberman, *The growth of European mixed economies 1945-1970,* Nueva York, Londres, Sidney y Toronto (1977), pp. 95-119.

[140] Sobre los datos concretos del cuadro, cf. Francesca Schinzinger, *Die Mezzogiorno-Politik. Möglichkeiten und Grenzen der Agrar- und Infrastrukturpolitik,* Berlín, 1970, pp. 30 ss. y 39; Mammarella, *op. cit.*, pp. 225 ss.

[141] Cf. *ibid.*, pp. 217-35; Lieberman, *op. cit.*

[142] Citado por S. J. Woolf, «The rebirth of Italy, 1943-50», en *The rebirth of Italy 1943-50, op. cit.*, p. 213.

[143] Citado en *ibid.*, pp. 224 ss.

[144] Cf. Wagner, *op. cit.*, pp. 161 ss.

[145] Citado por Hermens, *op. cit.*, p. 158.

[146] Este es el subtítulo de una colección de discursos de Amintore Fanfani de los años 1953 a 1958. Cf. Mammarella, *op. cit.*, p. 261.

[147] Wagner, *op. cit.*, p. 165.

[148] Cf. *Süddeutsche Zeitung,* 11 de febrero de 1957.

[149] *Süddeutsche Zeitung,* 6 de diciembre de 1963; sobre la cuestión de la *aperta,* cf. también Mammarella, *op. cit.*, pp. 261-344; Wagner, *op. cit.*, pp. 164-72; Grindrod, *op. cit.*, pp. 98 ss.; Ernesto de Marchi, «Trends in Italy: an 'opening to the left'?», *Orbis. A Quarterly Journal of World Affairs,* v; 4 (enero de 1962), pp. 411-24.

[150] Cf. Wolfgang Wagner, *Europa zwischen Aufbruch und Restauration. Die europäische Staatenwelt seit 1945,* Munich, 1968, pp. 313 ss. Sobre España durante la segunda guerra mundial, cf. Otfried Dankelmann, *Franco zwischen Hitler und den Westmächten,* Berlín, 1970.

[151] Declaración de los gobiernos de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia del 4 de marzo de 1946 en *Archiv der Gegenwart,* XVI (1946), 5 de marzo de 1946, p. 668.

[152] Salvador de Madariaga, *Spanien,* Stuttgart, 3.ª ed. 1979, p. 398 [*España,* Madrid, Espasa-Calpe, 14.ª ed. 1979].

[153] Cf. Richard Konetze, «Die iberischen Staaten vom Ende des 1. Weltkriegs bis zur Ära der autoritären Regime 1917-1960», en Theodor Schieder, comp., *Handbuch der europäischen Geschichte,* vol. 7/1, Stuttgart, 1979, p. 691; Klaus von Beyme, *Vom Faschismus zur Entwicklungsdiktatur - Machtelite und Opposition in Spanien,* Munich, 1971, pp. 156 ss.; Wagner, *op. cit.*, p. 314; Hans Maier, «Kirche und Staat seit 1945. Ihr Verhältnis in den wichtigsten europäischen Ländern», en *Geschichte in Wissenschaft und Unterricht,* 14/II (1963), pp. 574 ss.

[154] Madariaga, *op. cit.*, p. 420.

[155] *New York Times,* 9 de febrero de 1957.

[156] Joseph Fontana y Jordi Nadal, «Spanien 1941-1970», en Carlo M. Cipolla y Knut Borchardt, *Europäische Wirtschaftsgeschichte,* vol. 5: *Die europäischen Volkswirtschaften im zwanzigsten Jahrhundert,* Stuttgart y Nueva York, 1980, pp. 366 ss.; Johannes Willms, «Das franquistische System und die spanische Wirtschaft», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 27 (1977), 14, pp. 37 ss.

[157] Cf. el comunicado de la OECE sobre la participación, medidas de estabilización y concesión de créditos del 20 de julio de 1959, en *Archiv der Gegenwart,* XXIX (1959), 21 de julio de 1959, pp. 7849 ss.; Von Beyme, *op. cit.*, pp. 156 ss.; Madariaga, *op. cit.*, pp. 420 ss. y 429.

[158] Walter Haubrich y Carsten R. Moser, *Francos Erben. Spanien auf dem Weg in die Gegenwart,* Colonia, 1976, p. 39.

[159] Heinz Barth, «Franco und die Bourbonen», *Aussenpolitik,* 6/I (1955), pp. 110-16.

[160] Cf. Madariaga, *op. cit.,* pp. 403-6; Heinz Meyer y Wichard Woyke, *Spanien. Eine politische Länderkunde,* Hannóver, 1978, pp. 28 ss.; Arturo del Hoyo, «Schreiben in Unfreiheit. Variationen über das Thema Selbstzensur in Spanien unter der Franco-Herrschaft», *Schweizer Monatshefte,* 58 (1978), pp. 609-20.

[161] Cf. Rolf Deventlow, *Spanien in diesem Jahrhundert. Bürgerkrieg Vorgeschichte und Auswirkungen,* Viena, Francfort y Zurich, 1968, pp. 393 ss.; Stanley Payne, «Catalan and Basque nationalism», *Journal of Contemporary History,* 6 (1971), pp. 15-51.

[162] Reventlow, *op. cit.,* p. 384.

[163] Carta abierta de los sacerdotes vascos, citada por Antonio Refoja, «Francos politische Justiz», *Politische Studien,* 12 (1961), pp. 102-7; *Herder-Korrespondenz,* 14 (1959-60), p. 14.

[164] Cf. Max Walter Clauss, «Salazars autoritäres Regime in Portugal», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 5 (1957), p. 383.

[165] Cf. Hans Seligo, «Angelpunkt Lissabon. Portugals südatlantische Position», *Die Politische Meinung,* 5/I (1960), pp. 86 ss.

[166] Sobre el tratado lusoamericano del 6 de septiembre de 1951, cf. *Archiv der Gegenwart,* XXI (1951), 6 de septiembre de 1951, p. 3098.

[167] Wagner, *op. cit.,* p. 318; Tom Gallagher, «Controlled repression in Salazar's Portugal», *Journal of Contemporary History,* 14 (1979), pp. 403-22.

[168] Cf. Wagner, *op. cit.,* p. 318; Konetze, *op. cit.,* p. 638; Clauss, *op. cit.,* p. 384; Karl Gutbrod, *Portugal. Wege und Irrwege,* Stuttgart, 1978, pp. 32-38.

[169] Cf. Hans Detlef Lass, «Die Vereinten Nationen und die Dekolonisation der portugiesischen überseegebiete», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 25 (1975), 40, pp. 3-27; Gutbrod, *op. cit.*

[170] El régimen de Metaxas ha sido denominado también «monarcofascismo»; cf. Heinz Richter, *Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution,* Francfort, 1973, pp. 54 ss.

[171] Cf. Christopher Montague Woodhouse, *The story of modern Greece,* Londres, 1968, pp. 187 ss.

[172] *Ibid.,* pp. 212 ss.

[173] Leften S. Stavrianos, *Balkan Federation. A history of the movement toward Balkan unity in modern times,* Northampton (Mass.), 1944.

[174] Ehrengard Schramm v. Thadden, *Griechenland und die Grossmächte im Zweiten Woltkrieg,* Wiesbaden, 1955.

[175] C. M. Woodhouse, «Zur Geschichte der Resistance in Griechenland», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 6 (1958), pp. 138-50.

[176] Stephen Zydis, *Greece and the Great Powers,* Salónica, 1963.

[177] George Kousoulas, *Revolution and defeat. The story of the Greek Communist Party,* Londres, 1965.

[178] Sobre lo que viene a continuación, cf. C. M. Woodh use, *Apple of discord,* Londres, 1948; del mismo autor, *The struggle for Greece 1941-1949,* Londres, 1976.

[179] S. Xydis, *Greece and the Great Powers,* Salónica, 1963.

[180] Woodhouse, *Apple of discord,* pp. 308 ss.

[181] Además, cf. Gunnar Hering, «Griechenland vom Lausanner Frieden bis zum Ende der Obersten-Diktatur 1923-1974», en Theodor Schieder, comp., *Handbuch der europäischen Geschichte,* vol. 7, Stuttgart, 1979, pp. 1333.

[182] Sobre esta cuestión, cf. Woodhouse, *The struggle for Greece,* pp. 170 ss.

[183] Además William Hardy Macneill, *Greece: American aid in action 1947-1956,* Nueva York, 1957.

[184] Sobre esto, cf. Hering, *Griechenland*, p. 1332.

[185] Cf. J. O. Jatrides, *Balkan triangle. Birth and decline of an alliance across ideological boundaries*, La Haya y París, 1968.

[186] Sobre esto, cf. Klaus y Detlev Grothusen, «Aussenpolitik», en Klaus y Detlev Grothusen, comps., *Griechenland, Südosteuropa-Handbuch*, vol. III, Gotinga, 1980, pp. 170 ss.

[187] Sobre lo que viene a continuación, cf. Stephan Xydis, *Cyprus: conflict and conciliation 1954-1958*, Columbus (Ohio), 1967.

[188] Cf. a este respecto T. A. Couloumbis, *Greek political reaction to American and NATO influences*, New Haven y Londres, 1966.

[189] J. F. Köver, «Drei Stufen der Neutralität in Europa. Irland-Schweden-Schweiz», *Aussenpolitik*, 5 (1954), pp. 309-17.

[190] Cf. Göta von Uexküll, «Neutralitätspolitik: Vom Bollwerk des Abendlandes zur Finnlandisierung», *Frankfurter Hefte*, 25 (1970), pp. 398-406.

[191] Discurso pronunciado con ocasión de una visita del jefe de Estado soviético Nikolai Podgorny el 15 de octubre de 1974, en *Finnlands Weg zur Neutralität. Reden und Ansprachen von Urho Kekkonen, Präsident der Republik Finnland*, Düsseldorf, 1975, pp. 219-21.

[192] Departamento de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés, *Finnland, Geschichte und Gegenwart*, Helsinki, 2.ª ed. 1964, p. 337.

[193] «Años de peligro» fue el título con el que el historiador finlandés Hyvämäki describió el período de 1945-1948. Cf. Tuure Junnila, *Freiheit im Vorfeld. Finnlands Kampf um Sicherheit und Neutralität*, Viena, 1965, pp. 69 ss.

[194] Citado por L. A. Puntila, *Politische Geschichte Finnlands 1809-1977*, Hensinki, 1980, p. 207.

[195] Texto del tratado en Ulrich Wagner, *Finlands Neutralität. Eine Neutralitätspolitik mit Defensivallianz*, Hamburgo, 1974, pp. 201 ss.

[196] Alocución por radio del presidente Paasikivi con motivo de la devolución de Porkkala el 22 de septiembre de 1955, en Wagner, *Finnlands Neutralität*, pp. 219-21.

[197] Citado por Junnila, *Freiheit im Vorfeld*, p. 105.

[198] *Finnlands Weg zur Neutralität. Reden und Ansprachen von Urho Kekkonen*, Düsseldorf, 1975, p. 199.

[199] Citado por Aurél B. J. Moser, «Österreichs und Schwedens Neutralität im Vergleich», *Zeitgeschichte*, 6 (1978-79), pp. 246-65.

[200] Cf. Erich Gruner, comp., *Die Schweiz seit 1945. Beiträge zur Zeitgeschichte*, Berna, 1971, pp. 15 ss. (Introducción).

[201] Texto en Gerald Stourzh, *Kleine Geschichte des Österreichischen Staatsvertrags*, Graz, 1975, p. 152.

[202] Cf. Edgar Bonjour, «Österreichische und schweizerische Neutralität. Zwei Leitbilder konvergieren», *Schweizer Monatshefte*, 60 (1980), pp. 829-39; cf. también Aurél B. J. Moser, «Österreichs und Schwedens Neutralität im Vergleich», *op. cit.*, pp. 246-65, y Jens Hacker, «Neutralität, Neutralismus und Blockfreiheit», *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 23 (1983), B 18, pp. 3-20.

[203] Citado por Heinrich Siegler, *Österreich. Chronik 1945-1972*, Viena, 1973, p. 41.

[204] Bonjour, *op. cit.*, p. 837.

CAP. 3: EUROPA ORIENTAL BAJO EL DOMINIO DE STALIN

[1] Además del trabajo de Alec Nove, *An economic history of the Soviet Union* [*Historia económica de la Unión Soviética*, Madrid, Alianza, 1973], hay que pencionar el breve e instructivo resumen del desarrollo económico soviético de Erich Maschke, «Grundzüge der sowjetischen Wirtschafts-

geschichte», en Werner Ratza, comp., *Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. Der Faktor Arbeit,* Munich y Bielefeld, 1973, pp. lix-lxxiii.

[2] *Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion,* Berlín Este, 1960, p. 772.

[3] Sobre esto, cf. Georg von Rauch, *Geschichte der Sowjetunion,* Stuttgart, 1977, p. 458.

[4] Manfred Lentz, *Die Wirtschaftsbeziehungen DDR-Sowjetunion. 1945-1961. Eine politologische Analyse,* Opladen, 1979, pp. 30 ss.; Vladimir Dedijer, *Stalins verlorene Schlacht. Erinnerungen 1948-1953,* Viena, Francfort y Zurich, 1970, pp. 72 ss., 80 ss.

[5] Las prestaciones reales de la SBZ en la RDA fueron más elevadas de lo que reflejan estos datos oficiales; cf. la crítica de Lentz (nota 4), pp. 35 ss.

[6] Sobre esto, cf. Werner Hoffman, *Die Arbeitsverfassung der Sowjetunion,* Hamburgo, 1952.

[7] El texto del discurso («Sobre la situación internacional») fue publicado en *Für Frieden und Volksdemokratie. Bericht über die Tätigkeit einiger kommunistischer Parteien, gehalten in Polen Ende September 1947,* Berlín Este, 1951.

[8] Milovan Djilas, *Gespräche mit Stalin,* Francfort, 1962, p. 220 [*Conversaciones con Stalin,* Barcelona, Seix].

[9] Cf. el relato de Dedijer (nota 4), pp. 72 ss.

[10] Hans Roos, *Geschichte der polnischen Nation 1918-1978. Von der Staatsgründung im Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart,* Stuttgart, 3.ª ed. 1979, p. 233.

[11] Anton Ackermann, «Über den einzig möglichen Weg zum Sozialismus», *Neues Deutschland,* 24 de septiembre de 1948.

[12] Konstantin Simonov, *Kriegstagebücher,* vol. 1, 1941, Munich, 1979, p. 446.

[13] Cf. Gert Robel, *Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. Antifa,* Munich, 1974, pp. 201, 205.

[14] Karl Marx, *Ökonomische Schriften,* comp. por H.-J. Lieber y B. Kaustky vol. 1, Stuttgart, 1962, p. 594.

[15] Karl Marx y Friedrich Engels, *Ausgewählte Schriften in zwei Banden,* vol. 1, Berlín Este, 1953, p. 28.

[16] Jörg K. Hoensch, *Sowjetische Osteuropa-Politik 1945-1975,* Kronberg y Düsseldorf, 1977, p. 63.

[17] Jozef M. van Brabant, «Another look on the origins of East European economic cooperation», *Osteuropa Wirtschaft,* 24 (1979), pp. 255 ss.

[18] *Ibid.,* p. 263.

[19] Zbigniew M. Fallenbuchl, «East European integration: Comecon», en *Reorientation and commercial relations of the economies of Eastern Europe. A compendium of papers submitted to the Joint Economic Committee, Congress of the United States,* Washington, 1974, p. 82.

[20] Stefan Doernberg, *Kurze Geschichte der DDR,* Berlín Este, 7.ª ed. 1965, p. 734, nota. 116.

[21] En *Neues Deutschland,* 14 de octubre de 1959.

[22] *Ibid.,* 26 de noviembre de 1957.

[23] Boris Meissner, *Russland, die Westmächte und Deutschland 1943-1953,* Hamburgo, 1953, pp. 290 ss.

[24] Richard F. Staar, *The communist regimes in Sastern Europe,* Stanford, 1967, p. 285, nota 26.

[25] Véase a este respecto Georg von Rauch (nota 3), p. 488.

[26] Traducción alemana en *Ostprobleme* (1952), pp. 1394 ss.

Esta HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI, preparada y editada inicialmente por Fischer Verlag (Alemania), sigue un nuevo concepto: exponer la totalidad de los acontecimientos del mundo, dar todo su valor a la historia de los países y pueblos de Asia, Africa y América.

Resalta la cultura y la economía como fuerzas que condicionan la historia.

Saca a la luz el despertar de la humanidad a su propia conciencia.

En la HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI han contribuido ochenta destacados especialistas de todo el mundo.

Consta de 36 volúmenes, cada uno de ellos independiente, y abarca desde la prehistoria hasta la actualidad.

